

alerta 2019!

Informe sobre conflictos,
derechos humanos
y construcción de paz



Alerta 2019! Informe sobre conflictos,
derechos humanos y construcción de paz

Alerta 2019!

Informe sobre conflictos,
derechos humanos
y construcción de paz

Elaborado por:

Iván Navarro Milián
Josep Maria Royo Aspa
Jordi Urgell García
Pamela Urrutia Arestizábal
Ana Villellas Ariño
María Villellas Ariño

Este libro ha sido impreso en papel libre de cloro

Informe finalizado en febrero de 2019.

Imprenta: Ulzama

Edición: Icaria Editorial / Escola de Cultura de Pau, UAB

Diseño: Lucas Wainer Mattosso

ISBN: 978-84-9888-915-4

Depósito legal: B 10421-2003

El presente informe ha sido elaborado por:

Iván Navarro Milián, Josep Maria Royo Aspa, Jordi Urgell
García, Pamela Urrutia Arestizábal, Ana Vilellas Ariño y
María Vilellas Ariño.

Los contenidos de este informe pueden ser libremente
reproducidos y difundidos, siempre que se cite
adecuadamente. El contenido de esta publicación es
responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau
y no refleja necesariamente la opinión de la ACCD ni del
Ayuntamiento de Barcelona.

Para citar este informe:

Escola de Cultura de Pau. *Alerta 2019! Informe sobre
conflictos, derechos humanos y construcción de paz.*

Barcelona: Icaria, 2019.

Escola de Cultura de Pau

Parc de Recerca, Edifici MRA,

Plaça del Coneixement,

Universitat Autònoma de Barcelona,

08193 Bellaterra (España)

Tel: +34 93 586 88 48/ 93 586 88 42;

Fax: +34 93 581 32 94

Email: pr.conflict.escolapau@uab.cat

Web: <http://escolapau.uab.cat>

Índice

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas	7	- Asia Meridional	101
Resumen Ejecutivo	9	- Asia Oriental	103
Resumen de la conflictividad global en 2018	21	- Sudeste Asiático y Oceanía	104
Capítulos		2.3.4. Europa	105
1. Conflictos armados	23	- Rusia y Cáucaso	105
1.1. Conflictos armados: definición	23	- Sudeste de Europa	109
1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2018	26	2.3.5. Oriente Medio	109
1.2.1. Tendencias globales y regionales	27	- Golfo	109
1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil	29	- Mashreq	111
1.3. Conflictos armados: evolución anual	32	3. Género, paz y seguridad	115
1.3.1. África	32	3.1. Desigualdades de género	115
- África Occidental	32	3.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género	116
- Cuerno de África	37	3.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones	116
- Grandes Lagos y África Central	39	3.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados	120
- Magreb - Norte de África	48	3.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado	122
1.3.2. América	51	3.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género	125
1.3.3. Asia y Pacífico	51	3.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad	125
- Asia Meridional	51	3.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz	126
- Sudeste Asiático y Oceanía	55	3.3.3. Iniciativas de la sociedad civil	128
1.3.4. Europa	60	4. Oportunidades de paz para 2019	131
- Europa Oriental	60	4.1. Ventana de oportunidad para la paz en el Cuerno de África	132
- Sudeste de Europa	61	4.2. La implementación del acuerdo de paz en el sur de Filipinas	134
1.3.5. Oriente Medio	62	4.3. El proceso de diálogo sobre Transdniestria: el acercamiento posible	136
- Golfo	62	4.4. Las redes de mujeres mediadoras	138
- Mashreq	65	4.5. El reconocimiento y la inclusión de la población joven como agente de paz	139
2. Tensiones	73	5. Escenarios de riesgo para 2019	141
2.1. Tensiones: definición	73	5.1. La escalada de la violencia en la región del Sahel Occidental	142
2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2018	78	5.2. Los efectos de la crisis política y económica sobre los escenarios de inestabilidad en Sudán	144
2.2.1. Tendencias globales	78	5.3. El incremento de la violencia en Papúa Occidental, 50 años después del referéndum de autodeterminación fallido	146
2.2.2. Tendencias regionales	80		
2.3. Tensiones: evolución anual	83		
2.3.1. África	83		
- África Austral	83		
- África Occidental	84		
- Cuerno de África	86		
- Grandes Lagos y África Central	91		
- Magreb - Norte de África	94		
2.3.2. América	95		
- América del Norte, Centroamérica y Caribe	95		
- América del Sur	99		
2.3.3. Asia y Pacífico	100		
- Asia Central	100		

5.4. Turquía-PKK: los riesgos de un conflicto sin escenarios de diálogo _____	148
5.4. Hambre y conflictos: retos de un binomio con graves impactos en la seguridad humana _____	149
Glosario _____	151
Escola de Cultura de Pau _____	157

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas

Mapa 1.1.	Conflictos armados _____	22	Mapa 3.1.	Género, paz y seguridad _____	114
Tabla 1.1.	Resumen de los conflictos armados en 2018 _____	24	Tabla 3.1.	Países en conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos _____	116
Gráfico 1.1.	Distribución regional del número de conflictos armados en 2018 ____	27	Cuadro 3.1.	Actores armados y violencia sexual en conflictos _____	118
Gráfico 1.2.	Intensidad de los conflictos armados _____	29	Mapa 3.2.	Países en conflicto armado y con legislación discriminatoria contra la población LGTBI _____	124
Gráfico 1.3.	Intensidad de los conflictos por regiones _____	29	Tabla 3.2.	Conflictos armados en 2018 en países con legislación discriminatoria contra la población LGTBI _____	124
Cuadro 1.1.	Tendencias regionales en materia de conflictividad armada _____	30	Mapa 4.1.	Oportunidades de paz para 2019 _	131
Mapa 1.2.	Número de personas desplazadas internas al finalizar 2017 _____	31	Mapa 5.1.	Escenarios de riesgo para 2019 ____	141
Mapa. 2.1.	Tensiones _____	72			
Tabla 2.1.	Resumen de las tensiones en 2018 _	74			
Gráfico 2.1.	Distribución regional del número de tensiones en 2018 _____	79			
Gráfico 2.2.	Intensidad de las tensiones por regiones _____	81			

Resumen ejecutivo

Alerta 2019! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de tres ejes: conflictos armados, tensiones, y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2018 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.

En cuanto a la metodología, los contenidos de este informe se nutren principalmente del análisis cualitativo de estudios e informaciones facilitados por numerosas fuentes –Naciones Unidas, organismos internacionales, centros de investigación, medios de comunicación u ONG, entre otras–, así como de la experiencia adquirida en investigaciones sobre el terreno.

Algunas de las conclusiones e informaciones más relevantes del informe *Alerta 2019!* son las siguientes:

- Durante 2018 se registraron 34 conflictos armados, de los cuales 33 seguían activos al finalizar el año. La mayoría se concentró en África (16) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (uno). La cifra total de conflictos armados ha permanecido bastante estable y sin oscilaciones significativas en el último lustro.
- En 2018 dejó de ser considerada como un conflicto armado la situación en la región de Ogadén (Etiopía) tras la firma de un histórico acuerdo de paz entre el Gobierno etíope y el grupo armado ONLF. En cambio, dos nuevos casos –Camerún (Ambazonia/North West y South West) y Región Sahel Occidental– fueron analizados como conflicto armado por el drástico incremento en los niveles de violencia.
- Con respecto a la intensidad de la violencia, en un 38% de los conflictos fue baja (13 casos), en un 35% media (12 casos) y en otro 27% elevada (nueve casos).
- Los nueve conflictos de mayor gravedad en 2018 fueron Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas).
- Algunos casos superaron ampliamente el millar de fallecidos en un año, como Afganistán, con cifras de víctimas mortales que podrían superar los 43.000; Yemen, con algunas estimaciones que elevaban a 28.000 los fallecidos en 2018 y un acumulado de más de 60.200 desde enero de 2016; o Siria, con algunos balances que apuntaban a 20.000 víctimas mortales en 2018, incluyendo cerca de 6.500 civiles –y un balance de más de medio millón de fallecidos desde el inicio de la guerra en 2011.
- Un 30% de los conflictos armados experimentaron una escalada de la violencia: Camerún, Malí, Región Sahel Occidental, RCA, Colombia, Afganistán, Filipinas (NPA), India (Jammu y Cachemira) –que asistió a una escalada con las cifras de letalidad más elevadas desde 2009–, Israel-Palestina –también con las peores cifras desde 2014– y Yemen (al-houthistas).
- Más de un tercio de los conflictos experimentaron un descenso de las hostilidades y los niveles de violencia con respecto al año anterior, mientras que un 32% de los casos no afrontaron cambios significativos
- Más allá de la naturaleza multicausal de la conflictividad armada, el 71% de los conflictos (24 de los 34 casos) tuvo entre sus motivaciones principales la oposición a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o al sistema político, social o ideológico del Estado. Asimismo, las demandas identitarias y/o de autogobierno fueron una de las causas principales en un 59% de los casos (20 conflictos).
- Un 82% de los conflictos armados fueron internos internacionalizados, en los que alguna de las partes era foránea, los actores armados del conflicto tenían bases o lanzaban ataques desde el extranjero y/o la disputa se extendía a países vecinos.
- El 12% de los conflictos armados (cuatro casos) tenía carácter interno, es decir, se trataba de conflictos entre actores armados de un mismo Estado y que operan exclusivamente en y desde las fronteras del mismo. Únicamente dos casos –la Región Sahel Occidental e Israel-Palestina– fueron conflictos internacionales.
- Los conflictos armados continuaron provocando y/o agudizando situaciones de crisis humanitaria. Sobresalieron casos como Yemen –la peor crisis humanitaria a nivel mundial, con más de 24 millones de personas en necesidad de asistencia–, Iraq –donde 6,7 millones de personas continuaban necesitando ayuda–, Siria –aumentó de 520.000 a 4,2 millones el número de personas necesitadas de ayuda humanitaria en las áreas de Idlib y Aleppo–, Burundi –donde 3,6 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria– o RCA –donde 2,9 de los 4,5 millones de habitantes del país necesitaban ayuda humanitaria.
- Uno de los impactos de los conflictos armados continuó siendo el fenómeno de la violencia sexual. Durante 2018 se denunció el uso de violencia sexual en contextos como Iraq, Malí, Myanmar, Nigeria, RCA, RDC, Somalia y Sudán del Sur.
- El desplazamiento forzado fue un año más una de las consecuencias más graves de los conflictos armados a nivel global. Los balances difundidos en 2018 señalaban que hasta finales de 2017, un

total de 68,5 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares como resultado de situaciones de conflicto, persecución, violencia y/o violaciones de los derechos humanos, 2,9 millones más que el año anterior.

- Durante 2018 se identificaron 83 escenarios de tensión a nivel mundial. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas se concentró en África, con 33 casos, seguida de Asia (18), Europa (12), Oriente Medio (11) y América Latina (nueve).
- La mitad de las tensiones presentaron una intensidad baja (50%, un porcentaje superior al 47% que se registró en 2017), un tercio registró una intensidad media (similar a la cifra del año pasado) y solo el 15% de los casos tuvo altos niveles de tensión (13 casos). En términos comparativos con años anteriores, la cifra de tensiones graves siguió la tendencia a la baja de los últimos años (representando un 15% en 2018, un 20% en 2017 y un 24% en 2016).
- Algo más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvieron un carácter interno (45 casos o un 54%), casi una tercera parte de las tensiones a escala global fueron internas internacionalizadas (24 situaciones o casi un 29%) y una sexta parte de las tensiones fueron internacionales (14 casos o casi un 17%).
- En cuanto a la evolución de las tensiones, la mayoría de los contextos (40%) no experimentó cambios significativos, en un 30% de los casos se produjo una cierta mejoría y en el 30% restante de las crisis se registró un deterioro con respecto a 2017.
- Prácticamente un 70% de las tensiones tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos y cerca de la mitad (45%) tuvieron como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias. Además, en alrededor de una tercera parte de las tensiones (31%) las disputas por el control de territorios y/o recursos fueron un elemento especialmente relevante, si bien se trata de un factor que alimenta numerosas situaciones de tensión en grados diversos.
- 13 de los 34 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2018 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles altos o muy altos de discriminación.
- El secretario general de la ONU mostró su preocupación por la falta de avances con respecto a los compromisos básicos en materia de paz y seguridad, derechos humanos e igualdad de género.
- Con respecto a la inclusión de la igualdad de género en los acuerdos de paz, solo tres de 11 acuerdos (27%) firmados en 2017 incluyeron disposiciones en este sentido. Este dato resulta especialmente preocupante, ya que consolida y agrava la tendencia iniciada en 2016, cuando se incluyeron cuestiones de género en el 50% de los acuerdos, frente al 70% de 2015.

- El informe *Alerta 2019!* identifica cinco oportunidades de paz: la ventana de oportunidad para la paz abierta en el Cuerno de África tras el histórico acuerdo de paz entre Eritrea y Etiopía; el proceso de implementación del acuerdo entre el Gobierno y el MILF en el sur de Filipinas; los avances en el proceso de diálogo sobre Transdniestria; las redes de mujeres mediadoras desarrolladas en el marco de la implementación de la agenda de género, paz y seguridad; y las posibilidades de reconocimiento e inclusión de la población joven como agente de paz tras la aprobación de la resolución 2250 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la puesta en marcha de la agenda de jóvenes, paz y seguridad.
- El informe también destaca cinco escenarios de alerta de cara al futuro: la escalada de violencia en la región de Sahel Occidental, los efectos de la crisis política y económica en los escenarios de inestabilidad en Sudán, el incremento de la violencia en la región indonesia de Papúa Occidental 50 años después del fallido referéndum de autodeterminación, los riesgos derivados de la ausencia de diálogo en el marco del conflicto entre Turquía y el PKK, y los graves impactos en la seguridad humana del binomio hambre-conflictos.

Estructura

El informe consta de cinco capítulos. En los dos primeros se analiza la conflictividad a escala global – causas, tipología, dinámicas, evolución y actores de las situaciones de conflicto armado o de tensión. El tercer capítulo analiza los impactos de género de conflictos y tensiones así como iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. El cuarto capítulo identifica oportunidades de paz, escenarios en los que existe una coyuntura favorable para la resolución de conflictos o para el avance o consolidación de iniciativas de paz. El último capítulo analiza escenarios de riesgo de cara al futuro. Además de los cinco capítulos, el informe también incluye un mapa desplegable en el que se identifican los escenarios de conflicto armado y tensión sociopolítica.

Conflictos armados

En el primer capítulo (**Conflictos armados**)¹ se describe la evolución, la tipología, las causas y las dinámicas de los conflictos armados activos durante el año, se

1. En este informe se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:
- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o al control de los recursos o del territorio.

Conflictos armados en 2018*

ÁFRICA (16)	ASIA (9)	ORIENTE MEDIO (6)
Argelia (AQMI) -1992- Burundi -2015- Camerún (Ambazonia/North West y South West) -2018- <i>Etiopía (Ogadén) -2007-</i> Libia -2011- Malí (norte) -2012- Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011- RCA -2006- RDC (este) -1998- RDC (este-ADF) -2014- RDC (Kasai) -2017- Región Sahel Occidental -2018- Somalia -1988- Sudán (Darfur) -2003- Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011- Sudán del Sur -2009-	Afganistán -2001- Filipinas (NPA) -1969- Filipinas (Mindanao) -1991- India (Jammu y Cachemira) -1989- India (CPI-M) -1967- Myanmar -1948- Pakistán -2001- Pakistán (Baluchistán) -2005- Tailandia (sur) -2004-	Egipto (Sinaí) -2014- Iraq -2003- Israel-Palestina -2000- Siria -2011- Yemen (al-houthistas) -2004- Yemen (AQPA) - 2011-
		EUROPA (2)
		Turquía (sudeste) -1984- Ucrania -2014-
		AMÉRICA (1)
		Colombia -1964-

*Se incluye entre guiones la fecha de inicio del conflicto armado. En cursiva, los conflictos finalizados durante 2018

analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados en 2018, así como los impactos de los conflictos en la población civil.

Durante el año 2018 se registraron 34 conflictos armados, una cifra en línea con la tendencia de años anteriores (33 casos en 2016 y 2017, 35 contextos en 2015, 36 en 2014, 35 en 2013). De los 34 conflictos armados en 2018, 33 continuaban activos al finalizar el año, ya que la situación de conflictividad en la región de Ogadén (Etiopía) dejó de ser considerada conflicto armado tras la firma de un histórico acuerdo de paz entre el Gobierno etíope y el grupo armado ONLF, que se produjo en el marco de una reducción de los niveles de violencia y letalidad en los últimos años. En cambio, en 2018 se registraron dos nuevos casos de conflicto armado: Camerún (Ambazonia/North West y South West) –donde la situación de violencia que afecta desde 2016 a las regiones de mayoría anglófona de Camerún y que enfrenta a las Fuerzas Armadas y milicias y grupos armados secesionistas en torno a demandas de un nuevo estatus político se agravó significativamente en 2018– y Región Sahel Occidental –donde se registró un incremento de la violencia en el norte de Burkina Faso y en el norte de Níger por parte de grupos de corte yihadista.

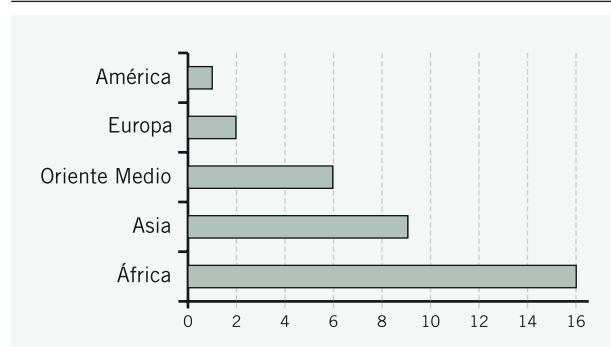
En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados, la mayor parte se concentró en África (16) y Asia (nueve), en línea con años anteriores. Del resto de casos, seis tuvieron lugar en Oriente Medio, dos en Europa y uno en América. El 12% de los conflictos armados (cuatro casos) tuvieron carácter interno, es decir, se trataba de conflictos entre actores armados de un mismo Estado y que operan exclusivamente en y desde las fronteras del mismo: RDC (Kasai), Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur). El 6% era considerado

internacional: el conflicto en la Región Sahel Occidental y la disputa entre Israel y Palestina. El resto, un 82%, eran conflictos internos internacionalizados, en los que alguna de las partes es foránea, los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos.

Durante el año 2018 se registraron 34 conflictos armados, 33 de los cuales seguían activos al finalizar el año

En relación a las causas de los conflictos armados, la gran mayoría de conflictos tuvo entre sus motivaciones principales **la oposición a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o al sistema político, económico, social o ideológico de un determinado Estado, que derivaron en luchas por acceder al poder o erosionarlo.** Uno u otro elemento estuvieron presentes en el 71% de los casos en 2018 (24 de los 34 casos), en línea con el año anterior (presente en el 73% de los casos en 2017). Entre estos 24 casos, en 18 contextos había actores armados que aspiraban a un cambio de sistema, mayoritariamente por parte de organizaciones que se atribuyen una agenda yihadista y que tratan de

Distribución regional del número de conflictos armados en 2018



imponer su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estos últimos grupos cabe mencionar ejemplos como el autodenominado Estado Islámico y sus filiales y organizaciones afines en distintos continentes –ISIS estuvo presente en países como Argelia, Libia, Nigeria, Somalia, Afganistán, Pakistán, Filipinas, Iraq, Siria, Yemen, entre otros–; las diversas ramas de al-Qaeda que operan en el norte de África y Oriente Medio –entre ellas AQMI (Argelia y Sahel) y AQPA (Yemen)–; las milicias talibán que operan en Afganistán y Pakistán o el grupo al-Shabaab en Somalia. Asimismo, otro factor destacado entre las causas principales fueron las disputas en torno a demandas identitarias y de autogobierno, presentes en el 59% de los conflictos (20 casos), ligeramente superior a 2017 (55%). Finalmente, las disputas en torno al control de recursos y del territorio fue una de las causas principales en casi un tercio de los conflictos (10 casos), si bien es un factor que de manera indirecta estuvo presente en numerosos contextos, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra.

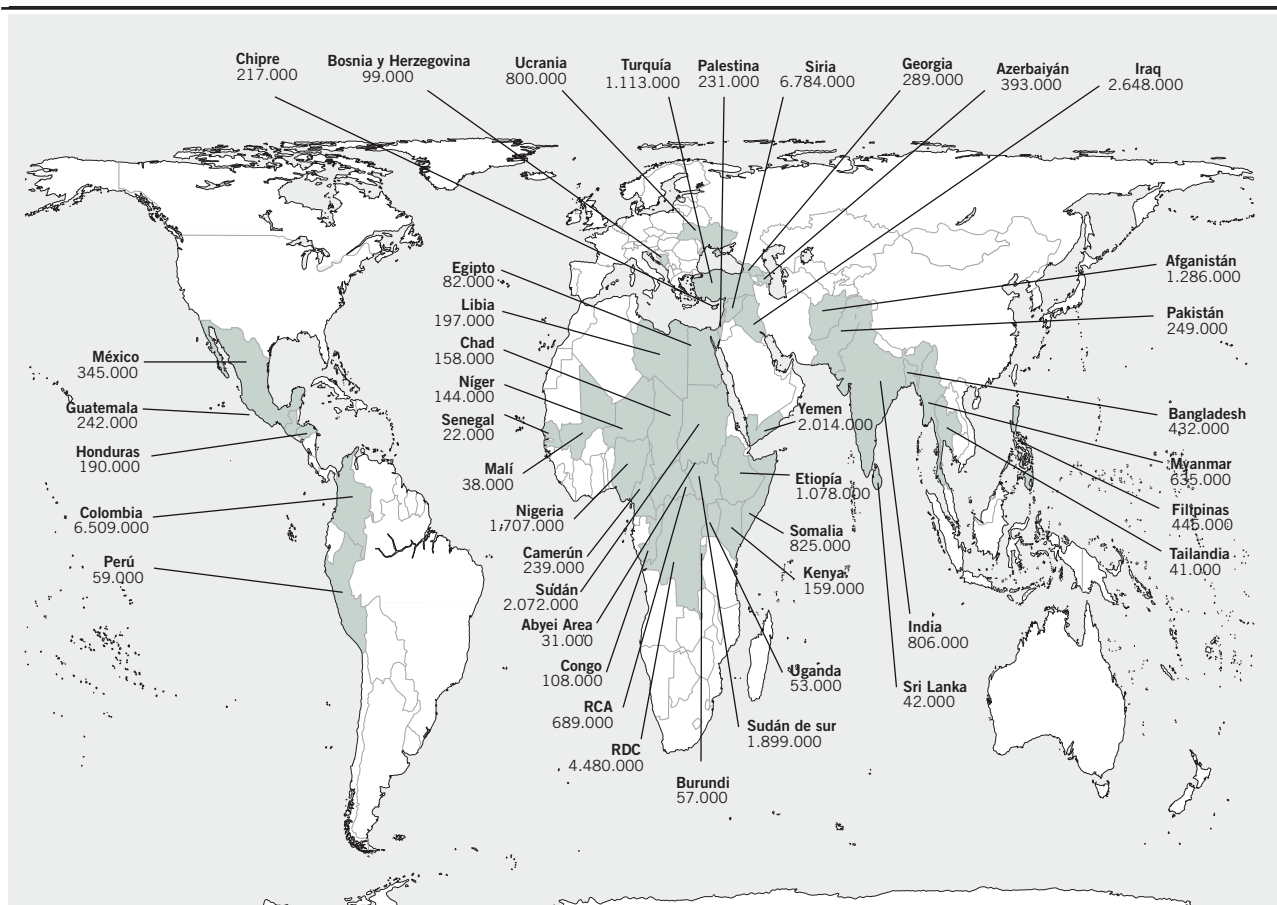
Respecto a la evolución de los conflictos en 2018, más de un tercio de los conflictos experimentaron un descenso de las hostilidades y los niveles de violencia con respecto al año anterior (13 casos), mientras que un 32% (11 casos) no afrontaron cambios significativos, y el 30%

restante sufrió una escalada de la violencia. Los casos en que se incrementaron los niveles de violencia en 2018 fueron: Camerún, Malí, Región Sahel Occidental, RCA, Colombia, Afganistán, Filipinas (NPA), India (Jammu y Cachemira) –que asistió a una escalada con las cifras de letalidad más elevadas desde 2009–, Israel-Palestina –también con las peores cifras desde 2014– y Yemen (al-houthistas).

Con respecto a la intensidad de la violencia, en un 38% de los conflictos fue baja (13 casos), en un 35% media (12 casos) y en otro 27% elevada (nueve casos). En 2018 se dio un descenso porcentual de los conflictos de alta intensidad con respecto a 2017 (40% de guerras de alta intensidad). Los nueve conflictos de mayor gravedad en 2018 fueron Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). Algunos de estos casos superaron ampliamente el millar de fallecidos en un año, como Afganistán, con cifras de víctimas mortales que podrían superar los 43.000; Yemen, con algunas estimaciones que elevaban a 28.000 los fallecidos en 2018 y un acumulado de más de 60.200 desde enero de 2016; o Siria, con algunos balances que apuntaban a 20.000 víctimas mortales en 2018, incluyendo cerca de 6.500 civiles –y un balance de más de medio millón de fallecidos desde el inicio de la guerra en 2011.

Los nueve conflictos de mayor gravedad en 2018 fueron Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)

Número de personas desplazadas internas al finalizar 2017



Fuente: IDMC, *GRID 2018: Global Report on Internal Displacement*, mayo de 2018.

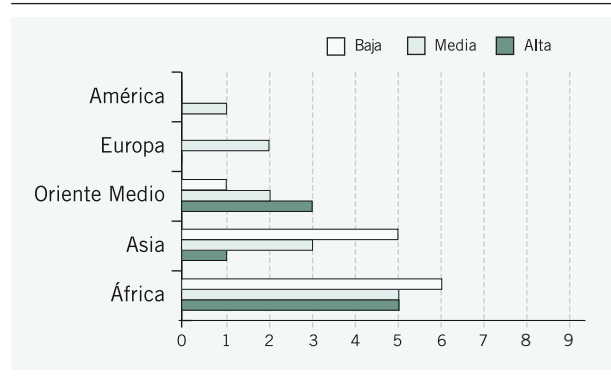
Los conflictos armados tuvieron de nuevo en 2018 graves impactos en la población civil. El informe anual del secretario general de la ONU sobre protección de los civiles en conflictos armados publicado en 2018, que cubre el periodo entre enero y diciembre de 2017, subrayó que la población civil continuó siendo la principal víctima de los conflictos armados, con decenas de miles de civiles fallecidas o gravemente lesionadas como resultado de acciones específicamente contra objetivos civiles o fruto de ataques indiscriminados. En los casos de zonas densamente pobladas, los impactos se multiplicaron, como en zonas de Siria e Iraq. El informe también alertó sobre el uso de artefactos explosivos improvisados por grupos armados de oposición (en Afganistán, Libia, Malí, Nigeria, Siria y Somalia) y señaló denuncias de uso de municiones de racimo en Yemen y Siria y de armas químicas en Siria, entre otros aspectos.

Los conflictos armados continuaron provocando y/o agudizando situaciones de crisis humanitaria. Sobresalieron casos como Yemen, la peor crisis humanitaria a nivel mundial, con más de 24 millones de personas en necesidad de asistencia, incluyendo 11,3 millones de niños y niñas. También Iraq, donde 6,7 millones de personas, de las cuales 3,3 eran menores, continuaban necesitando ayuda. En Siria se agudizó la crisis humanitaria en la región noroeste, aumentando de 520.000 a 4,2 millones el número de personas necesitadas de ayuda humanitaria en las áreas de Idlib y Aleppo. Fueron alarmantes también otros muchos casos, incluyendo entre otros, Burundi, donde 3,6 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria a finales de 2018, según la OCHA; o RCA, donde 2,9 de los 4,5 millones de habitantes del país, incluyendo 1,5 millones de menores, necesitaban ayuda humanitaria.

Los conflictos armados provocaron niveles muy elevados de desplazamiento forzado de población. Según ACNUR, la población desplazada forzosamente en el mundo a finales de 2017 era de 68,5 millones, 2,9 millones más que el año anterior. La población refugiada ascendía a 25,4 millones (19,9 bajo mandato de ACNUR y 5,4 palestinos y palestinas bajo mandato de la UNRWA), mientras 40 millones de personas se habían desplazado dentro de las fronteras de sus países y otros 3,1 millones eran solicitantes de asilo. En 2017 ACNUR estima que hubo 16,2 millones de nuevos desplazados (11,8 dentro de sus fronteras y 4,4 de nuevas personas refugiadas y solicitantes de asilo). Según el International Displacement Monitoring Centre, entre los países con niveles más elevados de desplazamiento interno sobresalen Siria (6,7 millones), RDC (4,4), Iraq (2,6), Sudán del Sur (1,8) y

ACNUR estima que en 2017 hubo 16,2 millones de nuevos desplazados, 11,8 dentro de sus fronteras y 4,4 de nuevas personas refugiadas y solicitantes de asilo

Intensidad de los conflictos por regiones



Etiopía (un millón). Según ACNUR, más de dos tercios de la población global refugiada procedía de cinco países: Siria (6,3 millones de personas), Afganistán (2,6), Sudán del Sur (2,4), Myanmar (1,2) y Somalia (986.400 personas). Líbano fue un año más el país con mayor número de población refugiada en relación a su población total (una persona refugiada por cada seis habitantes), seguido de Jordania (1/14) y Turquía (1/28), sin incluir la población refugiada bajo mandato de la UNRWA, también presente de manera destacada en Líbano y Jordania. En términos totales, los principales países de acogida fueron Turquía (3,5 millones), Pakistán (1,4), Uganda (1,4), Líbano (998.900), Irán (979.400), Alemania (970.400), Bangladesh (932.200) y Sudán (906.600).

Tensiones

En el segundo capítulo (**Tensiones**)² se analizan los acontecimientos más relevantes referidos a las tensiones sociopolíticas registradas durante el año y se realiza una mirada comparativa de las tendencias globales y regionales. Durante 2018 se registraron 83 escenarios de tensión a nivel global. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas tuvo lugar en África, con 33 casos, seguida de Asia, donde se registraron 18 casos. Europa y Oriente Medio fueron escenarios de 12 y 11 casos cada una, mientras en América se identificaron nueve contextos.

Las situaciones de tensión tuvieron causas múltiples, con más de un factor principal en la gran mayoría de los casos. En línea con los datos observados en años precedentes, **a nivel global prácticamente un 70% de las tensiones tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos** (Gobierno) –lo que propició conflictos para acceder o erosionar el poder– u oposición al sistema político, social o ideológico de los respectivos

2. Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Estados (Sistema). En América Latina, por ejemplo, todas las tensiones identificadas estuvieron vinculadas a alguna de estas dos variables. A su vez, **cerca de la mitad de las tensiones (45%) tuvieron como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias, pero este porcentaje fue claramente superior en regiones como Europa (más del 66%, dos de cada tres tensiones en Europa) o Asia (más del 55%).** Cabe destacar que en alrededor de una tercera parte de las tensiones (31%) las disputas por el control de territorios y/o recursos fueron un elemento especialmente relevante, si bien se trata de un factor que alimenta numerosas situaciones de tensión en grados diversos.

En línea con años anteriores, **algo más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvieron un carácter interno (45 casos o un 54%),** siendo especialmente paradigmático el caso de América Latina, en el que la práctica totalidad de los casos (excepto Haití) fueron de este tipo. Por otra parte, **casi una tercera parte de las tensiones a escala global fueron internas internacionalizadas (24 situaciones o casi un 29%),** pero este porcentaje fue claramente superior en regiones como Europa (la mitad de las crisis) u Oriente Medio (45%) y significativamente inferior en África (15%) y América Latina (11%). Finalmente, **una sexta parte de las tensiones fueron internacionales,** siguiendo la tendencia a la baja

África y Asia fueron los continentes con mayor número de crisis sociopolíticas en 2018 (33 y 18, respectivamente)

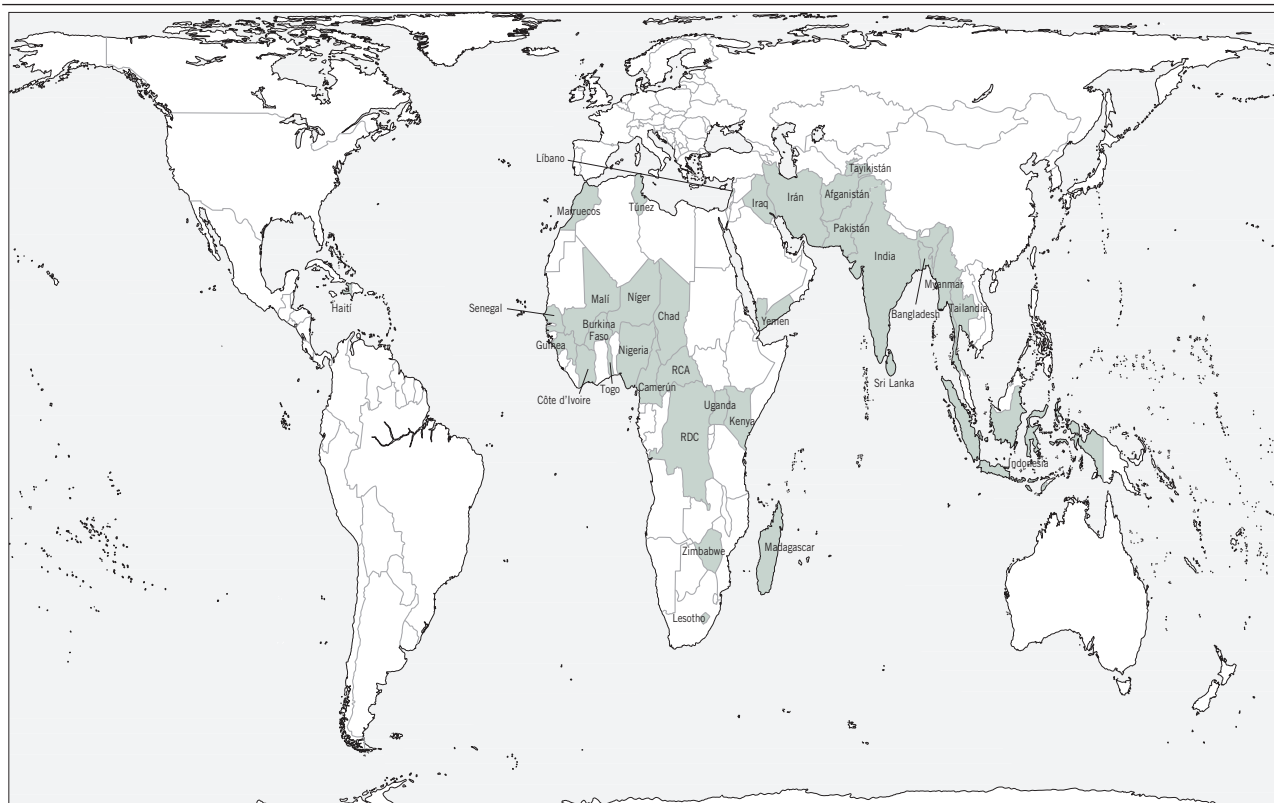
de las últimas décadas, aunque en regiones como América Latina no se identificó ningún contexto de este tipo. En cuanto a la evolución de las tensiones, la mayoría de los contextos (40%) no experimentó cambios significativos, en un 30% de los casos se produjo una cierta mejoría y en el 30% restante de las crisis se registró un deterioro con respecto a 2017.

Excepto en Asia, donde hubo más casos de mejoría que de deterioro de la situación, en términos agregados el número de tensiones cuya situación empeoró igualó a aquellas en las que se registró una mejora de la situación. Respecto de la intensidad de las crisis sociopolíticas, durante 2018 la mitad de las mismas presentaron una intensidad baja, un tercio registró una intensidad media y solo el 15% de los casos tuvo altos niveles de tensión (13 casos).

Dimensión de género en la construcción de paz

En el tercer capítulo (**Género, paz y seguridad**) se analizan los impactos de género de conflictos y tensiones, así como las diversas iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género.³ Esta

Países en conflicto armado y/o tensión con graves desigualdades de género



3. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales.

Países en conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos

	Niveles medios de discriminación	Niveles altos de discriminación	Niveles muy altos de discriminación	Sin datos
Conflictos armados*	Burkina Faso India (2) Tailandia RDC (3)	Chad Malí Myanmar Nigeria RCA	Afganistán Camerún Iraq Níger Pakistán (2) Yemen (2)	Argelia Burundi Egipto Israel Libia Níger Palestina Siria Somalia Sudán (2) Sudán del Sur
Tensiones*	Haití India (4) Kenya Lesotho RDC (4) Senegal Tailandia Tayikistán Zimbabwe	Chad Côte d'Ivoire Indonesia Iraq Madagascar Marruecos Nigeria (2) Sri Lanka Togo Túnez Uganda	Bangladesh Guinea Irán (4) Líbano (2) Pakistán (2)	Angola Arabia Saudita Bahrein China Congo, Rep. del Djibouti Egipto Eritrea Gambia Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Israel (2) Palestina Siria Somalia Sudán (2) Sudán del Sur (2) Uzbekistán Venezuela

* Entre paréntesis el número de conflictos armados o tensiones en dicho país.

Tabla elaborada a partir de los niveles de la discriminación de género del SIGI (OCDE) señaladas en el último informe disponible (2019) y de las clasificaciones de conflicto armado y tensión de la Escola de Cultura de Pau. El SIGI establece cinco niveles de clasificación en función del grado de discriminación: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo.

perspectiva permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre las mujeres y sobre los hombres, pero también en qué medida y de qué manera participan unas y otros en la construcción de paz y cuáles son las aportaciones que las mujeres están haciendo a esta construcción. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI, por sus siglas en inglés); en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Instituciones Sociales y Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

De acuerdo con el Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI), los niveles de discriminación contra las mujeres fueron altos o muy altos en 29 países, concentrados principalmente en África, Asia y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos

de este índice con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que **13 de los 34 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2018 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles altos o muy altos de discriminación, siete en países con niveles medios de discriminación y que 11 conflictos armados tenían lugar en países sobre los que no hay datos disponibles al respecto –Argelia, Burundi, Egipto, Israel, Libia, Níger, Palestina, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur–**. Así, más del 54% de los conflictos armados para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con niveles de discriminación de género altos o muy altos. Esta cifra asciende al 79% si se incluyen los contextos con niveles medios de discriminación. Asimismo, en otros cuatro países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles bajos (Etiopía, Ucrania y Turquía) o muy bajos (Colombia) de acuerdo con el SIGI. En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, al menos 26 de las 83 tensiones activas durante el año 2018 transcurrieron en países en los que existían graves desigualdades de género (niveles altos o muy altos según el SIGI), lo que supone un 41% de las tensiones para las que existían datos. Esta cifra asciende al 56% si se incluyen los países con niveles medios de discriminación. 18 tensiones transcurrían en países sobre los que no hay datos disponibles (Angola, Arabia Saudita, Bahrein, China, Rep. del Congo,

Djibouti, Egipto, Eritrea, Gambia, Gaza y Cisjordania, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Israel, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Uzbekistán y Venezuela).

Al igual que en años anteriores, durante 2018 la violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos. Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada en diferentes informes, así como por medios de comunicación locales e internacionales. En abril tuvo lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU el debate abierto sobre violencia sexual en conflictos armados. El secretario general presentó su informe anual de seguimiento y evaluación sobre esta materia. El informe del secretario general abarcó el año 2017 y analizó la situación de 19 países, 13 de ellos en situación de conflicto armado: Afganistán, RCA, Colombia, RDC, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), Siria y Yemen, a lo que se añade el conflicto en la región del Lago Chad, que incluye a Nigeria. Además, el informe identificó actores en conflicto responsables de la utilización de violencia sexual, tanto gubernamentales como no gubernamentales. El informe destacó también que durante el año 2017 se desplegaron 21 personas asesoras de protección de las mujeres en siete misiones y que el Equipo de Expertos sobre el Estado de Derecho y la Violencia Sexual en los Conflictos llevó a cabo actividades en Colombia, Côte d'Ivoire, Guinea, Iraq, Liberia, Malí, Myanmar, Nigeria, RCA, RDC, Somalia, Sudán del Sur y Sudán. El informe señalaba el deterioro de las condiciones para las organizaciones de la sociedad civil a nivel global y cómo la violencia ha sido utilizada para agredir a defensoras de derechos humanos, así como intimidaciones contra testigos en casos penales por delitos de violencia sexual y crímenes de guerra relacionados. El secretario general apuntó en su informe que la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas marginadas económica y políticamente, en muchas ocasiones en zonas rurales remotas o en situaciones de desplazamiento forzado. Además, la violencia sexual fue tanto un factor de desplazamiento como de obstaculización de retorno de personas refugiadas o desplazadas internamente. Cabe destacar que de los 19 contextos que fueron objeto de análisis en el informe del secretario general de la ONU, nueve de ellos registraron niveles elevados de intensidad durante 2018 –Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)– superando en general el millar de víctimas mortales anuales y generando graves impactos en las personas y el territorio, entre los que se incluía la violencia sexual relacionada con el conflicto armado

A su vez, a lo largo del año se produjeron diferentes iniciativas de respuesta frente a la violencia sexual

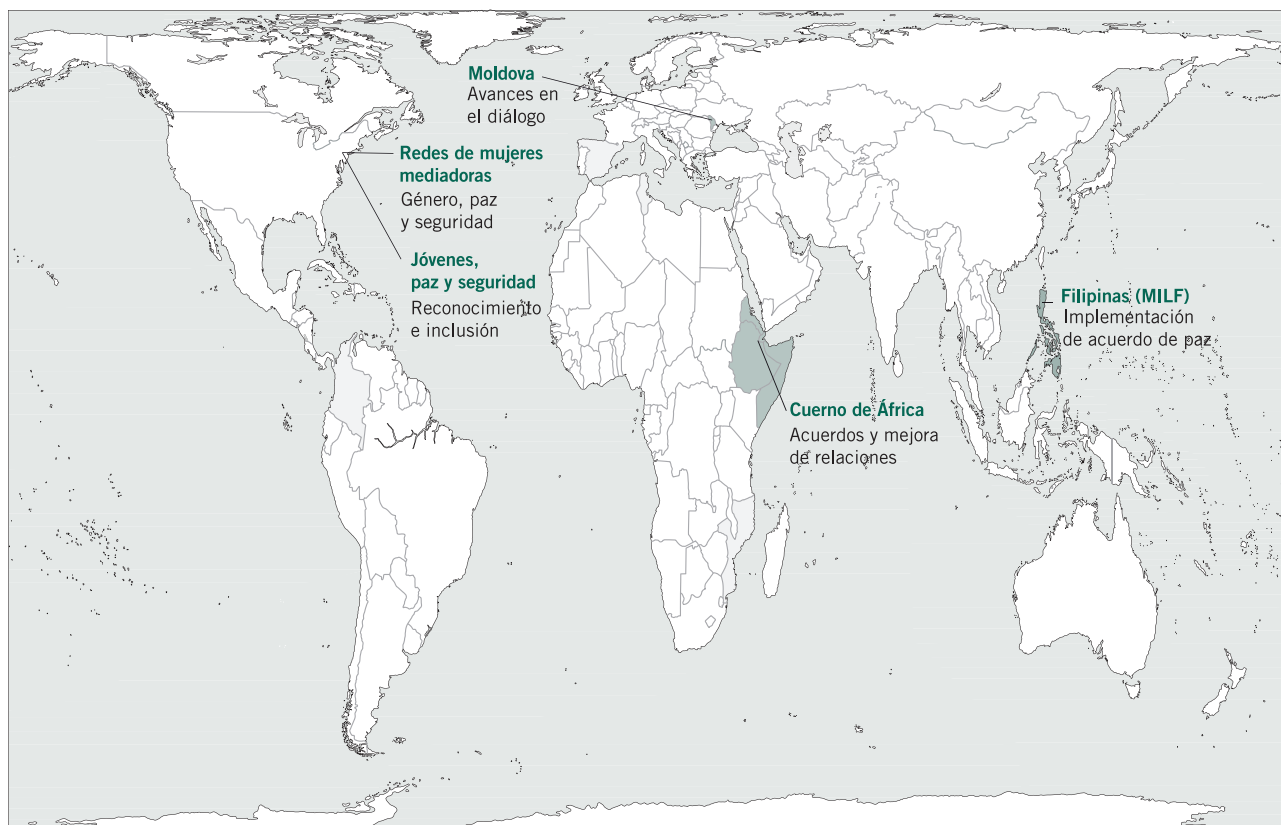
en el marco de los conflictos armados. Con respecto a la actividad del Consejo de Seguridad de la ONU, cabe destacar que durante 2018 se aprobaron dos resoluciones con sanciones a Libia y a Somalia en las que se incluyeron aspectos relativos a violencia sexual y violencia de género. Además, Naciones Unidas continuó desplegando la estrategia para abordar la explotación y abusos sexuales por parte de personal de la organización, anunciada en 2017 por el secretario general de la ONU, António Guterres, centrada en cuatro áreas de acción: derechos y dignidad de las víctimas, el fin de la impunidad, la participación de la sociedad civil y asociados externos, y la mejora de la comunicación estratégica. Como parte del despliegue, 34 entidades de Naciones Unidas facilitaron estrategias y planes de acción por países. En relación a las denuncias de explotación y abusos sexuales perpetrados por el personal militar y civil desplegado en misiones de Naciones Unidas, el informe del secretario general de la ONU constató una disminución en el número de denuncias

registradas en 2017 con respecto a 2016.

En 2017 se presentaron 62 denuncias, de las cuales 20 hacían referencia a abusos sexuales y 42 a explotación sexual (frente a 145 denuncias en 2016, 99 en 2015 y 80 en 2014). Por otra parte, la **Oficina de la representante especial del secretario general de la ONU** sobre violencia sexual en los conflictos y el **Comité de la CEDAW** firmaron en 2018 un acuerdo marco de cooperación, para promover y proteger los derechos de las mujeres y niñas afectadas por la violencia sexual relacionada con los conflictos. Se trata del primer marco de cooperación entre un órgano con mandato establecido por el Consejo de Seguridad y

un mecanismo de derechos humanos. Finalmente, cabe destacar que la Corte Penal Internacional abrió una investigación preliminar sobre los crímenes cometidos contra la población rohingya en Myanmar, que podría dar lugar a una investigación formal. La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció el inicio de esta investigación que incluirá entre otras violaciones a los derechos humanos los actos de violencia sexual.

Además de la violencia sexual, países en conflicto armado y/o tensión sociopolítica siguieron afrontado otras violencia de género. En el informe *Situación de las defensoras de los derechos humanos*, de principios de 2019, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos alertó de los graves riesgos que estas experimentan, incluyendo no reconocimiento a su condición de defensoras de derechos humanos y a su labor, marginación y exclusión sistemática; descrédito social, estigmatización y ataques al honor y la reputación; riesgos, amenazas y ataques en el ámbito privado y contra familiares y personas cercanas; agresiones físicas, violencia sexual, tortura, asesinatos y desapariciones forzadas; acoso, violencia y ataques en internet; acoso judicial y criminalización;



denegación de participación, restricciones y represalias por colaboración con sistemas internacionales y regionales de derechos humanos; amenazas a la condición jurídica; encarcelamiento físico; ataques contra colectivos y movimientos de defensoras de los derechos humanos. El informe también señala los riesgos específicos que afrontan grupos o colectivos de defensoras de los derechos humanos, como las niñas, las defensoras que no se ajustan a normas de género hegemónicas, defensoras indígenas y defensoras de grupos minoritarios, defensoras de derechos humanos con discapacidad, mujeres periodistas y abogadas, defensoras en puestos de liderazgo, activistas en contextos de conflicto armado y postconflicto, defensoras refugiadas, migradas y víctimas de tráfico ilícito y trata, mujeres defensoras privadas de libertad, defensoras medioambientalistas, defensoras de los derechos humanos de las mujeres y activistas que se ocupan de los derechos de las trabajadoras sexuales.

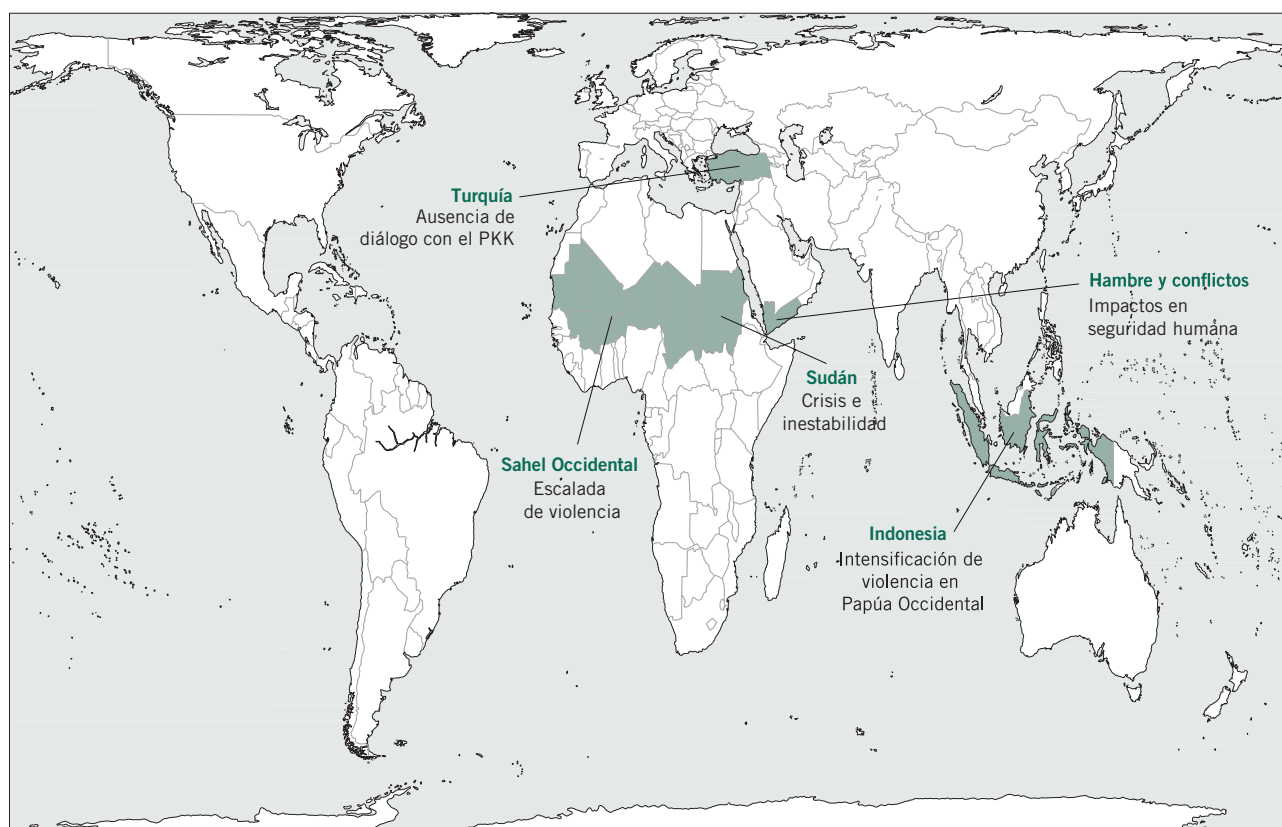
En relación a la resolución 1325 y la agenda internacional de mujeres, paz y seguridad, el secretario general mostró su preocupación por la falta de avances con respecto a los compromisos básicos en materia de paz y seguridad, derechos humanos e igualdad de género en el marco del debate anual sobre mujeres, paz y seguridad en el Consejo de Seguridad de la ONU. Con respecto a la inclusión de la igualdad de género en los acuerdos de paz, solo tres de 11 acuerdos (27%) firmados en 2017 incluyeron disposiciones en este sentido. Este dato resulta especialmente preocupante, ya que consolida y agrava la tendencia iniciada en 2016, cuando se incluyeron cuestiones de género en

el 50% de los acuerdos, frente al 70% de 2015. Con respecto a los planes de acción nacional sobre la 1325, durante 2018 seis países presentaron planes de acción por primera vez: Luxemburgo, Albania, Polonia, Túnez, Moldova y Mozambique. Así, según los datos recopilados por WILPF, un total de 79 países contaban con un plan de acción al finalizar 2018. Sin embargo, WILPF destaca que solo el 43% de estos planes cuenta con un presupuesto específico asociado a la implementación del plan lo que representa un severo obstáculo para la consecución de los objetivos de la agenda género, paz y seguridad y revela una notable falta de compromiso por parte de los gobiernos con esta agenda.

Oportunidades de Paz para 2019

En el cuarto capítulo (**Oportunidades de Paz para 2019**), el informe identifica y analiza cinco escenarios propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz en el año 2019. Las oportunidades identificadas durante 2017 hacen referencia a diferentes regiones y temas.

- **Cuerno de África:** El histórico acuerdo de paz entre Eritrea y Etiopía de septiembre de 2018 ha sido el resultado de numerosas complicidades a ambos lados del Mar Rojo e importantes cambios en Etiopía que han generado un extraordinario escenario en el que se han desencadenado diversas iniciativas de paz y nuevos acuerdos entre sus vecinos. El nuevo escenario derivado de este proceso ha creado un momentum para la paz en el Cuerno de África, no exento



de riesgos, ya que se asienta sobre elementos de fragilidad endógenas y un complejo entramado de relaciones entre los países de la región y sus vecinos de la Península Arábiga, que compiten por ampliar sus áreas de influencia.

- **Filipinas:** Tras varios años de retrasos y numerosas dificultades y resistencias, la aprobación de la denominada ley orgánica de Bangsamoro abre la puerta a la sustitución de la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán por otra entidad con mayores competencias y territorio en la isla sureña de Mindanao, y a la vez facilita la plena implementación del acuerdo de paz, incluyendo la desmovilización de decenas de miles de combatientes del MILF.
- **Moldova (Transdniestria):** El reimpulso de las negociaciones desde 2016, los pasos significativos entre 2017 y 2018 y factores como el enfoque pragmático de las actuales negociaciones, el impulso de las terceras partes y el apoyo de Rusia al proceso, pueden llevar a nuevos avances futuros para una resolución de este conflicto prolongado, pese a los obstáculos, incluyendo las divergencias en torno al futuro estatus de Transdniestria.
- **Mujeres mediadoras:** Desde el año 2015 han surgido diversas redes de mujeres mediadoras con el objetivo de promover la participación significativa de las mujeres en los procesos de paz. Se trata de experiencias innovadoras que promueven la inclusividad de los procesos y la superación de las barreras tradicionales a las mujeres en las negociaciones de paz.

El informe Alerta! identifica y analiza cinco contextos propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz en el año 2019

- **Paz y juventud:** En los últimos años se ha dedicado una mayor atención al papel de la población joven como actor de paz y agente para la transformación de conflictos, en especial tras la aprobación de la resolución 2250 (2015) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El primer balance de la implementación de la agenda de jóvenes, paz y seguridad ofrece una visión panorámica de la aportación de la juventud en este ámbito y esboza una serie de recomendaciones para su mayor inclusión en iniciativas de paz en el futuro.

Escenarios de riesgo para 2019

En el quinto capítulo (**Escenarios de riesgo para 2019**), el informe identifica y analiza cinco escenarios de conflicto armado y tensión que por sus condiciones pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante el año 2019.

- **Indonesia:** A finales de 2018 se produjeron los episodios de violencia más graves de los últimos tiempos en Papúa. El hecho de que en 2019 se celebren elecciones presidenciales y se conmemore el 50º aniversario del referéndum que sancionó la anexión de Papúa a Indonesia puede propiciar una buena oportunidad al independentismo papú para visibilizar sus demandas e incrementar su actividad armada.

- **Sudán:** A pesar de la reducción de la intensidad de la violencia en las regiones de Darfur (oeste) y Kordofán del Sur y Nilo Azul (sur) en 2018, las masivas protestas populares durante todo el año, que alcanzaron su punto más alto en diciembre y principios de 2019, provocadas principalmente por el empeoramiento de la crisis económica y política a nivel nacional, permiten augurar una mayor inestabilidad en 2019.
- **Sahel Occidental:** La región afronta en los últimos años y en especial en 2018 un incremento de la violencia política con múltiples ramificaciones y expresiones de violencia intercomunitaria y criminalidad que pueden tener un grave impacto regional. La militarización de la región, con el despliegue de iniciativas regionales e internacionales, puede tener graves consecuencias para la población civil y no resolver las cuestiones de fondo que se encuentran entre las raíces de la conflictividad en el área.

El informe analiza cinco escenarios de conflicto armado y tensión que por sus condiciones pueden agravarse durante el año 2019

- **Turquía:** El deterioro de la situación general en Turquía en los últimos años, con denuncias de vulneraciones de derechos humanos; el fortalecimiento militar de los actores armados enfrentados; y las dinámicas regionales de conflictividad son algunos de los elementos que generan riesgos de desestabilización del conflicto entre Ankara y el PKK, pese a las oportunidades de reconducir la disputa por la vía negociada.
 - **Hambre y conflictos:** Informaciones recientes apuntan a un incremento de la población que padece hambre a nivel mundial y destacan que la mayor parte vive en zonas afectadas por conflictos. Ante esta tendencia, numerosas voces alertan sobre la relación entre conflicto, violencia e inseguridad alimentaria y sobre el bloqueo deliberado de la ayuda humanitaria y el uso del hambre como arma de guerra en diversos contextos.

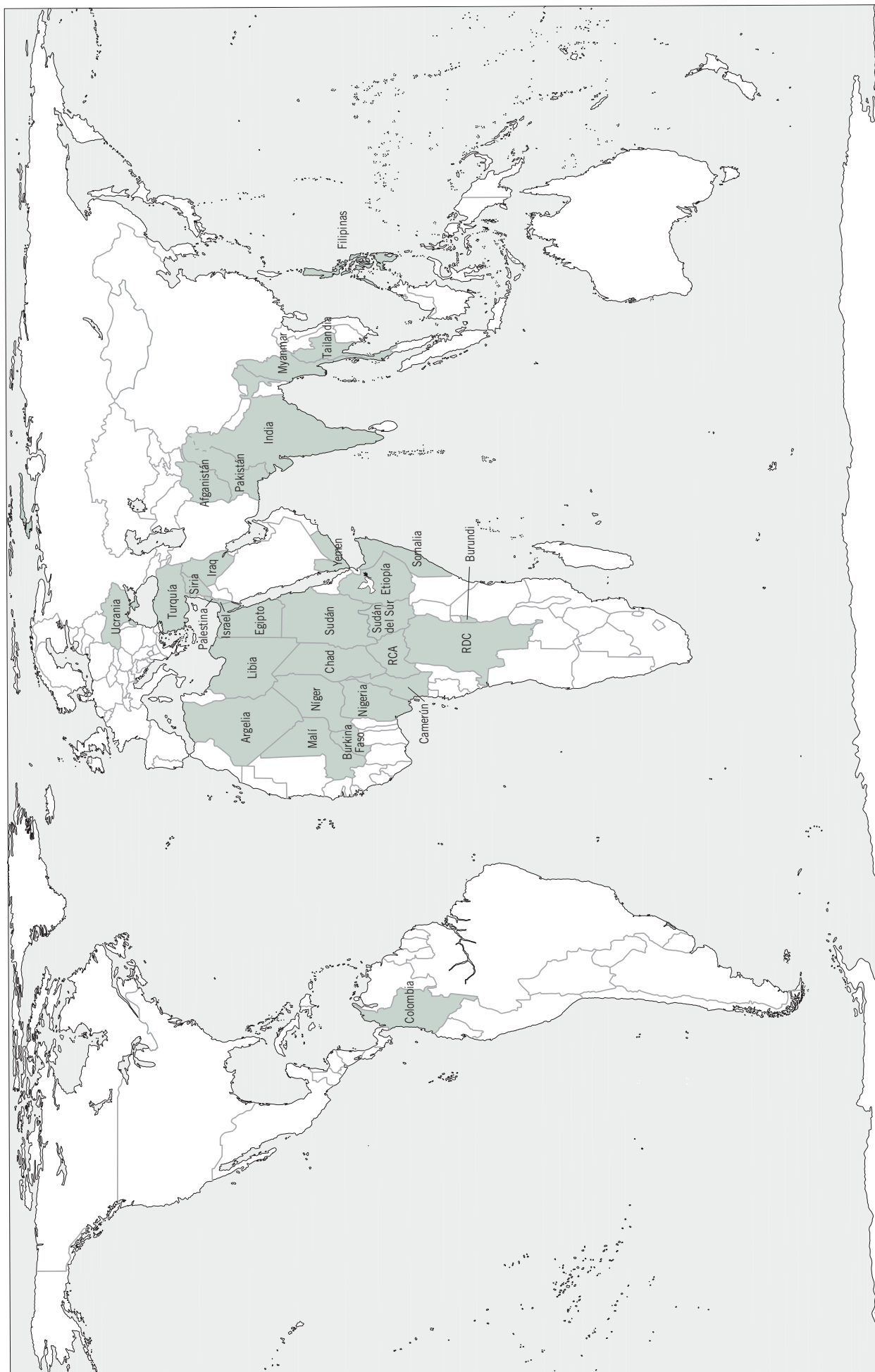
Resumen de la conflictividad global en 2018

Continente	Conflicto armado			Tensión			TOTAL
	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja	
África	<i>Libia</i> <i>Malí</i> <i>Región Lago Chad (Boko Haram)</i> <i>Somalia</i> <i>Sudán del Sur</i>	Camerún (Ambazonia/ North West y South West) <i>RCA</i> RDC (este) RDC (Kasai) <i>Sudán (Darfur)</i>	Argelia <i>Burundi</i> <i>Etiopía (Ogadén)*</i> RDC (este-ADF) Región Sahel Occidental <i>Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)</i>	Chad Etiopía <i>Etiopía (Oromiya)</i> Kenya Nigeria <i>RDC</i>	Angola (Cabinda) Côte d'Ivoire Eritrea Lesotho <i>Mozambique</i> <i>Nigeria (Delta Níger)</i> Somalia (Somalilandia-Puntlandia) <i>Sudán</i> <i>Togo</i> Túnez	Africa Central (LRA) <i>Congo, Rep. de</i> Djibouti <i>Eritrea – Etiopía</i> <i>Gambia</i> Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Madagascar <i>Marruecos – Sáhara Occ.</i> RDC – Rwanda RDC – Uganda Rwanda <i>Senegal (Casamance)</i> <i>Sudán – Sudán del Sur</i> Uganda Zimbabwe	
SUBTOTAL	5	5	6	6	10	17	49
América			<i>Colombia</i>	México <i>Nicaragua</i> <i>Venezuela</i>	El Salvador Honduras	Bolivia Guatemala Haití Perú	
SUBTOTAL			1	3	2	4	10
Asia y Pacífico	<i>Afganistán</i>	Filipinas (Mindanao) India (Jammu y Cachemira) Pakistán	<i>Filipinas (NPA)</i> India (CPI-M) <i>Myanmar</i> Pakistán (Baluchistán) <i>Tailandia (sur)</i>	India – Pakistán	Bangladesh China (Xinjiang) <i>India (Assam)</i> India (Manipur) Indonesia (Papúa Occ.) Pakistán Tayikistán	<i>China (Tíbet)</i> China - Japón <i>Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea</i> <i>Corea, RPD – Rep. de Corea</i> <i>India (Nagalandia)</i> Kirguistán Lao, RPD Sri Lanka Tailandia Uzbekistán	
SUBTOTAL	1	3	5	1	7	10	27
Europa		Turquía (sudeste) <i>Ucrania (este)</i>			<i>Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)</i> Rusia (Chechenia) Rusia (Daguestán) <i>Serbia – Kosovo</i> Turquía	Armenia Belarús Bosnia y Herzegovina <i>Chipre</i> <i>Georgia (Abjasia)</i> <i>Georgia (Osetia del Sur)</i> <i>Moldova, Rep. de (Transnistria)</i>	
SUBTOTAL		2			5	7	14
Oriente Medio	<i>Iraq</i> <i>Siria</i> <i>Yemen (al-houthistas)</i>	Egipto (Sinaí) <i>Israel – Palestina</i>	Yemen (AQPA)	Egipto Irán (noroeste) Israel – Siria – Líbano	Arabia Saudita Irán (Sistán) Baluchistán <i>Irán – EEUU, Israel</i> Líbano	Bahrein Irán Iraq (Kurdistán) <i>Palestina</i>	
SUBTOTAL	3	2	1	3	4	4	17
TOTAL	9	12	13	13	28	42	117

Se señalan en cursiva los conflictos armados y tensiones con negociaciones de paz, ya sean exploratorias o estén formalizadas. Con asterisco, los conflictos armados finalizados durante 2018. Para más información sobre negociaciones y procesos de paz, véase Escola de Cultura de Pau. *Negociaciones de paz 2019. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2019.

* Conflicto armado finalizado en 2018.

Mapa 1.1 Conflictos armados



■ Países con conflicto armado

🇺🇦 Fin del conflicto armado durante 2018

1. Conflictos armados

- Durante 2018 se registraron 34 conflictos armados, de los cuales 33 seguían activos al finalizar el año. La mayoría se concentró en África (16) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (uno).
- La situación de violencia que afecta desde 2016 a las regiones de mayoría anglófona de Camerún escaló durante el año convirtiéndose en un escenario de guerra de graves consecuencias para la población civil.
- En un clima caracterizado por las violaciones sistemáticas al cese el fuego y la aplicación de sanciones internacionales, Sudán del Sur alcanzó un nuevo acuerdo de paz con escepticismo sobre su viabilidad.
- El incremento y la expansión de la violencia en RCA hizo que este país padeciera la tercera crisis humanitaria más grave del mundo, según Naciones Unidas.
- Se deterioró la situación en Colombia como consecuencia de la fragilidad del proceso de paz y de la finalización del acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno y la guerrilla del ELN.
- En Afganistán persistió la violencia de alta intensidad, pero se produjeron importantes avances en el proceso de paz exploratorio.
- Los niveles de violencia en el sur de Tailandia fueron los más bajos desde el inicio del conflicto en 2004.
- Se redujo la mortalidad en Turquía asociada al conflicto con el PKK, pero se mantuvo la represión contra actores civiles kurdos y se elevó el riesgo de desestabilización por las repercusiones del conflicto en Siria.
- El conflicto armado en Yemen se intensificó durante 2018, aunque al finalizar el año las principales partes contendientes alcanzaron un acuerdo que podría suponer una reducción en las hostilidades.
- En Siria se observó un avance de las tropas del régimen y se constató la gran influencia de actores regionales e internacionales en las dinámicas de la disputa, que dejó 20.000 víctimas mortales en 2018.

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2018. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2018, incluyendo las dinámicas globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por conflictos armados en 2018.

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o interrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciados de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2018

Conflicto ¹ -inicio-	Tipología ²	Actores principales ³	Intensidad ⁴
			Evolución ⁵
África			
Argelia -1992-	Interno internacionalizado	Gobierno, AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y Sahel	1
	Sistema		↓
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, facciones de antiguos grupos armados	1
	Gobierno		=
Camerún (Ambazonia/ North West y South West) -2018-	Interno Internacionalizado	Gobierno de Camerún, autoproclamado Gobierno Interino de Ambazonia, grupos armados ADF, SCACUF, SOCADEF y SCDF y decenas de milicias menores	2
	Autogobierno, Identidad		↑
Etiopía (Ogadén) -2007-	Interno internacionalizado	Gobierno, ONLF, OLF, cuerpo paramilitar ("Liyu Police")	1
	Autogobierno, Identidad		Fin
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA), milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI; EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, EAU, entre otros países	3
	Gobierno, Recursos, Sistema		=
Malí ⁶ -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta G5-Sahel	3
	Sistema, Autogobierno, Identidad		↑

- En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
- Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
- En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
- La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
- En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2018 con la del 2017, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2018 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.
- En pasadas ediciones de *Alerta!* este caso era identificado como "Malí (norte)", pero se ha cambiado la denominación por la ampliación de las dinámicas de violencia a otras áreas del país.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011-	Interno internacionalizado	Boko Haram (BH), MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)	3
	Sistema		=
Región Sahel Occidental -2018-	Internacional	Burkina Faso, Malí, Níger, Fuerza Conjunta G5-Sahel (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Macina Liberation Front, Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas	1
	Sistema, Identidad, Recursos		↑
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, MPC, UPC), milicias anti-balaka, milicia 3R, Francia (operación Sangaris), MINUSCA, EUFOR, grupos vinculados al antiguo Gobierno de François Bozizé, otros remanentes de grupos armados (antiguas Fuerzas Armadas), grupo armado ugandés LRA	2
	Gobierno, Recursos		↑
RDC (este) -1998-	Interno internacionalizado	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR, milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, grupos armados de Ituri, grupo armado de oposición burundés FNL, Rwanda, MONUSCO	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	1
	Sistema, Recursos		=
RDC (Kasai) -2017-	Interno	Gobierno, diversas milicias de adscripción étnica (Bana Mura, Kamwina Nsapu)	2
	Gobierno, Identidad		↓
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab	3
	Gobierno, Sistema		=
Sudán (Darfur) -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), JEM, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, UNAMID	2
	Autogobierno, Recursos, Identidad		=
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur	1
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↓
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		↓
América			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, ELN, FARC (disidentes), EPL, grupos paramilitares	1
	Sistema		↑
Asia			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS	3
	Sistema		↑
Filipinas (Mindanao) -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, facciones del MILF y el MNLF	2
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↓
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		↑
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobierno, JKLF, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, United Jihad Council, All Parties Hurriyat Conference	2
	Autogobierno, Identidad		↑

Conflicto inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Asia			
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	1
	Sistema		=
Myanmar -1948-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP)	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU	2
	Sistema		↓
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT; sociedad civil, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↓
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Europa			
Turquía (sudeste) -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	2
	Autogobierno, Identidad		↓
Ucrania (este) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia	2
	Gobierno, Identidad, Autogobierno		=
Oriente Medio			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasam), Israel	2
	Sistema		↓
Iraq -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Irán, Turquía, PKK	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↓
Israel-Palestina -2000-	Internacional	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas	2
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados	3
	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad		=
Yemen (al-houthistas) -2004-	Interno internacionalizado	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Irán	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Yemen (AQPA) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, AQPA/Ansar Sharia, ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, EAU, milicias tribales, milicias al-houthistas	1
	Sistema		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;

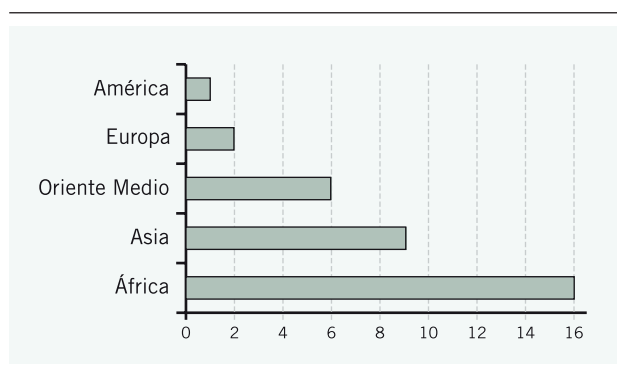
↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2018

En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados a lo largo de 2018, incluyendo el balance respecto a años anteriores, la distribución geográfica de los conflictos y las principales tendencias por regiones, la relación entre los actores

implicados y el escenario de la disputa, las principales causas de los conflictos armados actuales, la evolución general de los contextos y la intensidad de los conflictos en función de sus niveles de violencia y su impacto. Asimismo, en este apartado se analizan algunas de las

Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en 2018



principales consecuencias de los conflictos armados en la población civil, entre ellas el desplazamiento forzado a causa de situaciones de conflicto y violencia.

1.2.1 Tendencias globales y regionales

Durante el año 2018 se mantuvo la tendencia observada en años anteriores respecto al número de conflictos armados, con un total de 34 casos, un caso más que en 2017 y en 2016 y un número similar al registrado en períodos previos (35 contextos en 2015, 36 en 2014, 35 en 2013). De los 34 casos contabilizados en 2018, solo 33 permanecían activos al finalizar el año ya que la situación en la región de Ogadén, en Etiopía, dejó de ser considerada como un conflicto armado tras la firma de un histórico acuerdo de paz entre el Gobierno etíope y el grupo armado ONLF y la reducción de las hostilidades. En comparación con 2017, la lista de conflictos armados registró dos nuevos casos en 2018. Por una parte, la situación de violencia que afecta desde 2016 a las regiones de mayoría anglófona de Camerún y que enfrenta a las Fuerzas Armadas y milicias y grupos armados secesionistas en torno a demandas de un nuevo estatus político se agravó significativamente en 2018. La escalada de violencia comportó el desplazamiento forzado interno de 436.000 personas y más de 800 víctimas mortales –1.500 según algunas fuentes. Por otra parte, se deterioró la situación en la región del Sahel Occidental, pasando a considerarse como conflicto armado ante el incremento de la violencia en el norte de Burkina Faso y en el norte de Níger por parte de grupos de corte yihadista. En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados a nivel mundial, los datos de 2018 ofrecen un panorama similar al de años anteriores. La gran mayoría de los casos se concentraron en África (16) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (uno). En comparación con 2017, la distribución de conflictos por regiones en 2018 presentó dos contextos más en África –Camerún (Ambazonia/North West y South West) y región Sahel Occidental–, la finalización de un

La mayor parte de los conflictos armados en 2018 se registró en África (16) y Asia (nueve), seguidos de Oriente Medio (seis), Europa (dos) y América (uno)

conflicto en ese continente –Etiopía (Ogadén)– y uno menos en Europa –ya que el caso correspondiente a la república de Daguestán en la Federación de Rusia dejó de considerarse como conflicto armado al finalizar 2017 y durante 2018 fue analizado como escenario de tensión.⁷ El continente africano pasó de representar un 44% del total de conflictos en 2017 a un 47% en 2018.

En lo referente a la relación entre los actores involucrados en el conflicto y el escenario de la disputa, se identificaron conflictos internos, internacionales y, mayoritariamente, internos internacionalizados. El 12% de los conflictos armados (cuatro casos) tenía carácter interno, es decir, se trataba de conflictos entre actores armados de un mismo Estado y que operan exclusivamente en y desde las fronteras del mismo: RDC (Kasai), Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur). El 6% era considerado internacional: el conflicto en la Región Sahel Occidental y la disputa entre Israel y Palestina. El resto, un 82%, eran conflictos internos internacionalizados, en los que alguna de las partes es foránea,

los actores armados del conflicto tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o la disputa se extiende a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores, incluyendo misiones internacionales, coaliciones militares regionales e internacionales *ad-hoc*, Estados y grupos armados de acción transfronteriza, entre otros.

En diversos conflictos, y particularmente en África, se observó la implicación de misiones de la ONU, entre ellas MINUSCA en RCA, MONUSCO en RDC, UNAMID en Sudán o UNMISS en Sudán del Sur o MINUSMA en Malí. En relación a éstas, cabe señalar que en 2018 continuó el proceso de reconfiguración de la UNAMID, con una reducción del 44% de las tropas y el 30% de la Policía, en el marco de una hoja de ruta para sustituir la misión de mantenimiento de la paz por otra de construcción de paz y desarrollo, si bien algunos autores alertaron sobre los riesgos de reducir la misión. Organizaciones regionales continuaron involucradas en diversos conflictos a través de misiones u operaciones, como la UA (AMISOM en Somalia), la UE (EUNAVFOR en Somalia, renovada en 2018 hasta 2020) y la OTAN (misión Rolute Support en Afganistán). Coaliciones militares regionales e internacionales continuaron participando en conflictos armados. Entre ellas, la Fuerza Conjunta G5-Sahel (Malí, Burkina Faso, Níger, Chad y Mauritania); la Fuerza Militar Conjunta Regional MNJTF (Nigeria, Níger, Chad y Camerún), que durante 2018 lanzó diversas ofensivas de gran escala contra Boko Haram; el conglomerado de fuerzas liderado por Arabia Saudita e integrado por nueve países (EAU, Bahrein, Kuwait, Qatar, Egipto, Jordania, Marruecos, Senegal y Sudán) que combate en Yemen, y que durante el año intensificó su cerco al puerto de Hodeida; y la

7. Véase el resumen sobre Rusia (Daguestán) en el capítulo 2 (Tensiones).

coalición internacional anti-Estado Islámico (ISIS) – Global Coalition Against Daesh–, establecida en 2014, liderada por EEUU e integrada por 71 países y cuatro instituciones (UE, Liga Árabe, OTAN e Interpol).

La internacionalización también se reflejó un año más en la intervención militar de terceros Estados en conflictos armados. Fue el caso, un año más, de Francia, a través de su operación militar Barkhane en Malí, que en 2018 lanzó varias operaciones aéreas y ofensivas para ejecutar a altos cargos de grupos de línea yihadista; EEUU, implicado en diversos conflictos –como en Somalia, donde llevó a cabo bombardeos de posiciones de al-Shabaab; en Sahel Occidental, con operaciones terrestres y aéreas en Níger; en Libia, con ataques aéreos contra grupos de línea yihadista; en Pakistán, con nuevos ataques con drones, como el que mató al número dos de la organización armada TTP; en Yemen, en relación al conflicto con AQPA, con una reducción significativa en este caso del balance de ataques aéreos en 2018; y en Siria. En el caso de Siria continuaron implicados numerosos países, como Rusia, Irán y Turquía –que en 2018 tomó el control de la región kurda de Afrin y amenazó con llevar a cabo ofensivas en otras zonas. Cabe señalar que a finales de 2018 EEUU anunció que retiraría sus tropas de Siria (2.000 efectivos), lo que generó alertas por las posibles consecuencias de mayor desestabilización si la salida se producía de manera de manera rápida y no coordinada.

En relación a las causas de los conflictos armados, la gran mayoría de conflictos tuvo entre sus motivaciones principales **la oposición a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o al sistema político, económico, social o ideológico de un determinado Estado, que derivaron en luchas por acceder al poder o erosionarlo**. Uno u otro elemento estuvieron presentes en el 71% de los casos en 2018 (24 de los 34 casos), en línea con el año anterior (presente en el 73% de los casos en 2017). Entre estos 24 casos, en 18 contextos había actores armados que aspiraban a un cambio de sistema, mayoritariamente por parte de organizaciones que se atribuyen una agenda yihadista y que tratan de imponer su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estos últimos grupos cabe mencionar ejemplos como el autodenominado Estado Islámico y sus filiales y organizaciones afines en distintos continentes –ISIS estuvo presente en países como Argelia, Libia, Nigeria, Somalia, Afganistán, Pakistán, Filipinas, Iraq, Siria, Yemen, entre otros–; las diversas ramas de al-Qaeda que operan en el norte de África y Oriente Medio –entre ellas AQMI (Argelia y Sahel) y AQPA (Yemen)–; las milicias talibán que operan en Afganistán y Pakistán o el grupo al-Shabaab en Somalia. En 2018 se acentuó este factor en

De los 34 conflictos armados activos en 2018, 33 seguían activos a final de año, tras la firma de un acuerdo histórico entre el Gobierno etíope y la insurgencia de la región de Ogadén

El 82% de los conflictos armados en 2018 fueron de carácter interno internacionalizado

algunos casos, como Malí, donde combatientes fulanis próximos a ISIS incrementaron su peso en la disputa y donde hubo llamamientos a miembros de la comunidad fulani de toda África Occidental a tomar las armas y sumarse a la causa yihadista.

Asimismo, otro factor destacado entre las causas principales fueron las disputas en torno a demandas identitarias y de autogobierno, presentes en el 59% de los conflictos (20 casos), ligeramente superior a 2017 (55%). Entre los casos sobresale Camerún (Ambazonia/North West y South West), disputa en torno a las demandas de estatus para las regiones angloparlantes, en un contexto de marginación histórica política y económica de esas áreas, y que

en 2018 afrontó una grave escalada de la violencia que llevó a considerar el contexto como conflicto armado. Finalmente, las disputas en torno al control de recursos y del territorio fue una de las causas principales en casi un tercio de los conflictos (10 casos), si bien es un factor que de manera indirecta estuvo presente en numerosos contextos, perpetuando la violencia a través de las economías de guerra.

Respecto a la evolución de los conflictos en 2018, más de un tercio de los conflictos experimentaron un descenso de las hostilidades y los niveles de violencia con respecto al año anterior (13 casos). Cabe señalar el caso de Etiopía (Ogadén), que dejó de considerarse conflicto armado a finales de año por la reducción de la violencia y la consecución de un acuerdo de paz entre las partes. El acuerdo de paz en Sudán del Sur y la renovación del alto el fuego en Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) también conllevaron una reducción de las hostilidades durante el año en ambos contextos, si bien en ambos casos continuaron produciéndose incidentes violentos. Un 32% (11 casos) no afrontaron cambios significativos, mientras un 30% sufrió una escalada de la violencia. Supone un cambio con respecto a 2017, en que predominó la tendencia de escalada de violencia (presente en el 39% de los 33 casos de ese año). Los casos en que se incrementaron los niveles de violencia en 2018 fueron: Camerún, Malí, Región Sahel Occidental, RCA, Colombia, Afganistán, Filipinas (NPA), India (Jammu y Cachemira) –que asistió a una escalada con las cifras de letalidad más elevadas desde 2009–, Israel-Palestina –también con las peores cifras desde 2014– y Yemen (al-houthistas).

Con respecto a la intensidad de la violencia, en un 38% de los conflictos fue baja (13 casos), en un 35% media (12 casos) y en otro 27% elevada (nueve casos). Estos últimos se caracterizaron por niveles de letalidad superiores al millar de víctimas mortales anuales, así como graves impactos en la población y el territorio. En 2018 se dio un descenso porcentual de los conflictos de alta intensidad con respecto a 2017 (40% de guerras de alta

intensidad, equivalente a 13 de los 33 casos de ese año). Los nueve conflictos de mayor gravedad en 2018 fueron Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). Algunos de estos casos superaron ampliamente el millar de fallecidos en un año, como Afganistán, con cifras de víctimas mortales que podrían superar los 43.000; Yemen, con algunas estimaciones que elevaban a 28.000 los fallecidos en 2018, y un acumulado de más de 60.200 desde enero de 2016; o Siria, con algunos balances que apuntaban a 20.000 víctimas mortales en 2018, incluyendo cerca de 6.500 civiles –y un balance de más de medio millón de fallecidos desde el inicio del conflicto en 2011.

El 71% de los conflictos armados tenía entre sus causas principales la búsqueda de un cambio de gobierno o de sistema

1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil

Los conflictos armados tuvieron de nuevo en 2018 graves impactos en la población civil y en los territorios en que transcurrían. El informe anual del secretario general de la ONU sobre protección de los civiles en conflictos armados publicado en 2018, que cubre el periodo entre enero y diciembre de 2017, definió la situación como sombría, con impactos como la letalidad y mutilación, desplazamiento forzado, restricciones al acceso a la ayuda humanitaria, entre otros. El informe subraya que la población civil continuó siendo la principal víctima de los conflictos armados, con decenas de miles de personas civiles fallecidas o gravemente lesionadas como resultado de acciones específicamente contra objetivos civiles o fruto de ataques indiscriminados. En los casos de zonas densamente pobladas, los impactos se multiplicaron, como en zonas de Siria e Iraq. El informe también alertó sobre el uso de artefactos explosivos improvisados por grupos armados de oposición (en Afganistán, Libia, Malí, Nigeria, Siria y Somalia) y señaló denuncias de uso de municiones de racimo en Yemen y Siria y de armas químicas en Siria, entre otros aspectos.

El 27% de los conflictos armados en 2018 fueron de intensidad elevada: Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)

El análisis sobre la evolución de los conflictos en 2018 muestra la continuación de las tendencias denunciadas por el secretario general. Así, durante el año en numerosos conflictos se produjeron graves ataques contra objetivos civiles, como campos de desplazados, mezquitas, viviendas, hoteles, y mercados, actos electorales, establecimientos comerciales, medios de transporte, en contextos como Nigeria, Somalia, RCA, Libia, Afganistán, India (Baluchistán), Filipinas (Mindanao), Yemen, Egipto (Sinaí). Fuerzas Armadas malienses fueron acusadas en diversas ocasiones de ejecuciones sumarias de civiles y de abusos. En Burundi se denunciaron numerosas violaciones de derechos humanos entre 2017 y 2018, incluyendo desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, entre otras. En Libia, la escalada de la violencia en la capital, Trípoli, implicó el uso de armamento pesado en varios sectores de la ciudad, incluyendo zonas residenciales, y el conflicto armado en su conjunto resultó en numerosas violaciones de derechos humanos –arrestos arbitrarios, secuestros, extorsiones, trabajos forzados, esclavitud, entre otros– en un clima de impunidad y de situación de vulnerabilidad específica para personas migradas y refugiadas.

Los conflictos armados continuaron provocando y/o agudizando situaciones de crisis humanitaria.

Sobresalieron casos como Yemen, la peor crisis humanitaria a nivel mundial, con más de 24 millones de personas en necesidad de asistencia, incluyendo 11,3 millones de niños y niñas. También Iraq, donde 6,7 millones de personas, de las cuales 3,3 eran menores, continuaban necesitando ayuda. En Siria se agudizó la crisis humanitaria en la región noroeste, aumentando de 520.000 a 4,2 millones el número de personas necesitadas de ayuda humanitaria en las áreas de Idlib y Aleppo. Fueron alarmantes también otros muchos casos, incluyendo entre otros, Burundi, donde 3,6 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria a finales de 2018,

Gráfico 1.2. Intensidad de los conflictos armados

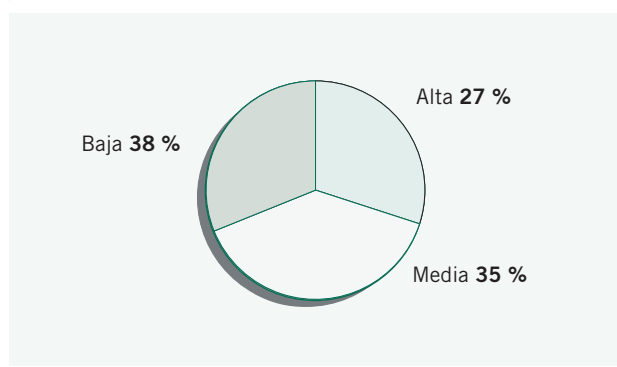
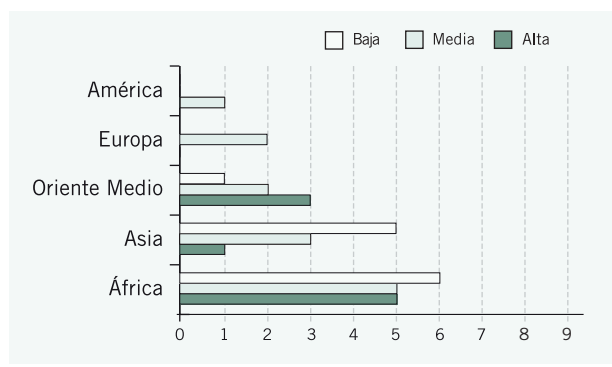


Gráfico 1.3. Intensidad de los conflictos por regiones



Cuadro 1.1. Tendencias regionales en materia de conflictividad armada

ÁFRICA	<ul style="list-style-type: none"> • El continente albergó el mayor número de casos de conflictos armados a nivel mundial, con 16 de los 34 (equivalentes a un 47%). Esta cifra supone el incremento en dos casos respecto a 2017, dado que en 2018 el aumento de los niveles de violencia en Camerún y en la Región Sahel Occidental derivaron en que ambos casos pasaran a ser considerados como conflicto armado. • Cerca de un tercio de conflictos en África fueron de alta intensidad (cinco de los 16 casos): Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia y Sudán del Sur. • Una cuarta parte de los conflictos armados en el continente registraron un deterioro en 2018 con respecto al año anterior, en cerca de un tercio (cinco casos) se produjo una reducción de las hostilidades, y en un 44% (siete casos) no se produjeron cambios significativos. • Los conflictos armados africanos se caracterizaron por su alto nivel de internacionalización. El 88% de los casos fueron internos internacionalizados, con implicación de actores externos y/o extensión de las dinámicas bélicas a países vecinos. • Los conflictos armados en África tuvieron causas múltiples y simultáneas, entre las que destaca la aspiración a un cambio de gobierno o de sistema, presente en un 75% de los casos. En un 56% había demandas identitarias y/o de autogobierno y en un 50% había factores relativos al control de recursos.
AMÉRICA	<ul style="list-style-type: none"> • El continente fue escenario de un único conflicto armado, el de Colombia. América concentró, por tanto, un 3% de los casos de conflicto armado en 2018 a nivel mundial. • El único caso de conflicto armado en América (Colombia) afrontó un deterioro en 2018 como consecuencia de la fragilidad del proceso de paz y por la finalización del alto el fuego entre el Gobierno y el ELN.
ASIA	<ul style="list-style-type: none"> • La región ocupó el segundo lugar en número de conflictos armados después de África, con el 26% de los conflictos (nueve casos). • Se redujo el número de casos de violencia de alta intensidad, pasando de cuatro en 2017 a un caso en 2018: Afganistán. El 33% de los casos afrontó una escalada de la violencia –Afganistán, Filipinas (NPA) e India (Jammu y Cachemira)–, un 56% se mantuvo sin cambios relevantes y en un 11% se redujeron los niveles de violencia. • El 75% de los conflictos armados internos en el mundo se concentraban en Asia: Filipinas (NPA), India (CPI-M) y Tailandia (sur). • En términos de causalidad, cinco casos tenían entre sus principales causas cuestiones relativas a demandas identitarias y de autogobierno, el mismo número de casos con causas relacionadas con disputas en torno al control del gobierno e intentos de cambio de sistema político, económico o social.
EUROPA	<ul style="list-style-type: none"> • El continente europeo albergó dos casos –Turquía (sudeste) y Ucrania (este)–, que representaron el 6% de los conflictos armados a nivel mundial. • Los conflictos en Europa presentaron una intensidad de violencia media, con una reducción de la mortalidad en Turquía en 2018. • Europa continuó caracterizándose por conflictos armados con prevalencia de los factores identitarios y de autogobierno. Asimismo, los dos conflictos en Europa eran de carácter interno internacionalizado.
ORIENTE MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> • El 18% de los conflictos en el mundo tuvo lugar en Oriente Medio (seis contextos), el tercer continente en número de casos de conflicto armado. • La región continuó siendo, proporcionalmente, la que concentró un mayor número de casos graves a nivel mundial. El 50% de los conflictos en Oriente Medio fueron de intensidad elevada: Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). • Frente al predominio de pautas de escalada de la violencia en 2017 (50% de los casos), en 2018 un tercio de los conflictos sufrieron un deterioro de la situación –Israel-Palestina y Yemen (al-houthistas)–, mientras otro tercio se mantuvo en niveles de violencia similares al año anterior y el tercio restante experimentó cierta reducción en los niveles de violencia respecto al año anterior –Egipto (Sinaí) e Iraq. • En relación a las causas de los conflictos, prevalecieron las disputas en torno al control del Gobierno y los intentos de cambio de sistema, presentes en un 83% de los casos. En un 67% de los contextos las demandas identitarias/autogobierno fueron también un factor principal.

según OCHA; o RCA, donde 2,9 de los 4,5 millones de habitantes del país, incluyendo 1,5 millones de menores, necesitaban ayuda humanitaria. Por otra parte, la intensificación de la violencia en el este de RDC obstruyó las labores de emergencia sanitaria para contener el brote de ébola en la zona. En el caso de Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul), el acceso humanitario a las Dos Áreas permaneció bloqueado, si bien a finales de año el Gobierno aceptó una propuesta de la ONU para abrir el acceso. El asedio a Derna, en Libia, tuvo graves consecuencias humanitarias. En Ucrania, 3,5 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria y protección, según datos de OCHA de finales de año. La operación “Sinaí 2018” de las fuerzas de seguridad egipcias contra ISIS tuvo graves impactos humanitarios en la población. Además, personas trabajadoras humanitarias fueron también objetivo de la violencia durante 2018, como en Nigeria, donde Boko Haram mató y secuestró a

diversos trabajadores humanitarios, o en Afganistán, con ataques de ISIS contra la ONG Save the Children, causando varias muertes. Asimismo, en RCA se produjo un incremento de los ataques contra instalaciones y personal humanitario, lo que obligó a algunas a interrumpir sus actividades.

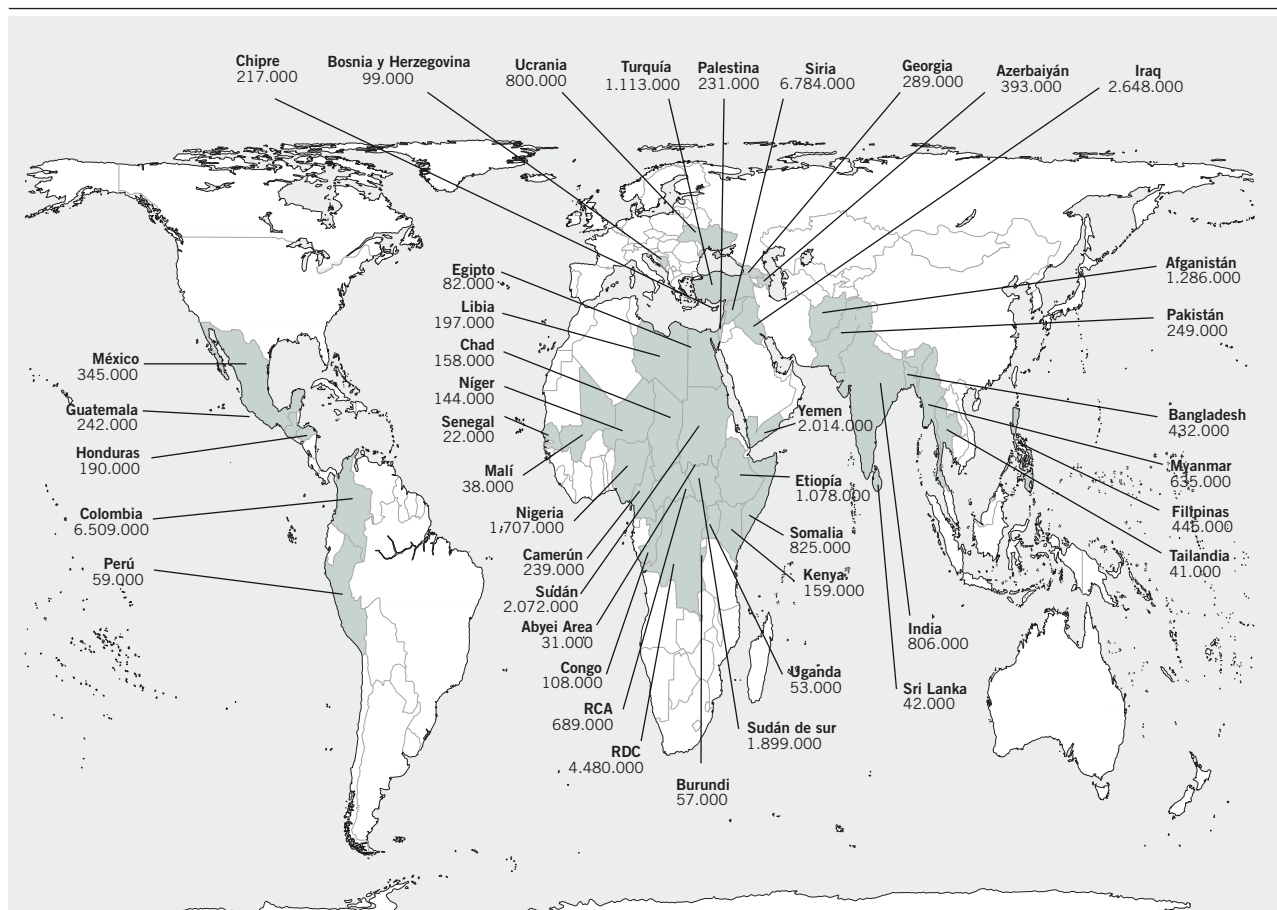
Paralelamente, los conflictos armados en todo el mundo siguieron teniendo un **impacto especialmente grave en niños y niñas**. En su informe sobre menores y conflictos, publicado en 2018 y que analiza el año 2017, el secretario general de la ONU identificó un nuevo incremento de graves violaciones de los derechos humanos contra niños y niñas. Entre las tendencias, señaló una intensificación del reclutamiento de niños y niñas en conflictos como RCA –donde se cuadruplicó– y en RDC –doblándose el número–, mientras en otros casos siguió en niveles graves, como en Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen. Otros impactos sobre

los menores incluyeron las consecuencias derivadas de los ataques a escuelas y hospitales, los secuestros y la denegación de acceso a ayuda humanitaria, entre otros. El análisis sobre los conflictos armados en 2018 mostró nuevos impactos. En Nigeria, Boko Haram secuestró en febrero de 2018 a 110 niñas estudiantes, en su mayoría liberadas un mes después tras negociaciones. En el marco del conflicto que enfrenta en Camerún a las fuerzas estatales y a milicias secesionistas, al menos 70 colegios habían sido incendiados en el país desde el inicio de la crisis en 2016, con nuevos ataques en 2018 contra escuelas. En Burkina Faso al menos 250 escuelas fueron cerradas en los dos últimos años.

Por otra parte, actores armados en numerosos conflictos continuaron perpetrando violencia sexual y de género contra población civil, mujeres y niñas de manera significativa. Según denunció la ONU en 2018, en 2017 la violencia sexual siguió usándose como táctica de guerra, terrorismo, tortura y represión, así como una táctica vinculada a la economía de las guerras. Además, se siguió utilizando en muchos casos como una estrategia de violencia para castigar a personas de determinado origen étnico, afiliación política y creencia religiosa, entre otros. En ese sentido, casos como Iraq, Malí, Myanmar, Nigeria, RCA, RDC, Somalia y Sudán del Sur fueron escenario de esa tendencia de forma alarmante, tal como subrayó el informe anual del secretario general

sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos. Según la ONU, la mayoría de las víctimas eran mujeres y niñas en situación de marginación política y económica, en áreas rurales. Entre los impactos, cabe señalar el trauma, estigma, pobreza, graves impactos en la salud, embarazos no deseados. La violencia sexual continuó siendo un elemento generador de desplazamiento forzado de población, así como producía también efectos de limitación de la libertad de circulación. Cabe señalar que en 2017 se había identificado un incremento en el número de violaciones y otras formas de violencia sexual contra menores, según señaló la ONU en 2018. El análisis sobre la dinámica de los conflictos en 2018 mostró de nuevo el uso de la violencia sexual por actores armados en conflicto. Entre otros casos, soldados de Nigeria y miembros de la milicia aliada del Gobierno Civilian Task Force llevaron a cabo violencia sexual y de género contra mujeres en campos de desplazamiento, según denunció Amnistía Internacional en mayo. También en RCA siguió perpetrándose violencia sexual como arma de guerra. Sudán del Sur fue otro de los escenarios con denuncias de graves niveles de violencia sexual y de género, pese a la firma del acuerdo de paz. En Myanmar se documentó la violación de 300 mujeres y menores en 17 localidades del estado Rakhine con total impunidad, vinculada a los masivos desplazamientos de población de la comunidad rohingya por parte de las Fuerzas Armadas. En Libia se denunció de nuevo

Mapa 1.2. Número de personas desplazadas internas al finalizar 2017



Fuente: IDMC, *GRID 2018: Global Report on Internal Displacement*, mayo de 2018.

violencia y explotación sexual. El Grupo de Expertos sobre Yemen señaló en 2018 la comisión de violencia sexual por las partes en conflicto. En estos y otros contextos, la impunidad en torno a la violencia sexual y de género fue prevalente.⁸

Los conflictos armados continuaron causando niveles muy elevados de desplazamiento forzado de población. Según el informe anual de ACNUR publicado a mediados de 2018, y que ofrece un balance de la situación hasta finales de 2017, la población desplazada forzosamente en el mundo a finales de ese año era de 68,5 millones. Supone 2,9 millones más que el año anterior (en 2016 el incremento con respecto a 2015 fue de 300.000 personas más). Del total de 68,5, la población refugiada ascendía a 25,4 millones (19,9 bajo mandato de ACNUR y 5,4 palestinos y palestinas bajo mandato de la UNRWA), mientras 40 millones de personas se habían desplazado dentro de las fronteras de sus países. Otros 3,1 millones eran solicitantes de asilo. En 2017 ACNUR estima que hubo 16,2 millones de nuevos desplazados (11,8 millones dentro de sus fronteras y 4,4 millones de nuevas personas refugiadas y solicitantes de asilo). Según las cifras de finales de 2017 de International Displacement Monitoring Centre, entre los países con niveles más elevados de desplazamiento interno sobresalen Siria (6,7 millones), RDC (4,4), Iraq (2,6), Sudán del Sur (1,8) y Etiopía (un millón). Según datos de ACNUR, más de dos tercios de la población global refugiada procedía de cinco países: Siria (6,3 millones de personas), Afganistán (2,6), Sudán del Sur (2,4), Myanmar (1,2) y Somalia (986.400 personas). Además, el 52% eran menores de 18 años, lo que supone un incremento de un punto porcentual con respecto a 2016. Asimismo, el 85% de la población refugiada era acogida en países considerados en desarrollo por la ONU. Líbano fue un año más el país con mayor número de población refugiada en relación a su población total (una persona refugiada por cada seis habitantes), seguido de Jordania (1/14) y Turquía (1/28), sin incluir la población refugiada bajo mandato de la UNRWA, también presente de manera destacada en Líbano y Jordania. En términos totales, los principales países de acogida fueron Turquía (3,5 millones), Pakistán (1,4), Uganda (1,4), Líbano (998.900), Irán (979.400), Alemania (970.400), Bangladesh (932.200) y Sudán (906.600).

A lo largo de 2018, los conflictos armados siguieron generando desplazamiento. Sobresale Siria, país que en 2018 alcanzó las mayores cifras de desplazamiento forzado desde el inicio de la guerra, con más de un millón de personas forzadas a huir de sus hogares. La escalada de la violencia en Camerún –escenario de un nuevo conflicto armado en 2018– provocó el desplazamiento forzado interno de 436.000 personas, según balances de la OHCHR de noviembre. Si bien hubo llamamientos al diálogo, las perspectivas futuras no eran alentadoras.

En RCA, 642.000 personas permanecían desplazadas internas a finales de 2018, incluyendo más de la mitad menores, y otras 574.000 personas habían huido del país y accedido al estatus de refugio. Otros elementos de preocupación en 2018 fueron cuestiones relativas al retorno forzado de población, con casos como Camerún o Angola –que expulsó a 362.000 congoleños refugiados en el país tras el estallido de la violencia en la región de Kasai. En paralelo, en muchos casos la continuación de la violencia hizo imposible el retorno voluntario a los lugares de origen, como en el estado de Rakhine en Myanmar, escenario de una grave escalada de la violencia en 2017. Pese a que los niveles de violencia se redujeron en 2018, la continuación de la inseguridad hizo imposible el retorno de las 750.000 personas refugiadas rohingya en Bangladesh. Además, choques armados a finales de año generaron nuevo desplazamiento en Myanmar. En Iraq, dos millones de personas continuaban desplazadas, a pesar de que cuatro millones sí habían vuelto a sus lugares de origen.

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

África Occidental

Camerún (Ambazonia/North West y South West)	
Inicio:	2018
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Camerún, autoproclamado Gobierno Interino de Ambazonia, grupos armados ADF, SCACUF, SOCADEF y SCDF y decenas de milicias menores
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico. En 1961 los dos territorios que componían el Camerún británico celebraron un plebiscito en el que se limitaba su autodeterminación a la unión con la ya independiente República de Camerún (antiguo Camerún francés) o a la unión con Nigeria. La parte sur del Camerún británico (territorio que actualmente corresponde a las provincias de North West y South West) decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Una reunificación mal conducida en los años sesenta, basada en la centralización y la asimilación, ha llevado a la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) a sentirse marginada política y económicamente por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. Sus frustraciones

8. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

se incrementaron a finales de 2016 cuando una serie de agravios sectoriales se transformaron en demandas políticas, lo que provocó huelgas, disturbios y una escalada creciente de la tensión y de la represión gubernamental. Este clima ha contribuido a que una mayoría de la población de la región exija un nuevo estatus político de carácter federal sin excluir la secesión de la región. Esta movilización ha comportado el resurgir de los movimientos identitarios que datan de los años setenta. Estos movimientos exigen un retorno al modelo federal que existió entre 1961 y 1972. El Gobierno arrestó a las principales figuras del movimiento federalista en 2017, lo que dio alas a sectores favorables a la lucha armada para alcanzar la independencia. Desde entonces, las dos regiones anglófonas han vivido huelgas generales, boicots escolares y violencia esporádica. A partir de la declaración de independencia el 1 de octubre de 2017 y la subsiguiente represión gubernamental para sofocar el movimiento secesionista, se produjo una escalada de las actividades insurgentes.

La situación de violencia que afecta desde 2016 a las regiones de mayoría anglófona del país, las provincias de North West y South West, siguió escalando durante el año convirtiendo ambas provincias en un escenario de guerra con graves consecuencias para la población civil. Los ataques y secuestros por parte de las milicias separatistas y las acciones militares y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad contra la población civil sospechosa de simpatizar con la rebelión o civiles acusados de ser militantes proliferaron durante el año y su regularidad fue en aumento. Las unidades de élite del Ejército de Camerún (entrenadas por EEUU e Israel) fueron acusadas de cometer graves violaciones de los derechos humanos. Durante 2018 los grupos armados y milicias separatistas empezaron a llevar a cabo ataques y acciones contra la población civil. El Gobierno denunció la existencia de mercenarios en las filas separatistas y en enero se produjo una incursión militar camerunesa en territorio nigeriano en persecución de grupos separatistas. El periodo de mayor intensidad de la violencia fue en septiembre y en octubre, en el marco de la campaña electoral de las elecciones presidenciales (7 de octubre) y de la conmemoración del aniversario de la declaración de la independencia de Ambazonia (1 de octubre). En mayo el autoproclamado Gobierno Interino de Ambazonia hizo un llamamiento a la población francófona a abandonar las dos provincias, así como a la población anglófona residente en zonas francófonas a regresar a áreas anglófonas. Las milicias separatistas intentaron boicotear la celebración de los comicios, en los que venció nuevamente Paul Biya. El boicot en las provincias anglófonas fue masivo, alcanzando una participación de solo el 5,36% en North West y del 15,94% en South West. Además, la oposición política rechazó la victoria de Biya

La situación de violencia que afecta las regiones de mayoría anglófona de Camerún escaló durante el 2018 convirtiéndose en un escenario de guerra de graves consecuencias para la población civil

argumentando fraude electoral, y el candidato opositor Maurice Kamto reclamó la victoria, iniciando un ciclo de movilizaciones, lo que intensificó la polarización política y el antagonismo intercomunitario (entre sus seguidores de la comunidad bamileke y los seguidores de Biya de la comunidad beti). EEUU, Reino Unido y la UA aceptaron los resultados pero instaron a llevar a cabo reformas. El 26 de noviembre Kamto hizo un llamamiento a la comunidad francófona a celebrar huelgas generales semanales en solidaridad con la comunidad anglófona amenazando con incrementar las huelgas si el Gobierno no resolvía la crisis en la región para finales de 2018. El conflicto ha provocado el desplazamiento forzado de 436.000 personas en el interior del país según destacó OHCHR en noviembre y otras 50.000 han buscado refugio en la vecina Nigeria, según UNHCR en julio. Según señaló Amnistía Internacional en septiembre, alrededor de 400 civiles habían muerto en el último año y miles de civiles habían resultado heridos, unas 100 localidades habían sido arrasadas y las organizaciones humanitarias y de derechos humanos tenían graves dificultades para socorrer a la población civil al ver denegado su acceso a la zona.

Según ACLED, desde septiembre de 2017 se produjeron alrededor de 200 acciones bélicas que causaron 844 víctimas mortales hasta finales de 2018, la mitad de las cuales cometidas desde septiembre de 2018, en vísperas de las elecciones.⁹ Otras fuentes elevaron a 1.500 las víctimas mortales del conflicto. Uno de las principales acciones del año se produjo a principios de septiembre en Yemnggeh en Menchum (North-West), ataque conducido por los cuerpos de seguridad en el que murieron 27 separatistas. Entre los hechos más relevantes, cabe destacar la muerte de un importante comandante del grupo Ambazonia Defense Forces (ADF) como consecuencia de enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y la milicia el 21 de diciembre; el ataque al convoy del secretario de Estado francés en la localidad de Fako, en la provincia de South West, el 29 de junio, mientras se dirigía a Buea, causando la muerte de dos soldados y numerosos heridos; y el ataque al convoy del ministro de Defensa camerunés durante un viaje oficial a South West, en Small Ekombe, el 12 de julio. Al menos 70 escuelas habían sido incendiadas desde que se inició en 2016 la crisis. En vísperas de las elecciones en octubre y en el marco del reinicio del curso académico en septiembre, diversas escuelas y espacios académicos fueron atacados y alumnos y docentes secuestrados.

Además de las demandas internas de la sociedad civil exigiendo la apertura de un diálogo para resolver las causas de fondo que han originado el conflicto, como la iniciativa promovida por las autoridades religiosas, la Anglophone General Conference (pospuesta diversas

9. ACLED, Regional Overview Africa, 8 de enero de 2019.

veces y finalmente celebrada en diciembre y cuyos organizadores recibieron amenazas por parte de organizaciones separatistas), diversas organizaciones y países de la comunidad internacional incrementaron su presión hacia el Gobierno. El Gobierno creó el 30 de noviembre el Comité Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración para los militantes separatistas y de Boko Haram, que tuvo poca acogida. El Consejo de Seguridad de la ONU discutió de forma oficial sobre el conflicto en diciembre, y los embajadores de EEUU y Reino Unido pidieron la liberación de presos anglófonos, el inicio de conversaciones de paz entre el movimiento separatista y el Gobierno y acceso a las regiones anglófonas para las agencias de la ONU y las ONG. La OHCHR condenó la inseguridad y el desplazamiento forzado en el país y también hizo un llamamiento al diálogo. La UE, Francia y Guinea Ecuatorial hicieron declaraciones similares. La ONU renovó su ofrecimiento a mediar en el conflicto, y ese mismo día el presidente Paul Biya ordenó la liberación de 289 presos anglófonos que habían cometido delitos menores.

Malí ¹⁰	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), MSA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara, MINUSMA, Francia (operación Barkhane), Fuerza Conjunta G5-Sahel
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuareg designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNLA) se vio crecientemente desplazado por grupos

de línea yihadista que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el país. Pese a la firma de un acuerdo de paz en 2015, la violencia ha persistido y se ha extendido a otras áreas del país.

El conflicto en Malí se intensificó de manera significativa a lo largo de 2018, evidenciando **cambios y una mayor complejidad en los patrones de violencia, una expansión territorial de las hostilidades y un incremento en el uso de la violencia contra población civil**. Un estudio de Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) concluyó que los hechos de violencia en el país habían aumentado un 40% en 2018 respecto al año anterior.¹¹ Otra investigación de Peace Direct destacó que el conflicto se encontraba en su peor nivel desde la década de los noventa, que presentaba una mayor amplitud en términos geográficos y un creciente nivel de letalidad, con un preocupante incremento en el asesinato de civiles por su etnicidad o supuesta afiliación con facciones políticas o armadas.¹² **Si en 2017 ya se registró un récord de 949 víctimas mortales a causa del conflicto, sólo en el primer semestre de 2018 ya se habían contabilizado 750 personas fallecidas en múltiples hechos de violencia**, según datos de ACLED. Los informes periódicos de la ONU sobre la situación en Malí también alertaron sobre el aumento de la violencia intercomunitaria, dieron cuenta del amplio número de actores armados –locales, regionales e internacionales– involucrados en las hostilidades y denunciaron serios abusos a los derechos humanos en el país, incluyendo ejecuciones sumarias, torturas y malos tratos, entre otros. Los hechos de violencia continuaron produciéndose en el norte, pero también en el centro y este del país. Algunas de las regiones más afectadas fueron Tombuctú, Gao, Kidal, Mopti, Ménaka y Ségou, con diferentes actores armados como protagonistas de los hechos de violencia.

Grupos armados presuntamente de línea yihadista – como el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en inglés), vinculado a al-Qaeda, y la filial de Estado Islámico en el Gran Sáhara– lanzaron diversos ataques en el norte, centro y este del país. Algunas de sus ofensivas –muchos ataques asimétricos y con explosivos– tuvieron como objetivo las fuerzas de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSMA), el Ejército, fuerzas francesas desplegadas en el país en el marco de la operación Barkhane y cuarteles del G5-Sahel, la fuerza conjunta desplegada en la región por Malí, Níger, Burkina Faso, Chad y Mauritania. Las fuerzas de la operación Barkhane lanzaron varias operaciones aéreas y ofensivas para ejecutar a altos cargos de los grupos de línea yihadista. El grupo armado tuareg GATIA, integrante de la Plataforma, y

10. En pasadas ediciones de *Alerta!* este caso era identificado como “Malí (norte)”, pero se ha cambiado la denominación por la ampliación de las dinámicas de violencia a otras áreas del país.

11. Kishi, Roudabeh y Melissa Pavlik. *ACLED 2018, The Year in Review*, 11 de enero de 2019.

12. Reeve, Richard. *Mali on the brink*, Peace Direct, julio de 2018.

el Movimiento por la Salvación de Azawad (MSA), escisión de la CMA y compuesto mayoritariamente por miembros de la comunidad étnica daoussak, se vieron crecientemente involucrados en hostilidades contra presuntos combatientes yihadistas, principalmente en la zona noreste del país, en la zona próxima a la frontera con Níger y Burkina Faso¹³. Diversas acciones de GATIA y CMA contaron con el apoyo de las fuerzas francesas y del Ejército maliense y derivaron en la “neutralización” de decenas de supuestos yihadistas a lo largo del año, en especial en marzo y noviembre, según informó Francia. En el marco de estas operaciones de contrainsurgencia, GATIA y CMA fueron denunciados por perpetrar abusos y asesinatos de personas de la comunidad fulani, acusada de dar apoyo a los yihadistas. Estas acciones motivaron represalias contra la comunidad daoussak. Así, en un período de cuatro semanas entre abril y mayo murieron 150 civiles de ambas comunidades. En esta línea, otras acciones a destacar incluyeron la muerte de más de 40 tuaregs tras una ofensiva de la filial de ISIS en Malí a finales de abril en Ménaka y de 47 daoussak por parte de combatientes fulani próximos a ISIS en diciembre. En noviembre, en tanto, GSIM hizo público un video en el que un dirigente fulani llamaba a miembros de esta comunidad de toda África Occidental a tomar las armas y sumarse a la causa yihadista. Cabe destacar que durante el año **las Fuerzas Armadas malienses fueron acusadas en varias ocasiones de abusos y ejecuciones sumarias de decenas de civiles**, incluyendo de la comunidad fulani. El Gobierno reconoció los asesinatos y anunció una investigación. Paralelamente, a lo largo de 2018 se intensificaron los enfrentamientos intercomunitarios entre los grupos dogon y fulani, con incidentes periódicos que causaron decenas de víctimas mortales y que se mantenían al finalizar el año, a pesar de los intentos de mediación. En el plano humanitario, cabe mencionar que hasta finales de 2018 se habían registrado casi 200 ataques contra actores humanitarios (194 frente a 133 en 2017) y que más de 700 escuelas permanecían cerradas, mayoritariamente en la región de Mopti.

Cabe destacar que este panorama de **creciente inseguridad se produjo en paralelo al incremento de las tensiones y la violencia política vinculada a la celebración de elecciones y a las dificultades para implementar el acuerdo de paz de 2015**. Respecto a lo primero, los ataques de grupos armados forzaron el cierre de 664 centros de votación (3% del total) en la primera ronda de los comicios presidenciales en julio e influyeron en la baja participación en la segunda ronda en agosto, en la que se confirmó la reelección del presidente Ibrahim Boubacar Keïta. En cuanto a la puesta en práctica del acuerdo de paz, durante el año persistieron las reticencias y divisiones de los actores suscriptores del pacto,

El conflicto en Malí se intensificó en 2018, evidenciando una mayor complejidad en los patrones de violencia, una expansión territorial de las hostilidades y un incremento de la violencia contra población civil

lo que influyó en continuos retrasos en el cronograma. Tras las elecciones presidenciales, los actores firmantes renovaron su compromiso con el acuerdo adhiriéndose a un nuevo “Pacto para la paz” que facilitó adoptar algunas medidas, como un proceso de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes (DDR) acelerado. Así, en noviembre, un total de 1.600 combatientes de la CMA, la Plataforma y varios grupos armados pasaron a formar parte de tres nuevas unidades bajo la administración del Ejército maliense. Sin embargo, diversos análisis ofrecieron una valoración crítica de la implementación del acuerdo

de paz en Malí.¹⁴

Región Lago Chad (Boko Haram)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Boko Haram, MNJTF (Benín, Nigeria, Camerún, Chad, Níger)
Intensidad:	3
Evolución:	=
Síntesis:	La secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo –cuyo nombre significa “la educación occidental es un pecado”– se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el país con un elevado impacto en la población civil. Una filial del grupo, Ansaru, también ha protagonizado ataques en el país. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo. En el año 2015 el conflicto se regionalizó, afectando también a los países fronterizos con el Lago Chad: Chad, Níger y Camerún.

La violencia afectó principalmente a Nigeria y, en concreto, al estado de Borno, con incidentes que incluyeron ataques y atentados de diversas facciones de Boko Haram contra objetivos civiles, como mercados y campos de desplazados; ataques contra bases militares; y enfrentamientos, que causaron víctimas mortales y desplazamiento forzado. El balance de fallecidos por acciones de Boko Haram, así como en el marco de enfrentamientos entre el grupo y las fuerzas de seguridad fue de 1.622, según la base de datos de Nigeria Security Tracker (NST), frente a

13. Véase el resumen sobre Región Sahel Occidental en este capítulo.

14. Véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2019. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2019.

los 1.828 en 2017 y 1.605 en 2016. En 2018 se registraron **nuevos episodios de secuestros de gran escala por parte de Boko Haram**. 110 niñas estudiantes fueron secuestradas en el estado de Yobe en febrero. En su mayoría fueron liberadas en marzo, tras negociaciones con la facción del grupo liderada por Abu Mus'ab al-Barnawi. Según algunos medios de prensa, el Gobierno habría pagado rescate y liberado a algunos presos a cambio. Fuentes del Gobierno informaron de que **el Ejecutivo federal exploraba la posibilidad de un cese permanente de hostilidades, incluyendo mediante una amnistía**. No obstante, continuó la violencia el resto del año, también con nuevos secuestros, como el de 15 niñas en la región de Diffa, en Níger, en noviembre. Otros incidentes de violencia contra población civil incluyeron un atentado suicida contra una mezquita en Gamboru (estado nigeriano de Borno) en enero, en el que murieron 14 fieles; ataques contra leñadores, acusados de ser informantes por Boko Haram, con 20 fallecidos en una única jornada de enero en Maiduguri (Borno); un triple atentado suicida contra un mercado en la localidad de Kondunga (Borno), con una veintena de víctimas mortales; el asesinato de 18 trabajadores forestales, tiroteados, en la localidad de Gamboru (Borno); un doble atentado suicida contra una mezquita y un mercado en la localidad de Mubi (estado nigeriano de Adamawa) a principios de mayo, que mató a más de 80 personas e hirió a unas 60; otro atentado suicida en los alrededores del Gobierno local de Damboa (Borno) que mató a una treintena de personas y causó heridas a cerca de medio centenar, entre muchos otros incidentes. Boko Haram también mató a tres trabajadores humanitarios y secuestró a otras tres en un ataque en marzo en Rann (Borno), en el que también mató a ocho soldados. Dos de esas trabajadoras humanitarias secuestradas, del CICR, fueron asesinadas en septiembre y octubre.

Los Gobiernos de Nigeria, Chad, Camerún y Níger continuaron confrontando conjuntamente a Boko Haram, con el lanzamiento de ofensivas de gran escala y operaciones militares en diversos momentos del año, que causaron numerosas bajas al grupo y que también resultaron en liberaciones de rehenes. Por otra parte, Amnistía Internacional denunció en mayo violencia sexual y de género por parte de soldados nigerianos y por miembros de su aliada milicia, Civilian Joint Task Force, contra mujeres en campamentos de población desplazada por la violencia de Boko Haram, incluyendo violaciones –en ocasiones a cambio de comida– y amenazas de violación, separación de mujeres y hombres y confinamiento de éstas en campos satélites. Asimismo, la ONU alertó sobre la repatriación forzosa por Camerún de unos 400 refugiados y solicitantes de asilo de Nigeria, denuncias rechazadas por el Ejecutivo camerunés. Además, generó consternación y presiones locales e internacionales a Camerún la difusión de un video, en junio, en que varios hombres con uniforme militar mataban a dos mujeres y a sus hijos acusándoles de ser miembros de Boko Haram.

Pese a las alegaciones de avances significativos en la lucha contra el grupo armado, en la segunda mitad del año se incrementaron los ataques insurgentes y **análisis advirtieron sobre una creciente sofisticación de los ataques del grupo y sobre su mayor acceso a armamento**. Entre julio y finales de año, el grupo llevó a cabo más de una quincena de ataques a bases militares. Entre ellos, un ataque contra una base militar en la localidad de Matele (Borno) en noviembre, con un balance de en torno a 40 soldados muertos, que algunas fuentes elevaban a 70 o incluso a un centenar y que el Ejército reducía a una veintena. Una facción de Boko Haram tomó el control de la localidad de Gudumbali (Borno) en septiembre –lo que desencadenó el desplazamiento de miles de personas–, retirándose un día después. Asimismo, en diciembre, insurgentes intentaron tomar la localidad de Baga, cerca de la frontera con Chad, así como Monguno, que finalmente quedaron bajo control de Nigeria. Durante el año se hizo patente el malestar entre sectores del Ejército, con protestas de soldados nigerianos que reclamaron mayores recursos. Por otra parte, Mamman Nur, líder de una de las facciones de Boko Haram, fue asesinado en septiembre, supuestamente por miembros más radicales del grupo, críticos con lo que consideraban una aproximación más moderada de Nur.

Región Sahel Occidental	
Inicio:	2018
Tipología:	Sistema, Identidad, Recursos Internacional
Actores:	Burkina Faso, Malí, Níger, Fuerza Conjunta G5-Sahel (Mauritania, Chad, Malí, Níger y Burkina Faso), Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (Malí, Níger y Burkina Faso), MINUSMA, Francia (operación Barkhane), EEUU, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM), Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), Macina Liberation Front, Ansaroul Islam, otros grupos yihadistas
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Síntesis:	La región occidental del Sahel (norte de Malí, norte de Burkina Faso y noroeste de Níger) se ve afectada por una situación de inestabilidad creciente que tiene un origen multicausal. Se combina la existencia de redes de criminalidad transfronteriza en el Sahel, la marginación y subdesarrollo de las comunidades nómadas tuareg en la región, entre otros factores. Esta marginación ahonda sus raíces en las rebeliones tuareg que tuvieron lugar en los años sesenta, en los años noventa y, más recientemente, entre 2007 y 2009, cuando se configuraron sendas rebeliones contra los respectivos Gobiernos de Níger y Malí que pretendían alcanzar un mayor grado de autonomía en ambos países y revertir la pobreza y el subdesarrollo de la región. En el caso de Malí se produjo un resurgimiento de estas demandas en 2012, espoleadas por la caída del régimen de Gaddafi en Libia en

2011¹⁵. A todo esto se une la expansión de las actividades de los grupos armados de Malí a la región Liptako-Gourma, relacionada con la situación de inestabilidad derivada de la presencia y expansión de la insurgencia yihadista de origen argelino AQMI, su fragmentación y configuración en otros grupos armados de corte similar, algunos alineados a al-Qaeda y otros a ISIS, que se han expandido por la región. Esta expansión ha contribuido a una mayor desestabilización de la zona y a la configuración de diferentes iniciativas militares transfronterizas regionales e internacionales para intentar controlar esta situación, que también han contribuido a internacionalizarla. A todo este panorama se suman las vinculaciones del conflicto que afecta a la región del Lago Chad como consecuencia de la expansión de las actividades del grupo Boko Haram a raíz de la intervención militar transfronteriza.

Durante 2018 se produjo una escalada de la violencia y la inestabilidad generada por la creciente presencia de grupos y militantes armados que reivindican una presunta agenda yihadista en la zona del Sahel Occidental, en especial en el norte de Burkina Faso y en el noroeste de Níger. En un primer momento esta situación se interpretaba como una expansión y regionalización de la insurgencia de Malí y del grupo nigeriano Boko Haram, aunque progresivamente estas actividades insurgentes y otros focos de violencia intercomunitaria han tomado agencia propia, según diversos análisis. Así, desde finales de 2016, Burkina Faso se ha enfrentado a una creciente insurgencia en el norte y oeste del país y ha sufrido varios ataques de alto perfil, incluso en la capital, Ouagadougou. Además, en los últimos meses de 2018 surgió un nuevo frente en la zona este de Burkina Faso. La región oriental de Burkina Faso y las áreas del país que limitan con Benin y Ghana se ven afectadas por la presencia de grupos criminales, aunque desde mediados de febrero de 2018 la región registró un aumento de la violencia política. Los grupos militantes armados en la región atacaron cada vez más a civiles y a las fuerzas de seguridad burkinesas, incluidos el personal policial, los gendarmes y los guardabosques. En este sentido, la presencia militante en el este del país siguió el patrón de una insurgencia regional duradera y en expansión, según destacó ACLED. Así, **durante el año se intensificaron los ataques por parte de grupos yihadistas causando decenas de víctimas mortales y forzando el cierre de numerosas escuelas como consecuencia de las acciones de intimidación continuada por parte de la insurgencia. El Gobierno burkinabés impuso el estado de emergencia el 31 de diciembre de 2018 en siete regiones** (Hauts-Bassins, Boucle du Mouhoun, Cascades, North, Sahel, East y Centre-East). Como consecuencia de la violencia, en 2018 se produjeron al menos 162 víctimas mortales.

Durante 2018 se produjo una escalada de la violencia y la inestabilidad generada por la creciente presencia de grupos y militantes armados que reivindican una presunta agenda yihadista en la zona del Sahel Occidental

En lo concerniente a Níger, la región sureña de Diffa, fronteriza con Nigeria, fue escenario de numerosos ataques de la insurgencia nigeriana Boko Haram, a la que se sumó la creciente actividad insurgente en el oeste del país, en la zona fronteriza con Burkina Faso y Malí (regiones de Tilabéri y Tahoua) perpetrada por movimientos armados vinculados a AQMI y a otros grupos de corte yihadista. El incremento de la violencia causó decenas de víctimas mortales durante el año, lo que provocó la extensión del estado de emergencia decretado en 2017 durante 2018 en las tres regiones nigerinas citadas. Se incrementó la implicación regional a nivel militar con las actividades de diferentes Fuerzas Armadas de los países de la región, así como por la presencia de actores internacionales. La fuerza conjunta Sahel G5 (compuesta por efectivos de Malí, Chad, Mauritania y Burkina Faso), que inició sus actividades en 2017, siguió lle-

vando a cabo acciones militares conjuntas en diversas partes de la región saheliana occidental, aunque a finales de junio sufrió un grave atentado en su cuartel general, en Sévaré (centro de Malí) en el que murieron seis personas y decenas resultaron heridas. Este atentado supuso un duro golpe para la fuerza ya que también comportó la interrupción de la operatividad de la misión y la destrucción de material e instalaciones, estimando que se reanudarían sus actividades en diciembre de 2018. En paralelo, continuaron las actividades de la operación francesa Barkhane y la Joint Task Force para la región Liptako-Gourma (JTF, compuesta por efectivos de Malí, Burkina Faso y Níger), y proliferó la intervención de otros actores internacionales en la zona, en especial en Níger, como las Fuerzas Especiales de EEUU, que realizaron diferentes acciones bélicas en la región de Diffa, y drones de la CIA en la región de Agadez.¹⁶

Cuerno de África

Etiopía (Ogadén)	
Inicio:	2007
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ONLF, OLF, cuerpo paramilitar ("Liyu Police")
Intensidad:	1
Evolución:	Fin

Síntesis:

Etiopía es escenario de movimientos de carácter secesionista o de resistencia al poder central desde los años setenta. El grupo armado ONLF surgió en 1984 y opera en la región etíope de Ogadén, en el sureste del país, exigiendo un mayor grado de autonomía para la comunidad somalí que habita esta zona. En diversas ocasiones el

15. Véase resumen sobre Malí en este capítulo.

16. Véase "La escalada de la violencia en la región del Sahel Occidental" en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo para 2019).

ONLF ha llevado a cabo actividades insurgentes más allá de Ogadén, en colaboración con el grupo armado OLF, que exige al Gobierno una mayor autonomía de la región de Oromiya desde 1973. El Gobierno somalí ha apoyado al ONLF contra Etiopía, con quien se enfrentó por el control de la región entre 1977 y 1978, guerra en la que Etiopía derrotó a Somalia. El fin de la guerra entre Eritrea y Etiopía en el 2000 comportó el incremento de las operaciones del Gobierno para poner fin a la insurgencia en Ogadén y explotar sus recursos naturales. Tras las elecciones celebradas en el año 2005, los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el ONLF se incrementaron, en especial en 2007, cuando se produjo un ataque a unas instalaciones chinas de exploración de petróleo por parte del ONLF en el que murieron 74 personas, aunque en los últimos años la intensidad del conflicto ha disminuido.

Aunque a lo largo del año se registraron diversos episodios de violencia, se produjeron importantes avances encaminados a la resolución del conflicto armado en la región Somalí de Etiopía.

Los acontecimientos políticos que tuvieron lugar en diferentes momentos del año tuvieron un efecto cascada en los diferentes conflictos y tensiones que afectan al país. No obstante, los avances en el proceso de paz no lograron poner fin definitivamente al conflicto. Según ACLED, tras la toma de posesión del nuevo primer ministro Abiy Ahmed se produjeron 70 acontecimientos de violencia en la región de Ogadén. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch denunciaron graves violaciones de derechos humanos por parte de la policía liyu, establecida por el presidente de la región de Somalí, Abdi Iley, y en varios momentos del año se registraron enfrentamientos entre este cuerpo paramilitar gubernamental y población local, provocando víctimas mortales. Además, se denunció la situación de la prisión de Jijiga, de la que fueron puestos en libertad cientos de presos políticos en diferentes momentos de 2018. Uno de los momentos de mayor tensión del año se produjo en agosto, cuando tras el despliegue de tropas en la capital de la región Jijiga, con la aparente intención de detener líderes regionales, se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad locales y disturbios en varias ciudades, que provocaron un número indeterminado de víctimas mortales. Además, se registró la quema de varias iglesias ortodoxas. El grupo armado ONLF acusó a las Fuerzas Armadas de querer tomar el control del Gobierno regional. En medio de la tensión y los enfrentamientos tuvo lugar la dimisión del presidente Abdi Iley y pocos días después, tras la retirada por parte del parlamento del ONLF de la lista de grupos terroristas, esta organización insurgente declaró un alto el fuego de carácter unilateral. En octubre, el Gobierno federal y el ONLF firmaron un acuerdo marco y crearon un comité conjunto para iniciar un proceso de diálogo. No obstante, persistieron los enfrentamientos entre las comunidades oromo y somalí, que en diciembre tuvieron su epicentro en las inmediaciones de Moyale, ocasionando la muerte de al menos 21 personas y provocando el desplazamiento de centenares.

En este sentido, HRW afirmó en agosto que el Gobierno de Etiopía debería llevar a cabo una profunda investigación sobre los graves abusos de los derechos humanos y de los crímenes de guerra cometidos en la región de Somalí durante la última década, incluyendo investigaciones específicas sobre la responsabilidad política de la administración regional, y en especial, el ex presidente regional, Abdi Illey, y los mandos de la Policía Liyu.¹⁷ La región de Somalí ha sido el escenario de graves violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército y de la Policía Liyu desde su creación en 2007. El acceso a periodistas y organizaciones humanitarias y de derechos humanos fue restringido. Los abusos fueron especialmente graves desde 2007, cuando escaló el conflicto armado entre el ONLF y los cuerpos de seguridad del Estado. En los últimos años el Ejército ha reducido su papel en la región, pero la Policía Liyu ha continuado llevando a cabo su campaña contrainsurgente, cometiendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual contra la población civil acusada de ser simpatizante del ONLF e incluso contra comunidades más allá de la región de Somalí, incluyendo la región de Oromiya desde diciembre de 2016.

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU, y el poder de los diversos señores de la guerra. La última iniciativa de paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna

17. HRW, *Ethiopia: Probe Years of Abuse in Somali Region*, 20 de agosto de 2018.

Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y kenyanas presentes en el país) y las tropas gubernamentales se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

El conflicto armado se mantuvo en niveles de violencia elevados, con numerosos enfrentamientos a lo largo del año. El grupo armado al-Shabaab estuvo involucrado en la mayoría de los incidentes violentos de 2018, según ACLED, que señaló también la capacidad de adaptabilidad de al-Shabaab frente a la intensificación de las operaciones contra el grupo. Como en años anteriores, la zona centro-sur del país fue escenario de frecuentes ataques y enfrentamientos, mientras al-Shabaab continuó extendiendo sus ataques hacia el norte. En 2018 al-Shabaab reivindicó atentados de envergadura –aunque lejos de los balances del atentado de octubre de 2017, que causó 512 víctimas mortales, el más mortífero de la historia de Somalia. Entre ellos, **un atentado suicida en febrero con dos coches bomba y tiroteos contra el palacio presidencial y un hotel en la capital, Mogadiscio, que causó 45 víctimas mortales y una treintena de heridos**; un coche bomba ante un hotel de la capital en marzo, con 14 fallecidos; otro coche bomba ese mismo mes en un puesto de control junto al Parlamento, con 13 víctimas mortales; un atentado con dos coches bomba contra un hotel en Mogadiscio, que mató a unos 50 civiles; y un ataque contra un puesto de control junto a la residencia presidencial en la capital, en diciembre, que causó una veintena de víctimas mortales civiles. Además, se le atribuyeron otros ataques, como un atentado, en mayo, contra un mercado en la localidad de Wanlaweyn (región de Lower Shabelle), que causó una quincena de víctimas mortales, en su mayoría civiles. El asesinato en agosto de un joven empresario en Mogadiscio, atribuido a al-Shabaab, desencadenó protestas en la capital, así como una campaña en redes sociales de denuncia de la violencia contra la juventud somalí (#WeAreNotSafe).

Al-Shabaab perpetró ataques contra bases del Ejército así como contra la AMISOM, como un ataque con dos coches bomba contra la base de la misión en Bulamarer (región de Lower Shabelle) en abril. Autoridades locales cifraron en 46 los soldados ugandeses muertos, mientras Uganda admitió cuatro bajas y cifró en una veintena los combatientes de al-Shabaab fallecidos. Por otra parte, un medio de comunicación etíope informó de un ataque aéreo de Etiopía contra posiciones de al-Shabaab en Somalia que habría causado la muerte de unos 70 combatientes. Según las autoridades militares etíopes citadas, la operación pretendía dismantelar los

Al-Shabaab estuvo involucrado en la mayoría de incidentes violentos en Somalia en 2018 y demostró una gran adaptabilidad frente a las operaciones contra el grupo armado

planes del grupo de un ataque contra el contingente etíope de la AMISOM. En diversos momentos del año al-Shabaab tomó el control de diversas localidades, retirándose poco después ante las operaciones de las fuerzas gubernamentales para recuperarlas. Por otra parte, EEUU bombardeó posiciones de al-Shabaab, con decenas de víctimas mortales. Asimismo, **la detención en diciembre en Baidoa (región de Bay) del ex líder de al-Shabaab y candidato a las elecciones presidenciales del estado del Suroeste (South West), Mukhtar Robow, desencadenó choques** entre Policía y simpatizantes y disturbios durante varios días, con una decena de fallecidos y 200 arrestados. Los hechos generaron tensiones entre el Gobierno federal y la ONU, tras el cuestionamiento de la ONU, la AMISOM y varios gobiernos al marco legal de la detención y sus consecuencias. El Ejecutivo declaró persona *non grata* al representante especial del secretario de la ONU en el país, Nicholas Haysom. **También se incrementó la tensión militar entre las regiones de Somalilandia y Puntlandia.** Por otra parte, en el ámbito político, se deterioraron las relaciones entre el Gobierno y los estados federales por el rechazo del Gobierno federal a la intensificación de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y las autoridades de los estados federales de Somalilandia y Puntlandia. Los intentos de negociación y mediación entre los estados federales y el Gobierno se sucedieron sin éxito y, en septiembre, las autoridades de los estados de Galmudug, Hirshabelle, Jubalandia, Puntlandia y el estado del Suroeste (South West), anunciaron que rompían relaciones con el Ejecutivo federal. Asimismo, hubo tensiones entre sectores políticos favorables al presidente federal y opositores, que intentaron promover una moción de censura, finalmente retirada. En cambio, mejoraron las relaciones entre Somalia y Eritrea, facilitado por los acercamientos en 2018 entre Etiopía y Eritrea y entre Eritrea y Djibouti.

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, facciones de antiguos grupos armados
Intensidad:	1
Evolución:	=
Síntesis:	El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo

a la formación de un nuevo Gobierno intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Pierre Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país.

Tras la decisión anunciada en diciembre de 2017 por parte del Gobierno de llevar a cabo en mayo un referéndum sobre las reformas constitucionales necesarias para que el presidente, Pierre Nkurunziza, pudiera permanecer en el poder hasta el año 2034, **se incrementó la polarización política y tanto Naciones Unidas como organizaciones de derechos humanos denunciaron serias y continuadas violaciones de derechos humanos cometidas principalmente por el Gobierno y por Imbonerakure**, la rama juvenil del partido gobernante (CNDD-FDD). En el mes de septiembre, la Comisión de Investigación sobre Burundi denunció la comisión de numerosas violaciones de derechos durante 2017 y 2018 –como ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas o violencia sexual– y señaló que algunas de ellas podrían ser constitutivas de crímenes contra la humanidad. El informe presentado por la Comisión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también implicó por vez primera al presidente en el delito de incitación al odio. Cabe recordar que el Gobierno se retiró de la Corte Penal Internacional poco después de que ésta ordenara, en octubre de 2017, el inicio de investigaciones por violaciones masivas de derechos humanos. Desde el inicio de la crisis provocada por la decisión de Nkurunziza de postularse para un tercer mandato en 2015, se estima que más de 1.200 personas habían muerto y que más de 430.000 habían abandonado el país. Durante el año, OCHA declaró que 3,6 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria. En el mes de febrero, la organización de derechos humanos Association for the Protection of Human Rights and Detained Persons denunció que más de 500 personas habían sido asesinadas en Burundi, la mayoría por parte de Imbonerakure y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por su parte, Human Rights Watch denunció que durante la campaña por el referéndum del mes de mayo, 15 personas habían muerto, seis habían sido violadas y otras ocho habían sido secuestradas. Otros grupos de derechos humanos locales denunciaron numerosos casos de violencia y hostigamiento contra la oposición por parte de Imbonerakure. El 73% de las personas que votaron en el mencionado referéndum del 17 de mayo lo hicieron a favor de la propuesta del Gobierno, aunque la plataforma opositora Amizero y' Abarundi solicitó al Tribunal Constitucional que invalidara los resultados.

Pocos días más tarde, sin embargo, **Nkurunziza, anunció su decisión de no concurrir a las elecciones previstas para 2020.**

Además de la represión y las violaciones de derechos humanos vinculadas a crisis política y social que atraviesa el país desde 2015, durante el año **también se registraron algunos episodios de violencia significativos en regiones fronterizas del país, lo que comportó el deterioro de las relaciones diplomáticas entre el Gobierno de Burundi y algunos de sus países vecinos.** Cabe destacar especialmente el ataque que se produjo en el nordeste del país pocos días antes del referéndum en el que 26 civiles fueron asesinados y otros siete resultaron heridos. El Gobierno declaró que los responsables de la masacre provenían de RDC. Previamente, el Gobierno había redoblado la presencia militar en determinadas regiones fronterizas tras denunciar que algunos de los grupos armados opositores que tienen su base en países vecinos tenían la intención de alterar la jornada electoral con varios episodios de violencia. A principios de noviembre, por ejemplo, el Ejército burundés llevó a cabo una ofensiva en RDC contra el grupo armado RED-TABARA, que previamente había sido acusado de perpetrar varios ataques contra las Fuerzas Armadas en las regiones orientales de Burundi. Posteriormente, las Fuerzas Armadas congoleñas detuvieron a un militar burundés en la provincia de Kivu Sur y a tres soldados burundeses por intentar entrar en un campamento de personas refugiadas en Lusenda. Durante el año también se incrementó la tensión entre los Gobiernos de Burundi y Rwanda tras los diversos ataques que se produjeron en el sur de Rwanda presuntamente por parte de grupos armados que tienen sus bases en Burundi.

En su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, Human Rights Watch señaló que en 2017 siguieron registrándose violaciones y otras agresiones sexuales por parte de policías y miembros de Imbonerakure contra mujeres que pertenecían a familias consideradas opositoras al Gobierno. Por su parte, UNICEF señaló que, según los casos denunciados, un 23% de las mujeres y un 6% de los hombres del país habían padecido violencia sexual en algún momento de su vida.

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, MPC, UPC), milicias antibalaka, milicia 3R, Francia (operación Sangaris), MINUSCA, EUFOR, grupos vinculados al antiguo Gobierno de François Bozizé, otros remanentes de grupos armados (antiguas Fuerzas Armadas), grupo armado ugandés LRA
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

Desde su independencia en 1960, la situación en la RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, en la que participan combatientes extranjeros, tomó el poder en marzo de 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los últimos 10 años había combatido a estas insurgencias del norte. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Dlotodia, para controlar a esta coalición rebelde, que cometió graves violaciones de los derechos humanos, saqueos, ejecuciones extrajudiciales, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana (“antibalaka”). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del anterior presidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizado. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo que condujera a una transición negociada.

A pesar del acuerdo que se alcanzó en junio de 2017 en Roma para el desarme de 13 de los 14 grupos armados activos en el país, **la violencia se incrementó y se extendió a nuevas provincias de RCA, agravando la crisis humanitaria que padece el país desde hace años, la tercera más grave del mundo** según OCHA (por detrás de Siria y Yemen). En octubre, OCHA advirtió que 2,9 de los 4,5 millones de personas del país –entre ellos 1,5 millones de menores– necesitaban asistencia humanitaria. También según OCHA, a finales de 2018 había más de 642.000 personas desplazadas internas –más de la mitad menores, según UNICEF– y más de 574.000 personas refugiadas registradas procedentes de RCA. A pesar de que no existen balances oficiales de víctimas mortales vinculadas al conflicto armado, durante el año se produjeron cientos de episodios de violencia entre grupos armados (principalmente entre milicias ex Séléka y antibalaka), así como enfrentamientos entre estos grupos y contingentes de la MINUSCA o bien fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, finalmente, numerosos ataques de diversas milicias contra organizaciones humanitarias e incluso periodistas. Según algunas fuentes, los grupos armados controlan aproximadamente entre dos terceras partes y el 80% del país. Durante el año hubo varios analistas (e incluso también el Gobierno de Francia) que advirtieron sobre la creciente influencia de Rusia en el país, ya sea a través del envío de asesores militares y armamento como de la

La violencia se incrementó y se extendió a nuevas provincias de RCA, agravando la crisis humanitaria que padece el país, considerada la tercera más grave del mundo

creciente presencia de empresas militares de seguridad rusas, en especial la empresa Wagner (también presente en Siria y Ucrania, entre otros contextos). A pesar de que Moscú sostiene que sus tropas en RCA tienen como objetivo el apoyar al Gobierno, algunas informaciones sostienen que mercenarios rusos están desplegados en territorios controlados por grupos armados de oposición para garantizar y supervisar la extracción de oro, diamantes o uranio. Francia también advirtió sobre el creciente número de contratos entre RCA y Rusia para la exploración de concesiones mineras. En este sentido, cabe destacar el asesinato en julio en territorio centroafricano de tres periodistas rusos que investigaban las actividades de la mencionada empresa Wagner.

En cuanto a las dinámicas del conflicto armado, cabe destacar los altos niveles de violencia en las provincias de Ouaka, Haute y Basse-Kotto y también en Bangui. En la capital, decenas de personas murieron en los meses de abril y mayo en el marco de un operativo conjunto de la MINUSCA y el Ejército en el barrio predominantemente musulmán PK5 para desarmar a la milicia conocida como “General Force”. Las reacciones a dicho operativo provocaron la muerte de más de 30 personas e iniciaron un ciclo de violencia –enfrentamientos entre grupos armados y entre éstos y la MINUSCA y el Ejército, así como ataques contra población civil– a principios de mayo en el que alrededor de una cuarentena de personas más fallecieron, una iglesia y dos mezquitas fueron quemadas y destruidas, y un mercado fue atacado con artefactos explosivos. En la localidad de Alindao (prefectura de Basse-Kotto), que fue escenario de numerosos episodios de violencia durante el año –especialmente en febrero y marzo–, **como mínimo 60 personas murieron como consecuencia de los enfrentamientos que se registraron a mediados de noviembre entre el grupo ex Séléka UPC y milicias antibalaka, durante los que fueron quemados una iglesia y un campamento que acogía a unas 20.000 personas desplazadas.** En la misma línea, pocos días antes, en la localidad norteña

de Batangafo (prefectura de Ouham), tres campamentos que acogían a unas 30.000 personas desplazadas internas fueron completamente quemados por los actos de violencia cometidos por grupos ex Séléka (como MPC y FPRC) y algunas milicias antibalaka, que también provocaron la muerte de numerosos civiles, la destrucción de miles de viviendas y de un mercado. Organizaciones humanitarias estiman que unas 10.000 personas tuvieron que buscar refugio en un recinto hospitalario de la ONG MSF. En septiembre, más de 10 personas desplazadas internas fueron asesinadas durante un ataque del grupo FPRC a la localidad de Bria, capital de Haute-Kotto, provocando que varios manifestantes lanzaran granadas contra las instalaciones de la MINUSCA como protesta por su incapacidad para prevenir dicho tipo de ataques y proteger adecuadamente a la población civil. Haute-Kotto es una región rica en diamantes, entre otros

recursos, por lo que en los últimos tiempos grupos como el mencionado FPRC, el LRA (con origen en Uganda) u otras milicias compiten por el control de dichos diamantes. Otro de los escenarios de violencia fue la prefectura de Ouaka, y en especial su capital, Bambari, y sus alrededores. En el mes de abril, por ejemplo, un militar de la MINUSCA murió y otros 11 resultaron heridos durante un ataque por parte de una milicia antibalaka en un destacamento de Naciones Unidas en Tagbara, cerca de Bambari, en el que 22 combatientes también fallecieron. Pocos días después, la MINUSCA halló los cuerpos de 21 personas en Tagbara y liberó a 23 personas que habían sido secuestradas por el grupo ex Séléka UPC. En las inmediaciones de Bambari se produjeron enfrentamientos durante todo el año entre grupos antibalaka y ex Séléka por el control de varias minas. En el este, en la prefectura de Mambéré-Kadéï, fronteriza con Camerún, se registraron enfrentamientos entre la MINUSCA y un grupo de reciente creación, Siriri, mientras que la provincia nororiental de Ouham-Pendé se produjeron enfrentamientos de alta intensidad a principios de año entre varios grupos armados que obligaron a la MINUSCA a desplegar efectivos militares adicionales para crear un perímetro de seguridad de unos 10km alrededor de la localidad de Paoua para garantizar la protección de la población civil.

Finalmente, cabe destacar un **incremento de los ataques contra instalaciones y personal de organizaciones humanitarias**, lo que obligó a algunas de ellas a interrumpir sus actividades o incluso a evacuar a su personal. En julio, OCHA declaró que solamente en los seis primeros meses del año se habían registrado más de 180 ataques, buenas parte de ellos en los alrededores de la localidad norteña de Kaga Bandoro. Por último, cabe mencionar que a finales de octubre entró en funcionamiento el Tribunal Penal Especial, organismo creado en 2015 para investigar los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en el país desde el año 2003. Solamente desde el derrocamiento del ex presidente François Bozizé en 2012, se estima que hay más de 700.000 personas desplazadas, que miles de personas han muerto y que unos 14.000 menores han sido reclutados forzosamente por varios grupos armados.

Tanto Naciones Unidas como varias ONG denunciaron que **en 2018 siguió utilizándose (o incluso se incrementó) la violencia sexual como arma de guerra**. A modo de ejemplo, el informe del secretario general de la ONU hecho público en abril de 2018 documentó 308 casos de violencia sexual vinculados al conflicto armado que afectaron a 155 mujeres, 138 niñas, 13 hombres y dos niños. Entre los episodios de violencia sexual ocurridos en 2017 y 2018 se reportaron 253 violaciones (181 de las cuales en grupo), o 28 matrimonios forzados. Los principales responsables de estos hechos fueron milicias ex Séléka (179 casos), antibalaka (55 casos) o el LRA (14 casos). El informe también señala que

en 2017 UNICEF contribuyó a la liberación de 3.419 menores (2.329 niños y 1.090 niñas, la mayor parte de las cuales denunciaron abusos sexuales) que habían sido reclutados de manera forzosa por parte de grupos armados. En marzo, un obispo denunció numerosos abusos sexuales contra mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad económica por parte de miembros de la MINUSCA. Ya en 2016 Naciones Unidas llevó a cabo una investigación interna ante la denuncias por abusos sexuales por parte de 139 mujeres y concluyó que 41 soldados de la misión eran culpables de los delitos que se les imputaban. En julio, la organización All Survivors Project denunció el incremento de la violencia sexual contra hombres y niños en un informe en el que documentó violencia sexual contra como mínimo 162 hombres y niños por parte de grupos insurgentes.¹⁸

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR, milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, grupos armados de Ituri, grupo armado de oposición burundés FNL, Rwanda, MONUSCO
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

El actual conflicto tiene sus orígenes en el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de éste en 1997. Posteriormente, en 1998, Burundi, Rwanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio rwandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la desertión de los militares del antiguo grupo armado CNDP integrados en el Ejército congolés, que organizaron una nueva rebelión, llamada M23, apoyada por Rwanda. En diciembre de 2013 dicha rebelión fue derrotada. A pesar de ello persiste el clima de inestabilidad y violencia.

RDC volvió a padecer un año marcado por la inestabilidad política y social y las crisis humanitarias en varias regiones del país, agravada por los brotes de ébola.¹⁹ El clima de tensión se vio agravado como consecuencia del

18. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

19. Véase el resumen de RDC en el capítulo 2 (Tensiones).

proceso electoral por el cual el país eligió nuevo presidente a final de año debido a la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila. En distintos puntos del país siguieron activos los diferentes focos de violencia armada, destacando: Haut Uélé y Bas Uélé (noreste del país), vinculados a las actividades del grupo armado de origen ugandés LRA; en Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur y Tanganica (este del país) por el conflicto armado vinculado a las actividades de las diferentes milicias Mai Mai, las FDLR y sus escisiones; también en el norte de la provincia Kivu Norte por el conflicto armado del grupo de origen ugandés ADF; en Mai-Ndombe (oeste), donde enfrentamientos comunitarios entre miembros de los grupos banunu y batende dejaron a final de año alrededor de 900 personas muertas; o en Kasai (centro-sur) vinculados al enfrentamiento entre múltiples milicias y las fuerzas gubernamentales. Todos estos focos de inestabilidad provocaron que la población desplazada se doblara en el país en 2017, alcanzando los 4,1 millones de personas en el conjunto de la RDC, situando al país como el primero en número de desplazados internos en África. Los escenarios de violencia deterioraron la situación de seguridad en el país, lo que llevó a la ONU, a finales de 2017, a elevar la situación de emergencia a la categoría 3, considerada la más alta de crisis, solamente compartida por Siria, Iraq y Yemen.

La crisis humanitaria en el este de RDC se complicó debido al mantenimiento de la violencia armada, que dificultó las operaciones sanitarias contra un nuevo brote de ébola

Las provincias de Kivu Norte y Sur (región este) continuaron concentrando la violencia mediante la actividad de decenas de grupos armados y milicias Mai Mai que llevaron a cabo acciones periódicas de saqueo, extorsión y ataques contra la MONUSCO y las FARDC. En los primeros meses del año, diferentes acciones armadas protagonizadas por milicias Mai Mai en Kivu Sur desplazaron a miles de personas que se refugiaron en Burundi y Tanzania. En el mes de mayo se mantuvieron los incidentes violentos en la región de Kivu Norte, protagonizados por diferentes milicias Mai Mai (Yakutumba, Mazembe, entre otras), así como por el NDC-R, APCLS y FDLR. Estos incidentes se dirigieron contra la población civil, así como contra la misión de la ONU en el país, la MONUSCO y trabajadores extranjeros. En uno de estos episodios, dos turistas británicos fueron secuestrados en el parque de Virunga, siendo liberados posteriormente. Durante el resto del año se registraron múltiples incidentes, de los cuales, el más destacado fue el intento de control de la localidad de Kilembwe (territorio de Fizi, en Kivu Sur) en septiembre, que fue repelido por las Fuerzas Armadas. Paralelamente, la región también registró diferentes enfrentamientos protagonizados por grupos hema y lendu en el área de Dungu, provincia de Ituri. En los tres primeros meses del año, estos choques provocaron la muerte de alrededor de 130 personas y generaron, según diversas fuentes, el desplazamiento de alrededor de 200.000 personas, 34.000 de las cuales se refugiaron en Uganda, obligando a la MONUSCO a ampliar su presencia en el área.

Finalmente, en el este del país también se produjeron otros incidentes que involucraron a países vecinos. En febrero se registró un enfrentamiento entre tropas congoleñas y rwandesas que dejó seis soldados de las FARDC muertos. El Gobierno de Rwanda acusó a las tropas congoleñas de haber entrado en su territorio. En ese mismo mes, el Gobierno tanzano detuvo y extraditó a RDC al autoproclamado General John Tshibangu, quien había amenazado al Gobierno de RDC con un levantamiento armado desde el Ejército. A principios de julio se produjo un intercambio de fuego entre tropas ugandesas y congoleñas en el Lago Eduardo, fronterizo entre ambos Estados, en el cual un soldado ugandés perdió la vida. El Gobierno de RDC acusó a Uganda de haber matado a 12 pescadores congoleños, así como de detener a otros 100. Tras una reunión entre enviados de ambos Ejecutivos en Uganda, el Gobierno ugandés anunció sentencias de tres años de cárcel para 35 pescadores por violar sus aguas y pesca ilegal. En un último incidente entre países fronterizos, en el mes de noviembre tropas de Burundi atacaron en territorio congoleño bases del grupo rebelde burundés RED-TABARA. Si bien el Gobierno de Burundi negó la violación de la soberanía de RDC, diferentes soldados fueron detenidos por tropas de las FARDC.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congoleños que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenya y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización islamista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también Kabila) para presionar a Uganda, gozaba también del apoyo de Kenya y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congoleña, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil.

Se mantuvo durante el año la violencia de las fuerzas de origen ugandés ADF, asentadas en la región de Kivu Norte, en el territorio de Beni (Grand Nord). El año se inició con las secuelas del ataque realizado en diciembre de 2017 contra personal de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUSCO) en Semliki, al este de Beni (Kivu Norte). En él, 15 soldados del contingente tanzano resultaron muertos y otros 44 heridos, así como también otros cinco soldados congoleños perdieron la vida. Este ataque se convirtió en el más mortífero cometido contra una misión de mantenimiento de la paz de la ONU. Desde ese momento los enfrentamientos armados por el control del territorio de Beni se mantuvieron entre las ADF y las Fuerzas Armadas congoleñas (FARDC) apoyadas por la MONUSCO y por Uganda. El Ejército ugandés (UPDF) desplegó una intervención militar contra ocho campamentos de la insurgencia en Beni, que causó la muerte a un centenar de combatientes de las ADF. A mediados de enero, el Ejército congoleño inició nuevas operaciones militares que se saldaron con una veintena de muertos, entre ellos un comandante de la insurgencia. Entre los meses de febrero y mayo, diferentes ataques protagonizados por las ADF en diversos puntos del territorio de Beni dejaron al menos 28 civiles asesinados. Durante mayo se intensificaron las operaciones militares de las FARDC contra las ADF en el triángulo compuesto por Kamango-Eringeti-Mbau, en Kivu Norte. En un enfrentamiento registrado el 24 de ese mes en el eje Mbau-Kamango, 14 miembros de la rebelión y cinco soldados congoleños resultaron muertos. Tras unos meses donde se reportó una menor intensidad de la violencia, desde septiembre se volvió a registrar un incremento de la misma. A principios de septiembre presuntos miembros de las ADF realizaron diferentes ataques en las poblaciones de Ngadi y Oicha (territorio de Beni), con un balance de 19 personas asesinadas, incluidos al menos cuatro soldados de las FARDC, y numerosas personas secuestradas. Durante el mes de octubre, diferentes episodios volvieron a dejar un balance de decenas de civiles y soldados muertos, así como múltiples secuestros. **La intensificación de la violencia en la región obstruyó las labores de emergencia sanitaria para contener el brote de ébola en la zona detectado a principios de agosto.** Debido a ello, a mediados de noviembre, la MONUSCO y las FARDC iniciaron una operación conjunta contra las ADF, en la cual se reportó la muerte de al menos siete efectivos de la misión de mantenimiento de la paz y 12 soldados congoleños. En el mes de diciembre se siguieron reportando incidentes violentos en la zona dirigidos contra la población civil, las FARDC y las fuerzas de la MONUSCO. La tensión acumulada en el país durante todo el año debido a las elecciones generales de finales de diciembre contribuyó al clima de inestabilidad en la zona este del país. Según denunció la MONUSCO a principios de 2018, desde que estalló el conflicto armado protagonizado por las ADF habría causado la muerte a unas 700 personas en Beni.

Las ADF siguieron teniendo como objetivos militares a las fuerzas de la MONUSCO y las FARDC en el este de RDC

RDC (Kasai)	
Inicio:	2017
Tipología:	Gobierno, Identidad Interno
Actores:	RDC, diversas milicias de adscripción étnica (Bana Mura, Kamwina Nsapu)
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto en la región del Grand Kasai, que incluye cinco provincias del centro-sur del país (Kasai-Central, Kasai, Kasai-Oriental, Lomami y Sankuru), enfrenta a las fuerzas de seguridad del Estado congolés contra diversas milicias de la zona, organizaciones que también se enfrentan entre ellas y contra la población civil. En 2012, Jean-Pierre Pandi debía suceder a su difunto tío como el sexto “Kamwina Nsapu”, uno de los principales jefes consuetudinarios en el territorio de Dibaya en Kasai-Central. Tales jefes desempeñan un papel importante, ejerciendo el control sobre la tierra y la administración en sus dominios. Supuestamente apolíticos y seleccionados de acuerdo con las tradiciones, deben ser reconocidos por el Estado central, requisito que alienta a los jefes a apoyar al régimen para que respalde a los solicitantes. En Grand Kasai, la interacción entre la autoridad consuetudinaria y la administración del presidente congolés Joseph Kabila ha sido particularmente compleja porque la región es un bastión de la oposición. Kinshasa se negó a reconocer oficialmente a Pandi lo que incrementó la tensión. En agosto de 2016, Pandi fue asesinado en su casa durante enfrentamientos entre sus combatientes y las fuerzas de seguridad en circunstancias controvertidas, lo que desencadenó una rebelión por parte de sus seguidores, que adoptaron el nombre de Kamwina Nsapu para vengar a su líder. El movimiento se convirtió en una insurrección generalizada al sumarse otros grupos de la zona. Los grupos han ganado notoriedad por su extensivo reclutamiento de menores. El conflicto, inicialmente en Kasai-Central, se extendió a otras localidades y hacia las provincias de Kasai, Kasai-Oriental, Sankuru y Lomami. La desproporcionada respuesta de las FARDC provocó la escalada de la situación, que ha tomado un cariz intercomunitario ya que Kamwina Nsapu, surgida de la comunidad luba, ha ampliado sus ataques a la población que no pertenece a esta etnia, y el Gobierno ha apoyado a la milicia Bana Mura, de la comunidad tchokwe.

La situación de inseguridad en la región de Kasai (centro-sur) se mantuvo durante el año, si bien con menor intensidad que el año anterior. El descenso de la violencia permitió, en enero, la reapertura de la frontera entre Angola y la RDC que linda con la región de Kasai, la cual había sido cerrada tras el incremento de la violencia en 2017. Durante ese mes, también se registraron los primeros incidentes violentos del año protagonizados entre la milicia Kamwina Nsapu y el Gobierno congoleño, con un balance de cuatro soldados y nueve civiles muertos en la región de Kasai Central. Estos incidentes se reprodujeron nuevamente en la misma región durante el mes de febrero, dejando otras 15 personas asesinadas. Durante el año se siguieron registrando diferentes ataques producidos por alguna de las 14 milicias armadas identificadas en la zona. A principios

de noviembre, las operaciones militares del Ejército congoleño contra la milicia de Kamwina Nsapu dejaron un nuevo balance de 17 milicianos muertos. Durante los últimos meses del año también se produjeron incidentes enmarcados en la contienda electoral por la presidencia del país.

Por otro lado, entre octubre y noviembre, **el Gobierno de Angola expulsó a la fuerza a alrededor de 362.000 congoleños que se habían refugiado en el país tras el estallido de la violencia en Kasai**. Su retorno forzado a las provincias de Kasai supuso una presión adicional sobre los limitados recursos de asistencia humanitaria, agravando la crisis en la zona y, según denunciaron varios organismos humanitarios, pudiendo detonar nuevos conflictos. En 2017 la ONG MSF había alertado que la región de Kasai se había convertido en una de las principales crisis humanitarias del mundo, con 1,4 millones de personas de las cinco provincias que componen la región del Grand Kasai desplazadas forzosamente como consecuencia de la violencia, entre las cuales 850.000 eran menores, alcanzando los 4,1 millones de personas desplazadas en el conjunto de RDC y situando al país como el primero en número de desplazados en África. A principios de 2018, organismos como la FAO, UNICEF y WFP denunciaron que 3,2 millones de personas se enfrentaban a una grave inseguridad alimentaria en la región. A su vez, durante el mes de marzo, ACNUR había solicitado para el año un presupuesto de 368,7 millones de dólares para ayudar a los afectados por las diferentes crisis de RDC, habiendo recibido tan solo el 1% de lo demandado. A principios de año, un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país acusaba a tropas del Gobierno y a las milicias Bana Mura y Kamwina Nsapu de cometer crímenes de guerra en la región central de Kasai.

La expulsión de 362.000 personas refugiadas de Angola a la región congoleña de Kasai a final de año complicó la situación humanitaria y amenazaba con agravar la crisis en la región

parte de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM. El Gobierno respondió al levantamiento utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes janjaweed. La magnitud de la violencia cometida por todas las partes se incapaz de cumplir con su mandato de proteger a la población civil y al personal humanitario. contendientes contra la población civil ha llevado a considerar la posibilidad de la existencia de un genocidio en la región, donde ya han muerto 300.000 personas desde el inicio de las hostilidades, según Naciones Unidas. Después de la firma de un acuerdo de paz (DPA) entre el Gobierno y una facción del SLA en mayo del 2006, la violencia se recrudeció, además de generar la fragmentación de los grupos de oposición y un grave impacto regional por los desplazamientos de población, por la implicación sudanesa en el conflicto chadiano y la participación chadiana en el conflicto sudanés. A esta dimensión se suma la tensión intercomunitaria por el control de los recursos (tierra, agua, ganado, minas), en algunos casos instigada por el propio Gobierno. La misión de observación de la UA AMIS, creada en 2004, fue integrada en el año 2007 en una misión conjunta UA/ONU, la UNAMID. Esta misión ha sido objeto de múltiples ataques

Durante el año se mantuvieron los ceses unilaterales de hostilidades anunciados por algunos grupos rebeldes y el Gobierno, que no impidieron el mantenimiento de los episodios de violencia concentrados en la región de Jebel Marra.

Siguiendo los avances producidos durante el año anterior, el Gobierno volvió a mantener el cese al fuego unilateral en Darfur (también en Kordofán Sur y Nilo Azul)²⁰, primero durante el primer semestre y, posteriormente, ampliándolo el 12 de julio hasta finales de año. En la misma línea, los dos principales grupos rebeldes darfuríes –facción del Sudan Liberation Army liderada por Minni Minnawi (SLA-MM) y Justice and Equality Movement (JEM)– anunciaron en diferentes momentos su extensión unilateral del cese al fuego que abarcó todo el año, a la que se sumó posteriormente el Sudan Liberation Army-Transitional Council (SLA-TC). Sin embargo, las fuerzas rebeldes del SLA lideradas por Abdel Wahid (SLA-AW), que habían sido excluidas de las negociaciones de paz, mantuvieron los enfrentamientos armados durante todo el año en la región de Jebel Marra con las fuerzas gubernamentales y sus milicias afines –principalmente las Rapid Support Forces (RSF). Entre finales de abril y el mes de mayo, el recrudecimiento de la violencia se tradujo en un deterioro de la situación de seguridad en la región, aumentando el número de personas que se vieron obligadas a desplazarse forzosamente por la violencia. OCHA cifró en 8.900 las personas desplazadas por los enfrentamientos, mientras que la OIM verificó 5.900 nuevos desplazamientos. En junio, en un nuevo incremento de la violencia, el Gobierno anunció la movilización a la región de unos 2.000 combatientes de las RSF así como del Ejército sudanés, bloqueando el paso a las tropas de la ONU desplegadas en la zona. El Consejo de Seguridad de la ONU exhortó sin éxito

Sudán (Darfur)	
Inicio:	2003
Tipología:	Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, milicias progubernamentales janjaweed, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), diversas facciones del SLA y otros grupos armados, UNAMID
Intensidad:	2
Evolución:	=
Síntesis:	El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región por

20. Véase el resumen de Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) en este capítulo.

a todas las partes a adherirse al cese unilateral de las hostilidades y permitir el acceso humanitario a las poblaciones en riesgo. A su vez, la misión conjunta de la ONU y la UA en Darfur (UNAMID) fortaleció su presencia en Jebel Marra. A finales de año las RSF anunciaron una ofensiva contra los rebeldes para acabar con la rebelión en febrero de 2019, hecho que anticipa un recrudecimiento de los combates a principios de 2019.

De forma paralela, **la UNAMID prosiguió con la reducción y reconfiguración de la misión según lo estipulado en la hoja de ruta acordada en el año 2017 por el Consejo de Seguridad de la ONU en su resolución 2363**. En julio de 2018 el Consejo aprobó una nueva resolución (2429), por medio de la cual a finales de diciembre la UNAMID concluyó el cierre y la entrega al Gobierno de Sudán de 10 bases de operaciones en Darfur. Las resoluciones también implicaron una reducción del 44% de las tropas y el 30% de Policía de la UNAMID y ampliaron el mandato de la misma hasta el 30 de junio de 2019. A finales de año la fuerza militar de la misión se redujo de los 9.735 soldados a los 5.470. La decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de reducir la misión de paz fue cuestionada por diversos actores internacionales, que exigieron un plan claro de salida para evitar el rebrote de la violencia. La intención es transformar la misión de una fuerza de mantenimiento de la paz a una de construcción de paz y desarrollo, cerrando en el plazo de dos años todas las bases de la misión. Por otro lado, en otros incidentes reseñados del año, a finales de mayo se produjo un ataque, supuestamente de las RSF, dirigido contra tres campos de desplazados internos ubicados en la región de Darfur Central: Khamsa Dagaig, Ardayba y Jedda. También, a mediados de julio tuvo lugar un enfrentamiento armado entre grupos armados rizeigat y maaliya, en la región de Darfur Oriental, que ocasionó múltiples muertes. Como respuesta las autoridades encarcelaron a alrededor de 95 personas, entre ellas 22 líderes comunitarios. El episodio dio pie a una negociación de paz en la cual ambos grupos se comprometieron a promover la estabilidad y la seguridad en la zona, firmando a finales de año una declaración de coexistencia pacífica.

Se anunció en diciembre la **firma de un acuerdo de pre-negociación para poner en marcha una futura mesa de diálogos sustantivos en Doha por parte del Gobierno y los grupos rebeldes SLA-MM y JEM**.²¹ Estas futuras negociaciones retomarán la base del Documento de Doha para la Paz en Darfur (DDPD) firmado en el año 2006. En relación al programa de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes (DDR), el número total de combatientes desmovilizados en el estado de Darfur Occidental hasta el mes de octubre, había alcanzado los 3.700. A su vez, otros 1.109 fueron desmovilizados en Nyala, Darfur Sur, durante el último

La región de Jebel Marra volvió a concentrar los enfrentamientos armados en Darfur (Sudán)

trimestre del año. Según datos oficiales, se habían recogido alrededor de 30.000 armas –de las 700.000 estimadas– en los cinco estados de Darfur durante el proceso voluntario que comenzó en agosto.

Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)	
Inicio:	2011
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

La reconfiguración nacional de Sudán tras la secesión del sur, en julio de 2011, agravó las tensiones del Gobierno sudanés con las regiones fronterizas de Kordofán Sur y Nilo Azul, que durante el conflicto armado sudanés apoyaron a la insurgencia sureña del SPLA. La necesidad de introducir reformas democráticas y de llevar a cabo una descentralización efectiva, que permita el desarrollo económico de todas las regiones que constituyen el nuevo Sudán, se encuentra en la base del resurgimiento de la violencia. La falta de reconocimiento de la pluralidad étnica y política, en la que se incluyen las formaciones políticas ligadas al SPLM sureño, sería también otra de las raíces de la violencia. La contraposición entre las élites de Jartum y los estados del Alto Nilo, que controlan la riqueza económica sudanesa, y el resto de los estados que conforman el país se sitúa en el eje de las tensiones que amenazan la paz.

Durante el año se extendieron los ceses al fuego unilaterales realizados por rebeldes y Gobierno, que no impidieron algunos choques violentos concentrados en la región de Nilo Azul. Tanto el Gobierno como los rebeldes anunciaron al inicio de año la extensión unilateral del cese al fuego en Kordofán Sur y Nilo Azul, conocidas como las Dos Áreas, medida que había sido tomada durante el 2017. A finales de enero la facción del SPLM-N liderada por Abdelaziz al-Hilu (producto de la fragmentación de la insurgencia producida durante el 2017), anunció la extensión del cese al fuego por cuatro meses, que se amplió luego hasta final de año, con el objeto de facilitar las conversaciones de paz. Éstas habían dado inicio en Etiopía a principios de febrero, tal como había sido pactado a finales de 2017 y supusieron la vuelta al diálogo que había estado congelado desde octubre de 2016. La otra facción del SPLM-N, liderada por Malik Agar, quedó excluida inicialmente de estas negociaciones, hecho que no impidió que declarasen previamente el cese al fuego unilateral en la región bajo su control del Nilo Azul. Si

21. Véase el resumen sobre Sudán (Darfur) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2018. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2019.

bien ambas facciones del SPLM-N habían declarado estas medidas de contención de la violencia, ello no impidió algún episodio de enfrentamiento armado entre ellas, como el ocurrido a finales de febrero en el área de Wadaka, Nilo Azul, en el cual decenas de personas resultaron muertas y alrededor de 9.000 desplazadas. Posteriormente, en abril, el SPLM-N (facción Malik Agar) denunció ataques de la milicia progubernamental Rapid Support Forces (RSF) –situada bajo la estructura de mando de las Fuerzas Armadas Sudanesas– en la región de Nilo Azul, la cual se hizo con el control de las áreas de Goya El Jadida, Goya El Gadima, Kabadik y Jiko. Estos incidentes no rompieron el compromiso con el cese al fuego, y a mediados de julio, el Gobierno de Sudán volvió a extenderlo en las Dos Áreas, además de en Darfur, hasta finales de año.

En lo que respecta a las conversaciones de paz, los diálogos avanzaron durante el año, si bien sin lograr ningún acuerdo sustantivo.²² A principios de noviembre, el Gobierno de Sudán anunció la mediación del presidente del Gobierno sur sudanés, Salva Kiir, entre las dos facciones del SPLM-N para buscar una solución y retomar la unidad en las filas rebeldes, que permitiera la búsqueda de la paz en las Dos Áreas. Finalmente, el acceso humanitario a las Dos Áreas, uno de los puntos de las negociaciones de paz, continuó bloqueado, aunque a finales de septiembre el Ejecutivo presidido por Omar al-Bashir aceptó la propuesta de la ONU para realizar la entrega de ayuda a las áreas afectadas por el conflicto.

Sudán del Sur	
Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SPLM-FD, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF, SSNLM, REMNASA, NAS, SSUF (Paul Malong), SSOA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN, White Army, Shilluk Agwelek), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS.
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Síntesis:	El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples

comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyado a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudanés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del ex vicepresidente Riek Machar, quien cuenta con el apoyo de algunos de estos militares y milicias desafectas.

Durante el año **persistieron los enfrentamientos armados entre las partes, violando sistemáticamente el acuerdo de alto el fuego pactado en diciembre de 2017, lo cual generó la aplicación de diferentes sanciones por parte de la comunidad internacional**. Este escenario no evitó, sin embargo, la revitalización del proceso de paz, lográndose la firma de un nuevo Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Sudán del Sur y los principales grupos. Si bien el año se inició con el acuerdo de cese de las hostilidades pactado entre el Gobierno y los principales grupos armados el 24 de diciembre de 2017 –dentro del marco del foro de revitalización del proceso de paz realizado en Addis Abeba, Etiopía– ello no evitó la recurrencia de enfrentamientos armados entre las partes durante todo 2018, principalmente en las regiones de Ecuatoria, Alto Nilo, Unidad y Yei. Las violaciones sistemáticas al cese al fuego generaron la reacción de diferentes actores, tanto a nivel africano como externo, que se tradujeron en una progresiva imposición de sanciones. La primera de ellas llegó en febrero, cuando EEUU anunció un embargo de armas unilateral al país. La ONU y otros organismos regionales como la UE, la UA y el bloque regional IGAD, también amenazaron con la aplicación de sanciones punitivas si se mantenía la violencia. Diferentes altos mandos militares sur sudaneses, entre ellos, Paul Malong Awan –quien había sido destituido en 2017 como jefe de las Fuerzas Armadas por el presidente Salva Kiir– fueron incluidos en la lista de personas sancionadas por la UE, EEUU y la ONU debido a su participación en las atrocidades cometidas durante la guerra. En respuesta, Malong anunció a principios de abril la creación de un nuevo grupo rebelde, el Frente Unido de Sudán del Sur (SSUF por sus siglas en inglés). Esta nueva organización se integró en la coalición de grupos armados de oposición creada en diciembre de 2017, la Alianza de Oposición de Sudán del Sur (SSOA por sus siglas en inglés). El mantenimiento de la situación de inseguridad no impidió que se llevaran a cabo de forma simultánea diferentes rondas de negociación enmarcadas en la reducción de las hostilidades y la búsqueda de la resolución del conflicto. A finales de junio, el presidente Salva Kiir y el líder de la

22. Véase el resumen sobre Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2018. Análisis de tendencias y escenarios*. Icaria, 2019.

facción mayoritaria del SPLM-IO, Riek Machar, lograron un nuevo acuerdo marco que incluía un nuevo compromiso del cese al fuego a partir del 30 de junio. La reunión significó la primera vez desde el reinicio de las hostilidades en 2016, que Kiir y Machar se encontraban. Sin embargo, estos avances no lograron el fin de las hostilidades, debido a que las facciones armadas excluidas de la negociación mantuvieron los choques violentos con el objetivo de lograr su inclusión en la mesa de diálogo. Entre los episodios de violencia registrados en ese periodo, el más significativo fue en el estado de Boma, Jonglei, dejando un balance de 86 personas asesinadas, más de 20 heridas y alrededor de 42.000 cabezas de ganado robadas. Como respuesta, el 13 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución redactada por EEUU imponiendo un embargo de armas al país.

En este contexto, el 30 de agosto, el Gobierno de Sudán del Sur, el SPLA-IO encabezado por Machar, el SSOA, el SPLM-FD y representantes de pequeñas facciones armadas, ratificaron un acuerdo de paz que incluía, entre otros aspectos, una amnistía general a todos los rebeldes, incluido Machar. En el mismo se excluyó a la organización armada encabezada por Paul Malong, lo cual representó un importante riesgo para la aplicación de las medidas de distensión en su región de incidencia, al norte de Bahr el Ghazal. Este acuerdo de paz, **denominado Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan (R-ARCSS)**,²³ fue posteriormente firmado el 12 de septiembre en la capital de Etiopía. Entre las diferentes medidas acordadas se incluyó la restitución de Machar como vicepresidente, se estableció un periodo de pre-transición de ocho meses, entrando en vigor en mayo de 2019, y se estipularon diferentes medidas para promover el cese de hostilidades, que incluyeron el acantonamiento de todos los actores armados en localizaciones acordadas en 30 días, el freno inmediato de cualquier actividad de formación y reclutamiento, la liberación de todos los prisioneros de guerra, la creación de un tribunal híbrido y la creación, formación, financiación y despliegue de una unidad militar ampliada, la Regional Protection Force (RPF), la cual será apoyada en su despliegue por la UNMISS. Además, el texto volvió a incluir el establecimiento de un nuevo mecanismo de verificación del alto el fuego (Revitalised Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring and Verification Mechanism, RCTSAMVM) y un comité de evaluación y supervisión conjunto (Joint Monitoring and Evaluation Committee), los cuales sustituirán, antes de mayo de 2019, a las anteriores instancias en la materia creadas en el Acuerdo de Paz de 2015. Sin embargo, este acuerdo no conllevó el fin

de las hostilidades. El subsecretario general de la ONU para las operaciones de mantenimiento de la paz, Jean-Pierre Lacroix, denunció el 18 de septiembre la violación del acuerdo y del cese de hostilidades asociado, reportando enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y la oposición armada signataria en los estados de Equatoria Central, Unidad y Yei. A su vez, el equipo internacional de observadores del Mecanismo de Verificación del Cese al Fuego y el Acuerdo de Seguridad Transicional (CTSAMVM) también reportó ataques y detención de personal de su equipo. Las fuerzas gubernamentales y la facción del SPLM-IO encabezada por Machar se acusaron mutuamente de reiniciar la violencia, a la par que se siguieron reportando incidentes armados entre diferentes grupos rebeldes no signatarios del acuerdo de paz, como las fuerzas del NAS, el SSNMC y el SSNDA, contra las partes firmantes. Al finalizar el año estos incidentes armados se mantenían activos en varias regiones del país, volviendo a poner en entredicho la viabilidad futura de la paz acordada.

En otros eventos significativos del año, durante el mes de mayo, bajo mediación del presidente ugandés, Yoweri Museveni, se convocó a las facciones del SPLM, incluidos el partido gobernante, la oposición en el gobierno de transición y la oposición armada (SPLM-IO) para buscar su unificación y facilitar la resolución del conflicto. Si bien la facción del SPLM-IO liderada por el primer vicepresidente Taban Deng, anunció su reunificación, la facción del SPLM-IO liderada por Machar renunció a la misma si el Gobierno no reincorporaba a Machar como vicepresidente. Tras el acuerdo de paz de septiembre la posibilidad de reunificación de las partes se hizo más plausible. Por otro lado, durante el mes de septiembre, una corte militar declaró culpable a 10 soldados sur sudaneses por el ataque al Hotel Terrain en Juba producido junio de 2016, en el cual un periodista sur sudanés fue asesinado, cinco trabajadoras humanitarias extranjeras fueron violadas y múltiples personas resultaron torturadas y heridas. El juicio significó una excepción en la aplicación de la justicia a militares en el país desde el estallido de la guerra en diciembre de 2013. Diferentes observadores nacionales lo atribuyeron a la presencia de víctimas extranjeras.

Magreb - Norte de África

Argelia	
Inicio:	1992
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado

23. Véase el resumen sobre Sudán del Sur en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2018. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2019.

Actores:	Gobierno, AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y Sahel
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a distintos grupos islamistas desde comienzos de los noventa, tras un ascenso del movimiento islamista en Argelia que respondió al descontento de la población, la crisis económica y la falta de espacios de participación política. La confrontación se inició después de la ilegalización del Frente Islámico de Salvación (FIS) en 1992 tras su triunfo electoral frente al partido histórico que había liderado la independencia del país, el Frente de Liberación Nacional. La lucha armada enfrentó a varios grupos (EIS, GIA y el GSPC, escindido del GIA y convertido en Al Qaeda en el Magreb Islámico en 2007) con el Ejército, apoyado por milicias de autodefensa. El conflicto provocó unas 150.000 muertes durante los noventa y continúa cobrándose víctimas, aunque los niveles de violencia han descendido desde 2002, después de que algunos grupos renunciaran a la lucha armada. En los últimos años el conflicto ha estado protagonizado principalmente por AQMI, que se convirtió en una organización transnacional, ampliando sus operaciones más allá del territorio argelino y afectando a países del Sahel. Argelia, junto a Malí, Libia, Mauritania y Níger, entre otros, se han enfrentado a AQMI y otros grupos armados que operan en la zona, entre ellos el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y las organizaciones al-Mourabitoun (Firmantes de Sangre), Jund al-Khilafa (filial de ISIS) e ISIS.

A lo largo de 2018 Argelia continuó siendo escenario de hechos de violencia de baja intensidad vinculados al conflicto que enfrenta principalmente al grupo armado AQMI con las fuerzas de seguridad. Según estimaciones parciales a partir de informaciones de prensa, las hostilidades habrían provocado la muerte de entre 40 y 50 personas durante el año. Según el balance oficial del Ejército argelino, un total de 32 militantes murieron y 25 fueron arrestados en 2018; otras 177 personas vinculadas a las redes de apoyo fueron detenidas y más de 700 armas fueron decomisadas (incluyendo fusiles, granadas, metralletas y lanzacohetes). Uno de los incidentes más cruentos del año se produjo en la provincia de Skikda (noreste), en julio, cuando enfrentamientos entre las partes causaron la muerte de cuatro combatientes de ISIS y siete soldados. Durante los primeros meses del año las fuerzas de seguridad argelinas dieron muerte a varios altos dirigentes de la organización armada, entre ellos Adel Seghiri, responsable de propaganda y Bekkai Boualem, jefe de relaciones exteriores de AQMI. Adicionalmente, en la zona fronteriza entre Argelia y Túnez las fuerzas especiales de la vecina Túnez acabaron con la vida de Bilel Kobi, uno de los lugartenientes de Adelmalek Droukdel, líder de AQMI. Otro alto dirigente del grupo, Heddad Fodhil, cabeza de una de las brigadas del grupo, se rindió a las autoridades. Según las cifras oficiales, un total de 132 militantes se entregaron a las autoridades militares durante 2018. Según algunas fuentes, las rendiciones se intensificaron tras un acuerdo propuesto por el Gobierno con ayuda de Francia.

En este contexto, diversos análisis destacaron el debilitamiento de AQMI en Argelia. Entre 2013 y 2018, las operaciones militares argelinas habrían causado la muerte de unos 600 combatientes de AQPA, mientras que los servicios de inteligencia han desbaratado sus redes logísticas. El debilitamiento del grupo y la pérdida de influencia territorial, sobre todo en la zona de Kabilya, se atribuye a diversos factores, incluyendo sus métodos extremos, las políticas represivas del Gobierno en combinación con ofertas para quienes decidieran abandonar las filas del grupo. Ante las dificultades para consolidar sus ambiciones en Argelia y atraer a nuevos miembros, AQMI habría decidido mover sus operaciones hacia el este, a la zona fronteriza con Túnez, e incluso focalizar las bases en ese país. De hecho, según medios de prensa, el dirigente asesinado por los servicios especiales tunecinos tenía como misión fortalecer la filial de AQMI en Túnez e intentar atraer a ex combatientes de ISIS ante el declive de este último grupo de sus bastiones en Libia, Siria e Iraq. La estructura de la rama tunecina de AQMI, Okba Ibn Nafaa, está integrada principalmente por ciudadanos argelinos. Sin embargo, varios análisis coincidieron en que AQMI no ha renunciado a fortalecer al grupo en Argelia y que continuará perpetrando ataques de baja intensidad en el país.

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, grupos armados de diverso signo, incluyendo el Ejército Nacional de Libia (LNA), milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI; EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, EAU, entre otros países
Intensidad:	3
Evolución:	=
Síntesis:	En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la "liberación" de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en

los niveles de violencia y la conformación de dos parlamentos y dos gobiernos, en Tobruk y Trípoli, que cuentan con el apoyo de sendas coaliciones armadas. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto dificultados por este panorama de fragmentación y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de nuevos grupos, como ISIS, en el país norteafricano.

Durante 2018 el panorama en Libia continuó caracterizándose por las dificultades para implementar el acuerdo político de 2015, la debilidad y fragmentación institucional, la persistencia de varios focos de poder y los continuos enfrentamientos entre numerosas organizaciones armadas de diverso signo. El balance total de víctimas del conflicto continuó siendo difícil de determinar. Según los informes mensuales de la misión de la ONU en el país (UNSMIL), entre enero y octubre habían muerto al menos 175 civiles a causa de hostilidades y más de 300 personas habían resultado heridas. Sin embargo, la misión reconoce que estas cifras podrían ser superiores y aclara que en el recuento sólo se incluyen víctimas civiles como resultado directo de las hostilidades, quedando fuera las víctimas indirectas y las que fallecen o quedan heridas como resultado de otras prácticas vinculadas al conflicto, como ejecuciones, torturas o secuestros. **Respecto a las dinámicas de violencia, y siguiendo la tendencia de años previos, a lo largo de 2018 se registraron múltiples focos de intensidad variable. Uno de los frentes más activos fue Trípoli.** La capital libia fue escenario de incidentes durante todo el año, pero a partir de agosto vivió una escalada, con uso de armamento pesado en varios sectores de la ciudad, incluyendo zonas residenciales. Los enfrentamientos entre varios grupos armados –milicias vinculadas al Ministerio de Defensa y otros grupos al Ministerio del Interior del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA)– resultaron en la muerte de más de 115 personas, la mitad de ellas civiles, en el lapso de unas semanas. La ONU promovió un cese el fuego en septiembre y los combates se redujeron, pero al finalizar el año las hostilidades persistían sobre todo en las afueras de Trípoli, en forma de choques, asesinatos y secuestros.

La zona este del país fue otro de los principales epicentros de violencia, con numerosos hechos que enfrentaron principalmente al grupo armado Ejército Nacional de Libia (LNA) de Khalifa Hifter con organizaciones de corte yihadista. Además de ataques contra puestos de control, se registraron diversas ofensivas con explosivos. Entre ellas, por ejemplo, un doble ataque con coche bomba en las afueras de una mezquita de Bengasi que dejó 35 víctimas mortales en enero, que motivó la ejecución de una decena de personas al día siguiente por parte del LNA. Este grupo también mantuvo el asedio en Derna, controlada por una coalición de grupos islamistas, con graves consecuencias humanitarias. A lo largo de 2018

La situación en Libia continuó caracterizándose por múltiples focos de violencia y persistentes violaciones a los derechos humanos, que afectaron especialmente a la población migrante y refugiada

también se produjeron diversos enfrentamientos por el control de campos e instalaciones petroleras. Solo en junio los choques entre el LNA y fuerzas vinculadas al excomandante de la milicia Petroleum Facilities Guard dejaron 28 muertos. Otro de los frentes más activos fue el sur, sobre todo Sabha, donde se produjeron continuos choques entre milicias de tribus árabes afiliadas al LNA y milicias de la minoría tebu vinculadas al GNA. Solo en uno de los incidentes, ocurrido en mayo, murieron una treintena de personas, incluyendo civiles. La filial del grupo armado ISIS en Libia también continuó activa, especialmente al sur de su antiguo bastión, Sirte, y en áreas costeras del centro y oeste del país, y reivindicó varias acciones en la capital. Diversas informaciones apuntaron a que AQMI mantenía su presencia en Libia. EEUU llevó a cabo ataques aéreos periódicos contra grupos de línea yihadista en el país y, por ejemplo, reivindicó una ofensiva contra una presunta célula de AQMI en el sur de Libia en noviembre que causó 11 muertes. Sin embargo, el grupo aseguró que los fallecidos eran jóvenes tuareg sin vínculos con al-Qaeda.

Las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario continuaron en el país en un clima de impunidad, como denunciaron ONG y la ONU. Entre estas vulneraciones, además de las muertes de civiles, cabe mencionar, torturas, ejecuciones y detenciones arbitrarias –tanto en centros oficiales como en instalaciones administradas por milicias–, incluyendo mujeres y niñas que fueron objeto de detenciones arbitrarias por afiliaciones familiares o “crímenes morales”. La población migrante y refugiada continuó siendo especialmente vulnerable en Libia, víctima de prácticas como arrestos arbitrarios, violencia y explotación sexual, secuestros, extorsiones, trabajos forzados, esclavitud y asesinatos. Al finalizar el año había 5.300 personas migrantes y refugiadas detenidas en Libia, de las cuales al menos 3.700 en situación de necesitar protección internacional, según la ONU. **Un informe de la UNSMIL y la OHCHR alertó en diciembre sobre las numerosas vulneraciones de los derechos humanos que enfrentan migrantes y personas refugiadas en Libia y destacó que las autoridades del país no han sido capaces y/o no han mostrado voluntad de frenar los abusos.** Por el contrario, el clima de caos y ausencia de estado de derecho en el país ha alentado el tráfico y trata de personas y la ley libia que criminaliza la entrada irregular al país ha sometido a la cárcel a miles de personas sin considerar sus necesidades de protección. El informe, basado en más de 1.300 entrevistas entre enero de 2017 y agosto de 2018, subraya las condiciones inhumanas de los centros de detención y que la abrumadora mayoría de mujeres y adolescentes entrevistadas confirmaron haber sido víctimas de violencia sexual.²⁴

El clima general de inseguridad en el país continuó siendo el trasfondo de las pugnas políticas y luchas de poder

24. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad)

entre diversos actores libios y amenazaba con continuar afectando y condicionando la implementación del acuerdo de 2015, que vivió nuevos retrasos en el cronograma previsto. A este respecto, cabe destacar que durante 2018 persistió el bloqueo en la tarea de introducir algunas modificaciones al pacto de 2015 –tal como estaba contemplado en el plan promovido por el enviado especial de la ONU para Libia–, que se evidenciaron numerosos obstáculos para la organización de un referéndum constitucional y que tanto la conferencia nacional que pretende guiar el proceso de transición como las elecciones fueron postergadas para 2019.²⁵ Algunos de los hechos de violencia durante el año pretendieron torpedear directamente el proceso político, como por ejemplo el ataque suicida contra la comisión electoral en Trípoli que dejó 14 víctimas mortales y fue reivindicado por ISIS. En este contexto, a finales de año el GNA reiteró su llamado a levantar el embargo de armas de la ONU que pesa sobre el país, aunque personas expertas alertaron sobre los riesgos de esta medida.

El conflicto armado en Colombia sufrió un deterioro durante el año como consecuencia de la fragilidad del proceso de paz y de la finalización del acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno y la guerrilla del ELN

acuerdo concluyó el 9 de enero y no se renovó, aunque de manera unilateral y coincidiendo con diferentes citas electorales que tuvieron lugar a lo largo del año, el ELN proclamó tres altos el fuego más durante el año. En torno a 200 personas podrían haber muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre los diferentes actores armados activos en el país, cifra a la que hay que sumar los asesinatos de líderes sociales, 164 según los datos de la Defensoría del Pueblo y 226 según Indepaz, superando por tanto el número de asesinatos de años anteriores (117 en 2016 y 170 en 2017). Durante prácticamente todo el año se registraron enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y el ELN y el grupo armado persistió en acciones como el secuestro y los ataques a infraestructuras. La ruptura del alto el fuego conllevó una escalada de la violencia, y en enero siete policías murieron

en un ataque en Barranquilla. El ELN también se enfrentó en diferentes momentos del año al grupo armado EPL, provocando el desplazamiento de miles de personas en Catatumbo. Esta ciudad del departamento de Nariño fue uno de los epicentros de la violencia durante el año, en una pugna por el control del territorio y los recursos económicos vinculados al narcotráfico y el petróleo y con elevada presencia de diferentes actores armados. Los enfrentamientos entre el ELN y el EPL también obedecieron a la voluntad de asumir el control de zonas anteriormente ocupadas por las FARC. También se registraron enfrentamientos con grupos paramilitares. Además, se multiplicaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y disidentes de las FARC no desmovilizados o que han retomado las armas tras haberse desmovilizado. Estos grupos podrían estar integrados por entre 1.200 y 2.800 combatientes, y sus campamentos fueron bombardeados por las Fuerzas Armadas en diferentes momentos del año. El partido FARC también denunció el asesinato de decenas de sus antiguos combatientes y de familiares tras el proceso de desmovilización. A pesar de que el año concluía con una declaración de alto el fuego por parte del ELN, ésta no fue reciprocada por el Gobierno. Finalmente, cabe destacar que el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica reveló que **como consecuencia del conflicto armado, entre 1958 y julio del 2018 habían muerto 262.197 personas.**

1.3.2. América

Colombia	
Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ELN, FARC (disidentes), EPL, grupos paramilitares
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Síntesis:	
En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional) que excluía otras opciones políticas, nacen dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del statu quo mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia. En 2016, la firma de un acuerdo de paz con las FARC llevó a su desmovilización y transformación en partido político.	

El conflicto armado en Colombia sufrió un deterioro durante el año como consecuencia de la fragilidad del proceso de paz y de la finalización del acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno y la guerrilla del ELN. Este

1.3.3. Asia y Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado

25. Para más información, véase Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2019. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2019.

Actores:	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en 1989 y el ascenso de los muyahidín al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones, facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de 1990. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama ben Laden y otros líderes de al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU atacó al país ayudado por un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instauró un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral tras la segunda ronda en la que los dos líderes más votados, Ashraf Ghani y Abdulá Abdulá, mantuvieron los resultados en el aire durante meses. En septiembre, se llegó a un acuerdo para crear un Gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014, aunque en el terreno quedó desplegada la misión “Resolute Support”, con mandato de la OTAN para formar y entrenar a las fuerzas afganas y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo, integrada por soldados norteamericanos, misión “Freedom Sentinel”.

El conflicto armado en Afganistán fue uno de los de mayor gravedad del año, no solo a nivel regional sino también internacional, aunque se produjeron importantes avances en el proceso de paz exploratorio.

De acuerdo con los datos recogidos por ACLED, el conflicto afgano fue el de mayor letalidad en todo el mundo, con cifras de muertes como consecuencia del conflicto que podrían haber excedido las 43.000, superando incluso a las de Siria y Yemen juntos.²⁶ No obstante, dadas las enormes dificultades para documentar las cifras de personas fallecidas como consecuencia de la violencia en el país estos números deben ser considerados con cautela. Por su parte, la misión de Naciones Unidas en el país, UNAMA, documentó la muerte de 3.804 civiles como consecuencia de la violencia armada, un 11% más que en 2017 y la cifra más elevada desde que se inició el registro en 2009. En noviembre el presidente afgano reveló que desde el fin de las operaciones de combate de EEUU en el país a finales de 2014, más de 28.500 integrantes de las fuerzas de seguridad afganas han muerto en enfrentamientos con la insurgencia talibán o con ISIS. Un informe de la institución de supervisión estadounidense U.S. Special Inspector General for

Afghanistan Reconstruction (SIGAR) reveló que aunque a principios de 2018 el Gobierno afgano tenía el control sobre el 56% de los distritos del país, en noviembre se había reducido al 55%. La BBC señaló a principios de 2018 que la insurgencia talibán estaba activa en el 70% del territorio y con pleno control del 14% de los distritos.

El año se iniciaba con una intensificación de los enfrentamientos, a pesar de la estación invernal, y con dos importantes atentados de los talibanes en Kabul. El primero, en un hotel, causó 22 muertes, la mayoría extranjeros y el segundo, uno de los más graves del año, con la explosión de una bomba en una ambulancia, ocasionando más de cien muertes. Especialmente intensos fueron los enfrentamientos en la provincia de Farah, que se repitieron durante todo el año. Entre los episodios de violencia, cabe destacar un ataque talibán en febrero que causó la muerte de 22 soldados. El aumento de los enfrentamientos llevó a la captura de algunas zonas de la capital por parte de los talibanes y a su inmediata retirada tras los bombardeos por parte de las fuerzas de seguridad afganas y estadounidenses en mayo. En noviembre murieron al menos 20 policías en un ataque contra un convoy. También se acrecentaron los bombardeos aéreos por parte de las fuerzas estadounidenses en el norte del país y se constató la expansión talibán en la provincia de Ghazni. En abril, un bombardeo de las fuerzas afganas en la provincia de Kunduz causó la muerte a más de 50 civiles, incluyendo 30 menores, y en noviembre un bombardeo estadounidense mató a 23 civiles en la provincia de Helmand. **En junio se produjo un hecho sin precedentes, el anuncio por parte del Gobierno de un alto el fuego de ocho días durante la celebración de la festividad musulmana de Eid al Fitr, que fue reciprocado por los talibanes.** Se trató del primer alto el fuego desde la invasión militar estadounidense en 2001, y aunque no tuvo continuidad en el año, sirvió para reforzar los contactos exploratorios encaminados a unas negociaciones de paz.²⁷ Tras el fin del alto el fuego retornaron los enfrentamientos armados con miles de muertes y personas heridas. En octubre se celebraron elecciones parlamentarias, que tuvieron lugar durante tres jornadas diferentes debido a las dificultades logísticas y la intensa violencia que las precedió –diez candidatos murieron como consecuencia de la violencia durante la campaña electoral–, cuyos resultados definitivos no se conocían al finalizar el año, lo que llevó a posponer las elecciones presidenciales a julio de 2019, para dar tiempo a resolver los obstáculos afrontados en los comicios legislativos. En diciembre tuvo lugar uno de los atentados más mortíferos del año, con 43 víctimas como consecuencia del ataque por hombres armados contra un edificio oficial en la capital, que desencadenó graves enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

ISIS también estuvo activo durante el año con diversas acciones destacadas, aunque con mucha menor

26. ACLED, *ACLED 2018. The year in review*, ACLED, 2019.

27. Véase el resumen sobre Afganistán en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2019. Análisis de tendencias y escenarios*. Icaria, 2019.

capacidad de acción que los talibanes. En enero llevó a cabo un ataque contra Save the Children, causando la muerte a tres trabajadores de la organización y un soldado, lo que llevó a la ONG a suspender sus programas. En marzo, coincidiendo con la festividad de Nowruz, se produjo otro grave atentado en las inmediaciones de la Universidad de Kabul y un hospital provocando la muerte de 31 personas y dejando heridas a otras 60. Según señalaron algunos medios, durante los tres primeros meses del año ISIS había matado a más de 200 personas solo en Kabul. En abril cerca de 60 personas murieron en un atentado en Kabul mientras esperaban para registrarse electoralmente. En diciembre las fuerzas armadas anunciaron que habían matado al portavoz de ISIS en el país en un bombardeo con drones.

India (CPI-M)	
Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial. Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

El conflicto armado entre la insurgencia naxalita y las fuerzas de seguridad indias continuó activo durante todo el año, con cifras de mortalidad similares a las registradas en años anteriores y ligeramente superiores a las de 2017. Un total de 413 personas murieron como consecuencia del conflicto armado según las cifras recopiladas por el South Asia Terrorism Portal, de las que 109 eran civiles, 73 miembros de las fuerzas de seguridad y 231 insurgentes naxalitas, lo que da cuenta del grave impacto que este conflicto tiene en la población civil. Como en años anteriores los estados de Chhattisgarh (249), Maharashtra (58), Jharkhand (53), Odisha (32) y Bihar (14) fueron los más afectados por la violencia del conflicto. Algunos de los hechos de violencia más graves del año se produjeron en abril, cuando 34 insurgentes entre los que se incluían siete mujeres, murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el distrito de Gadchiroli en Maharashtra. Un día después, en otros enfrentamientos en este mismo

distrito murieron otros seis supuestos insurgentes. Previamente, en marzo, diez insurgentes naxalitas y un policía habían muerto en enfrentamientos en el estado de Chhattisgarh. En mayo, ocho insurgentes murieron en Odisha como consecuencia de las operaciones policiales en los distritos de Kandhmal y Bolangir. Además de los enfrentamientos armados, durante el año se produjeron diversas detenciones de intelectuales y defensores de derechos humanos acusados de formar parte de una supuesta rama urbana de la organización acusados de conspirar para asesinar al primer ministro Narendra Modi. Las detenciones fueron denunciadas por diversos defensores de derechos humanos.

India (Jammu y Cachemira)	
Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, JKLF, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, All Parties Hurriyat Conference, United Jihad Council
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

El conflicto armado se intensificó durante el año y las cifras de mortalidad vinculadas a la violencia volvieron a aumentar, siendo las más elevadas desde el año 2009, según diversas fuentes. El South Asia Terrorism Portal documentó la muerte de 451 personas, de las que 86 eran civiles, 95 miembros de las fuerzas de seguridad y 270 integrantes de los diversos grupos armados de oposición que operan en el estado. Por su parte, la Jammu and Kashmir Coalition of Civil Society señaló que se habían producido 586 muertes, de las que 160 eran civiles, 159 miembros de las fuerzas de seguridad y 267 insurgentes. Aunque no se alcanzaron los niveles de letalidad previos a 2007, se consolidó la escalada de la violencia que se ha producido de forma progresiva desde 2012. Además, esta organización denunció múltiples violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la

fuerza, restricciones a la libertad de expresión y de prensa y violencia sexual. Varias mujeres denunciaron haber sufrido agresiones sexuales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad indias y diversas organizaciones presentaron una petición a la Comisión de Derechos Humanos para que investigara más de 140 casos de violencia sexual vinculados al conflicto en los últimos años. También se denunció la utilización de esta violencia en las operaciones de búsqueda de insurgentes en zonas habitadas por población civil. El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos presentó el primer informe sobre la situación de la región, destacando las múltiples violaciones de derechos humanos, la impunidad y la escalada de la violencia desde el asesinato en 2016 del insurgente Burhan Wani, integrante de Hizbul Mujahidin. Durante todo el año se repitieron los enfrentamientos entre los grupos insurgentes y las fuerzas de seguridad, afectando especialmente a distritos como Shopian o Pulwana. Como consecuencia de los enfrentamientos y de las muertes de población civil durante operaciones de seguridad, se repitieron las protestas sociales en diferentes momentos del año. Se convocaron paros y el Gobierno restringió las telecomunicaciones en varias ocasiones. Uno de los episodios de mayor gravedad tuvo lugar en noviembre, cuando tras enfrentamientos en el distrito de Shopian en los que murieron seis insurgentes –que pertenecerían a un grupo integrado por Hizbul Mujahideen y Lashkar-e-Taiba–, se produjeron nuevos enfrentamientos entre la Policía y población local que protestaba por las muertes, a consecuencia de los cuales murió un adolescente. Además, decenas de personas resultaron heridas, muchas de ellas por disparos de perdigones, munición utilizada extensamente en Cachemira contra la población civil y que ha causado centenares de heridos graves en los últimos años. Un total de 16 insurgentes murieron en operaciones similares en esos días. Tampoco tuvo efecto el alto el fuego unilateral de las fuerzas de seguridad durante la celebración del Ramadán, y al menos cinco civiles, nueve miembros de las fuerzas de seguridad y veinte insurgentes murieron como consecuencia de enfrentamientos en este periodo.

Por otra parte, cabe destacar la crisis gubernamental que se produjo en el estado después de que el partido nacionalista hindú se retirara del Gobierno liderado por el PDP en junio. La imposibilidad de formar un nuevo Gobierno llevó al Ejecutivo indio a imponer el control central del estado, asumido por el gobernador, lo que incrementó notablemente la tensión. A finales de diciembre tras seis meses de mandato del gobernador se impuso el mandato directo del presidente indio, Ram Nath Kovind, a la espera de futuras elecciones y en medio de una intensificación de las operaciones militares.

Se produjo una notable reducción de la violencia en Pakistán en comparación con años anteriores

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación *Zarb-e Azb* para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur.

Se constató una notable reducción de la violencia en el conjunto del país, consolidándose la tendencia de los últimos años. La cifra de personas muertas como consecuencia de la violencia armada en el conjunto del país se situó por primera vez por debajo del millar según los datos del Center for Research and Security Studies, con 754 personas fallecidas. En las provincias de Khyber Pakhtunkhwa (KP), Punjab y las Áreas Tribales

Federalmente Administradas (FATA por sus siglas en inglés), que han concentrado la actividad insurgente talibán en los últimos años, se registró la muerte de 260 personas como consecuencia del conflicto armado entre enero y septiembre. Durante el año se produjeron enfrentamientos armados y atentados entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia talibán, que como consecuencia de las operaciones de seguridad de los últimos años se había desplazado a zonas en las que anteriormente no tenía actividad, lo que elevó las dudas sobre la efectividad real de la estrategia militar para poner fin al conflicto armado.

Actualmente gran parte de las facciones del TTP se han desplazado a distritos de KP como Tank y Dera Ismail Khan, y a zonas de las FATA como Waziristán Sur y Kurram, aunque algunos grupos habrían regresado a Waziristán Norte. En febrero, el TTP reconoció que el número dos de la organización, Khalid Mehsud, había muerto en Waziristán Norte como consecuencia de un ataque con dron de EEUU y en julio, el líder del TTP desde 2013, Mullah Fazlullah, murió en Afganistán, también en otro ataque con dron coordinado entre las fuerzas afganas y estadounidenses. Otro grave atentado tuvo lugar en noviembre en el distrito de Orakzai en KP, donde la explosión de una bomba en un mercado causó la muerte de al menos 35 personas. Además, se produjeron numerosos atentados en torno a las elecciones generales celebradas en julio, que podrían haber causado la muerte a unas 200 personas, incluyendo dirigentes políticos. Uno de los más graves sucedió en Peshawar durante un mitin del partido ANP en el que murieron 22 personas y 66 resultaron heridas, reivindicado por el TTP. Durante el año se produjo la integración de las FATA en la provincia de KP, para extender la aplicación de la Constitución y acabar con la legislación colonial vigente hasta entonces. Además, se deterioraron considerablemente las relaciones con EEUU, lo que llevó a la retirada de la ayuda militar económica estadounidense.

Pakistán (Baluchistán)	
Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT; sociedad civil, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro periodos de violencia armada (1948, 1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, si no miles, de baluchíes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Baluchistán fue escenario del principal conflicto armado en Pakistán en términos de víctimas mortales, superando por primera vez al conflicto armado que tiene como epicentro las Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA por sus siglas en inglés) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Según el South Asia Terrorism Portal, durante 2018 murieron 388 personas como consecuencia del conflicto en esta provincia, aunque el Center for Research and Security Studies resgistró 383 muertes entre enero y septiembre. Cabe señalar que un año más se superpusieron las dinámicas del conflicto baluchi con la actividad insurgente talibán en esta provincia y también se constataron acciones de ISIS. Además, se repitieron los ataques sectarios contra la comunidad hazara que derivaron en protestas sociales en mayo, tras varios asesinatos durante el mes de abril. Las fuerzas de seguridad y la insurgencia se enfrentaron repetidamente durante todo el año. En enero cinco miembros de las fuerzas de seguridad murieron en una emboscada en el distrito de Kech. En febrero, un atentado suicida causó la muerte a cuatro soldados en las inmediaciones de Quetta y en junio tres soldados murieron también en la capital de la provincia. Estos enfrentamientos provocaron un número indeterminado de insurgentes muertos. **En agosto se produjo uno de los atentados más mortíferos de los últimos años. Una detonación suicida causó la muerte a 149 personas y ocasionó 189 heridos en el distrito de Mastung,** durante un acto electoral del partido Balochistan Awami Party. El atentado fue reivindicado por ISIS, aunque las fuerzas de seguridad lo atribuyeron a Lashkar-e-Jhangvi. Varias decenas de personas murieron en otros atentados durante la campaña electoral, algunos de ellos reivindicados por la insurgencia talibán. En diciembre, seis miembros de las fuerzas de seguridad y cuatro insurgentes murieron en un enfrentamiento en el distrito de Kech.

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (Mindanao)	
Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, facciones del MILF y el MNLF
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

La actual situación de violencia en Mindanao, en la que varios grupos armados se enfrentan al Gobierno y en ocasiones entre sí, está estrechamente vinculada al conflicto armado de larga duración entre Manila y el MNLF y posteriormente el MILF, organizaciones luchaban por la autodeterminación del pueblo moro. La falta de implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF hizo que algunas facciones

del grupo no estén plenamente desmovilizadas y participen esporádicamente de episodios de violencia, mientras que las dificultades surgidas en el proceso de negociación del MILF con el Gobierno propiciaron la emergencia del BIFF, una facción del grupo opuesta a dicho proceso fundada en 2010 por el ex comandante del MILF Ameril Umbra Kato. Por otra parte, el grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Finalmente, cabe destacar que la irrupción de ISIS en la escena internacional provocó el surgimiento de numerosos grupos en Mindanao que juraron lealtad y obediencia al grupo. En 2016, ISIS reivindicó por vez primera un ataque de envergadura en Mindanao y anunció su intención de fortalecer su estructura e incrementar sus ataques en la región.

Tanto los niveles de violencia del conflicto en Mindanao como la atención mediática y política que éste provoca se redujeron sustancialmente respecto del año pasado

—en 2017 el sitio a la ciudad de Marawi durante cinco meses por parte del llamado grupo Maute y otras organizaciones armadas provocó la muerte de más de 1.100 personas y el desplazamiento forzoso de más de 600.000 personas, de las que 73.000 todavía no habían podido regresar a su hogar—, pero el Gobierno advirtió en repetidas ocasiones sobre el riesgo para la seguridad nacional que suponen las organizaciones armadas que han proclamado su lealtad a ISIS y, de hecho, siguieron produciéndose numerosos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos como Abu Sayyaf o el BIFF. En cuanto al llamado grupo Maute, Manila señaló que, a pesar de estar manteniendo un perfil bajo y evitando enfrentamientos de gran envergadura con el Ejército, **el grupo estaba reorganizándose, reagrupándose y reclutando a nuevos miembros, especialmente en las provincias de Lanao del Sur, Sulu, Basilan o Sultan Kudarat.** Además, Manila advirtió que los grupos yihadistas en Filipinas seguían teniendo la capacidad para tomar ciudades importantes y para atacar en prácticamente cualquier punto del territorio nacional. Según el Gobierno, dicho grupo habría logrado reclutar a entre 200 y 400 nuevas personas —principalmente a partir de los cuantiosos recursos obtenidos durante el tiempo en el que controlaron la ciudad de Marawi—, de modo que la membresía de la organización volvería a estar a niveles parecidos a los de principios de 2017. Manila también destacó que, tras la muerte del líder de ISIS en Filipinas —Isnilon Hapilon— y de los hermanos Omar y Abdullah Maute en 2017, el liderazgo habría sido asumido por Abu Dar, que había sido lugarteniente de Isnilon Hapilon. Manila también advirtió que seguían llegando combatientes foráneos a Filipinas, hecho que atribuyó a la porosidad de las fronteras marítimas del país y a la estrategia de ISIS de centrar sus esfuerzos en el Sudeste Asiático para paliar o desviar la atención de las derrotas militares que estaba sufriendo en Siria

e Iraq. En este sentido, cabe destacar el lanzamiento a principios de año de un operativo conjunto de inteligencia —denominado “Nuestros Ojos”— por parte de Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur y Brunei Darussalam para hacer frente a amenazas transfronterizas. En este sentido, también cabe señalar que el MILF se mostró plenamente dispuesto a cooperar con el Gobierno tanto para combatir a grupos yihadistas como para revertir la influencia que puedan tener entre determinados sectores de la población.

En términos de actos de violencia, **el grupo más activo en Mindanao en 2018 fue el BIFF** —escindido del MILF en 2008 por su oposición al proceso de paz. A pesar de que las Fuerzas Armadas no ofrecieron un balance del impacto del conflicto, según informaciones aparecidas en prensa más de 100 personas habrían muerto en enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y este grupo, reproduciendo así patrones parecidos a los del año anterior, en el que se registraron 116 episodios de violencia que provocaron la muerte de como mínimo un centenar de personas. Cabe destacar especialmente la muerte de 44 combatientes del grupo durante una ofensiva aérea y terrestre de las Fuerzas Armadas en marzo en Datu Saudi Ampatuan (sur de Maguindanao) o la muerte de otros como mínimo 15 combatientes del BIFF a mediados de junio durante otra ofensiva aérea del Gobierno en las provincias de Cotabato Norte y Maguindanao, y que provocó la huida de unas 10.000 personas. Manila acusó al grupo de llevar a cabo varios atentados durante el año, como el que se produjeron durante un festival en la ciudad de Isulan (provincia de Sultan Kudarat) a finales de agosto, en el que dos personas murieron y otras 34 resultaron heridas, o el que se produjo en la misma ciudad pocos días más tarde, en el que dos personas fallecieron y varias decenas resultaron heridas. Además, el Gobierno acusó al BIFF de perpetrar un atentado en un centro comercial de Cotabato el día 31 de diciembre, en el que dos personas murieron y más de 30 resultaron heridas, pero el BIFF negó la autoría del atentado, lo lamentó y lo atribuyó a otros grupos que se oponen al proceso de paz.

En cuanto a Abu Sayyaf, este grupo mantuvo una actividad armada continuada en sus bastiones tradicionales del archipiélago de Sulu y la península de Zamboanga. A principios de año, según el Gobierno, Abu Sayyaf tenía 519 combatientes y más de 500 armas y presencia o control en 66 municipios (barangays). Durante 2017 llevó a cabo 17 secuestros que afectaron a 37 personas, de las que en 2018 permanecían cautivas 11 (siete de ellas extranjeras). A mediados de septiembre el Gobierno declaró que unos 180 combatientes de Abu Sayyaf se habían rendido o entregado, pero a la vez reconoció que el grupo todavía disponía de varios centenares de combatientes. El principal foco de los enfrentamientos fue la región de Patikul, en el norte de la isla de Jolo (archipiélago de Sulu). A modo de ejemplo, seis combatientes de Abu Sayyaf murieron a finales de febrero en combates con el Ejército, otros seis a mediados de marzo, diez más a

finales de octubre y otros siete a finales de septiembre en unos enfrentamientos entre las Fuerzas y unos 100 combatientes liderados por el histórico dirigente Radullah Sahiron (y sus lugartenientes Hatib Hajan Sawadjaan y Idang Susukan) en el que una veintena de soldados también resultaron heridos. También en Patikul, cabe destacar la emboscada en la que cinco militares murieron y otros 23 resultaron heridos. A finales de julio, el Gobierno acusó a Abu Sayyaf de haber provocado la muerte de diez personas después de que un artefacto explosivo estallara en un retén militar en la ciudad de Lamitan, en Basilan. Finalmente, cabe señalar que algunas fuentes advirtieron sobre un incremento en la práctica del secuestro por parte de Abu Sayyaf, especialmente en las aguas entre Tawi-Tawi y la costa oriental del estado malasio de Sabah. Según algunas fuentes, señores de la guerra o incluso cuadros políticos locales que se oponen a la llamada Ley Orgánica de Bangsamoro (que abole la Región Autónoma del Mindanao Musulmán compuesta, entre otras, por las provincias en las que suele operar Abu Sayyaf) pagarían sustanciales cantidades de dinero por llevar a cabo dichos secuestros.

Durante 2018 se incrementaron las hostilidades bélicas entre las Fuerzas Armadas filipinas y el NPA, especialmente en la segunda mitad del año

Filipinas (NPA)	
Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:

El NPA, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inicia la lucha armada en 1969 y alcanza su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas y al National Democratic Front (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.

En paralelo a la suspensión de las conversaciones de paz entre el Gobierno y el NDF, **se incrementaron las hostilidades bélicas entre las Fuerzas Armadas y el NPA, especialmente en la segunda mitad del año.** Aunque no trascendieron cifras sobre la mortalidad asociada al conflicto, algunos análisis estiman que ésta se habría incrementado respecto de los dos últimos años.

Según datos de la Political Violence in the Southern Philippines Dataset, entre enero de 2017 y julio de 2018, 168 soldados, policías y civiles habrían muerto en el marco del conflicto armado, mientras que otras 266 personas habrían resultado heridas. Por la parte del NPA, el conflicto provocó la muerte a 185 combatientes y heridas a otros 109. En el mismo periodo, las Fuerzas Armadas habrían enfrentado una media de 12 ataques al mes por parte del NPA. Según estos datos, un 74% de las acciones del grupo armado estarían dirigidas contra fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mientras que el resto de ofensivas del grupo lo estarían a partes iguales contra civiles e instalaciones de empresas de distinto signo, como extractivas o plantaciones.

Las provincias que concentrarían una mayor actividad del grupo – 50% de las víctimas mortales y 61% de las personas heridas– serían las de Compostela Valley, Agusan del Norte, Bukidnon, Cotobato y Davao del Sur, aunque la provincia en la que se registró un mayor incremento de las acciones armadas en 2017 y 2018 fue Cotobato. También cabe señalar que de los 1.103 incidentes armados que se registraron en el sur de Filipinas, más de una tercera parte (425) estuvieron protagonizados por el NPA. Estas cifras son concordantes con las estimaciones del Gobierno, que calcula que aproximadamente el 50% de los combatientes del NPA se hallan en Mindanao. Según esta misma base de datos, entre agosto de 2017 y marzo de 2018 se produjo una media de 10 víctimas al mes, pero esta cifra se incrementó a 16 entre abril y julio de 2018. Según estos datos, a mediados de 2018 ya se habría superado la letalidad del conflicto en 2016 y, de proseguir a tendencia, igualaría o superaría la intensidad del conflicto en 2017.

A principios de abril, el Gobierno declaró que durante el primer trimestre del año el incremento de las ofensivas contra el grupo había comportado la rendición de 28 líderes del NPA y la captura de 51 campamentos del grupo. Cabe recordar que a finales de marzo suele producirse un incremento de las hostilidades por la conmemoración de la fundación del grupo armado en 1969. Sin embargo, el incremento más importante de las hostilidades se produjo en la segunda mitad del año, poco después de que Duterte pospusiera durante tres meses la reanudación de las conversaciones de paz prevista para finales de junio o principios de julio, alegando falta de sinceridad y voluntad política por parte del NDF. Esta decisión comportó, entre otras cuestiones, que el Partido Comunista de Filipinas ordenara a su brazo armado un incremento de las ofensivas a nivel nacional. En el mes de octubre, las Fuerzas Armadas denunciaron haber detectado que el NPA se estaba infiltrando en 18 campus universitarios de la capital para incrementar el reclutamiento. Poco antes, Duterte había advertido sobre un presunto plan para derrocarlo –y asesinarlo– en el que habrían participado el Partido Comunista de Filipinas y el opositor Partido Liberal. En

la misma línea, el jefe de las Fuerzas Armadas, Carlitos Gálvez, había anticipado un “octubre rojo” en el que se sucederían distintas acciones para desestabilizar el país y facilitar así un derrocamiento del Gobierno.

Aunque finalmente no se produjeron las acciones anticipadas por el Gobierno, éste prosiguió con su **plan de contrainsurgencia para, según indicaciones de Duterte, destruir completamente al NPA o hacerlo militarmente irrelevante para mediados de 2019**. Este plan de contrainsurgencia tuvo varios componentes. En primer lugar, la intensificación de los planes de reinserción para los combatientes del NPA que se entregaran o se rindieran. Según las Fuerzas Armadas, más de 1.500 combatientes del NPA se habían acogido a estos planes, que discurrieron en paralelo al inicio de las llamadas negociaciones de paz territorializadas con comandantes del NPA y no con el panel negociador del NDF. En segundo lugar, la extensión (por tercera vez) de la ley marcial en Mindanao, que el Congreso aprobó en el mes de diciembre a petición del presidente. Poco antes de que se produjera dicha extensión de la ley marcial hasta diciembre de 2019, el Gobierno había ordenado el despliegue de efectivos policiales y militares fuera de Mindanao, concretamente en las provincias de Samar, Negros Oriental, Negros Occidental y Bicol. Ante las numerosas críticas que generó dicha medida, el Gobierno negó su intención de decretar la ley marcial en dichas regiones y afirmó que dicho despliegue de tropas solamente obedecía a la necesidad de responder al creciente número de ataques por parte del NPA. Al finalizar el año, sin embargo, el Partido Comunista de Filipinas denunció que las Fuerzas Armadas disponían de poderes absolutos en casi la mitad del país y anticipó que la intención de la administración de Duterte era decretar la ley marcial a nivel nacional. En tercer lugar, a principios de diciembre el Gobierno anunció la creación de una nueva unidad contrainsurgente conformada por efectivos de inteligencia de diversas agencias del Estado para hacer frente a la creciente actividad por parte del NPA. Dicha unidad estará presidida por Duterte y por el Consejero de Seguridad Nacional. Pocos días antes de dicho anuncio, Duterte había declarado su intención de crear sus propios escuadrones de la muerte para hacer frente a las unidades especiales del NPA (Special Partisan Unit, o SPARU). Sin embargo, el fundador del grupo, Jose María Sison, declaró que dichas unidades sirvieron para luchar contra la dictadura de Ferdinand Marcos pero que no están operativas desde los años ochenta. Además, estas declaraciones de Duterte generaron muchas críticas –por considerar que podría incrementar exponencialmente el número de ejecuciones extrajudiciales y por prohibir el Derecho Internacional Humanitario los escuadrones de la muerte en cualquier circunstancia bélica– e incluso fueron recibidas con escepticismo por parte de las Fuerzas Armadas, que consideraron que las tareas de contrainsurgencia no pueden ser asumidas por civiles. El cuarto y último elemento de la estrategia contrainsurgente del Gobierno fue recurrir a los tribunales para que 600 personas consideradas cercanas al movimiento comunista

fueran consideradas terroristas, en línea con la orden presidencial que firmó Duterte a finales de 2017, en la que ponía fin a las negociaciones de paz con el NDF y calificaba de terroristas al NPA y al Partido Comunista de Filipinas.

Finalmente, cabe señalar que, por primera vez en muchos años y en contra de lo que suele ser tradición, el Gobierno no replicó la suspensión de hostilidades decretada unilateralmente por el NPA con motivo de las fiestas navideñas, por considerar que el NPA utiliza este tipo de treguas para reagruparse y reabastecerse. El 26 de diciembre, con motivo de la conmemoración del 50º aniversario de su fundación, el Partido Comunista de Filipinas declaró que varias administraciones anteriores a Duterte se habían propuesto derrotar militarmente al NPA y que ninguna de ellas lo había conseguido, y a la vez subrayó que durante el 2018 el movimiento comunista se había fortalecido notablemente.

Durante el año, tanto el NPA como organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch consideraron que las declaraciones del presidente Duterte en las que instaba a las Fuerzas Armadas a disparar a mujeres combatientes del NPA en la vagina podrían auspiciar el uso de la violencia sexual por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Algunas de estas organizaciones recordaron que Duterte, en varias ocasiones, ha hecho declaraciones en las que banalizaba o satirizaba la violación.

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados (Firmantes del alto el fuego: ABSDF, ALP, CNF, DKBA, KNU, KNU/KNLA-PC, PNLO, RCSS, NMSP, LDU; No firmantes del alto el fuego: KIA, NDAA, MNDAA, SSPP/SSA, TNLA, AA, UWSA, ARSA, KNPP)
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Síntesis:	Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado especialmente dirigidas contra la población civil, con el

objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados.

Aunque el país continuó en una situación de conflicto armado, los niveles de violencia se redujeron notablemente con respecto al año anterior. No obstante, en el estado de Rakhine –que fue el principal escenario de la violencia durante 2017 con gravísimas violaciones a los derechos humanos– persistió una situación de notable tensión, haciendo imposible el retorno de las 750.000 personas refugiadas rohingya en Bangladesh, pese a los intentos de los Gobiernos de Myanmar y Bangladesh para promoverlo. Aunque durante el año se anunció en varias ocasiones que se iniciaría la repatriación como consecuencia del acuerdo para ello entre los dos Gobiernos, ésta no se llevó a cabo y la situación humanitaria en los campos de refugiados en Bangladesh fue de extrema precariedad y tanto Naciones Unidas como organizaciones humanitarias denunciaron los planes de repatriación. Amnistía Internacional advirtió de que se había demolido poblaciones enteras y que se estaban construyendo infraestructuras militares en zonas anteriormente habitadas por población civil.²⁸ Además, International Crisis Group advirtió que de producirse el retorno forzado, el grupo armado ARSA, con fuerte presencia en los campos de refugiados de Bangladesh podría llevar a cabo ataques armados cruzando la frontera, lo que desestabilizaría todavía más la situación.²⁹ Aunque no se registraron nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado ARSA, en diciembre se produjo una escalada de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo armado Arakan Army (AA), provocando el desplazamiento forzado de centenares de personas. Los enfrentamientos con el AA también se produjeron en el vecino estado Chin. Además, el estado Rakhine quedó excluido del alto el fuego unilateral decretado por el Gobierno en los estados Shan y Kachin a finales de diciembre, lo que elevó las alertas ante el posible impacto negativo que esta exclusión podría tener. Estos enfrentamientos armados se sumaban a diferentes episodios de tensión durante el año. En enero la policía disparó contra manifestantes budistas causando la muerte de siete personas y en marzo varias bombas estallaron sin causar víctimas. Por otra parte, Amnistía Internacional hizo público un informe en el que denunció que en agosto de 2017 ARSA había matado a decenas de personas hindúes, después de los ataques contra los puestos de las fuerzas de seguridad que derivaron en la gravísima escalada de la violencia que llevó a centenares de miles de personas a refugiarse en Bangladesh.

Se redujo la violencia contra la población rohingya en el estado Rakhine en Myanmar, pero siguieron sin abordarse las cuestiones de fondo del conflicto y persistieron las violaciones de derechos humanos

Por otra parte, persistieron los enfrentamientos armados con otras insurgencias activas en el país. Los estados Kachin y Shan fueron los principales escenarios de conflicto durante el año, con enfrentamientos con los grupos armados que integran la alianza del norte (KIA, AA, TNA y MNDAA). Desde principios de año las fuerzas de seguridad iniciaron una operación contra el KIA que se intensificó en abril, con enfrentamientos y ataques aéreos por parte de las fuerzas de seguridad. En mayo, la relatora especial de Naciones Unidas para Myanmar alertó sobre la escalada de la violencia en el estado Kachin, donde las operaciones de seguridad llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas estaban causando el desplazamiento y la muerte de numerosa población civil. Más de 60.000 personas habían tenido que huir de sus hogares entre enero y mayo. Además, también se constataron enfrentamientos en el estado Shan entre los grupos armados TNLA (que contó con el apoyo del SSPP/SSA) y RCSS/SSA, en un conflicto que escaló en el año y en el que participaron centenares de insurgentes. No obstante, el año concluía con el anuncio por parte del Gobierno de un alto el fuego unilateral en los estados Shan y Kachin vigente entre el 21 de diciembre y el 30 de abril de 2019. Además se produjeron enfrentamientos en el estado Kayin entre las Fuerzas Armadas y el KNU, principal grupo firmante del acuerdo de alto el fuego de alcance nacional, evidenciando la fragilidad del proceso de paz.³⁰

Tailandia (sur)	
Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Patani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto

28. Amnistía Internacional, *Myanmar: Military land grab as security forces build bases on torched Rohingya villages*, 12 de marzo de 2018.

29. International Crisis Group, *Bangladesh-Myanmar: The Danger of Forced Rohingya Repatriation*, Asia Briefing 153, 12 de noviembre de 2018.

30. Véase el resumen de Myanmar en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2019. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2019.

armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

Los niveles de violencia en el sur de Tailandia fueron los más bajos desde el inicio del conflicto en 2004, aunque con cifras de víctimas muy parecidas a las del año anterior. Así, según el centro de investigación Deep South Watch, hasta noviembre de 2018 habían muerto 200 personas y otras 242 habían resultado heridas en las cuatro provincias meridionales de mayoría musulmana. En 2017, según este mismo centro, murieron 235 personas, mientras que en 2016 lo hicieron 307, en 2015 fueron 246 y en 2014, año en el que la Junta Militar llegó al poder tras un golpe de Estado, 341. En los cuatro años anteriores –desde 2010– las víctimas mortales siempre fueron superiores a 450. Según Deep South Watch, desde 2004 se han producido 20.109 incidentes violentos en los que 6.903 personas han muerto y otras 13.488 han resultado heridas. En la misma línea que la tendencia decreciente de violencia identificada por Deep South Watch, la agencia gubernamental Centro Administrativo para las Provincias Fronterizas Sureñas declaró a finales de octubre que en 2018 el número de incidentes violentos vinculados al conflicto armado (140) se habían reducido en un 70% respecto de los incidentes registrados en 2011 (619). En este sentido, cabe destacar que a mediados de noviembre el Gobierno prolongó por otros tres meses el estado de emergencia que rige en el sur del país desde el año 2005, aunque por primera vez desde entonces retiró dicha medida de un distrito de la provincial de Narathiwat (Sukhirin) y declaró haberlo contemplado en otros distritos por la mejora sustancial de la situación de seguridad en 2018. Entre las causas para explicar la reducción gradual de la violencia en el sur del país en los últimos años, algunos autores apuntan a una decisión estratégica del movimiento insurgente (y en particular del principal grupo armado, el BRN) de reducir sus acciones armadas y seleccionar mejor sus objetivos militares, por el impacto negativo que tiene entre su base social el asesinato de civiles. Otras voces, sin embargo, ponen el acento en la estrategia de gestión del conflicto por parte del Gobierno, que incluiría un mayor profesionalismo de algunos altos cuadros de las Fuerzas Armadas –lo que se traduce en menores denuncias por violaciones de los derechos humanos–, un uso más restringido o estratégico de la fuerza, una mayor implicación del Ejército en la implementación de programas de desarrollo, un incremento de la red de informantes a nivel comunitario, ciertas concesiones en materia de idioma y religión, o la continuación, aunque con dificultades, de las negociaciones de paz entre el Gobierno y MARA Patani –una organización paraguas que agrupa a los principales grupos insurgentes del sur del país– o la puesta en marcha de programas de reinserción para combatientes que se rindan o se entreguen. Respecto de este último punto, cabe destacar la rendición a mediados de agosto de Nasori Saeseng, uno de los principales líderes del grupo armado Pattani Islamic Mujahideen Movement. En línea con la

importancia que últimamente dan las Fuerzas Armadas a la delincuencia común como uno de los factores explicativos de la violencia en el sur del país, durante el año hubo analistas que señalaron que los niveles de violencia de Yala, Pattani y Narathiwat no eran tan distintos de los que se observan en otras provincias tailandesas fronterizas con Laos, Myanmar o Camboya.

Sea cuáles sean las causas de la reducción de los niveles de violencia que parecen indicar tanto las cifras oficiales como las ofrecidas por centros de investigación, **el movimiento insurgente siguió demostrando elevados niveles de coordinación en varios momentos del año.** A modo de ejemplo, en febrero seis artefactos explosivos estallaron en el distrito de Yaring, seguidos de otros tres en el distrito de Yarang (provincial de Pattani); en abril 13 personas resultaron heridas en Sungai Kolok tras la explosión de tres motocicletas cargadas de explosivos; a finales de mayo un total de 16 artefactos explosivos estallaron de manera simultánea en 12 localizaciones de las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat, impactando especialmente en bancos, cajeros automáticos e instalaciones eléctricas; o a finales de junio y principios de julio cinco bombas estallaron durante varios días consecutivos en plantaciones regentadas por propietarios budistas. Los meses de mayor actividad insurgente fueron junio (en los últimos años a finales del Ramadán suele producirse un incremento en el número de incidentes violentos) y noviembre, con 26 víctimas mortales en cada mes, según datos de Deep South Watch.

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Ucrania (este)	
Inicio:	2014
Tipología:	Gobierno, Identidad, Autogobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

Ucrania, considerado un país en transición desde su independencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y territorio de gran importancia geoestratégica, afronta un conflicto armado en zonas del este del país y es escenario de la crisis más grave entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría. Precedido por un cúmulo de focos de tensión en el conjunto del país entre finales de 2013 y 2014 (protestas masivas pro-europeas y antigubernamentales; caída del presidente Víktor Yanukóvich y su régimen; anexión de Crimea por Rusia; protestas anti-Maidán y emergencia de actores armados en el este), la situación en el este de Ucrania derivó en conflicto armado en el segundo trimestre de 2014, enfrentando a milicias separatistas pro-rusas en las regiones de Donetsk y Lugansk, apoyadas por Rusia, y a las Fuerzas Armadas estatales bajo las nuevas autoridades pro-europeas. Las áreas de Donetsk y Lugansk bajo control de las

fuerzas rebeldes se declararon repúblicas independientes. A cuestiones como el estatus de esas provincias se añade de fondo la dimensión geoestratégica internacional (rivalidad política, económica y militar entre Occidente y Rusia en el este de Europa; demostración de fuerza de Rusia ante su propia opinión pública; entre otros elementos). La guerra ha tenido un grave impacto en la población civil, especialmente en términos de desplazamiento forzado. La guerra transcurre en paralelo a un proceso de paz con negociaciones en diversos niveles y formatos.

El conflicto armado en Ucrania asistió a un descenso en el número de víctimas mortales civiles, si bien se mantuvieron las violaciones del alto el fuego y se incrementó la tensión militar entre Ucrania y Rusia en el mar de Azov.

El conflicto continuó afectado por un contexto de seguridad frágil, con constantes violaciones del alto el fuego y presencia de armamento pesado. La cifra de personas civiles fallecidas descendió al medio centenar, frente al centenar de 2018 y 2017, según ACNUDH (más de 3.000 desde el inicio de la guerra). Otros 214 civiles resultaron heridos en 2018. Un oficial militar ucraniano cifró en 567 los combatientes del Donbás fallecidos entre enero y agosto, y en 894 los heridos. Además, el Gobierno ucraniano cifró en 134 los soldados ucranianos fallecidos en 2018. Un 36% de los fallecidos y heridos civiles se debieron a bombardeos y fuego con armas ligeras, mientras otro 34% a incidentes a causa de minas, según ACNUDH. Según datos de OCHA de finales de año, **5,2 millones de personas continuaban afectadas por el conflicto, la cifra más elevada desde el inicio de la disputa en 2014.** De ellas, 3,5 millones necesitaban asistencia humanitaria y protección. Entre los retos a los que hacía frente la población civil, los riesgos de incidentes violentos, los impactos de la violencia en infraestructura civil –incluyendo de suministro de agua e instalaciones sanitarias–, así como la elevada presencia de minas terrestres y restos explosivos –que sitúan al este del país como una de las zonas del mundo con más presencia de minas–, según advirtió OCHA en diciembre. Además, 1,5 millones de personas continuaban desplazadas de manera forzosa dentro del país. Respecto a la evolución de la situación de seguridad, se produjeron escaladas de violencia en diversos momentos del año, como febrero, abril, mayo, agosto y octubre. La zona en torno a Horlivka (Donetsk) fue uno de los epicentros de la escalada de abril y mayo. Como en años anteriores, a través del Grupo Trilateral de Contacto, se alcanzaron diversos acuerdos de alto el fuego de alcance limitado, que entraron en vigor en marzo (renovado a finales de mes), julio –para facilitar la temporada de cosecha–, finales de agosto –ante el inicio del curso escolar–, y diciembre. No obstante, las treguas fueron incumplidas reiteradamente. Un dron de la misión de la OSCE fue derribado después de detectar un sistema de misiles tierra-aire en áreas bajo control rebelde. Por su parte, Donetsk y Lugansk celebraron elecciones generales en noviembre, sin reconocimiento internacional. En agosto, el considerado primer ministro de Donetsk,

Se incrementó la tensión militar entre Ucrania y Rusia en el mar Azov y el estrecho de Kerch

Aleksandr Zakharchenko, murió en un atentado con bomba en Donetsk. El ministerio de Exteriores ruso acusó a Ucrania de la explosión, mientras autoridades ucranianas apuntaron a enfrentamientos entre las fuerzas rebeldes o a una operación especial de Rusia.

El contexto regional se deterioró en la segunda mitad del año ante el incremento de la tensión militar entre Ucrania y Rusia en el mar Azov y el estrecho de Kerch y **escaló en noviembre, con la captura por Rusia de tres barcos ucranianos, la detención de los 24 tripulantes y heridas a tres de ellos, precedido de incidentes y acusaciones en meses anteriores.** El

ataque generó críticas internacionales a Rusia y la suspensión de una reunión prevista entre los presidentes de EEUU y de Rusia en el G-20. Además, el Gobierno ucraniano respondió un día después del ataque estableciendo durante un mes la ley marcial en diez provincias fronterizas con Rusia, el mar Azov y mar Negro y con la vecina región de Transdniestria. Asimismo, Ucrania estableció la prohibición de entrada al país de hombres de nacionalidad rusa de entre 16 y 60 años, restricción que continuó vigente lo que quedaba de año. Durante el año Rusia reforzó su control sobre Crimea, con un puente que comunica la península con Rusia, inaugurado en mayo, así como la construcción de una valla que separa Crimea de Ucrania, finalizada en diciembre. Por otra parte, en diversos momentos del año la ONU advirtió de un deterioro en la situación de derechos humanos en Ucrania. Entre otros hechos, durante varios meses desde abril se produjeron ataques contra población gitana en Ucrania, perpetrados con impunidad por grupos de ultraderecha, como la organización paramilitar National Druhyna –formado por ex combatientes del batallón Azov, actor irregular en los inicios del conflicto armado en el este de Ucrania– o la ultranacionalista C14. Los ataques incluyeron asaltos a viviendas en varias localidades, palizas y destrozos. Varias personas gitanas fueron asesinadas y diversas resultaron heridas.

Sudeste de Europa

Turquía (sudeste)	
Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:
El PKK, creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y

el Gobierno afectó de manera especial a la población civil kurda del sudeste de Turquía, atrapada en fuego cruzado y víctima de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Turquía. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo (Iniciativa de Democratización en 2008, Diálogo de Oslo 2009-2011 y proceso de Imrali 2013-2015). En 2015 se reinició la guerra, que desde los años 80 ha causado unas 40.000 víctimas mortales. La guerra en Siria puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda en Turquía y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

Continuó reduciéndose la mortalidad asociada al conflicto armado, si bien se produjeron nuevos incidentes de violencia y el conflicto mantuvo un elevado riesgo de escalada vinculado a la disputa entre Turquía y las fuerzas kurdas de Siria

YPG, con vínculos con el PKK.³¹ Durante 2018 murieron 124 miembros de las fuerzas de seguridad, 404 del PKK y 17 civiles, según la base de datos de International Crisis Group, frente a los 800 en 2017 (y 1.900 en 2016). El conflicto impactó también en otros ámbitos, de la mano de la estrategia del Gobierno de combatir militar, policial y judicialmente a los actores armados, políticos y sociales del movimiento kurdo. Durante 2018 hubo nuevas detenciones masivas e investigaciones penales contra activistas kurdos y miembros del partido prokurdo HDP, bajo acusaciones de pertenencia o apoyo a grupo terrorista. El HDP denunció a principios de 2019 que más de 5.000 miembros del partido permanecían en prisión, incluyendo sus líderes, así como ocho ex diputados y 59 alcaldes electos. También denunciaron que desde el fallido golpe de Estado en 2016, más de 2.000 ONG y 200 medios de comunicación, muchos de ellos kurdos, habían sido prohibidos. Así, el conflicto sobre la cuestión kurda se vio afectado por el contexto general en Turquía de agravamiento en los últimos años de la situación de derechos humanos.

Durante el año el conflicto armado se manifestó en forma de operaciones militares, ataques del PKK, choques entre fuerzas militares y kurdas en zonas rurales del sudeste de Turquía, así como bombardeos del Ejército turco contra el PKK en el norte de Iraq. El PKK llevó a cabo diversos ataques, como uno con artefacto explosivo improvisado en el distrito de Gergüş (provincia de Batman), que mató a ocho soldados; o una explosión contra una oficina tributaria en Ankara en enero, con tres civiles heridos. Turquía mató a varios comandantes y miembros destacados del PKK en agosto, como Ibrahim Coban (alias Mahir Atakan), Baris Oner (Tarik

Turquía mató a varias figuras destacadas del PKK en 2018

el Turco), Yusuf Sungur y Ismail Ozden (Zaki Shingali), y en septiembre el ministro de Interior afirmó que se aproximaba el fin del PKK. Además, Turquía e Iraq acordaron intensificar su cooperación contra el PKK. El conflicto también tuvo su plasmación en Siria, donde Turquía llevó a cabo una operación militar en enero en la región de Afrin (noroeste de Siria y frontera con Turquía), controlada por las YPG, con vínculos con el PKK y acusadas por Turquía de ser un único actor. El Ejército turco tomó el control de Afrin en marzo y, tras ello, Turquía amenazó con combatir a las fuerzas kurdas en Manbij (Siria), donde están estacionadas tropas de EEUU, aliadas de las YPG, y en Sinjar (Iraq). En diciembre Turquía advirtió del lanzamiento inminente de la operación en Manbij, mientras EEUU anunció la próxima retirada de tropas de Siria, y fuerzas del régimen sirio entraron en Manbij en respuesta al llamamiento de las YPG. La situación en Siria generó incertidumbre relativa al impacto que su evolución pueda tener en el conflicto entre Turquía y el PKK. En noviembre EEUU anunció elevadas recompensas monetarias a quien facilitase información de tres líderes del PKK (Murat Karayilan, Cemil Bayik y Duran Kalkan). Por otra parte, Turquía levantó en julio el estado de emergencia impuesto tras el fallido golpe de Estado. En su lugar, Turquía aprobó una nueva ley antiterrorista ese mes que introduce restricciones, con repercusiones para la cuestión kurda. Todo ello en un año en que Recep Tayyip Erdogan pasó a ser oficialmente jefe de Estado y de Gobierno, tras las elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas de junio en el nuevo contexto de régimen presidencialista, con el 52,5% de los votos en las primeras, y un 53,66% de los votos para la coalición de su partido, el AKP, y el MHP. El partido pro-kurdo HDP superó la barrera del 10% de los votos estatales, con el 11,70% y 67 escaños.

El partido pro-kurdo HDP superó la barrera del 10% de los votos estatales, con el 11,70% y 67 escaños.

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen (al-houthistas)	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Irán
Intensidad:	3
Evolución:	↑

31. Véase el resumen sobre Siria en este capítulo.

Síntesis:

El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría shíi, iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra el terrorismo. El conflicto se ha cobrado miles de víctimas mortales y ha provocado también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis han fracasado y las treguas suscritas en los últimos años se han roto sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015. En un contexto de internacionalización, el conflicto ha ido adquiriendo tintes sectarios y una dimensión regional.

El conflicto armado en Yemen se intensificó durante 2018, aunque al finalizar el año las principales partes contendientes alcanzaron un acuerdo que podría suponer una reducción en las hostilidades. El balance de víctimas del conflicto continuó siendo difícil de precisar. Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, entre marzo de 2015 –inicio de la intervención de la coalición militar liderada por Arabia Saudita– y agosto de 2018 habían muerto 6.600 civiles, aunque la institución reconocía que la cifra podría ser significativamente superior. De hecho, otras estimaciones apuntaron a que **el número total de personas fallecidas sería seis veces superior a las últimas cifras de la ONU –10.000– y a que los hechos de violencia se habrían multiplicado significativamente en 2018.** Según los datos de Armed Conflict Locations & Event Data Project (ACLED), 60.233 personas –incluyendo 6.480 civiles– habrían muerto directamente como resultado de la violencia en Yemen entre enero de 2016 y noviembre de 2018. De este total, **28.182 habrían fallecido en los primeros 11 meses de 2018, lo que supondría un incremento de 68% respecto a 2017.** Las cifras ofrecidas por ACLED constataron que **la coalición militar liderada por Arabia Saudita ha sido la principal responsable en las bajas civiles**, 4.614 desde enero de 2016, de las cuales 1.326 en 2018. Los al-houthistas y sus aliados también serían responsables de al menos un millar de víctimas civiles desde 2016, incluyendo 494 en 2018.

Paralelamente, el Grupo de Expertos sobre Yemen con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar los abusos en el país concluyó que todas las partes habían perpetrado y continuaban

perpetrando crímenes y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Tras analizar el período de septiembre de 2014 a junio de 2018, el Grupo también señaló a la coalición liderada por Arabia Saudita como principal responsable de las muertes civiles con ataques aéreos en áreas residenciales, mercados, funerales, bodas, centros de detención e instalaciones médicas –de hecho, una de las ofensivas más polémicas de 2018 se produjo en agosto (después de la publicación del informe del Grupo de Expertos) cuando un ataque a un bus escolar dejó más de 50 personas fallecidas, incluyendo 40 menores. Otros abusos cometidos por las partes en conflicto en Yemen incluían ataques indiscriminados, asedios, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, reclutamiento de menores y restricciones a la libertad de expresión. Respecto a otros impactos, cabe destacar que las cifras de letalidad citadas no contemplan las muertes indirectas causadas por el conflicto armado, como resultado de enfermedades o de hambruna, y que Save the Children estimó en miles de personas. Durante 2018 Yemen continuó siendo el país con la peor crisis humanitaria a nivel mundial, según la ONU. Al finalizar el año, **el número de personas necesitadas de asistencia superaba los 24 millones, de las cuales 11,3 millones eran menores de**

edad. La población que padecía hambre aumentó en un 15% en 2018, alcanzando los 20 millones de personas. Asimismo, 3,9 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares en los últimos tres años a causa de la violencia.

A lo largo de 2018 el conflicto armado se libró en numerosos frentes y las dinámicas de violencia se vieron afectadas por las divisiones y luchas internas en los bandos en pugna. A la confrontación principal

entre fuerzas pro y anti al-houthistas, se sumaron la fragmentación del bloque al-houthista-Congreso General del Pueblo (GPC) –tras el asesinato del ex presidente Alí Abdulah al Saleh y líder del GPC a fines de 2017– y las hostilidades entre el Gobierno de Hadi y sectores secesionistas del sur agrupados en el Consejo de Transición del Sur (STC), apoyados por Emiratos Árabes Unidos. Los choques entre las fuerzas de Hadi y los grupos separatistas se libraron principalmente en Adén y provocaron decenas de víctimas mortales. El STC tomó el control de la ciudad en enero y a partir de entonces EAU y Arabia Saudita mediaron para intentar una tregua. Sin embargo, las diferencias y los choques continuaron a lo largo del año. Paralelamente, tras la ruptura con el GPC los al-houthistas rediseñaron la estructura de gobierno en la capital, Sanaa, mientras que sectores próximos a Saleh buscaron alianzas con las fuerzas del sur para combatir a los al-houthistas. En tanto, los choques entre al-houthistas y el conglomerado de actores contrarios al grupo armado se libraron principalmente en Taiz (costa del Mar Rojo), en al-Bayda (sur), en Saada y Hajja (norte) y sobre todo en Hodeida, punto de acceso para el 80% de los bienes que ingresan

al país. Según ACLED, esta localidad (Mar Rojo) fue el principal escenario de la violencia y concentró el 37% del total de bajas civiles en Yemen en 2018. Hodeida, en manos de los al-houthistas, se vio crecientemente cercada por las tropas de la coalición, principalmente por EAU y sus aliados. El destino de este puerto fue una de las principales preocupaciones del nuevo enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, que asumió el cargo en marzo y, desde entonces, intentó asegurar un cese de hostilidades en la zona. El conflicto continuó trascendiendo el territorio yemení. A lo largo de todo el año también se registraron lanzamientos de proyectiles de los al-houthistas hacia Arabia Saudita. El reino saudí denunció ataques y/o la intercepción de cohetes en áreas como Najran, Jizan y Khamis Mushait (sur) y algunos contra la capital, Riad. Yemen siguió siendo percibido, además, como escenario de una confrontación indirecta entre Arabia Saudita e Irán, y persistieron las denuncias –de Riad, pero también de otros actores– sobre el apoyo a los al-houthistas por parte de Irán y Hezbollah.

No fue hasta el último trimestre de 2018 que se registraron señales conducentes a un diálogo entre las partes en disputa, en un contexto internacional de alerta por el impacto del conflicto en la población civil, la amenaza de hambruna y el revuelo mundial por el asesinato del periodista saudí Jamal Kashoggi (octubre).³² Tras un fallido intento de negociaciones en septiembre en Ginebra, las gestiones del enviado especial de la ONU derivaron en algunas medidas de confianza. A mediados de noviembre Arabia Saudita comunicó una pausa en su ofensiva y días más tarde los al-houthistas anunciaron que suspendían el lanzamiento de misiles y que estaban listos para un cese el fuego más amplio. Finalmente, **delegaciones de los al-houthistas y del Gobierno de Hadi se reunieron en Suecia entre el 6 y 13 de diciembre y alcanzaron el Acuerdo de Estocolmo.** El pacto –presentado como un consenso con fines humanitarios y no como parte de un acuerdo político sobre el fondo del conflicto– estableció un cese el fuego para Hodeida y los puertos adyacentes de Salif y Ra's Isa, la activación de un mecanismo para el intercambio de prisioneros y un principio de entendimiento sobre la ciudad de Taiz. La ONU refrendó el acuerdo a través de la aprobación de la resolución 2451 del Consejo de Seguridad, que contempla que la organización supervisará la implementación del pacto. Al finalizar el año, las partes continuaban comprometidas con el cese el fuego, pero se acusaban mutuamente de infracciones al acuerdo, y las gestiones para intentar facilitar el acceso de ayuda humanitaria continuaban bloqueadas. En este contexto, algunos analistas advertían sobre la fragilidad del acuerdo, señalando elementos como el abreviado cronograma de implementación del cese el fuego en Hodeida o la exclusión de las conversaciones de algunos actores relevantes con capacidad para boicotear el pacto.

Yemen (AQPA)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, AQPA/Ansar Sharia, ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, EAU, milicias tribales, milicias al-houthistas
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

Afectado por múltiples conflictos y desafíos internos, en los últimos años el Gobierno yemení ha enfrentado una fuerte presión internacional –sobre todo de EEUU y Arabia Saudita– para dedicar esfuerzos a la lucha contra al-Qaeda en el país, especialmente tras la fusión de la rama saudí y yemení de la organización que a comienzos de 2009 dio origen a al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). Si bien la presencia de al-Qaeda en Yemen se registra desde los noventa –con episodios de alta repercusión como el atentado suicida contra el barco de guerra estadounidense USS Cole en 2000–, se ha observado una escalada en sus acciones. En diciembre de 2009 el fallido atentado contra un avión que se dirigía a Detroit centró la atención internacional en AQPA, considerado por EEUU como una de las principales amenazas a su seguridad. Aprovechando el vacío de poder en Yemen en el marco de la revuelta contra el presidente Alí Abdullah Saleh, AQPA amplió sus operaciones en el sur del país y las zonas bajo su control. A partir de 2011, el grupo comenzó a realizar algunas de sus acciones bajo la denominación Ansar Sharia (Partidarios de la Ley Islámica) y desde mediados de 2014 AQPA se vio crecientemente involucrada en enfrentamientos con milicias al-houthistas que avanzaron posiciones desde el norte de Yemen. AQPA ha aprovechado el clima de inestabilidad y la escalada de violencia en el país a partir de marzo de 2015 –en el marco del conflicto entre los al-houthistas y las fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi– y se ha enfrentado a ambos bandos. Este escenario también ha favorecido el ascenso de ISIS, que ha comenzado a reivindicar diversas acciones en el país.

A lo largo de 2018, las filiales en Yemen de Al-Qaeda y de ISIS –de implantación más reciente en el territorio– continuaron protagonizando algunas acciones armadas en el país. Sin embargo, la información sobre sus actividades quedó eclipsada por las dinámicas del conflicto principal que afecta al país y que enfrenta a las fuerzas al-houthistas contra un conglomerado de actores integrado por el Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, la coalición militar liderada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU) y por sectores secesionistas del sur yemení, entre otros.³³ Durante el primer semestre trascendieron informaciones sobre algunas ofensivas de estos grupos, como el ataque de ISIS a la unidad contraterrorista en Adén (sur), en enero –14 víctimas mortales, más de 40 personas heridas–, el coche bomba contra otras instalaciones militares de esta ciudad, en marzo –siete personas fallecidas– o la ofensiva de AQPA contra fuerzas de élite de EAU en un puesto de control en Mukalla (sures-

32. Véase el resumen sobre Yemen en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2019. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2018.
33. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en este capítulo.

te) –nueve soldados muertos–, también en marzo. Sin embargo, una de las informaciones más relevantes se dio a conocer en agosto, cuando **una investigación de la agencia de noticias Associated Press (AP) concluyó que la coalición militar que intervino en Yemen contra las fuerzas al-houthistas habría alcanzado una serie de pactos con AQPA.** Según la investigación, la coalición habría pagado a algunos comandantes de al-Qaeda para que abandonaran ciudades y pueblos y habrían dejado a otros retirarse de determinadas áreas con equipos, armas y grandes sumas de dinero. El informe de AP determinó que otros centenares de combatientes de al-Qaeda habrían sido reclutados para unirse a la coalición como combatientes. La agencia AP y algunas personas expertas destacaron que EEUU estaría al tanto de los acuerdos, que habría aceptado demorar sus ataques con drones contra posiciones de AQPA y que estaría privilegiando apoyar la campaña contra los al-houthistas –percibidos como aliados de Irán– por sobre la batalla contra la filial de al-Qaeda en Yemen. En esta línea, cabe destacar que **el balance de ataques aéreos de EEUU en Yemen registró una significativa reducción en 2018, con 36 ofensivas, respecto al récord de 125 contabilizado el año anterior.** Uno de estos ataques ocurrido a finales de noviembre de 2018, en al-Bayda, provocó varias bajas entre las filas de AQPA.

Citando a varias fuentes en el terreno, AP también denunció que algunos de los anuncios de victoria y recaptura de territorios a AQPA por parte de EAU –por ejemplo en el área de al-Said, en la montañosa provincia de Shabwa (sur)– eran en realidad resultado de los acuerdos de repliegue. El informe de AP precisó que en el marco del acuerdo miles de combatientes tribales se han integrado en las milicias Fuerzas de Elite de Shabwa –financiada por EAU– y que por cada millar de combatientes, entre 50 y 70 serían miembros de AQPA. EAU respondió al informe de AP negando haber establecido acuerdos secretos con AQPA, aseguró haber entrenado a cerca de 60.000 yemeníes para hacer frente a la amenaza de al-Qaeda y aseveró que desde 2015 más de un millar de miembros de AQPA habían muerto en el marco de la campaña contra el grupo. Según estimaciones, AQPA contaría con entre 6.000 y 8.000 efectivos. Finalmente, cabe mencionar que informaciones de prensa advirtieron sobre los intercambios de acusaciones entre las filiales de ISIS y al-Qaeda a través de sus medios de propaganda y de los enfrentamientos directos entre ambos grupos, en especial en la zona de al-Bayda. **Uno de estos choques, en julio, habría causado la muerte de 14 combatientes de AQPA y 22 de ISIS.** Algunos analistas identificaron un progresivo declive de ISIS en Yemen desde 2016, en parte por su incapacidad de controlar territorio y de profundizar los vínculos con tribus locales.

Las fuerzas de seguridad egipcias lanzaron la campaña “Sinaí 2018” contra ISIS, que involucró a miles de efectivos y que tuvo graves impactos humanitarios en la población

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasam), Israel
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona.

La zona del Sinaí continuó siendo el principal escenario de la confrontación entre el grupo armado ISIS y las fuerzas de seguridad. Al igual que en años previos, el impacto de la violencia asociada a este conflicto fue complejo de determinar debido a la falta de acceso de prensa, ONG y otros actores independientes al área de las hostilidades y a las dudas sobre la fiabilidad de las cifras oficiales. Teniendo en cuenta estas limitaciones, **los datos disponibles y recuentos parciales a partir de informaciones de prensa indicarían que el conflicto provocó la muerte de al menos 500 personas en 2018, una cifra menor al balance estimado del año anterior (900).**

El año estuvo marcado por la operación militar desplegada en la región a partir de febrero, denominada “Sinaí 2018”, que según informó el Gobierno supuso el despliegue de 60.000 efectivos

y que incluyó operaciones aéreas que en algunos momentos contaron con la colaboración de Israel. A lo largo del año, se sucedieron las informaciones sobre supuestos militantes muertos por las fuerzas de seguridad en el marco de la ofensiva y sobre un limitado número de bajas entre los militares. Según un balance dado a conocer por el Ejército a mediados de octubre, 450 combatientes de ISIS y una treintena de soldados habían fallecido en los primeros ocho meses de ofensiva. No obstante, según otras fuentes, solo en un ataque de ISIS perpetrado en abril habrían muerto al menos una veintena de militares. En este contexto, algunas informaciones y análisis apuntaron a un cambio en las tácticas de ISIS, al optar principalmente por ataques con artefactos explosivos, sin capacidad de promover acciones más sofisticadas como en años previos. Esta evolución se interpretó entonces como una posible señal del debilitamiento del grupo, en el marco de un retroceso más general por la pérdida de control de territorios por parte de ISIS en países como Iraq y Siria. No obstante, al finalizar el año ISIS reivindicó algunas acciones de alta repercusión que descartaron las hipótesis que sugerían una pronta derrota del grupo en Egipto y la anulación de sus capacidades para actuar dentro y fuera del Sinaí. Entre estas acciones cabe destacar un ataque contra un bus de peregrinos coptos en la zona de Minya, que dejó siete personas muertas, en noviembre; y otro ataque explosivo en la zona de Giza, en el sur de El Cairo, que provocó la muerte a tres turistas vietnamitas y a su guía local. En ambos casos, en menos de 48 horas las autoridades anunciaron la ejecución de 19 y 40 presuntos militantes, respectivamente, por su supuesta implicación en los ataques.

En este contexto, cabe destacar que diversas voces llamaron la atención sobre la forma en que el Gobierno estaba librando la operación contra ISIS y el impacto de la campaña en la población civil. Así, por ejemplo, **Amnistía Internacional denunció en marzo el uso de arsenales prohibidos, en concreto bombas de racimo de fabricación estadounidense, por parte de las fuerzas egipcias en sus operaciones aéreas en el norte del Sinaí.** La ONG Human Rights Watch (HRW), por su parte, advirtió en abril que la campaña militar en el Sinaí había expuesto a más de 420.000 personas a necesidades humanitarias, debido a las severas restricciones impuestas y sus repercusiones en los suministros de alimentos, medicinas, combustible y otros bienes esenciales. En mayo HRW también denunció que desde el inicio de la ofensiva “Sinaí 2018” el Ejército egipcio intensificó su campaña de demoliciones de hogares, comercios, granjas en el Sinaí, en la mayor destrucción desde que se iniciaron las expulsiones forzadas en la zona en 2014. Las demoliciones, principalmente en las áreas de Rafah y Al-Arish, se presentan como parte de las acciones para crear una zona de separación, pero HRW alertó que también se estaría utilizando como medida de

castigo contra sospechosos de terrorismo y disidentes políticos. Adicionalmente, en 2018 las críticas al régimen egipcio incluyeron cuestionamientos sobre el debido proceso a los sospechosos de terrorismo. Cabe mencionar que este conflicto transcurrió en un contexto político marcado por la intensa represión a la disidencia y la reafirmación en el poder de Abdel Fattah al-Sisi, que fue reelecto en marzo con más de 90% de la votación en unas cuestionadas elecciones.³⁴ Durante 2018, el Gobierno renovó sistemáticamente el estado de emergencia impuesto en el país desde 2017. Finalmente, cabe mencionar que durante el año también se produjeron algunas acciones atribuidas al grupo armado Hassm, al que se vincula con los Hermanos Musulmanes. La mayor acción se produjo en marzo, con un ataque que tenía por objetivo el jefe de seguridad de Alejandría y que resultó en la muerte de dos policías.

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU; Irán, Turquía
Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:

La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores: tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de poder entre grupos sunníes, chiíes y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiíes y sunníes, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU.

Durante 2018 se observó una **reducción de las hostilidades en Iraq en comparación con años previos,**

34. Véase el resumen sobre Egipto en el capítulo 2 (Tensiones).

aunque el país continuó siendo escenario de un conflicto armado de alta intensidad. Los balances sobre el número de víctimas del conflicto continuaron siendo parciales, estimativos y centrados en el número de bajas civiles, pero en términos generales apuntaron a un descenso en la letalidad. Según los datos de la misión de la ONU en Iraq, UNAMI, en 2018 fallecieron al menos 939 civiles en hechos de violencia en el país, frente a los 3.300 de 2017. Siguiendo la tendencia de años previos, los balances de la organización Iraq Body Count (IBC) fueron más elevados e indicaron un total de 3.319 muertes civiles en 2018 (13.183 de 2017). Pese a las diferencias en las estimaciones, los datos confirmarían que los niveles de letalidad a causa del conflicto habrían descendido a los niveles más bajos en seis años. Ello, después de un período de violencia de gran intensidad en el país a causa del ascenso de ISIS y la campaña militar para erradicar al grupo armado que implicó a numerosos actores armados, incluyendo las fuerzas de seguridad iraquíes, milicias shííes (Unidades de Movilización Popular, UMP) y a la coalición internacional contra ISIS liderada por EEUU, entre otros.

Aunque el Gobierno iraquí anunció el fin de la lucha contra ISIS a finales de 2017 –después de que el grupo sufriera severas derrotas, entre ellas la expulsión de su principal bastión, Mosul–, en 2018 la organización continuó reivindicando hechos de violencia, sobre todo en el norte y este de Iraq. La mayor parte de los incidentes se concentró en las provincias de Diyala, Kirkuk, Nineveh y Salah al-Din y muchos de los ataques de ISIS se dirigieron contra las fuerzas de seguridad iraquíes y las UMP, que continuaron desplegando operaciones contra el grupo armado. Durante el año las fuerzas militares iraquíes también lanzaron ataques aéreos contra posiciones de ISIS en el este de Siria (especialmente en las localidades fronterizas de Hajin y Dashishah), con el visto bueno del Gobierno sirio. En estas ofensivas habrían muerto decenas de militantes de ISIS. **Según datos de la ONU a mediados de 2018, ISIS contaba aún con entre 20.000 y 30.000 combatientes, entre Iraq y Siria.** Los abusos cometidos por el grupo armado, que entre 2014 y 2017 controló extensas áreas de Iraq, continuaron saliendo a la luz durante el año. De acuerdo a un informe de la UNAMI y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, hasta la fecha de su publicación, en noviembre de 2018, se habían identificado más de 200 fosas comunes –la mayor parte de ellas en las provincias de Ninewa (95), Kirkuk (37), Salah al-Din (36) y Anbar (24)– que albergarían los cuerpos de entre 6.000 y 12.000 personas víctimas de ISIS, entre ellas mujeres, menores, personas ancianas, integrantes del Ejército y la Policía y algunos trabajadores extranjeros. Más de 1.200 restos habían sido exhumados, pero el

Durante 2018 Iraq vivió una reducción de las hostilidades en comparación con años previos, aunque el país continuó siendo escenario de un conflicto armado de alta intensidad

Gobierno iraquí enfrentaba numerosos retos para esta tarea, investigar y asegurar justicia y rendición de cuentas por estos hechos. Paralelamente, Human Rights Watch denunció que menores detenidos por presuntos vínculos con ISIS estaban siendo objeto de torturas para extraer confesiones. Un informe de la ONG señaló específicamente a las fuerzas de seguridad kurdas en Erbil por prácticas que incluirían golpes y electroshocks.

La situación política y de seguridad en Iraq en 2018 también se vio determinada por los retos relacionados con la integración de las milicias shííes dentro del marco institucional, por la celebración de elecciones y posterior configuración de un nuevo gobierno y por el malestar y las intensas protestas en el sur del país. Respecto a lo primero, durante el año se confirmó que las UMP o Hashd al-Shaabi –conglomerado que reúne a unos 50 grupos

paramilitares– aprovechaban las ambigüedades de su condición legal para ampliar sus esferas de acción, trascendiendo el ámbito de la seguridad para alcanzar también la esfera política y económica. Basándose en su amplia popularidad por su papel en la campaña contra ISIS, sobre todo entre la población shíí, las UMP –consideradas unidades autónomas bajo la autoridad del Consejo Nacional de Seguridad (civil)– se involucraron en tareas de reconstrucción y algunos de sus dirigentes, percibidos como próximos a Irán, se presentaron a las elecciones de mayo. Su bloque electoral, Alianza Fatah, liderado por Hadi al-Ameri, obtuvo el segundo lugar en los comicios. Las elecciones parlamentarias también condicionaron la situación en el país a lo largo de todo el año, por las tensiones previas a los comicios, los episodios de violencia pre y postelectoral, las acusaciones de fraude, el proceso de recuento de votos en algunas áreas y los problemas para la formación de un nuevo gobierno. La votación contó con una participación de 44,5% –menor que el 62% en 2014– y arrojó como vencedor al bloque liderado por el clérigo shíí Moqtada al-Sadr. Las negociaciones para la configuración del nuevo Ejecutivo resultaron en octubre en la asunción de un nuevo gobierno, con Adel Abdul Mahdi como primer ministro, tras el consenso entre las formaciones shííes de al-Sadr y al-Ameri. Sin embargo, al finalizar el año, persistían las disputas para definir puestos clave del gabinete, como Interior y Defensa. Además, a mediados de año hubo protestas populares en el sur, que se extendieron desde Basora a otras nueve provincias, para denunciar la inoperancia del Estado, la falta de servicios básicos y el elevado desempleo. Las movilizaciones fueron más intensas que otros años, incluyeron ataques contra intereses iraníes –país señalado por su rol dominante en la política iraquí– y fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad con más de 50 personas fallecidas y centenares de heridas. Asimismo, a lo largo

de 2018 continuaron evidenciándose las tensiones entre las autoridades del Gobierno federal y las de la Región Autónoma de Kurdistán (KRG)³⁵. El norte del país siguió siendo escenario de numerosos ataques del Ejército turco contra posiciones del PKK.³⁶

En cuanto a la situación humanitaria, según los datos de OCHA, 6,7 millones de personas –incluyendo 3,3 millones de menores– continuaban necesitadas de ayuda. Al finalizar el año cuatro millones de personas habían retornado a sus zonas de origen, pero dos millones continuaban desplazadas. Desde una perspectiva de género, y en clave positiva, **cabe destacar la creación, en octubre, del Grupo Asesor de Mujeres en Políticas y Reconciliación. El grupo asistirá a la UNAMI, que desde 2018 está dirigida por primera vez por una mujer**, la enviada especial Jeanine Hennis-Plasschaert (Holanda).

El conflicto palestino-israelí registró los peores niveles de violencia desde 2014

Israel – Palestina	
Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ³⁷
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinicia en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU divide el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclama el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la guerra de 1948-49 Israel se anexiona Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasan a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupa Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se verá impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

El conflicto palestino-israelí se intensificó significativamente en 2018 y registró los peores niveles de violencia desde 2014. Según los balances de OCHA, un total de

299 personas palestinas murieron durante el año en hechos de violencia directa, frente a las 77 que fallecieron en 2017. La cifra de israelíes que perdieron la vida en el marco del conflicto se mantuvo en niveles similares, 14 en 2018 frente a 15 en 2019. Gaza fue el principal escenario de la violencia en 2018. Las hostilidades se intensificaron tras la severa respuesta de las fuerzas israelíes a las masivas manifestaciones palestinas para conmemorar el 70º aniversario de la Nakba o Catástrofe, en referencia a la expulsión de 750.000 palestinos de sus casas y pueblos en el marco del establecimiento de Israel en 1948. **Las protestas se iniciaron a finales de marzo y continuaron después del aniversario, el 15 de mayo, y hasta finales de año habían derivado en la muerte de más de 200 personas palestinas y en más de 18.000 heridas.** Las manifestaciones congregaron semanalmente a decenas de miles de personas desarmadas a lo largo de la valla que separa Gaza e Israel y reivindicaron el derecho al retorno de la población refugiada. Inicialmente, Hamas se limitó a dar apoyo a las movilizaciones y posteriormente, a los grupos de manifestantes que comenzaron a lanzar artefactos incendiarios hacia Israel. Ante la dura respuesta israelí a las protestas, Hamas y la Jihad Islámica iniciaron el lanzamiento de proyectiles. En este contexto, las hostilidades entre ambas partes se agudizaron y a mediados de año ya eran consideradas como las más graves de los últimos cuatro años. En julio, Israel decidió endurecer el bloqueo a la Franja, restringiendo incluso las importaciones de carácter humanitario (alimentos y medicinas) y reduciendo el área de pesca en el Mediterráneo, entre otras medidas.

En los meses siguientes la violencia en esta zona persistió y no fue hasta noviembre que los intentos por fraguar una tregua, bajo los auspicios de Egipto y del enviado especial de la ONU para Oriente Medio, Nickolay Mladenov, rindieron algunos frutos.³⁸ El acuerdo indirecto de cese el fuego estuvo a punto de romperse menos de una semana después tras el descubrimiento de una operación encubierta israelí que resultó en un intercambio de fuego en el que murió un alto cargo de las Brigadas Qassam, brazo armado de Hamas, y de otros seis militantes, además de un coronel israelí. Tras dos días de intensificación de la violencia, el grupo palestino anunció que retornaba al cese el fuego e Israel suspendió sus bombardeos, aunque sin hacer ninguna declaración. En este contexto, el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, renunció a su cargo y anunció la retirada de su partido de la coalición de Gobierno, denunciando lo que consideraba como una rendición. Hasta finalizar el año, el cese el fuego entre Hamas e Israel se mantenía, pero en un clima de desconfianza entre las partes. A lo largo de todo el año,

35. Véase el resumen sobre Iraq (Kurdistán) en el capítulo 2 (Tensiones).

36. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en este capítulo.

37. A pesar de que “Palestina” (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina como “internacional” y no como “interno” por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

38. Véase el resumen sobre Israel-Palestina en Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2019. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2019.

Cisjordania también fue escenario de múltiples hechos de violencia, con incidentes en zonas como Ramallah, Jericó, Jenín, Nablus o Tulkarem. Al finalizar 2018, las fuerzas israelíes realizaron operaciones y numerosos arrestos en Cisjordania después de ataques palestinos contra colonos que resultaron en tres israelíes y cinco palestinos muertos. Cabe destacar que según los datos de OCHA, **los ataques de colonos israelíes que resultaron en daños a población y propiedades palestinas registraron en 2018 su peor nivel desde 2014. En los primeros diez meses del año la agencia de la ONU había contabilizado 217 incidentes** –incluyendo daños en áreas agrícolas, lanzamiento de piedras y varias formas de asalto físico– que causaron la muerte a tres palestinos y dejaron heridos a otros 83, incluyendo 20 menores.

Finalmente, cabe destacar otros hechos que afectaron las dinámicas del conflicto, entre ellas la **aprobación en julio por el Parlamento israelí de la ley que define a Israel como el Estado del pueblo judío, discriminando así a la población árabe-israelí**. La medida motivó el rechazo de múltiples actores, incluyendo la Liga Árabe y la Unión Europea. En paralelo, durante 2018 EEUU adoptó una serie de medidas que fueron denunciadas por las autoridades palestinas como una muestra de su alineamiento con los intereses y la narrativa israelí, incluyendo el traslado de su embajada a Jerusalén –en medio de la dura campaña de represión a las protestas en Gaza–, la suspensión del financiamiento a la agencia de la ONU para la población refugiada palestina (UNRWA) o el cierre de la oficina de la OLP en Washington, entre otras. El Gobierno de EEUU continuó con sus gestiones para preparar lo que ha calificado como el “acuerdo del siglo” para resolver el conflicto, pero al finalizar el año no había dado a conocer el plan. Según algunos análisis, el posicionamiento de EEUU ha influido en el endurecimiento de las políticas israelíes hacia Palestina y la decisión del Gobierno de Netanyahu de rebajar la tensión en la zona de Gaza respondería principalmente a evitar riesgos que pudieran afectar su postulación de cara a la celebración de elecciones previstas para 2019.

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio, a nivel internacional el régimen se ha caracterizado por sus políticas hostiles hacia Israel, y en el plano interno por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del *establishment*, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alertaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa se ha complejizado y ha adquirido una creciente dimensión regional e internacional.

Siguiendo la tendencia de años anteriores, el conflicto armado en Siria se caracterizó en 2018 por elevados niveles de violencia; implicación de numerosos actores armados locales, regionales e internacionales (con alianzas fluidas y variables, en algunos casos); enfrentamientos en múltiples frentes en el país con diversa intensidad a lo largo del año y graves impactos en la población civil. El balance de víctimas mortales continuó siendo muy complejo de precisar por las dificultades de acceso a zonas de combate y los obstáculos para contrastar y verificar la información. Pese a ello, algunas organizaciones ofrecieron estimaciones que indicarían un cierto descenso en los niveles de letalidad del conflicto en 2018, aunque las cifras continuaban siendo muy elevadas. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR, por sus siglas en inglés), con sede en Reino Unido, **un total de 20.000 personas murieron a causa del conflicto durante el año, de las cuales cerca de 6.500 serían civiles, incluyendo más de 1.400 menores**. Estas cifras suponen una reducción respecto a los datos del mismo centro para 2017, año en que habrían fallecido 33.400 personas –entre ellas 10.000 civiles– y podrían ser las más bajas desde el inicio de las hostilidades. Los balances generales de SOHR apuntan a que el total de víctimas mortales del conflicto armado desde su inicio en 2011 supera ya el medio millón de personas e indican que el año más cruento fue 2014, con unas 76.000 personas fallecidas. Naciones Unidas dejó de ofrecer estimaciones de víctimas del conflicto en 2016 y su último balance oficial, de 400.000 personas, estaba basado en datos de 2014. **Los análisis de Armed Conflict & Event Data Project (ACLED), en tanto, concluyeron que en 2018 Siria fue el país con más muertes entre la población civil a causa de hechos de violencia**, con cerca de 7.100 personas fallecidas. Esta cifra sería prácticamente equivalente a la suma de civiles muertos en los conflictos de Nigeria, Yemen, Afganistán y Filipinas, los otros cuatro países que encabezan la lista de los más letales para civiles, según ACLED. El conflicto en Siria tuvo otros diversos impactos en la población civil. **La ONU informó que 2018 fue el año con mayores**

cifras de desplazamiento forzado en Siria desde el inicio de las hostilidades, con más de un millón de personas forzadas a huir de sus hogares. Además, a lo largo de 2018 continuaron registrándose vulneraciones al derecho internacional humanitario, con ataques contra escuelas, infraestructuras de salud y personal médico; y se produjeron ataques con armas químicas (en Ghouta Oriental, en enero; Douma, en abril; y Aleppo, en noviembre) atribuidos al régimen de Bashar al-Assad.

Por lo que respecta a la evolución del conflicto, en términos generales **durante 2018 se observó un avance de las tropas del régimen en el control de territorios que estaban en manos de grupos de la oposición y se constató la gran influencia de actores regionales e internacionales en las dinámicas de la disputa, con intervenciones directas en territorio sirio.** El conflicto se libró con variados niveles de intensidad en varios frentes –principalmente en Ghouta Oriental (área de Damasco) y en zonas del noroeste (Idlib, Afrin), noreste, este (Dayr-al-Zawr, área fronteriza con Iraq) y suroeste (áreas próximas a Jordania e Israel)– y las diversas iniciativas para promover un cese en la violencia no dieron frutos o tuvieron un impacto muy limitado. De hecho, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en febrero una resolución (2401) en la que demandó un cese inmediato de las hostilidades, pero desde entonces la violencia continuó y/o se intensificó en algunas áreas. A comienzos de año uno de los principales focos de violencia fue Ghouta Oriental, bastión rebelde en las afueras de la capital siria. Las fuerzas gubernamentales lanzaron una intensa campaña para expulsar a fuerzas opositoras de la zona, que acabó dividida en tres partes no contiguas, cada una bajo control de un grupo armado (Faylaq al-Rahman, Ahrar al-Sham y Jaish al-Islam). Solo en febrero, en un lapso de diez días, murieron más de 580 civiles a causa de las hostilidades. Más de 158.000 personas abandonaron la zona, principalmente con destino a Idlib y Alepo (noroeste) tras acuerdos de evacuación entre el Gobierno y grupos armados, sin participación de la ONU. En mayo, el régimen de Damasco ya había solidificado su control sobre Ghouta Oriental y el campo de personas refugiadas palestinas de Yarmouk. A partir de ese momento, el Gobierno intensificó sus operaciones militares en el suroeste, con ataques aéreos y de artillería en la zona de Deraa, Quneitra y en áreas fronterizas con Jordania. La ofensiva puso fin así al acuerdo negociado entre Jordania, Rusia y EEUU que había permitido una significativa reducción de la violencia en la zona desde mediados de 2017. Hacia finales de julio las fuerzas del régimen habían asumido el control de la mayor parte de esta región, después de que el Gobierno y Rusia forzaran la rendición de la mayor parte de grupos rebeldes. La violencia motivó en esta área el desplazamiento forzado

Según estimaciones, un total de 20.000 personal murieron a causa del conflicto armado en Siria en 2018, de las cuales cerca de 6.500 serían civiles

de más de 325.000 personas, de las cuales unas 60.000 permanecían desplazadas al finalizar 2018, en una grave situación humanitaria. Cabe destacar que en esta región, en particular en la zona próxima a los Altos del Golán, también se produjeron numerosos incidentes producto de la tensión entre Israel, Siria e Irán por la presencia de fuerzas iraníes en el territorio sirio, incluyendo derribos de drones, intercambios de fuego de artillería y ataques israelíes en Siria contra presuntos objetivos iraníes.³⁹ Fuentes israelíes reconocieron en septiembre que desde 2017 habían lanzado más de 200 ataques contra objetivos iraníes en Siria.

El noroeste de Siria fue escenario de violencia todo 2018, con enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y de la oposición y entre actores armados disidentes –incluyendo choques de la alianza de grupos yihadistas Hay'at Tharir al-Sham (HTS), la más potente de la zona, con otros grupos armados. En esta área, la violencia se intensificó sobre todo a partir de septiembre, en Idlib. En este contexto, en septiembre, Rusia y Turquía pactaron la creación de una zona desmilitarizada en Idlib, una de las “zonas de desescalada”, según acuerdos previos en el marco del proceso de Astaná, de las cuales son valedores Rusia, Irán y Turquía.⁴⁰ Este acuerdo estableció, entre otras cosas, la suspensión de ataques del régimen y de Rusia en una franja de entre 15 y 20 kilómetros y la retirada de armamento pesado de “grupos radicales terroristas” bajo supervisión de Ankara. Algunos grupos consintieron implícitamente (entre ellos el HTS) y otros continuaron sus acciones (como por ejemplo, Wa-Harrid al-Mumineen). El pacto comenzó a implementarse en octubre y al finalizar el año había numerosas denuncias de violaciones en esta área, pero el acuerdo se mantenía formalmente en vigor. La región noroeste también se vio afectada por una grave crisis humanitaria, que se agudizó en 2018 como resultado del flujo de decenas de miles de personas desplazadas internas desde otros puntos del país. Según datos de la ONU, solo entre enero y julio de 2018 el número de personas necesitadas de ayuda aumentó de 520.000 a 4,2 millones en las áreas de Idlib y Aleppo.

En el norte de Alepo, uno de los focos de violencia, desplazamiento forzado y víctimas civiles fue Afrin, después de que fuerzas militares de Turquía y grupos armados sirios aliados de Ankara entraran en el territorio a principios de año con el objetivo de expulsar a las fuerzas kurdas presentes en la zona. Tropas de las YPG en alianza con fuerzas progubernamentales intentaron sin éxito contrarrestar la ofensiva. Paralelamente, EEUU y Turquía crearon un grupo de trabajo sobre Manbij, localidad ubicada a 100 kilómetros de Afrin y bajo control kurdo. A lo largo de todo el año Turquía amenazó con una gran ofensiva contra las fuerzas kurdas que

39. Véase el resumen sobre Israel – Siria – Líbano en el capítulo 2 (Tensiones).

40. Para más información, véase la edición anterior de este informe y Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de Paz 2019. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2019.

controlan buena parte de la frontera noroeste de Siria y con la creación de “zonas seguras” en el norte de Siria. Ankara rechazó los planes de EEUU de crear una fuerza de seguridad fronteriza de 30.000 efectivos en las áreas controladas por las YPG y elevó el tono de sus amenazas tras la instalación por parte de EEUU de algunos puestos de observación en la frontera entre Siria y Turquía. La confusa política de EEUU hacia Siria –con evidentes discrepancias entre altos mandos y el presidente Trump– tuvo un hito al finalizar el año, tras el anuncio de Washington de que retiraría sus tropas (2.000 efectivos) del país. Las SDF rechazaron el anuncio, advirtiendo que tendría consecuencias negativas en la campaña contra ISIS. Analistas alertaron que una retirada rápida y no coordinada podría generar una peligrosa desestabilización de la zona noreste de Siria y exponer a las YPG a un ataque de Turquía. En este contexto, al finalizar el año, tropas del régimen sirio entraron a Manbij tras la petición de ayuda por parte de las YPG ante la posibilidad de un ataque turco. Cabe mencionar que durante 2018 las SDF y el Gobierno sirio entablaron un canal directo de negociaciones, pero que los contactos se encallaron por diferencias sobre temas de descentralización y autonomía.

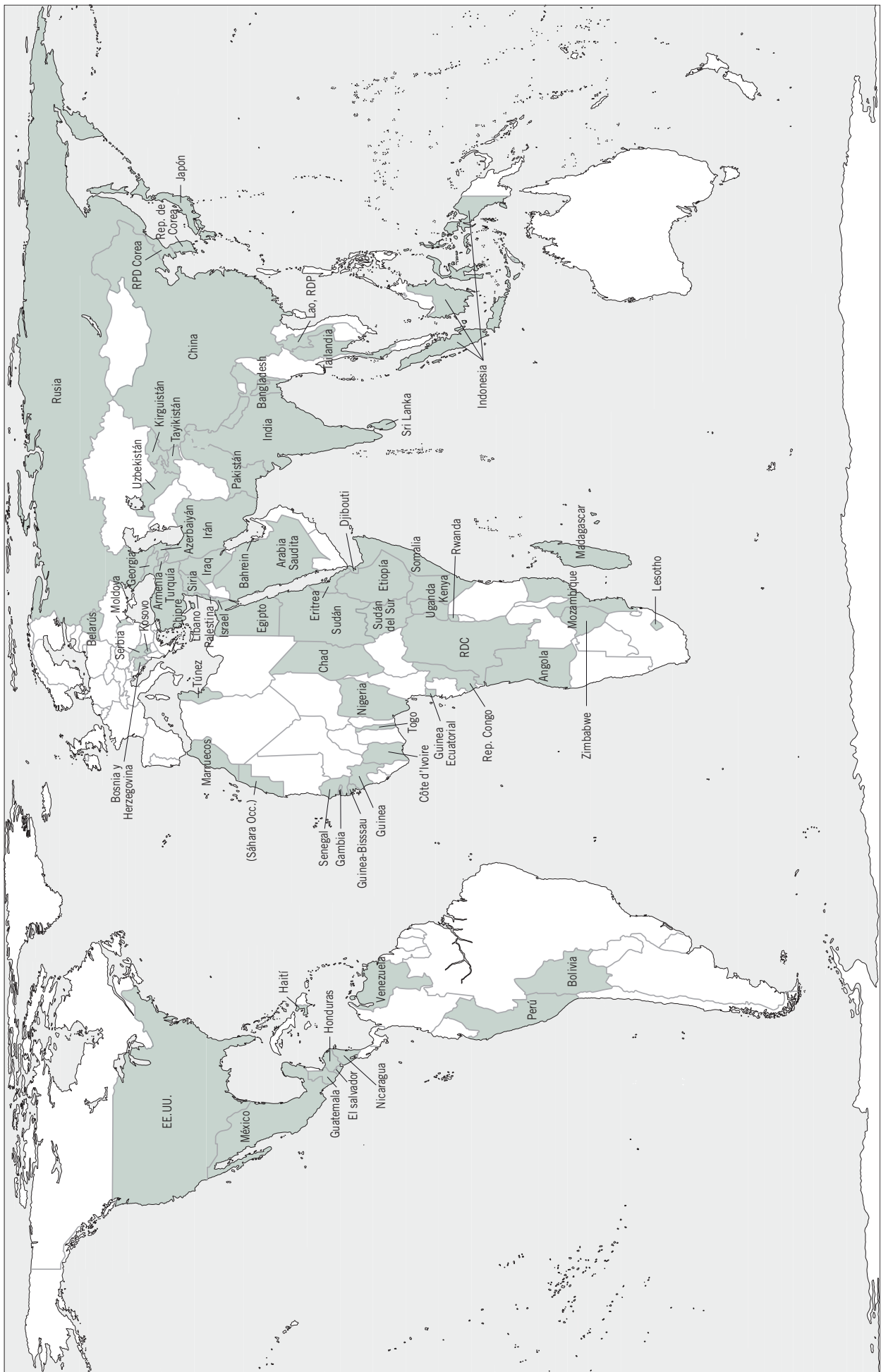
Finalmente, en la región este de Siria, en el área de Dayr-al-Zawr, en especial en la zona próxima al río Éufrates, se produjeron combates entre las SDF, lideradas por las YPG y fuerzas progubernamentales apoyadas por Irán y Rusia, con numerosas víctimas mortales, incluyendo mercenarios rusos. A partir del segundo semestre en esta zona también se intensificaron los combates entre las SDF, con el apoyo de la coalición liderada

A mediados de año, la ONU estimó que había entre 20.000 y 30.000 combatientes de ISIS en Siria e Iraq, aproximadamente la mitad en cada uno de los países

por EEUU, e ISIS, también con graves consecuencias para la población civil. A lo largo del año, ISIS continuó perpetrando ataques suicidas y también aprovechó algunas ofensivas gubernamentales para asumir el control de territorios que estaban hasta entonces en manos de otros grupos armados, como en el caso de HTS en Hama. A mediados de año, la ONU estimó que había entre 20.000 y 30.000 combatientes de ISIS en Siria e Iraq, aproximadamente la mitad en cada uno de los países. A lo largo de 2018 y con la anuencia de Damasco, fuerzas militares iraquíes perpetraron numerosos ataques contra presuntas posiciones de ISIS en poblados sirios fronterizos. Además de estos diversos frentes de batalla, cabe destacar el progresivo retorno de población a Raqqa tras la derrota de ISIS en esta ciudad –a pesar de las numerosas necesidades humanitarias y la fragilidad de la situación de seguridad debido a la presencia de artefactos explosivos– y el fin del asedio a las poblaciones de Fu’ah y Kafraya, cercadas por grupos armados opositores desde 2015.

También cabe mencionar que tras el ataque químico en Douma, en abril, fuerzas de Reino Unido, Francia y EEUU lanzaron un ataque coordinado –con aviso previo a Rusia– contra tres sitios vinculados al programa de armas químicas de Siria. Por último, cabe mencionar que a finales de 2018 el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, anunció su renuncia al cargo después de cuatro años de esfuerzos infructuosos por buscar una salida política al conflicto. En sus últimos mensajes, el diplomático demandó unir esfuerzos para poner fin a la guerra y pidió intensificar la presión al régimen sirio. El diplomático noruego Geir Petersen fue designado como sucesor de Staffan de Mistura.

Mapa 2.1. Tensiones



■ Países con situaciones de tensión en 2018

2. Tensiones

- Durante 2018 se registraron 83 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (33) y Asia (18), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron en Europa (12), Oriente Medio (11) y América (nueve).
- En la zona oeste de la RDC enfrentamientos armados entre comunidades bnyu y batende dejaron alrededor de 890 personas muertas y 16.000 desplazadas.
- La crisis económica y política en Sudán desató importantes protestas ciudadanas que fueron reprimidas con dureza por el Gobierno, con un balance de al menos 37 personas muertas.
- El aumento de la inseguridad y la violencia en las regiones centro, noreste y noroeste de Nigeria agravó la situación de inestabilidad en el país.
- Nicaragua vivió la crisis más grave de las últimas décadas, con un balance al finalizar el año de entre 200 y más de 560 víctimas mortales.
- En Venezuela se incrementó el número de protestas y se agudizó la tensión entre el Gobierno y la oposición a raíz de las elecciones presidenciales, cuyos resultados no reconoce ni la oposición ni parte de la comunidad internacional.
- La tensión entre India y Pakistán se mantuvo en niveles muy elevados con decenas de muertos como consecuencia de los intercambios de fuego en la frontera.
- Se incrementaron las denuncias por la situación de los derechos humanos en la provincia china de Xinjiang, especialmente respecto de la existencia de campamentos de reeducación para población uigur.
- El asesinato del periodista disidente Jamal Kashoggi en el consulado saudí en Estambul tuvo una gran repercusión mediática y expuso las políticas represivas de Arabia Saudita al escrutinio internacional.
- La tensión entre Israel, Siria y Líbano se intensificó durante 2018, en parte como consecuencia de las dinámicas del conflicto sirio y de los recelos ante la influencia de Irán en ese país.

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2018. Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2018. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan Los países afectados por situaciones de tensión durante 2018.

2.1. Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en 2018

Tensión ²	Tipología ³	Actores principales	Intensidad ⁴
			Evolución ⁵
África⁵			
África Central (LRA)	Internacional	Fuerza Regional de la UA (RTF, compuesta por Fuerzas Armadas ugandesas, congoleesas y sursudanesas), Operación Observant Compass (EEUU), milicias de autodefensa de RDC y de Sudán del Sur, LRA, ex coalición armada centroafricana Séléka	1
	Recursos		↓
Angola (Cabinda)	Interna	Gobierno, grupo armado FLEC-FAC, Foro Cabindés para el Diálogo	2
	Autogobierno, Recursos		↓
Chad	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno, Recursos, Territorio		↑
Congo, Rep. del	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↓
Côte d'Ivoire	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias leales al ex presidente Laurent Gbagbo, mercenarios, ONUCI	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		=
Djibouti	Interna	Gobierno, grupo armado FRUD, oposición política y social (coalición UAD/USN)	1
	Gobierno		=
Eritrea	Interna internacionalizada	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFD, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos	2
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↓
Eritrea – Etiopía	Internacional	Eritrea, Etiopía	1
	Territorio		↓
Etiopía	Interna	Gobierno (coalición EPRDF, liderada por el partido TPLF), oposición política y social, diversos grupos armados	3
	Gobierno		↓
Etiopía (Oromiya)	Interna	Gobierno central, Gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Gambia	Interna	Gobierno, sectores del Ejército, oposición política	1
	Gobierno		↓
Guinea	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos	1
	Gobierno		↑
Guinea-Bissau	Interna internacionalizada	Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, oposición política, redes internacionales de narcotráfico	1
	Gobierno		=
Guinea Ecuatorial	Interna	Gobierno, oposición política en el exilio	1
	Gobierno		=

1. En esta columna se señalan los Estados o regiones en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado o territorio a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
2. Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.
3. La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.
4. En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2018 con la del año 2017 apareciendo el símbolo ↑ si la situación general durante 2018 es más grave que la del año anterior, ↓ si es mejor y = si no ha experimentado cambios significativos.
5. Las situaciones de tensión relativas a Camerún, Chad y Níger presentes en 2016 debidas a la inestabilidad generada por el conflicto armado de Boko Haram se analizan en el capítulo 1 (Conflictos armados) en el caso Región Lago Chad (Boko Haram). A su vez, las situaciones de tensión relativas a Níger y Burkina Faso presentes en 2017 debidas a la inestabilidad generada por la presencia de insurgencia yihadista se analizan en el capítulo 1 (Conflictos armados) en el caso Región Sahel Occidental.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Kenya	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS	3
	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno		=
Lesotho	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, oposición política	2
	Gobierno		=
Madagascar	Interna	Alta Autoridad para la Transición, líderes de la oposición, fuerzas de seguridad del Estado, dahalos (ladrones de ganado), milicias de autodefensa, empresas de seguridad privadas	1
	Gobierno, Recursos		↓
Marruecos – Sáhara Occidental	Internacional ⁶	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		=
Mozambique	Interna	Gobierno, partido político RENAMO, milicias RENAMO, grupo armado islamista al-Shabaab	2
	Gobierno, sistema		↓
Nigeria	Interna	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, IMN, IPOB, MASSOB	3
	Identidad, Recursos, Gobierno		=
Nigeria (Delta Níger)	Interna	Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, PANDEF, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsekere, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada	2
	Identidad, Recursos		=
RDC	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
RDC – Rwanda ⁷	Internacional	Gobiernos de RDC, Rwanda, grupos armados FDLR y M23 (ex CNDP)	1
	Identidad, Gobierno, Recursos		=
RDC – Uganda ⁸	Internacional	Gobiernos de RDC y Uganda, grupos armados ADF, M23 (ex CNDP), LRA, grupos armados que operan en Ituri	1
	Identidad, Gobierno, Recursos, Territorio		↑
Rwanda	Interna internacionalizada	Gobierno, grupo armado rwandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora rwandesa en otros países de África y en Occidente	1
	Gobierno, Identidad		=
Senegal (Casamance)	Interna	Gobierno, grupo armado MFDC y sus diferentes facciones	1
	Autogobierno		↑
Somalia (Somalilandia-Puntlandia)	Interna	República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo	2
	Territorio		↑
Sudán	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Sudán – Sudán del Sur	Internacional	Sudán, Sudán del Sur	1
	Recursos, Identidad		=
Togo	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Túnez	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo el Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS	2
	Gobierno, Sistema		=
Uganda	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=

6. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

7. Esta denominación hace referencia a la tensión internacional RDC-Rwanda-Uganda aparecida en ediciones anteriores del informe *Alerta!* Aunque comparten características similares, en el informe *Alerta 2019* se analizan de forma separada RDC-Rwanda y RDC-Uganda.

8. Ibid.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Zimbabwe	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
América			
Bolivia	Interna	Gobierno, oposición política y social (partidos políticos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil de los departamentos orientales, colectivos indígenas)	1
	Gobierno, Autogobierno, Recursos		=
El Salvador	Interna	Gobierno, oposición política y social, Fuerzas de seguridad del Estado, pandillas (Mara Salvatrucha-13, 18 Revolucionarios, 18 Sureños)	2
	Gobierno		↓
Guatemala	Interna	Gobierno, oposición política y social, pandillas	1
	Gobierno		=
Haití	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, MINUSTAH, ex militares	1
	Gobierno		↓
Honduras	Interna	Gobierno, oposición política, movimientos sociales, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	2
	Gobierno		↓
México	Interna	Gobierno, oposición política y social (organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos, estudiantes), grupos armados de oposición (EZLN, EPR, ERPI, FAR-LP), cárteles.	3
	Sistema, Gobierno		↑
Nicaragua	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Perú	Interna	Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero Luminoso), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)	1
	Gobierno, Recursos		=
Venezuela	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Asia			
Bangladesh	Interna	Gobierno (Awami League), Oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islami, JMB)	2
	Gobierno		↑
China (Xinjiang)	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social	2
	Autogobierno, Sistema, Identidad		↑
China (Tíbet)	Interna internacionalizada	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet y en provincias y países limítrofes	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=
China – Japón	Internacional	China, Japón	1
	Territorio, Recursos		=
Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea ⁷	Internacional	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia	1
	Gobierno		↓
Corea, RPD – Rep. de Corea	Internacional	RPD Corea, Rep. de Corea	1
	Sistema		↓
India (Assam)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB(IKS), KPLT, NSLA, UPLA y KPLT	2
	Autogobierno, Identidad		=
India (Manipur)	Interna	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)	2
	Autogobierno, Identidad		↓
India (Nagalandia)	Interna	Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K), NSCN-R, NNC, ZUF	1
	Identidad, Autogobierno		↓

9. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Asia			
India – Pakistán	Internacional	India, Pakistán	3
	Identidad, Territorio		↑
Indonesia (Papúa Occidental)	Interna	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social (organizaciones autonomistas o secesionistas, indigenistas y de derechos humanos), grupos indígenas papús, empresa minera Freeport	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↑
Kirguistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán	1
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio		↓
Lao, RDP	Interna internacionalizada	Gobierno, organizaciones políticas y armadas de origen hmong	1
	Sistema, Identidad		↑
Pakistán	Interna	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios secretos	2
	Gobierno, Sistema		↓
Sri Lanka	Interna	Gobierno, oposición política y social, partidos políticos y organizaciones sociales tamiles	1
	Autogobierno, Identidad		=
Tailandia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Tayikistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán	2
	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio		=
Uzbekistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales, Tayikistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema, territorio		↓
Europa			
Armenia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	Internacional	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj	2
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Belarús	Interna	Gobierno, oposición social y política	1
	Gobierno		=
Bosnia y Herzegovina	Interna internacionalizada	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Chipre	Interna internacionalizada	Chipre, autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Grecia, Turquía	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↑
Georgia (Abjasia)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Abjasia, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		=
Georgia (Osetia del Sur)	Interna internacionalizada	Georgia, autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		=
Moldova, Rep. de (Transnistria)	Interna internacionalizada	Moldova, autoproclamada República de Transnistria, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Rusia (Daguestán)	Interno	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Daguestán, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)	2
	Sistema		↓
Rusia (Chechenia)	Interna	Gobierno federal ruso, Gobierno de la República de Chechenia, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico, ISIS)	2
	Sistema, Gobierno, Identidad		=

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Europa			
Serbia – Kosovo	Internacional ⁸	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, UNMIK, KFOR, EULEX	2
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Turquía	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah Gülen	2
	Gobierno, Sistema		=
Oriente Medio¹¹			
Arabia Saudita	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)	2
	Gobierno, Identidad		=
Bahrein	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno, Identidad		↓
Egipto	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		=
Irán	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Irán (noroeste)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG)	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Irán (Sistán Baluchistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán	2
	Autogobierno, Identidad		=
Irán – EEUU, Israel ¹²	Internacional	Irán, EEUU, Israel	2
	Sistema, Gobierno		↑
Iraq (Kurdistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG), Turquía, Irán, PKK	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos, Territorio		↓
Israel – Siria –Líbano	Internacional	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia), Irán	3
	Sistema, Recursos, Territorio		↑
Líbano	Interna internacionalizada	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham	2
	Gobierno, Sistema		↓
Palestina	Interna	ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam, grupos salafistas	1
	Gobierno		=
<p>1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta. ↑: escalada de la tensión; ↓: reducción de la tensión; =: sin cambios. Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo</p>			

2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2018

En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión sociopolítica a lo largo de 2018, tanto a nivel global como regional.

2.2.1. Tendencias globales

Durante 2018 se identificaron 83 escenarios de tensión a nivel mundial. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas se concentró en África, con 33 casos, seguida de Asia (18), Europa (12), Oriente Medio (11) y América Latina (nueve). Cabe

10. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

11. Respecto a Yemen (sur), los acontecimientos relativos a esta disputa han dejado de ser analizados como tensión –como en pasadas ediciones del informe– y el análisis se ha integrado en el caso de conflicto armado Yemen (al-houthistas).

12. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear iraní.

destacar la identificación de cuatro nuevos escenarios de tensión: Nicaragua, país que vivió la más grave crisis política y social de las últimas décadas tras la oleada de protestas en abril contra el Gobierno y por las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos respecto de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado y de grupos armados simpatizantes del Gobierno; Armenia, que sufrió una escalada de protestas antigubernamentales que derivaron en la salida del presidente, Serzh Sargsyan, y en elecciones anticipadas; y Rusia (Daguestán), que hasta el año 2017 había sido considerado conflicto armado, pero que dejó de ser considerado como tal por la reducción de violencia que se experimentó durante los años anteriores, pero en el que seguían presentes dinámicas de tensión; y Lao RDP, que volvió a ser considerado como crisis sociopolítica por el incremento de la violencia en los últimos años debido a la creciente represión de los cuerpos de seguridad contra la comunidad hmong. Por otra parte, tres casos considerados en años anteriores tensiones pasaron a ser calificados como conflictos armados en 2018 debido al incremento de violencia: Camerún (Ambazonia/North West y South West), y los casos de Burkina Faso y Níger.¹³

Durante 2018 se identificaron 83 escenarios de tensión, 33 en África, 18 en Asia, 12 en Europa, 11 en Oriente Medio y nueve en América Latina

Si bien las situaciones de tensión pueden atribuirse a múltiples factores, el análisis del panorama de crisis en 2018 permite identificar tendencias en lo referido a sus principales causas o motivaciones.

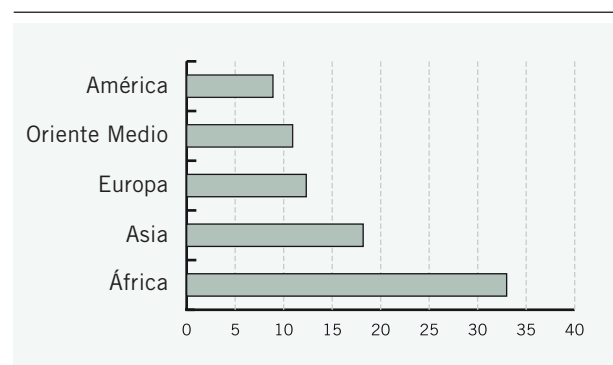
En línea con los datos observados en años precedentes, **a nivel global prácticamente un 70% de las tensiones tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos** (Gobierno)¹⁴ –lo que propició conflictos para acceder o erosionar el poder– u oposición al sistema político, social o ideológico de los respectivos Estados (Sistema). En América Latina, por ejemplo, todas las tensiones identificadas estuvieron vinculadas a alguna de estas dos variables. A su vez, **cerca de la mitad de las tensiones (45%) tuvieron como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias, pero este porcentaje fue claramente superior en regiones como Europa (más del 66%, dos de cada tres tensiones en Europa) o Asia (más del 55%)**. Cabe destacar que en alrededor de una tercera parte de las tensiones (31%) las disputas por el control de territorios y/o recursos fueron un elemento especialmente relevante, si bien se trata de un factor que alimenta numerosas situaciones de tensión en grados diversos.

En línea con años anteriores, **algo más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvieron un carácter interno (45 casos o un 54%)**, siendo especialmente

paradigmático el caso de América Latina, en el que la práctica totalidad de los casos (excepto Haití) fueron de este tipo. Por otra parte, **casi una tercera parte de las tensiones a escala global fueron internas internacionalizadas (24 situaciones o casi un 29%)**, pero este porcentaje fue claramente superior en regiones como Europa (la mitad de las crisis) u Oriente Medio (45%) y significativamente inferior en África (15%) y América Latina (11%). Finalmente, **una sexta parte de las tensiones fueron internacionales (14 casos o casi un 17%)**, siguiendo la tendencia a la baja de las últimas décadas, aunque en regiones como América Latina no se identificó ningún contexto de este tipo. En cuanto a la evolución de las tensiones, la mayoría de los contextos (40%) no experimentó cambios significativos, en un 30% de los casos se produjo una cierta mejoría y en el 30% restante de las crisis se registró un deterioro con respecto a 2017. Excepto en Asia, donde hubo más casos de mejoría que de deterioro de la situación (siete y cinco, respectivamente), en términos agregados, el número de tensiones cuya situación empeoró igualó a aquellas en las que se registró una mejora de la situación. Respecto de la intensidad de las crisis sociopolíticas, durante 2018 la mitad de las mismas presentaron una intensidad baja (50%, un porcentaje superior al 47% que se registró en 2017), un tercio registró una intensidad media (similar a la cifra del año pasado) y solo el 15% de los casos tuvo altos niveles de tensión (13 casos), seis de las cuales en África.

En términos comparativos con años anteriores, la cifra de tensiones graves siguió la tendencia a la baja de los últimos años (representando un 15% en 2018, un 20% en 2017 y un 24% en 2016) ya que varios contextos que en 2017 habían experimentado altos niveles de tensión, desescalaron durante 2018 pasando a ser tensiones de media o baja intensidad. Fue el caso de Angola (Cabinda); los diferentes escenarios de tensión en el Cuerno de África (Eritrea y Eritrea-Etiopía); Mozambique; Corea, RPD-EEUU, Japón, Rep. de Corea; India (Manipur); o Líbano. Sin embargo, también hubo

Gráfico 2.1. Distribución regional del número de tensiones en 2018



13. Véase los resúmenes sobre Camerún y sobre la región de Sahel Occidental en el capítulo 1 (Conflictos armados).

14. Véase nota 2.

cuatro escenarios que habían registrado niveles medios o bajos de tensión en 2017 y años anteriores, cuyos niveles de conflictividad se incrementaron sustancialmente y fueron considerados de alta intensidad en 2018: Irán (noroeste), Israel-Siria-Líbano, México y Nicaragua. Cabe añadir otros tres casos donde la intensidad de la violencia también aumentó y pasaron a ser considerados conflictos armados: Camerún (Ambazonia/North West y South West), debido a la escalada de la violencia por parte de los grupos armados separatistas así como por el desproporcionado uso de la fuerza y la represión por parte de los cuerpos de seguridad en ambas regiones occidentales de Camerún; y la situación en la región del norte de Níger y de Burkina Faso, que junto al norte de Malí se vieron afectadas por un clima de inestabilidad y violencia generada por la creciente presencia de grupos y milicias armadas que reivindican una presunta agenda yihadista en la zona del Sahel Occidental (conflicto que pasó a denominarse Región Sahel Occidental).

Las tensiones de mayor gravedad en 2018 en África fueron las de **Chad** –país afectado por un clima de inestabilidad política y social y por la escalada de la violencia en el norte del país, vinculada, entre otras cuestiones, a la minería ilegal–; **Etiopía y Etiopía (Oromiya)** –donde a pesar de los importantes y positivos cambios acontecidos con la subida al poder del nuevo primer ministro, Abiy Ahmed, persistió un elevado clima de violencia–; **Kenya** –donde se produjo un incremento de la violencia intercomunitaria durante el año, en paralelo a la continuación de las acciones del grupo armado islamista al-Shabaab, las operaciones contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, y la creciente presencia de ISIS desde 2016–; **Nigeria** –donde se prolongó la campaña militar contra Boko Haram en el noreste,¹⁵ las acciones de violencia entre comunidades ganaderas y agrícolas en el cinturón central del país (Middle Belt), las acciones armadas por diversos grupos en la región del noroeste (Kaduna y Zamfara) y las tensiones en la región sureña de Biafra y la recurrencia de la violencia en el delta del Níger¹⁶–; y **RDC** –donde confluyeron, además de los conflictos armados que afectan diversas regiones del país, la celebración de las elecciones en diciembre de 2018, la tensión derivada del brote de ébola en la provincia de Kivu Norte (este) y el brote de violencia en la provincia de Mai-Ndombe (oeste).

Las tensiones de máxima intensidad en el resto de regiones tuvieron lugar en **México** –donde se

Un 70% de las tensiones tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos u oposición al sistema político, social o ideológico de los respectivos Estados

La mitad de las tensiones en todo el mundo fueron de intensidad baja, cifra superior a la de los últimos años

incrementaron significativamente tanto el número de homicidios, que alcanzó la cifra más alta de los últimos 20 años, como los casos de violencia política, vinculados entre otros factores a la celebración de las elecciones presidenciales–; **Nicaragua** –donde se vivió la crisis política y social más grave de las últimas décadas tras la grave represión gubernamental contra la oleada de protestas que se inició en abril en todo el país ante el intento de reforma del sistema de la seguridad social por parte del Gobierno–; **Venezuela** –donde se incrementaron notablemente el número de movilizaciones y protestas sociales respecto del año anterior, y también se agudizó la crisis institucional y la preocupación internacional por la situación después de que el presidente, Nicolás Maduro, ganara ampliamente las elecciones presidenciales en mayo, boicoteadas por la oposición (y consideradas fraudulentas por algunos actores)–; **India-Pakistán** –donde persistieron unos niveles de intensidad muy elevados, con ataques armados mutuos en diferentes puntos de la Línea de Control que separa a los dos países–; **Egipto** –donde se prolongó el clima de tensión interna caracterizado por la represión a la disidencia, vulneraciones a los derechos humanos, abusos de las fuerzas de seguridad y la aplicación de medidas de excepción–; **Irán (noroeste)** –donde las hostilidades entre el Gobierno iraní y grupos armados kurdos se intensificaron y provocaron la muerte de al menos 60 personas durante 2018– e **Israel-Siria-Líbano** –donde se agravó la situación de tensión durante 2018, en parte como consecuencia de dinámicas vinculadas al conflicto armado sirio.

2.2.2. Tendencias regionales

Como en años previos, en 2018 **África** se mantuvo como principal escenario de las crisis socio-políticas a nivel global, albergando un 39% de los casos (33 de 83, una cifra relativamente similar a la de años anteriores (37 en 2017, 34 en 2016). No se incluyeron nuevos casos respecto al año anterior. Como se mencionó anteriormente,

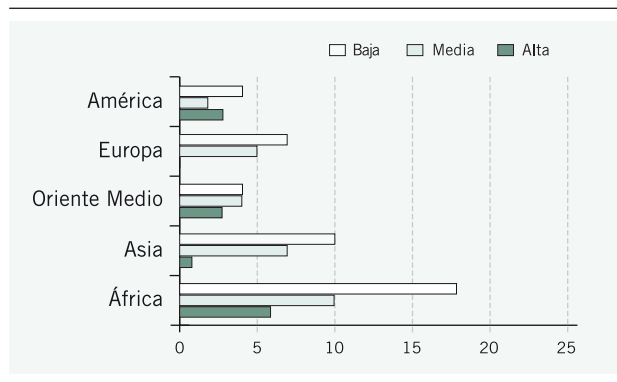
casi la mitad de las crisis de alta intensidad en todo el mundo –seis sobre un total de 13– se concentraron en el continente africano en 2018: Chad, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Kenya, Nigeria y RDC. No obstante, cabe destacar la reducción de la cifra de casos de alta intensidad en el continente africano, debido a la disminución de la violencia en Angola (Cabinda) y Mozambique. En paralelo, se produjo un incremento de la

violencia en Camerún (Ambazonia/North West y South West), y la región de Sahel Occidental (Malí, Níger y

15. Véase el resumen de Región Lago Chad en el capítulo 1 (Conflictos armados).

16. La situación en la región del Delta del Níger, en Nigeria, corresponde a otro contexto de tensión. Véase la Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en el año 2018.

Gráfico 2.2. Intensidad de las tensiones por regiones



Burkina Faso), que pasaron a ser considerados conflictos armados.¹⁷ En este sentido, cabe señalar que menos de un tercio de las crisis sociopolíticas en África (10 casos) experimentaron un deterioro, cifra que se redujo respecto al año 2017 (16 casos). En cambio, **se observó una mejora en la situación de tensión en nueve casos**: África Central (LRA), Angola (Cabinda), Congo Rep. de, Eritrea, Eritrea-Etiopía, Etiopía, Gambia, Madagascar y Mozambique. **Los cambios políticos a nivel doméstico en Etiopía repercutieron positivamente en el conjunto de los escenarios de crisis de la región del Cuerno de África.**¹⁸ Cabe destacar que en casi la mitad de los casos (42%) no se registraron cambios significativos.

Por otra parte, la gran mayoría de las tensiones en África fueron de carácter interno (67%), en líneas similares a años anteriores. Algo más de una sexta parte de las crisis presentó elementos de internacionalización (15%, cifra que se redujo respecto de 2017, con el 19%), entre ellos la influencia de actores foráneos, ya fueran actores armados no estatales de diverso tipo – como la organización armada al-Shabaab (originaria de Somalia) en Kenya–, las acciones de grupos yihadistas regionales o globales – como las filiales de ISIS y AQMI en Túnez–, la presencia de tropas internacionales – como la ONUCI en Côte d’Ivoire, o la MONUSCO en RDC– o la influencia de sectores de la diáspora y grupos armados locales presentes en territorios vecinos – como por ejemplo en los casos de Eritrea o Rwanda. Solo seis de las 33 tensiones en África tuvieron un carácter internacional, la mayor parte de ellas en la región de Grandes Lagos, África Central y Cuerno de África: África Central (LRA), Eritrea-Etiopía, Marruecos-Sáhara Occidental, RDC-Rwanda, RDC-Uganda y Sudán-Sudán del Sur. De entre estos, solo se constató un incremento de la tensión durante 2018 en un caso, entre RDC y Uganda – en julio escaló la tensión debido a la permanente disputa en la frontera común en el Lago Eduardo, que derivó en un

Las crisis más graves del continente africano se localizaron en Chad, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Kenya, Nigeria y RDC

En términos proporcionales, América Latina concentró el mayor porcentaje de tensiones graves a nivel mundial

intercambio de disparos entre navíos de ambos países y la muerte de un soldado ugandés, y posteriormente RDC acusó a Uganda de haber causado la muerte de 11 pescadores congoleños y haber arrestado a un centenar–, mientras que evolucionaron positivamente los casos de África Central (LRA) y Eritrea-Etiopía.

En cuanto a las causas de fondo de las tensiones, las crisis tuvieron una dimensión multicausal, en consonancia con la tendencia a nivel global. **Dos tercios de las crisis sociopolíticas acontecidas en África (22 de los 33 casos, un 66,7%) estuvieron vinculadas a la oposición al gobierno** y en tres casos –Kenya, Mozambique y Túnez– a la vez se observó la oposición al sistema. Por otra parte, el 39% de las tensiones en África tuvo como una de sus causas principales las demandas identitarias y/o de autogobierno, siendo que en cuatro contextos –Kenya, Eritrea, Etiopía (Oromiya) y Marruecos-Sáhara Occidental– confluyeron ambas variables. Adicionalmente, cabe destacar que la lucha por el control de los recursos y/o el territorio también fue un elemento relevante en África en más de una tercera parte (concretamente un 39%) de las tensiones en el continente.

América, en línea con años anteriores, concentró el menor número de tensiones a nivel mundial, con un total de nueve casos en 2018 (10%). Cuatro de ellas fueron de baja intensidad, mientras que tres de ellas –**Venezuela, México y Nicaragua**– fueron de alta intensidad, siendo el continente con el mayor porcentaje de tensiones de alta intensidad (33%). Sin embargo, como en años anteriores, aunque América Latina continuó siendo la región del mundo con menor número de tensiones y conflictos armados, a la vez estas situaciones se ven afectadas por algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo – en primer lugar, Venezuela, con la tasa de homicidios más alta de América Latina y una de las más altas a nivel mundial con 81,4 homicidios por 100.000 habitantes; seguida por El Salvador con una tasa del 51; Honduras, con el 40; México, con el 25,8; Colombia, con el 25; y Guatemala, con el 22,4. Por otra parte, todas las tensiones en América Latina fueron de carácter interno, con la excepción de Haití, por el papel que la MINUSTAH ha desempeñado en el país en los últimos años. En cuanto a la evolución de las tensiones en América, en tres casos se observó un deterioro de la situación: México, Nicaragua y Venezuela. Por el contrario, en otros tres casos –El Salvador, Haití y Honduras– se observó una reducción de la tensión, mientras que en otros tres casos –Bolivia, Guatemala y Perú– no se registraron cambios respecto el año anterior. **Las nueve**

17. Véase el capítulo 1 (Conflictos armados).

18. Véase “Ventana de oportunidad para la paz en el Cuerno de África” en el capítulo 4 (Oportunidades de paz para 2019).

tensiones identificadas en América Latina tuvieron entre sus causas principales la oposición a políticas gubernamentales, que se materializó en protestas de diversa intensidad y carácter, como las mencionadas en Venezuela o bien en Nicaragua, y en la grave represión de estas protestas. En algunos casos, ese factor se dio en combinación con otras causas, como las demandas de autogobierno (Bolivia) o las disputas en torno al acceso o uso de recursos (Bolivia, México, Perú).

En **Asia** se registraron 18 tensiones, el mismo número que en 2017. Por un lado, el conflicto en Lao RDP pasó a calificarse como crisis sociopolítica por el incremento de la violencia en los últimos años debido a la creciente represión por parte de los cuerpos de seguridad contra las organizaciones políticas y la población civil de la etnia hmong. **Solo se constató un contexto de alta intensidad en el continente durante 2018 –la crisis entre India y Pakistán– por la mejora de la situación en los otros tres contextos de alta intensidad de 2017 –India (Manipur), Pakistán y la tensión entre varios países y Corea del Norte–.** En este sentido, **Asia fue el continente donde se registró un mayor porcentaje de casos donde se observó una mejora de la situación (en siete casos, que corresponde al 39%)**, mientras que en seis casos no hubo cambios significativos y en cinco casos se produjo un deterioro de la situación: Bangladesh, China (Xinjiang), India-Pakistán, Indonesia (Papúa Occidental) y Lao RDP.

Asia continuó siendo, como en 2017, el continente con un mayor porcentaje de tensiones internacionales, tres de las cuales se situaban en Asia Nororiental, concretamente en la zona comprendida entre el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental: la disputa entre China y Japón (principalmente acerca de las islas Senkaku/Diaoyu) y la tensión de Corea del Norte con su vecino del sur y también con varios países acerca de su programa armamentístico. La otra tensión internacional fue la disputa histórica entre India y Pakistán. Hubo casi un 39% de las tensiones que tuvieron un carácter interno pero con una clara dimensión internacional, ya sea por la presencia de grupos armados regionales y tensiones fronterizas, como en tres de los países de Asia Central –Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán– o bien los vínculos transnacionales de organizaciones armadas locales –como en la provincia china de Xinjiang o el estado indio de Assam, o bien por la presencia de organizaciones armadas en los países vecinos –como en el caso de Lao RDP. En el caso de la provincia china del Tíbet, la disputa tiene una dimensión internacional por la presencia del Gobierno tibetano en el exilio en el norte de India y por las movilizaciones de la diáspora tibetana.

En cuanto a las causas de fondo, 11 de las 18 tensiones de la región estuvieron vinculadas a la oposición al sistema o al gobierno. En cuatro de ellas –Pakistán y las

tres ex repúblicas soviéticas de Asia Central: Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán– coincidieron ambas variables, mientras que en otras cuatro –las provincias de Tíbet y Xinjiang, en China, la disputa entre Corea del Norte y Corea del Sur y la situación de la comunidad hmong en Lao RDP– se identificó la oposición al sistema como uno de los ejes fundamentales de la tensión, junto a otros ejes. Por otra parte, otros 10 contextos (55%) estuvieron relacionados con las aspiraciones identitarias y/o demandas de autogobierno. Finalmente, el control de los recursos y el territorio también fue un factor presente en una tercera parte de las tensiones en Asia.

En **Europa**, siguiendo la tendencia de años anteriores, el conjunto de los casos de tensión fue de baja intensidad (58%) o de intensidad media (42% de los casos), al no constatarse ningún caso de intensidad elevada. Cabe destacar el incremento de la tensión entre **Serbia y Kosovo** durante el año, como consecuencia de diversos factores, entre los que destaca la acusación serbia a Kosovo de incumplimiento del acuerdo para el establecimiento de la asociación de municipios serbios de Kosovo, la aprobación legislativa por parte de Kosovo de transformación de la Fuerza de Seguridad de Kosovo en un Ejército, y por último, la introducción de aranceles a las importaciones de Serbia y de Bosnia, como medida de protesta por su falta de reconocimiento a la independencia de Serbia, lo que fue considerado como el desafío más difícil desde la declaración de independencia de Kosovo de 2008. Por otra parte, en lo concerniente a la evolución de las crisis sociopolíticas, en tres de los 12 casos se constató una mejora de la situación, en cinco no se produjeron cambios y en cuatro se produjo un deterioro de la situación, en contraste con la evolución de la situación en 2017, cuando en nueve de las 13 tensiones se registró un agravamiento de la situación política y social. Entre los casos en los que se produjo un deterioro cabe destacar

la situación en **Armenia**, como consecuencia del clima de protestas antigubernamentales que derivaron en la dimisión del presidente Serzh Sargsyan y en elecciones anticipadas, que acabaron con la hegemonía del Partido Republicano de Armenia (HHK). Por el contrario, entre los casos en los que se redujo la tensión, cabe destacar la situación entre Armenia y Azerbaiyán y en la región rusa de Daguestán. En el primer caso, se constató una mejora de la situación de seguridad entre **Armenia y Azerbaiyán**, proceso que ya se había iniciado en 2017 y que se prolongó en 2018 tras un acuerdo para el

establecimiento de un mecanismo de comunicación directa entre las partes del conflicto, que supuso una reducción de las violaciones del alto el fuego. En lo concerniente a **Daguestán**, continuó reduciéndose el clima de violencia por lo que dejó de ser considerado una situación de conflicto armado aunque continuaron produciéndose incidentes que causaron decenas de víctimas mortales así como persistentes vulneraciones de los derechos humanos.

Asia fue el continente donde se registró un mayor porcentaje de casos donde se observó una mejora de la situación

En Europa, cabe destacar la evolución negativa de la crisis entre Serbia y Kosovo, que significó la ruptura del proceso negociador en diciembre

En relación a las causas de fondo, cabe destacar que Europa siguió siendo la región a nivel mundial en la que tuvieron una mayor incidencia las disputas vinculadas con las demandas identitarias y/o de autogobierno, con el 67% de los casos vinculados a estos factores, análisis similar a años anteriores. También cabe destacar que en el 67% de las tensiones que tuvieron lugar en Europa una de las causas principales fue la oposición de determinados colectivos a las políticas del Gobierno o bien al sistema en su conjunto. En paralelo, en la línea de años anteriores, el control del territorio fue un factor presente en dos de las tensiones más prolongadas de la región: la disputa entre el Gobierno de Chipre y la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre y el contencioso por la región de Nagorno-Karabakh entre Armenia y Azerbaiyán. Por último, en relación al ámbito geográfico de actuación e influencia de los actores presentes en la tensión, la mitad de las crisis sociopolíticas que transcurrieron en Europa fueron **internas internacionalizadas, destacando el rol que gobiernos foráneos juegan en determinados contextos, en especial el papel que desempeña Rusia** en algunas regiones autoproclamadas independientes en el marco de países que habían formado parte de la URSS: Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, Transdniestria en la República de Moldova. Un tercio de los casos fueron tensiones internas, mientras que dos casos fueron considerados tensiones internacionales: Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj) y Serbia-Kosovo.

Por último, en **Oriente Medio** se registraron 11 tensiones, una cifra similar a la de 2017. Cabe destacar que Oriente Medio siguió siendo la región del mundo con menor número y porcentaje de tensiones de baja intensidad (cuatro casos, que supone el 36%, cifra superior al año anterior). Esta cifra fue similar a la de las tensiones de intensidad media, con otros cuatro casos. Hubo tres crisis sociopolíticas de alta intensidad, una más que en 2017: Egipto, Irán (noroeste) y la crisis que afecta a Israel en relación con Siria y Líbano. En relación con la evolución de las crisis, hubo tres casos en los que se constató una relativa mejora de la situación con respecto a 2017: Bahrein, el Kurdistán iraquí y Líbano. En cinco casos la situación no experimentó cambios destacables respecto el año anterior mientras que en tres casos se produjo un deterioro de la tensión, entre los que destaca la gravedad de la situación en **Irán (noroeste)** –donde se intensificaron las hostilidades entre el Gobierno iraní y grupos armados kurdos provocando al menos 60 víctimas mortales durante 2018–; e **Israel-Siria-Líbano** –donde se registraron incidentes que habrían provocado más de un centenar de víctimas mortales, en medio de un entorno volátil y un clima de amenazas.

En lo concerniente a las causas de las disputas, **Oriente Medio fue la región que concentró un mayor número de casos en los que las principales causas estuvieron relacionadas con la oposición a las políticas internas o internacionales del gobierno o al sistema (en casi el**

73% de las tensiones, ocho casos). En casi la mitad de las crisis (cinco casos) el factor de demandas identitarias y/o de autogobierno fue también una de las motivaciones destacadas. En paralelo, cuatro de las tensiones en la región fueron de carácter interno y dos de carácter internacional: la disputa entre Irán y EEUU e Israel en torno al programa nuclear iraní y el caso de Israel-Siria-Líbano, vinculado a las dinámicas y consecuencias regionales de los conflictos en Siria y en Israel-Palestina. En otros cinco casos las crisis internas tuvieron una destacada dimensión de internacionalización de la disputa: Arabia Saudita, Irán (noroeste), Líbano e Iraq (Kurdistán).

2.3. Tensiones: evolución anual

2.3.1. África

África Austral

Mozambique	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, partido político RENAMO, milicias RENAMO, grupo armado islamista al-Shabaab

Síntesis:

El golpe de Estado contra la dictadura portuguesa en 1974 y la guerra de guerrillas llevada a cabo por la insurgencia de origen marxista-leninista FRELIMO condujeron a Mozambique a la independencia de Portugal en 1975. Desde entonces, Mozambique se vio afectado por una guerra civil que enfrentó al Gobierno de FRELIMO contra el grupo armado RENAMO, apoyado por las minorías blancas gobernantes en Rhodesia (antigua Zimbabue) y la Sudáfrica del *apartheid*, en el contexto de la Guerra Fría. Además, el país se vio afectado por una grave hambruna y una pésima gestión económica. En 1992 las partes alcanzaron un acuerdo de paz, visto como un ejemplo de reconciliación, mediado por la Comunidad de Sant'Egidio, que puso fin a 16 años de guerra, un millón de víctimas mortales y cinco millones de desplazados, dando paso a una etapa de estabilidad política y desarrollo económico aunque con elevados niveles de desigualdad en el país. El líder de RENAMO, Afonso Dhlakama, ha sido incapaz de convertir su partido en una plataforma organizada y estructurada con aspiraciones de alcanzar el poder y desde las primeras elecciones en 1994 hasta la actualidad, ha ido perdiendo cuota de poder político en detrimento de FRELIMO y otros partidos, como el MDM (escisión de RENAMO). En paralelo, las crecientes acusaciones de fraude e irregularidades en los sucesivos procesos electorales, algunas corroboradas por observadores internacionales, han ido acompañadas por un creciente autoritarismo y represión de la oposición, así como de la apropiación del Estado (además de los medios de comunicación y la economía) por parte de FRELIMO. RENAMO condicionó en 2013 la continuidad de su participación en la vida política a una serie de reformas, principalmente la reforma de la comisión electoral nacional y un reparto equitativo de la riqueza del país, amenazando con la retirada de su firma del acuerdo de paz de 1992.

Si bien las tensiones entre el Gobierno mozambiqueño y el principal grupo opositor RENAMO se redujeron considerablemente durante el año, se mantuvo la escalada de la inestabilidad y violencia en la región norteña de Cabo Delgado por el surgimiento de un grupo armado de línea islamista, conocido localmente como Ahlu Sunna wal Jama'a o al-Shabaab, a finales de 2017. En lo concerniente a las tensiones entre el Gobierno del FRELIMO y el principal grupo opositor del país, RENAMO, siguió la tendencia de desescalada iniciada en el 2017, avanzando en la implementación del acuerdo de paz.¹⁹ Durante febrero, el presidente del Gobierno, Filipe Nyusi (FRELIMO), y Afonso Dhlakama (RENAMO) mantuvieron reuniones bilaterales para discutir los términos del desarme, desmovilización y reintegración de los miembros de RENAMO en las fuerzas de seguridad del país. A su vez, el Gobierno anunció la puesta en marcha de medidas para lograr un acuerdo en el Parlamento que permita reformar la Constitución, introduciendo cambios orientados a la descentralización del Estado, que representa uno de los aspectos centrales de las tensiones. Una de las demandas históricas de la oposición, es que sean los partidos políticos ganadores de las elecciones provinciales quienes elijan a los gobernadores, y no el presidente, medida que fue incluida. El 23 de mayo el Parlamento aprobó el proyecto de descentralización. Dhlakama, histórico líder de RENAMO desde 1979, falleció el 3 de mayo a los 65 años de edad, generándose incertidumbre sobre el devenir del acuerdo de paz. Ossufo Momade, antiguo general de RENAMO, fue elegido líder interino a la espera de la celebración del congreso del partido en el que se escogería al sucesor. Tanto RENAMO como el Gobierno manifestaron su compromiso con el proceso de paz y, el 11 de julio, el presidente Nyusi y Momade realizaron una declaración conjunta en la que anunciaron el próximo desarme de RENAMO, que se firmó el 6 de agosto. Posteriormente, el 10 de octubre se celebraron en el país elecciones locales, dentro del nuevo marco de descentralización aprobado por el Parlamento. Por primera vez en 10 años, RENAMO se presentó a los comicios. FRELIMO obtuvo la victoria en 44 de las 53 municipalidades (de las 49 que controlaba previamente) con el 57% del voto, mientras que RENAMO ganó ocho municipalidades con el 36,5% del voto, si bien reclamó la victoria en otras cinco. El Tribunal Constitucional validó los resultados electorales el 14 de noviembre, excepto en la municipalidad de Marromeu (provincia de Sofala), en la que el partido FRELIMO se impuso en la repetición electoral celebrada el 22 de noviembre.

Por otro lado, en la región norteña de Cabo Delgado, fronteriza con Tanzania, prosiguió la inestabilidad como consecuencia de las actividades armadas del grupo de línea yihadista conocido localmente como Ahlu Sunna wal Jama'a o al-Shabaab, surgido a finales de 2017.

La violencia en la provincia de Cabo Delgado, norte de Mozambique, se incrementó debido a las acciones de militantes de línea yihadista

Si bien durante el primer semestre se registraron diferentes ataques en la región dirigidos contra intereses gubernamentales y comunidades locales, fue durante el mes de junio cuando se registró una mayor concentración de la violencia en Cabo Delgado. Ese mes, presuntos militantes islamistas aumentaron el número de ataques contra comunidades, efectuando al menos siete, principalmente en los distritos de Macomia y Quissanga, que dejaron un balance estimado de 39 personas asesinadas, decenas de heridas y la quema de cientos de viviendas. Como respuesta, el Gobierno estableció centros de mando del Ejército en los distritos de Macomia y Quissanga, anunciando a su vez el arresto de diferentes personas. El aumento de la presencia del Ejército en la región redujo los ataques de los militantes islamistas, aunque estos siguieron produciéndose. En agosto, en un ataque del Ejército a un supuesto campamento de la insurgencia cerca de la aldea de Pundahar, distrito de Palma, al menos cuatro personas murieron, y se informó de la captura de uno de los supuestos líderes del grupo, Abdul Raim. En septiembre, en nuevos ataques registrados en el pueblo de Paqueue, 12 personas fueron asesinadas, 14 resultaron heridas y más de 50 casas fueron quemadas por presuntos militantes islamistas. Durante el mes de octubre el Gobierno de Mozambique anunció que 132 personas habían sido detenidas, mientras que la Policía tanzana informó que había arrestado a 104 personas en el país. Posteriormente, entre el 26 y el 28 de noviembre, las autoridades mozambiqueñas anunciaron nuevas detenciones de más de 200 personas sospechosas de pertenecer al grupo armado. La violencia, que se mantuvo hasta final de año, supuso que miles de personas buscaran refugio en Tanzania.

África Occidental

Nigeria	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Identidad, Recursos, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, IMN, IPOB, MASSOB

Síntesis:

Desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las

19. Véase el resumen sobre Mozambique en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2019. Análisis de tendencias y escenarios*. Icaria, 2019.

fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas.

El clima de violencia en el país persistió durante el año debido a la inestabilidad presente en diversas regiones, destacando la campaña militar contra Boko Haram en el noreste,²⁰ **las acciones de violencia entre comunidades ganaderas y agrícolas en el cinturón central del país (middle belt), las acciones armadas perpetradas por diversos grupos en la región del noroeste (Kaduna y Zamfara) y las tensiones en la región de Biafra,** así como debido a la inestabilidad en el Delta del Níger.²¹ Todos estos diferentes frentes contribuyeron a deteriorar la situación de seguridad en el conjunto del país, en un año marcado por la campaña electoral a las elecciones presidenciales previstas para principios de 2019. Más allá de la violencia perpetrada por Boko Haram en la región del Lago Chad, los otros focos de violencia más significativos se concentraron en la región central y el noroeste. En relación a la primera, **la violencia intercomunitaria entre pastores nómadas procedentes del norte de Nigeria y las comunidades agrícolas del centro y sur del país** continuó presente a lo largo del año. Durante el mes de enero se registraron múltiples ataques que afectaron principalmente a los estados de Benue, Taraba, Kaduna y Plateau, con un balance de al menos 203 personas asesinadas, según datos del International Crisis Group (ICG). Como respuesta, a mediados de febrero el Ejército puso en marcha la operación militar Ayem Akpatuma (“Cat Race”), la cual estuvo operativa hasta el 31 de marzo en seis estados (Benue, Taraba, Kogi, Nasarawa, Kaduna y Niger). La violencia sin embargo continuó, ampliándose a los estados sureños de Ebonyi, Kogi, Delta, Abia y Ogun. En marzo, al menos 194 personas perdieron la vida debido a diferentes episodios armados. En abril se mantuvo la escalada, registrándose cerca de 20 diferentes incidentes que dejaron un balance de 350 personas asesinadas, la mayoría en los estados de Benue y Nasarawa. El incremento de la inestabilidad llevó a que diversos diputados exigieran al Gobierno cambios en las cúpulas militares y de inteligencia. Autoridades del estado de Benue declararon que la violencia había pasado de ser un conflicto entre pastores y agricultores, a convertirse en una insurgencia. Si bien durante mayo la intensidad de la violencia se redujo, registrándose alrededor de 50 muertes, en junio volvió a incrementarse, ya que en un solo incidente registrado entre los días 21 y el 24 en el área de Barkin Ladi (Plateau) se contabilizaron alrededor de 200 muertes. Posteriormente, en el tercer

El aumento de la violencia y las tensiones en las regiones centro, noreste y noroeste, generaron un clima de inseguridad en toda Nigeria

trimestre del año, la violencia en la región volvió a bajar de intensidad, ampliándose nuevamente en los últimos meses del año. Así, a mediados de noviembre el Gobierno del estado de Plateau reportó al menos 1.801 personas muertas y 50.212 desplazadas como consecuencia de la violencia en el estado en los últimos meses.

En relación a la **violencia registrada en la región noroeste del país, concentrada principalmente en los estados de Kaduna y Zamfara, el año también se caracterizó por un incremento de los enfrentamientos y acciones armadas** enmarcadas en diferentes lógicas: tensiones vinculadas con pastoreo y gestión de recursos; acciones producto de actos vandálicos y criminalidad; tensiones relativas a disputas intercomunitarias; y tensión entre el Gobierno y la comunidad shíi organizada en el Movimiento Islámico de Nigeria (IMN). En el primer semestre del año, según los datos registrados por el ICG, al menos 382 personas resultaron muertas en diferentes episodios de violencia. Durante el mes de junio, la violencia desplazó a 12.000 personas en los estados de Zamfara y Sokoto. A mediados de año el Gobierno aumentó el despliegue militar en la zona, incluyendo operaciones de la fuerza aérea. El 30 de noviembre en una de las diferentes operaciones de seguridad desplegadas, la Policía reportó la muerte de al menos 104 personas acusadas de actos vandálicos en el área de Zurmi (Zamfara). De forma paralela, las tensiones entre seguidores del IMN y el Gobierno se mantuvieron activas durante el año. Los primeros prosiguieron demandando la liberación de su líder Ibrahim El-Zakzaky a través de diferentes manifestaciones que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado, dejando numerosas víctimas mortales a lo largo del año.

En la región sureña de **Biafra**, Nnamdi Kanu, líder del movimiento independentista biafreño Indigenous People of Biafra (IPOB), que había sido declarado por el estado nigeriano como una organización terrorista en septiembre de 2017, reapareció en Israel en octubre, luego de llevar en paradero desconocido desde la declaración del Gobierno. Kanu demandó el boicot a las **elecciones presidenciales** hasta que Biafra no acuerde un referéndum sobre su estatus político-territorial, justamente en el año en el que se cumple el 50º aniversario de la declaración de la República de Biafra. Su reaparición coincidió con el momento en el cual los partidos políticos nacionales presentaron sus candidaturas a la presidencia. El partido de Gobierno, All Progressives Congress (APC), nominó al actual presidente, Buhari, mientras que el principal partido opositor, People’s Democratic Party (PDP), postuló a Atiku Abubakar. En total, la Comisión Electoral confirmó 79 candidaturas a concurrir a las elecciones previstas para febrero de 2019. Durante el mes de diciembre,

20. Véase el resumen sobre región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

21. Véase el resumen de Nigeria (Delta del Níger) en este capítulo.

y a medida que se fue acercando la fecha electoral, se produjeron diferentes incidentes dirigidos contra representantes de partidos políticos, aumentando la tensión en el país.

Nigeria (Delta Níger)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, PANDEF, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada

Síntesis:

La inestabilidad en el Delta del Níger es fruto de la pérdida de los medios de vida de la población debido a la actividad petrolera en la zona. La falta de compensaciones económicas, desarrollo y la marginalización de las comunidades llevó a exigir una mayor participación en los beneficios obtenidos por la explotación del petróleo. Desde los años noventa, surgieron formaciones armadas que propiciaron ataques contra instalaciones petroleras y puestos militares, además del secuestro de trabajadores. La respuesta del Gobierno fue militar, con la presencia permanente de las fuerzas especiales en la región del Delta, acusadas de cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. En 2009 el Gobierno decretó una ley de amnistía para todos los grupos armados que decidieran dejar la lucha armada. El ofrecimiento de programas de reinserción animó a los líderes de muchas de estas formaciones a deponer las armas, lo que generó una reducción pronunciada de la violencia armada en la zona. Sin embargo, el estancamiento de los proyectos de reinserción y desarrollo prometidos por el Gobierno ha vuelto a propiciar el retorno a la lucha armada por algunos actores.

La situación de tensión en la región sureña del Delta del Níger persistió durante el 2018. Desde el año 2016 la inestabilidad en la región se mantuvo constante debido a las demandas de los grupos locales al Gobierno para que cumpla con las medidas estipuladas en los acuerdos de paz firmados en 2009. Si bien durante el 2017 se produjeron algunos ataques a oleoductos, en los últimos meses de ese año la tensión se redujo, reactivándose las conversaciones entre el Gobierno y la coalición de organizaciones del Delta, Pan-Niger Delta Forum (PANDEF). A principios de 2018, el grupo armado Niger Delta Avengers (NDA) anunció que renovarían los ataques contra las compañías petrolíferas extranjeras ante la falta de avances. Durante el año se produjeron algunos incidentes en la región mientras se mantenían conversaciones. En el mes de septiembre, después de que la Policía allanase la casa en Abuja del líder del PANDEF, bajo pretexto de búsqueda de armas, se produjo la reacción del grupo armado NDA, que anunció el fin del alto el fuego y la reanudación de los ataques a instalaciones petrolíferas. A finales de año, el 30 de

diciembre, la coalición armada anunció a su vez el fin del cese al fuego que se había mantenido durante dos años, argumentando que el Gobierno de Nigeria no había cumplido con las demandas de desarrollo de la región. Cinco días antes del anuncio, un nuevo grupo armado, autodenominado War Against Niger Delta Exploitation (WANDE), amenazó con irrumpir en las elecciones presidenciales previstas para principios de 2019 si el Gobierno no cumplía con las demandas de la región.

Cuerno de África

Eritrea	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFD, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos

Síntesis:

El régimen de partido único que gobierna Eritrea desde 1993, antigua insurgencia que contribuyó a la caída del régimen de Mengistu Haile Mariam en Etiopía en 1991, ha gobernado el país con un marcado autoritarismo y ha silenciado y reprimido a la oposición política. El Gobierno, liderado por la vieja guardia de la época de la independencia, se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, respeto por las minorías étnicas, un mayor grado de autogobierno, reivindicación del árabe como lengua oficial, el fin de la marginación del islam en el país y el freno a la imposición cultural de la comunidad tigray, o tigrinización, que lleva a cabo el Frente Popular para la Democracia y la Justicia (PFDJ, por sus siglas en inglés), que controla todos los mecanismos de poder. Esta situación, además de la política de Eritrea en la región del Cuerno de África, ha llevado al país a un creciente aislacionismo. En diciembre de 2009 el Consejo de Seguridad de la ONU impuso un embargo de armas, restricción de vuelos y congelación de bienes a los principales altos cargos del país por su apoyo al grupo armado somalí al-Shabaab.

La evolución positiva de la situación entre Eritrea y Etiopía influyó positivamente en la política regional eritrea, pero no a nivel interno. El 14 de noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU levantó las sanciones que pesaban sobre Eritrea desde 2009 mediante la resolución 2444, aprobada por unanimidad. **El histórico acuerdo de paz entre Eritrea y Etiopía²² que se alcanzó durante 2018 derivó en el desbloqueo de otros contenciosos regionales, entre ellos la situación entre Eritrea y Djibouti relativa a la disputa fronteriza de Ras Doumeira.** Aunque el conflicto sigue pendiente de resolución, el 7 de septiembre de 2018 ambos países anunciaron la normalización de sus relaciones tras una visita del ministro de Exteriores eritreo, Osman

22. Véase el resumen sobre Eritrea-Etiopía.

Saleh, a Djibouti. El ministro de Exteriores de Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf, anunció el inicio de una nueva era de relaciones entre ambos países. A raíz de la reunión, Etiopía celebró públicamente el cambio de actitud. Osman Saleh se presentó en Djibouti acompañado de sus homólogos somalí, Ahmed Isse Awad, y etíope, Workneh Gebeyehu, que se desplazaron a Djibouti para facilitar el diálogo. A nivel interno, sin embargo, la situación continuó siendo grave, como pone de manifiesto que desde la reapertura de la frontera entre Eritrea y Etiopía en septiembre, más de 27.500 eritreos solicitaron el estatuto de refugiado en Etiopía, según destacó ECHO, la agencia humanitaria de la UE, el 21 de diciembre. En fecha de 31 de agosto había 174.000 personas refugiadas eritreas en Etiopía, según ECHO. Diversos analistas señalaron que la reanudación de los vínculos diplomáticos con Etiopía y la dinámica regional no había estado acompañada de cambios a nivel doméstico, entre los que destacan la liberación de los miles de presos políticos que hay en el país como consecuencia de la represión y de la ausencia de libertad de expresión, el cierre de las cárceles donde se han cometido graves violaciones de los derechos humanos, y la conscripción indefinida entre 18 y 50 años, que son los principales motivos por los que la población huye de Eritrea. ACNUR destacó en octubre que el flujo de eritreos solicitando el estatuto de refugiado en Etiopía había pasado de 53 a 390 diarios.

Durante el año 2018 se alcanzó un acuerdo histórico entre Eritrea y Etiopía que puso fin a 20 años de conflicto entre ambos países

Eritrea – Etiopía	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Territorio Internacional
Actores:	Eritrea, Etiopía

Síntesis:

En 1993 Eritrea se independizó de Etiopía, aunque la frontera entre ambos países no quedó claramente delimitada, lo que les enfrentó entre 1998 y 2000 causando más de 100.000 víctimas mortales. En junio de 2000 firmaron un acuerdo de cese de hostilidades, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció la misión UNMEE para supervisarlos y en diciembre firmaron el acuerdo de paz de Argel. Éste estableció que ambos se someterían a la decisión que acordase la Comisión Fronteriza entre Eritrea y Etiopía (EEBC, por sus siglas en inglés), encargada de delimitar y demarcar la frontera basándose en los tratados coloniales pertinentes (1900, 1902 y 1908) y el derecho internacional. En abril de 2002 la EEBC anunció su dictamen, que asignó la disputada aldea fronteriza de Badme (epicentro de la guerra y actualmente administrada por Etiopía) a Eritrea, decisión rechazada por Etiopía. A finales de 2005, Eritrea decidió restringir las operaciones de la UNMEE, frustrada por los nulos avances en la implementación de la decisión de la EEBC debido a la insuficiente presión sobre Etiopía para que

cumpliera el dictamen, lo que forzó la retirada de la UNMEE en 2008. Un año antes, la EEBC finalizó sus trabajos sin poder implementar su mandato por obstrucciones de Etiopía, por lo que la situación continuó estancada desde entonces.

Durante el año 2018 se alcanzó un acuerdo histórico entre Eritrea y Etiopía que puso fin a 20 años de conflicto entre ambos países.

Fue determinante el nombramiento de Abiy Ahmed como nuevo primer ministro de Etiopía, aunque según algunas fuentes, el proceso ya se empezó a gestar durante el Gobierno de Hailemariam Desalegn. Eritrea y Etiopía habían estado intercambiando mensajes desde 2017 con el apoyo de EEUU y en especial de Emiratos Árabes Unidos, país que ha sido el gran valedor de este proceso. El 15 de febrero el anterior primer ministro etíope, Hailemariam Desalegn, anunció que dimitiría de su cargo y del liderazgo de la coalición gobernante para facilitar la puesta en marcha de reformas ante la grave crisis que afecta al país. El 2 de abril Abiy Ahmed fue nombrado primer ministro del país.²³ En su discurso inaugural, Abiy Ahmed prometió que alcanzaría la paz con Eritrea. Ante este anuncio, Eritrea desestimó esta declaración e instó nuevamente a Addis Abeba a que retirara sus tropas de la zona fronteriza.

El 5 de junio la coalición gobernante EPRDF anunció que aceptaría el dictamen de la Ethiopia Eritrea Boundary Commission (EEBC), que incluye la cesión de Badme, epicentro del conflicto, a Eritrea. A la vez, instó a Asmara a aceptar su apertura al diálogo sin precondiciones. El anuncio no estableció ninguna agenda para la retirada de tropas, la principal demanda y preocupación de Eritrea. Este anuncio fue celebrado unánimemente por la comunidad internacional. El movimiento opositor eritreo Forum for National Dialogue²⁴ instó al Gobierno etíope a retirar las tropas de territorio eritreo sin precondiciones. No obstante, días después se produjeron movilizaciones ciudadanas pacíficas en Badme y en la región etíope norteña de Tigray en contra del anuncio del Gobierno, y el partido TPLF, miembro de la coalición gobernante que representa a la minoría Tigray, también criticó la decisión. El 20 de junio el presidente eritreo, Isaias Afewerki, anunció planes para enviar una delegación para mantener conversaciones de paz con Etiopía, que se hizo efectiva el 26 de junio con la celebración de una reunión en Addis Abeba entre el ministro de Exteriores eritreo y el primer ministro etíope Abiy Ahmed. Tras la reunión, Abiy anunció que su país estaba deseoso de poner fin a las hostilidades y de, si era necesario, realizar sacrificios para restaurar la paz con Eritrea. El paso determinante en el proceso se produjo el 8 de julio, cuando Abiy realizó una visita a Asmara de dos días y el mismo día se restableció la conexión telefónica entre ambos países por primera vez en 20 años. **El 9 de**

23. Véase el resumen sobre Etiopía en este capítulo.

24. Movimiento opositor creado en 2014 en Londres que promueve la democracia y la transición política en el país en el que se integran diversos antiguos altos cargos del partido en el poder, el EPLF, disidentes con la evolución autoritaria que ha padecido el país desde los años noventa.

julio los líderes de ambos países firmaron la Declaración Conjunta de Paz y Amistad, que pone fin a 20 años de guerra e incluye el acuerdo sobre la implementación de la decisión fronteriza y el restablecimiento de acuerdos diplomáticos, económicos y de comunicaciones, entre otras cuestiones. Abiy pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, el levantamiento de las sanciones a Eritrea. Entre el 14 y el 16 de julio Afewerki visitó Etiopía por primera vez en 20 años y reabrió la embajada eritrea, y el 18 de julio la compañía Ethiopian Airlines reanudó los vuelos con Eritrea, y el 4 de agosto hizo lo propio su homóloga eritrea. El 24 de julio los dos líderes agradecieron en Emiratos Árabes Unidos al príncipe heredero Mohammed bin Zayed Al-Nahyan su papel para promover la paz entre ambos países. El 5 de septiembre Abiy Ahmed realizó su segunda visita a Eritrea, y al día siguiente inauguraron la embajada de Etiopía en Asmara. El 11 de septiembre ambos líderes acordaron la retirada de tropas de la frontera común. Esta decisión dio paso a la reunión tripartita entre Eritrea, Etiopía y Arabia Saudita en Jeddah (Arabia Saudita) que culminó con la **firma el 16 de septiembre del acuerdo de paz entre Eritrea y Etiopía, conocido como Acuerdo sobre la Paz, la Amistad y la Cooperación Integral**, con la presencia de los líderes de ambos países y del rey Salman de Arabia Saudita, del secretario general de la ONU, del presidente de la Comisión de la UA y del ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos. Este acuerdo añadía a la Declaración conjunta del 9 de julio la creación de proyectos de inversión conjuntos, que incluyen el establecimiento de Zonas Económicas Especiales Conjuntas y la colaboración en la lucha contra el terrorismo y el tráfico de personas, drogas y armas, así como un comité y subcomités de seguimiento de la implementación del acuerdo.

Etiopía	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno (coalición EPRDF, liderada por el partido TPLF), oposición política y social, diversos grupos armados

Síntesis:

El régimen que gobierna Etiopía desde 1991 se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) está controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que rige el país con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. Existe un descontento en el país con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico

como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. En las elecciones de 2005 esta diversa oposición supuso un reto para el EPRDF, que reprimió con dureza las protestas postelectorales, renuente a la competencia multipartidista. Los siguientes comicios (2010, 2015) limitaron todavía más la apertura democrática al incrementar la verticalidad del régimen y la represión de la oposición política. La Ley antiterrorista de 2009 contribuyó a diezmar a la oposición. El intento desde 2014 de llevar a cabo el Addis Abeba Master Plan, plan que preveía la expansión territorial de la capital, Addis Abeba, a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, y la organización del desarrollo de la ciudad generó importantes protestas y represión mortal en la región de Oromiya, lo que contribuyó a incrementar la tensión.

El nombramiento del nuevo primer ministro Abiy Ahmed en marzo de 2018 fue determinante para la evolución de la situación en el país.

En febrero se produjo la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn y el nombramiento el 27 de marzo de Abiy Ahmed por parte de la coalición gobernante EPRDF. Abiy Ahmed, miembro de la comunidad oromo, antiguo oficial de inteligencia militar y diputado, fue propuesto por el Oromo Democratic Party (ODP), que es uno de los cuatro partidos que conforman la coalición gobernante EPRDF. Sus primeras medidas se dirigieron a mitigar las tensiones étnicas en el país, promover la unidad nacional y relajar las restricciones relativas a libertades civiles. En su primer viaje en abril visitó Jijiga, capital del estado regional de Somalí, con el objetivo de reunirse con representantes de las comunidades oromo y somalí. El 30 de junio el Gobierno presentó una propuesta en el Parlamento para retirar de la lista de grupos terroristas a tres grupos armados (OLF, ONLF y Ginbot 7), abrió el acceso a más de 200 páginas web prohibidas, relevó a altos cargos de prisiones por haber fracasado en la protección de los derechos de los presos y promovió la liberación de presos políticos, lo que redujo ostensiblemente la violencia y el clima de tensión en el país.

No obstante, tal y como destacó ACLED, el cambio en el liderazgo y la apertura democrática promovida por el Gobierno de Abiy Ahmed no significó la interrupción de la violencia política.²⁵ En este sentido, ACLED constató una mayor tolerancia hacia las protestas y se produjo una reducción del número de manifestaciones en Oromiya, pero a la vez la inestabilidad en otras partes de Oromiya y la violencia intercomunitaria en Etiopía se incrementaron. En junio de 2018 se levantó el estado de emergencia que incluía la prohibición de celebración de actos públicos de protesta, lo que implicó un incremento de la movilización social y política y a la vez una reducción de las confrontaciones entre los manifestantes y los cuerpos de seguridad del país, debido a la mayor tolerancia por parte de los cuerpos de seguridad.

25. Matfess, Hilary y Watson, Daniel, *Change and Continuity in Protests and Political Violence in PM Abiy's Ethiopia*, ACLED, 13 de octubre de 2018.

Etiopía (Oromiya)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno central, Gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO

Síntesis:

Etiopía es escenario de movimientos de carácter secesionista o de rechazo del poder central desde los años setenta. El oromo OLF surge entre 1973 y 1974 en la región etíope de Oromiya, en el centro y sur del país, en contra de la dictadura de Mengistu y con el objetivo de establecer un Estado independiente para la comunidad oromo. A pesar de sus diferencias, los movimientos políticos y armados de carácter nacionalista oromo participan junto a otros movimientos insurgentes del país para derrocar el régimen de Mengistu en 1991. Sin embargo, el OLF se desmarca en 1992 del Gobierno de transición liderado por el partido TPLF de Meles Zenawi, que controla la coalición en el poder, el Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF), y desde entonces inicia la lucha armada contra el Gobierno central y contra otros movimientos políticos oromos progubernamentales exigiendo la independencia de la comunidad oromo. En paralelo, la región de Oromiya ha vivido un ciclo de protestas iniciadas por el movimiento estudiantil en 2014 contra el régimen etíope debido a reivindicaciones vinculadas a la percepción de marginación del pueblo oromo, que fueron fuertemente reprimidas. Por último, cabe destacar la recurrencia de los brotes de violencia entre comunidades ganaderas somalíes y comunidades agrícolas oromo a lo largo de la frontera entre las regiones de Oromiya y de Somalí por la competencia de recursos y por la demarcación entre los territorios de ambas comunidades y en zonas remotas de ambas regiones y la intervención represiva de la Policía Liyu, que contribuye a exacerbar la situación e incrementar la violencia.

El nombramiento del nuevo primer ministro Abiy Ahmed en marzo de 2018 fue determinante para la evolución de la situación en el país.

En febrero se produjo la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn y el nombramiento el 27 de marzo de Abiy Ahmed por parte de la coalición gobernante EPRDF. Abiy Ahmed, miembro de la comunidad oromo, antiguo oficial de inteligencia militar y diputado, fue propuesto por el Oromo Democratic Party (ODP), que es uno de los cuatro partidos que conforman la coalición gobernante EPRDF. Sus primeras medidas se dirigieron a mitigar las tensiones étnicas en el país, promover la unidad nacional y relajar las restricciones relativas a libertades civiles. En su primer viaje en abril visitó Jijiga, capital del estado regional de Somalí, con el objetivo de reunirse con representantes de las comunidades oromo y somalí. El 30 de junio el Gobierno presentó una propuesta en el Parlamento para retirar de la lista de grupos terroristas a tres grupos armados (OLF, ONLF y Ginbot 7), abrió el acceso a más de 200 páginas web prohibidas, relevó

El 7 de agosto el Gobierno etíope y el grupo armado oromo OLF alcanzaron un acuerdo para poner fin a un conflicto de más de 40 años

a altos cargos de prisiones por haber fracasado en la protección de los derechos de los presos y promovió la liberación de presos políticos

Tras su retirada de la lista de grupos terroristas, en la que se encontraba desde 2008, el OLF declaró en julio un alto el fuego unilateral.

El 20 de julio el Parlamento aprobó una ley de amnistía para los antiguos presos políticos. Tras estas históricas decisiones, el Gobierno y el grupo armado oromo OLF alcanzaron un acuerdo de reconciliación para poner fin a las hostilidades en Asmara el 7 de agosto. Ambas partes acordaron establecer un comité conjunto que supervise la implementación del acuerdo.

Sin embargo, tras estos importantes pasos, se produjo una escalada de la violencia en la capital, Addis Abeba, y sus alrededores vinculada al retorno de miembros del OLF que se encontraban en el exilio. El 15 de septiembre se celebró una significativa manifestación para conmemorar su retorno, que acabó con actos de violencia por parte de simpatizantes de la rebelión contra otras comunidades y en los días posteriores se produjeron actos de violencia en algunos barrios y distritos de la capital, en los que murieron 28 personas. Posteriormente, el Gobierno pidió a los combatientes del OLF que todavía no se habían desarmado en el marco del acuerdo de reconciliación alcanzado en agosto que procedieran a desarmarse. Unos 1.300 combatientes del OLF ya se habían desarmado a raíz del acuerdo durante el año. No obstante, se reportaron enfrentamientos entre el OLF y los cuerpos de seguridad etíopes en el distrito de Qelem de Wolega entre el 28 y el 29 de octubre, que se repitieron a finales de año. El OLF acusó al Gobierno de no haber respetado el acuerdo de agosto.

No obstante, ACLED constató una mayor tolerancia hacia las protestas y se produjo una reducción del número de manifestaciones en Oromiya, pero a la inestabilidad en otras partes de Oromiya y la violencia intercomunitaria en Etiopía se incrementaron.²⁶

Además, la geografía de la violencia política también se desplazó de la capital, Addis Abeba, y de Oromiya Occidental, hacia la región de Somalí y la zona fronteriza entre Somalí y Oromiya. Así, cabe destacar la recurrencia de los brotes de violencia entre comunidades ganaderas somalíes y comunidades agrícolas oromo a lo largo de la frontera entre las regiones de Oromiya y de Somalí que compiten por los recursos pero sobre todo por la demarcación de los respectivos territorios, ya que nunca se ha producido una demarcación formal de la frontera y ésta continúa siendo un símbolo para promover la violencia intercomunitaria. A esto cabe añadir la escalada de la violencia perpetrada por la Policía Liyu, el grupo paramilitar gubernamental

26. Matfess, Hilary y Watson, Daniel, op. cit.

responsable de graves violaciones de los derechos humanos contra la población civil en Oromiya y Somalí.²⁷

Kenya	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS

Síntesis:

La política y la economía de Kenya han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. En 2002 el sucesor del autoritario y cleptócrata Daniel Arap Moi (en el poder durante 24 años) fue derrotado por Mwai Kibaki. Sin embargo, las promesas incumplidas de Kibaki fomentaron un clima de frustración, por lo que el opositor Raila Odinga se convirtió en una amenaza a la hegemonía en el poder de Kibaki. El fraude electoral de diciembre de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.300 personas y unas 300.000 se vieron desplazadas. Tras esta situación se alcanzó un acuerdo entre ambos sectores a través de la creación de un frágil Gobierno de unidad nacional. En 2013 se celebraron nuevas elecciones que dieron a Uhuru Kenyatta la presidencia del país, enjuiciado por la CPI por su vinculación con los hechos de 2007 aunque el tribunal retiró los cargos en 2015. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por la propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, las actividades ilegales de la secta Mungiki, la intervención militar de Kenya en Somalia, que ha desencadenado ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenya, y la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenya, suponen retos a la estabilidad del país. A esto se le sumó en 2012 la presión gubernamental contra el movimiento secesionista Mombasa Republican Council (MRC), que pretende la independencia de la región costera del país.

El país sufrió un incremento de la violencia intercomunitaria durante el año, en paralelo a la persistencia de las acciones del grupo armado islamista somalí **al-Shabaab, las operaciones contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad y la creciente presencia de ISIS desde 2016** en el país. Cabe destacar que se redujo la movilización política vinculada a las elecciones de 2017 y la tensión postelectoral. En diciembre de 2017 el presidente Uhuru Kenyatta

rechazó el diálogo con la oposición y la reforma electoral y el líder opositor Raila Odinga pospuso la decisión de proclamarse presidente por presiones internas e internacionales del 12 de diciembre al 30 de enero.²⁸ Kenyatta nombró a su gabinete en enero (sin incluir a miembros de la oposición) y Odinga se autoproclamó en una ceremonia multitudinaria como “presidente del pueblo” a pesar de las amenazas de intervención de la Policía. El acto transcurrió de forma pacífica, aunque el Gobierno interrumpió las emisiones de algunos medios de comunicación que pretendían cubrir la ceremonia. En febrero se produjeron enfrentamientos entre partidarios de la oposición y la Policía a raíz de la detención del abogado opositor Miguna Miguna, que tuvo un papel predominante en la ceremonia de proclamación de Odinga y que fue acusado de traición. Sin embargo, el presidente Kenyatta y el opositor Odinga se reunieron de forma sorpresiva el 9 de marzo, su primera reunión desde las disputadas elecciones, creando un espacio para iniciar un proceso de diálogo en abril que incluía la puesta en marcha de un comité conjunto formado por 14 miembros de ambas partes que debería hacer frente al conflicto político. Este proceso de negociación y reconciliación se consolidó en abril y en mayo ambas partes llevaron a cabo medidas de construcción de confianza, incluyendo el anuncio por parte de Kenyatta de la creación de nuevos cargos en su ejecutivo en los que se incorporaría a aliados de Odinga.

Por otra parte, al-Shabaab cometió periódicos ataques insurgentes en el norte y el este de Kenya, en concreto en la zona fronteriza entre Somalia y Kenya (los condados de Mandera, Wajir y Garissa) y en la zona costera de Kenya (principalmente en el condado de Lamu), que causaron decenas de víctimas mortales durante todo el año. HRW destacó en febrero de 2018 que la Policía y bandas armadas asesinaron al menos a 37 personas entre septiembre y noviembre de 2017 en el marco de las nuevas elecciones celebradas en octubre. En este sentido, cabe destacar la reducción del número de muertes a manos de la Policía en el año 2018 según desveló Deadly Force en comparación con el año anterior.²⁹ En 2015 murieron 143 personas a manos de la Policía, pasando a 205 personas en 2016 y a 256 en 2017, cifra que se vio reducida a 219 personas en 2018, lo que supone una reducción de un 14% en un año. Esta reducción estaría directamente vinculada al periodo electoral, ya que en agosto de 2017 se contabilizaron 67 víctimas mortales mientras que en el mismo mes del año siguiente esta cifra se redujo a 16. El resto del año el número de víctimas mortales por mes fue relativamente similar. Por último, cabe destacar los diferentes enfrentamientos entre milicias vinculadas

27. En 2008, la Policía Liyu se convirtió en un grupo contrainsurgente poderoso y liderado por el jefe de seguridad de la región, Abdi Mohammed Omar, conocido como Abdi Illey, quien en 2010 se convirtió en presidente de la región de Somalí, aunque la Policía Liyu continuó bajo su mando. HRW, *Ethiopia: No Justice in Somali Region Killings*, HRW, abril de 2017.

28. Véase Escola de Cultura de Pau. *Alerta 2018! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2018.

29. Deadly Force es una base de datos de asesinatos cometidos por la Policía. El proyecto, de Nation Newsplex, proyecto del rotativo keniano Daily Nation, busca registrar todas las muertes resultantes de operaciones policiales en Kenya, basándose en informes públicos, incluyendo informaciones de individuos y organizaciones del sector público y privado. La base está configurada a partir de la recopilación de informaciones de los medios de comunicación, el Independent Policing Oversight Authority, otras agencias gubernamentales y recuentos realizados por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

a diferentes comunidades durante todo el año en la zona norte del país, por cuestiones de robos de ganado, demarcaciones fronterizas entre territorios de diferentes comunidades, represalias por ataques previos y usos y propiedad de la tierra, entre las principales cuestiones, que causaron decenas de víctimas mortales.

Grandes Lagos y África Central

África Central (LRA)	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Recursos Internacional
Actores:	Fuerza Regional de la UA (RTF, compuesta por Fuerzas Armadas ugandesas, congoleesas y sursudanesas), Operación Observant Compass (EEUU), milicias de autodefensa de RDC y de Sudán del Sur, LRA, ex coalición armada centroafricana Séléka

Síntesis:

El LRA nació en 1986, movido por el mesianismo religioso de su líder, Joseph Kony, con el objetivo de derrocar al Gobierno de Uganda, instaurar un régimen basado en los Diez Mandamientos de la Biblia y sacar de la marginación a la región norte de este país. La violencia y la inseguridad causada por los ataques del LRA contra la población civil, el secuestro de menores para engrosar sus filas (alrededor de 25.000 desde el inicio del conflicto) y los enfrentamientos entre el grupo armado y las Fuerzas Armadas (junto a las milicias de autodefensa) han provocado la muerte de unas 200.000 personas y el desplazamiento forzado de alrededor de dos millones en el momento más álgido del conflicto. La creciente presión militar ejercida por las Fuerzas Armadas ugandesas forzó al grupo a refugiarse primero en el sur de Sudán, posteriormente en RDC, y finalmente en RCA. Así, el LRA fue ampliando sus actividades a los países vecinos donde estableció sus bases, por la incapacidad para frenarle en RDC y RCA, y por la complicidad de Sudán. Entre 2006 y 2008 se celebró un proceso de paz que consiguió establecer un cese de hostilidades, aunque fracasó y en diciembre de 2008 los Ejércitos ugandés, congolés y sursudanesés llevaron a cabo una ofensiva contra el LRA, lo que provocó la disgregación del grupo hacia el noreste de RDC, el sureste de RCA y el suroeste de Sudán del Sur, donde continuó su ofensiva. En noviembre de 2011 la UA autorizó la creación de una fuerza regional transfronteriza compuesta por contingentes militares de estos tres países que se desplegó en septiembre de 2012 y que cuenta con el apoyo logístico de EEUU. La reducción sostenida de la violencia en los últimos años llevo a que dejara de ser considerado conflicto armado a principios de 2015, aunque persiste la violencia con menor intensidad.

Las actividades armadas del grupo insurgente de origen ugandés LRA continuaron durante el año en el triángulo formado entre la RCA, RDC y Sudán del Sur, con una menor intensidad que años anteriores. Nuevamente las zonas más afectadas se concentraron en el este de RCA (Haut Kotto, Mbomou y Haut Mbomou) y el noreste

de RDC (las provincias de Haut Uelé y Bas Uelé y el parque nacional de Garamba), no registrándose actos de violencia en el lado sursudanesés de la zona fronteriza entre RDC y Sudán del Sur. **Según el proyecto LRA Crisis Tracker, se contabilizaron en el año un total de 90 incidentes violentos** (menos que en el año anterior donde finalmente se registraron 103). **En ellos perdieron la vida ocho personas (10 en 2017) y fueron secuestrados temporalmente o permanentemente 362 personas, lo cual significa un aumento con relación a las 293 registradas en 2017, pero muy por debajo de las 729 que se produjeron en el año 2016. En general, en el 2018 se produjo un descenso del impacto de la acciones cometidas por el LRA en la región.**³⁰ Nuevamente, la mayoría de las actividades de los subgrupos activos que conforman en la actualidad el LRA, consistieron en saqueos, emboscadas, secuestros temporales y violencia sexual.

Chad	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Recursos, Territorio Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

El golpe de Estado frustrado de 2004 y la reforma de la Constitución de 2005 boicoteada por la oposición fueron el germen de una insurgencia que intensificó su actividad durante el año 2006, con el objetivo de derrocar al Gobierno autoritario de Idriss Déby. Esta oposición estaba compuesta por diversos grupos y militares desafectos al régimen. A esto se añadió el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra que padece la vecina región sudanesa de Darfur, como consecuencia de las operaciones transfronterizas de los grupos armados sudaneses y las milicias árabes progubernamentales sudanesas janjaweed. Éstas atacaron las poblaciones y campos de refugiados de Darfur situados en el este del Chad, lo que contribuyó a una escalada de la tensión entre Sudán y Chad, que se acusaron de apoyar cada uno de ellos a la insurgencia del otro país. La firma de un acuerdo entre ambos países en enero de 2010 desencadenó el paulatino retorno y desmovilización de los grupos armados chadianos, aunque todavía existen algunos focos de resistencia. En paralelo, Idriss Déby continuó controlando el país de forma autoritaria. Tras las elecciones de 2016, ganadas sin sorpresas por Idriss Déby, persistió el clima de inestabilidad social. Por último, cabe destacar las intervenciones militares en el norte contra grupos con base en Libia y contra la minería ilegal, y contra Boko Haram en la región del Lago Chad, así como periódicos enfrentamientos intercomunitarios por la propiedad y usos de la tierra.

Chad continuó afectado por un clima de inestabilidad política y social, la persistencia de las acciones del grupo armado nigeriano Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad³¹ y por la escalada de la violencia en la

30. Véase Invisible Children – Resolve, *LRA Crisis Tracker*. [Consultado el 21 de febrero de 2019]

31. Véase el resumen sobre la Región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

zona norte del país vinculada, entre otras cuestiones, a la minería ilegal. En el plano regional, Chad continuó participando en el grupo G5 Sahel. En el ámbito político y social, en marzo se celebró el foro nacional sobre la reforma institucional, boicoteado por la oposición, en el que participaron unos 1.000 representantes de partidos progubernamentales. En el foro se propusieron diferentes medidas que fueron introducidas en la reforma constitucional. La nueva Constitución fue aprobada por el Parlamento y ratificada por el presidente Idriss Déby en mayo, en la que se contempla la supresión de la figura del primer ministro y se reintroduce el límite de los mandatos presidenciales que eliminó Déby en 2005. No obstante, la oposición política se movilizó en contra de la nueva Constitución. A finales de octubre el Gobierno y los sindicatos alcanzaron un acuerdo poniendo fin a cinco meses de huelgas en el sector público. Por otra parte, se produjo una escalada de las acciones bélicas en el norte del país: a los periódicos enfrentamientos entre grupos de mineros que explotan ilegalmente el oro y las comunidades locales de la región de Tibesti, se sumaron las periódicas y crecientes intervenciones del Ejército en persecución de los grupos armados chadianos con base en Libia y las acciones gubernamentales oficialmente para expulsar a los mineros ilegales, los grupos de traficantes de armas y los grupos esclavistas. En noviembre se produjo una escalada al producirse enfrentamientos entre el Ejército y milicias de la comunidad tebu, que intentaron retener el control y los recursos mineros de la zona de Miski, en Tibesti, causando decenas de víctimas mortales. Se desconoce el balance real de víctimas. En las acciones participaron aviones de combate que bombardearon zonas habitadas por población civil. El líder opositor Saleh Kebzabo condenó el silencio gubernamental sobre el resurgimiento de grupos armados en el norte y posteriormente la oposición política parlamentaria hizo un llamamiento a establecer un cese de hostilidades y a promover el diálogo en el norte del país.

RDC	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Entre 1998 y 2003 transcurrió en RDC la llamada “primera guerra mundial africana”.³² La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración del Gobierno Nacional de Transición (GNT) donde se integraron el antiguo Gobierno, la oposición política, los grupos armados RCD-Goma, RCD-K-ML, RCD-N, MLC y las milicias Mai Mai. A partir de 2003 el GNT estuvo dirigido por el presidente Joseph Kabila y cuatro vicepresidentes, dos de los cuales pertenecían a la antigua insurgencia. El GNT elaboró la Constitución, refrendada en diciembre de 2005. En 2006 se celebraron

elecciones presidenciales para poner fin a la transición, en las que Kabila fue elegido presidente, en medio de un clima de alta tensión y acusaciones de fraude. La formación del nuevo Gobierno no frenó la inestabilidad y las disputas en el ámbito político. Las elecciones de noviembre de 2011, en las que se cometieron numerosas irregularidades, contribuyeron a avivar la inestabilidad. La prolongación del mandato del presidente Kabila, que debía expirar en las elecciones de 2016 que fueron pospuestas hasta finales de 2018, contribuyó a exacerbar la inestabilidad y la movilización política y social en contra de su permanencia en el poder, que fue reprimida con dureza.

El país permaneció afectado por la grave crisis política y social a nivel nacional como consecuencia de la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila en diciembre de 2016 y los preparativos para celebrar las elecciones en diciembre de 2018, en medio de un clima de violencia política y de acciones insurgentes en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Sur (este) y en la región de Kasai (centro). Cabe añadir la tensión derivada del brote de ébola en la provincia de Kivu Norte (este) y el brote de violencia en la provincia de Mai-Ndombe (oeste).

La fragilidad de la oposición, dividida por la ausencia de liderazgo tras la muerte, a principios de 2017, del histórico líder opositor del partido UDPS, Étienne Tshisekedi, afectó a la implementación del acuerdo de paz y el proceso electoral. Además, la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) declaró que le era imposible celebrar las elecciones en 2017 y en noviembre de 2017 publicó un nuevo calendario electoral. Aunque este cronograma fue rechazado por la oposición y desencadenó fuertes movilizaciones, al final el Consejo de Seguridad de la ONU le dio validez. Éste preveía la celebración de las elecciones nacionales (presidenciales y legislativas) y provinciales el 23 de diciembre de 2018 y el nombramiento del presidente en enero de 2019, más de un año más tarde respecto al acuerdo del 31 de diciembre de 2016. El Gobierno justificó el retraso electoral por la situación de seguridad y por dificultades logísticas y técnicas. Todo el año transcurrió en medio de disputas entre la mayoría presidencial y la oposición en torno a los preparativos electorales y la represión de la movilización política y social en la calle. En agosto, al límite del cierre de las candidaturas, Kabila anunció finalmente que no volvería a presentarse a un nuevo mandato y fue Emmanuel Ramazani Shadari, su delfín, el que se postuló en representación de la mayoría presidencial.

A principios de abril un nuevo brote de ébola se detectó en la provincia de Ecuador, dejando alrededor de 33 personas muertas a finales de julio. El 1 de agosto el Gobierno declaró otro nuevo brote en Beni, provincia de Ituri (Kivu Norte), que dejó a finales de ese mes 75 muertes reportadas. La escalada de la violencia en la región de Ituri complicó las labores de asistencia sanitaria, a lo que se le unió las protestas ciudadanas en la región de Beni a finales del mes

32. Véase la síntesis de RDC (este) y RDC (este - ADF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

de octubre. Estos hechos llevaron a que la Comisión Electoral encargada de la organización de las elecciones presidenciales celebradas en el mes de diciembre en el país, suspendiera la celebración de las mismas en Beni y Butembo (Kivu Norte), aplazándolas al mes de marzo de 2019. Las mismas también fueron suspendidas en Yumbi, en la provincia de Mai-Ndombe, en el oeste del país, debido al deterioro de la situación de seguridad. En esta última región, enfrentamientos entre las comunidades bnyugu y batende, registrados entre el 16 y 18 de diciembre, dejaron un balance de alrededor de 890 personas muertas y 16.000 desplazadas, que se refugiaron en la República de Congo, según denunció la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el país.

Finalmente las elecciones presidenciales, legislativas y regionales se llevaron a cabo el 30 de diciembre, una semana después de lo previsto (23 de diciembre) porque un incendio destruyó unas 8.000 máquinas electrónicas de recuento almacenadas en un local de la comisión electoral. Tras varios días en los que algunos gobiernos y organismos internacionales presionaron a la comisión electoral para publicar los resultados de las elecciones, finalmente el 10 de febrero esta declaró que el vencedor había sido Félix Tshisekedi (38,57% de los votos), seguido de Martin Faluyu (34,83%) y del candidato oficialista Emmanuel Ramazani Shadary (23,84%), con una participación del 47,5%. La comisión también anunció el resultado de las elecciones legislativas y locales, en las que los partidos que apoyan al ex presidente Kabila obtuvieron una abultada mayoría. Tanto Tshisekedi como Kabila dieron por buenos los resultados, pero Martin Faluyu presentó una petición ante el Tribunal Constitucional alegando fraude electoral y afirmando que él habría recibido el 62% de los votos y Tshisekedi un 18%, según sus estimaciones y las de la Iglesia. Esta, que desplegó a 40.000 observadores electorales, declaró públicamente que los resultados oficiales no coincidían con sus propias conclusiones, ni con los resultados que señalaron la mayor parte de observaciones internacionales, incluyendo las de la UA y SADC, que habrían dado como vencedor a Faluyu.

La crisis política y económica en Sudán desató importantes manifestaciones populares en todo el país que fueron reprimidas con dureza por el Gobierno

Sudán	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Sudán vive inmerso en un conflicto crónico derivado de la concentración del poder y los recursos en el centro del país. Aparte de los conflictos en las regiones marginalizadas de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, el resto del país sufre también problemas de gobernabilidad derivadas del régimen

autoritario del presidente Omar al-Bashir que subió al poder con un golpe de Estado en 1989 y que ejerce un duro control y represión de los disidentes a través de los aparatos de seguridad del Estado. La situación de tensión en el país se agravó con la separación de Sudán del Sur en 2011 ya que afectó gravemente la economía del país que dependía en un 70% de la venta de petróleo, situado mayoritariamente en el sur. Las arcas del estado sudanés vieron disminuir drásticamente sus ingresos por la pérdida del control en la exportación del petróleo y, más tarde, por la falta de acuerdo con Sudán del Sur para su transporte por los oleoductos que pasan por Sudán. Una situación económica con una alta inflación y la devaluación de la moneda contribuyó al inicio de significantes protestas en verano de 2012 en varias ciudades del país que fueron acalladas por los aparatos de seguridad.

La situación de tensión en el país se incrementó a lo largo del año, llegando a su momento más álgido durante diciembre, cuando se registraron importantes manifestaciones contra el Gobierno que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad.

La presentación de los presupuestos nacionales para el año 2018, en el cual se incluía una reducción de subsidio a la harina que generó que el precio del pan se triplicase, desencadenó importantes protestas en todo el país durante enero. Las protestas fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad, saldándose con el arresto

de centenares de personas, incluido el líder opositor del Partido del Congreso Sudanés, Omar al-Digar. Durante febrero continuaron las protestas concentrándose principalmente en la capital. Tras la condena de la violencia por parte de embajadas de la UE, así como de EEUU, el Gobierno de Sudán liberó a 80 de las personas detenidas en enero. Posteriormente, el 10 de abril, el presidente Omar al-Bashir ordenó la liberación de las decenas de presos políticos que continuaban en prisión. Durante mayo,

la situación económica empeoró debido a la escasez de combustible iniciada a finales de abril. Como respuesta a la crisis, el Gobierno anunció el 7 de mayo un acuerdo con Arabia Saudita para proporcionarle petróleo a tasas preferenciales durante cinco años. En medio de la crisis política y económica, el presidente al-Bashir anunció el 14 de mayo una reorganización del gabinete de Gobierno, nombrando nuevos ministros en las carteras de Exteriores, Petróleo e Interior. Posteriormente, y en medio de las reformas políticas del nuevo Ejecutivo, el Consejo de Ministros anunció, el 10 de junio, la aprobación de un proyecto de ley electoral en el cual se reducía el número de escaños en el Parlamento de 450 a 300, y se aumentaba la representación estatal subnacional de dos diputados a tres. En septiembre, y con el objeto de aliviar la crisis política y económica del país, el presidente al-Bashir disolvió el Gobierno y nombró un nuevo Primer Ministro, Motazz Moussa, quien había sido Ministro de Irrigación y Electricidad, reduciendo a su vez el número de ministerios de 31 a 21. En ese mismo mes, el Partido de Gobierno, National Congress Party (NCP), eligió nuevamente a Omar al-Bashir como su candidato para postularse a las elecciones presidenciales previstas para 2020. El anuncio generó importantes críticas de

la oposición, debido a que la Constitución permite un máximo de dos mandatos presidenciales, y de concurrir al-Bashir a las próximas elecciones significaría su tercer mandato. El 4 de diciembre, el Parlamento aprobó la enmienda constitucional para extender los límites del mandato presidencial, permitiendo de ese modo la candidatura de al-Bashir en las elecciones futuras. En medio de la crisis económica y política, el 19 de diciembre comenzaron en la ciudad de Atbara, noreste del país, manifestaciones contra el Gobierno que se extendieron rápidamente a todo el país. En ellas se demandaba, entre otros aspectos, la dimisión del presidente, y se saldaron con la quema de sedes del partido de Gobierno en varios puntos del país. Las fuerzas de seguridad del régimen respondieron reprimiendo por la fuerza las protestas, dejando un balance de al menos 37 personas muertas en los primeros días. A su vez, se ordenó el cierre de internet, así como el de varios periódicos y centros educativos, incluidas las universidades. EEUU, Reino Unido, Noruega o la ONU, entre otros actores internacionales, condenaron la represión y solicitaron al Gobierno una investigación sobre las muertes de los manifestantes. El año se cerró con la persistencia y extensión de las protestas a gran parte del territorio nacional.

De manera paralela, durante el año el Gobierno de Sudán y el Gobierno de EEUU trabajaron para la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos Estados y la eliminación de Sudán de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El Departamento de Estado de los EEUU comunicó al Gobierno de Sudán su predisposición a eliminarlo de su designación como “patrocinador estatal del terrorismo”, si el Gobierno sudanés presentaba progresos en seis áreas diferentes, las cuales incluían la expansión de los esfuerzos contra el terrorismo, la resolución pacífica de los conflictos armados en el país, la ruptura de relaciones con Corea del Norte y la mejora de la situación de los derechos humanos en el país. Estas negociaciones se mantenían activas al finalizar el año.

Magreb - Norte de África

Túnez	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados incluyendo el Batallón Uqba ibn Nafi o Brigadas Oqba ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS
Síntesis:	Desde su independencia en 1956 y hasta principios de 2011, Túnez fue gobernado por sólo dos presidentes. Durante tres décadas Habib Bourghiba sentó las bases del

régimen autoritario en el país, al que luego Zine el Abidine Ben Alí dio continuidad tras un golpe de Estado en 1987. La concentración del poder, la persecución de la oposición política laica e islamista y el férreo control social que caracterizaban la situación interna del país contrastaban con su imagen internacional de estabilidad. A pesar de las denuncias de corrupción, fraude electoral y violaciones de los derechos humanos, Túnez se erigió durante años como aliado privilegiado de Occidente. En diciembre de 2010 el estallido de una revuelta popular expuso las contradicciones del régimen, motivó la caída del Gobierno de Ben Alí a principios de 2011 e inspiró movilizaciones contra gobiernos autoritarios de todo el mundo árabe. Desde entonces, Túnez se ha visto inmerso en un accidentado proceso de transición en el que se han hecho evidentes las tensiones entre los sectores seculares e islamistas del país. Paralelamente, el país ha sido escenario de una mayor actividad de grupos armados, entre ellos filiales de AQMI e ISIS.

La situación en Túnez continuó caracterizándose por la **persistencia de retos de seguridad vinculados a la actividad de grupos armados, además de un clima de tensión política y social. Siguiendo la tendencia del año anterior, durante 2018 diferentes hechos de violencia provocaron la muerte a una quincena de personas.** Entre los incidentes más destacados cabe mencionar una emboscada contra una patrulla fronteriza por supuestos combatientes yihadistas en la zona de Ain Sultan, cerca del límite con Argelia, que causó la muerte a seis miembros de las fuerzas de seguridad en julio; y la ofensiva perpetrada por una atacante suicida, en octubre, que dejó a otras veinte personas heridas y que constituyó el primer ataque en la capital tunecina desde 2015. En paralelo, las autoridades tunecinas mantuvieron sus ofensivas contra dirigentes y presuntos combatientes de grupos armados de línea yihadista, activos principalmente en zonas fronterizas con Argelia y Libia. Durante 2018 se anunció la ejecución de Bilel Kobi, alto cargo de AQMI que tenía la misión de reorganizar la filial del grupo en Túnez (enero);³³ de Chawki Fakraoui, líder de Jund al-Khilafa, filial de ISIS, en la provincia de Kasserine (marzo); y Aymen Ben Younes, dirigente de la brigada Okba Ibn Nafaa, grupo escindido de AQMI (diciembre). Algunos análisis destacaron que, si bien las acciones de estos grupos eran de baja intensidad, las acciones de las fuerzas de seguridad no habían conseguido desarticularlos. Por el contrario, estas organizaciones han incrementado el tamaño de sus formaciones y están en condiciones de explotar situaciones de inestabilidad en Túnez y Argelia.³⁴ Durante 2018 las autoridades tunecinas renovaron periódicamente, en cinco ocasiones, el estado de emergencia vigente desde 2015 y mantuvieron medidas como controles y restricciones de movimiento en zonas fronterizas. Amnistía Internacional denunció que estas medidas se estaban aplicando de manera discriminatoria y estaban derivando en arrestos arbitrarios.

Paralelamente, el país continuó afrontando un clima de contestación social. Los incidentes más graves se produjeron a principios y finales de año. En enero,

33. Véase el resumen sobre Argelia en el capítulo 1 (Conflictos armados).

34. Matt Herbert, “The insurgency in Tunisia’s western borderlands”, Carnegie Endowment for International Peace, 28 de junio de 2018.

tres jornadas de protesta por el incremento en el coste de la vida derivaron en choques con la policía que dejaron un muerto en Teborurba (norte) y más de 800 personas detenidas. **En diciembre, la muerte a lo bonzo de un periodista que había denunciado los problemas económicos y promesas no cumplidas de la revolución de 2011 motivaron nuevas movilizaciones y choques con la policía** en Kaserine (centro). En este contexto, Amnistía Internacional también denunció el arresto arbitrario de manifestantes y casos de uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad. Túnez también continuó viéndose afectada por una tensión política derivada principalmente de la pugna de poder entre el presidente Essebsi y el primer ministro Chahed –líderes de dos facciones del partido gobernante, Nida Tounes–, que motivó en septiembre la ruptura de la coalición con el partido islamista Ennahda. Además, cabe mencionar que el Parlamento votó en marzo en contra de extender el mandato de la Instancia de la Verdad y Dignidad (IVD) para acabar con su trabajo de investigación sobre los abusos a los derechos humanos en el país desde 1955. En medio de polémicas por cuestiones procedimentales, la IVD continuó con su labor hasta diciembre y presentó su informe a finales de año en ausencia de representantes del Gobierno y el Parlamento. La presidenta de la IVD hizo un llamamiento a la sociedad civil a continuar el proceso para garantizar la reconciliación en el país. ONG internacionales de derechos humanos criticaron los obstáculos y falta de apoyo político a la IVD y al buen desarrollo de la justicia transicional en el país.

2.3.2. América

América del Norte, Centroamérica y Caribe

El Salvador	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, sectores de las fuerzas de seguridad del Estado, pandillas (Mara Salvatrucha-13, Mara/Barrio/Calle 18, entre otras) y otras estructuras de crimen organizado

Síntesis:

Tras el fin de un conflicto armado (1980-1992), que dejó un balance de alrededor de 75.000 muertes, la situación en El Salvador se ha caracterizado por altos niveles de pobreza y desigualdad, por la proliferación de pandillas juveniles y otras estructuras de crimen organizado, así como por unas altas tasas de homicidios que han convertido al país en uno de los más violentos de la región y del mundo. Durante el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) se logró una tregua con las pandillas que comportó una reducción significativa en la tasa de homicidios, pero la llegada a la presidencia de Sánchez Cerén en 2015 comportó un endurecimiento de las políticas de seguridad y un sustancial incremento en los niveles de violencia, generado ello una crisis de desprotección y de desplazamiento forzado de miles de personas.

En 2018 se registraron en El Salvador, según datos oficiales, 3.340 homicidios, una cifra un 15% inferior a la del año anterior, pero que sitúa al país como uno de los más violentos de América Latina y del mundo según la tasa de homicidios. El Gobierno declaró que **tanto la cifra como la tasa de homicidios se han ido reduciendo paulatinamente tras alcanzar un máximo histórico en 2015** (103 homicidios cada 100.000 habitantes, tasa que convirtió a El Salvador en el país con mayores índices de violencia del planeta). En 2016, la tasa de homicidios se redujo a 81, en 2017 a 60 y en 2018 a 51. Según el Gobierno, tal reducción de la violencia se debe principalmente a los programas de combate a la delincuencia, de prevención del delito en comunidades en riesgo y de rehabilitación en las cárceles salvadoreñas, que según el Ejecutivo han logrado que miles de miembros de las llamadas maras se desvinculen de ellas. El número de policías asesinados (32) también fue inferior al del año anterior (46), pero en cambio se incrementaron el número de desapariciones (3.514 casos, un 10% más que en el año anterior). En cuanto a las dinámicas de violencia durante el año, cabe destacar que hasta mediados de año los niveles de violencia fueron claramente superiores a los del año anterior –de hecho, en los meses de enero y febrero, el número de homicidios en El Salvador fue un 25% superior al de 2017. Ante tales circunstancias, el Gobierno llevó a cabo varias medidas para intentar atajar el incremento de la inseguridad ciudadana. Cabe destacar el arresto masivo de pandilleros (a modo de ejemplo, 357 en agosto, alrededor de 200 en septiembre, 340 en noviembre o 631 en diciembre) en el marco de grandes operaciones contra las principales maras del país (la Mara Salvatrucha y las dos facciones de Barrio 18), la detención de líderes importantes de dichas maras, el incremento de las penas (en agosto, por ejemplo, 61 miembros de la Mara Salvatrucha fueron condenados a más de 100 años de cárcel) y, especialmente, la extensión del paquete de medidas extraordinarias aprobado en marzo de 2016 –que regula el confinamiento de miembros de maras y contempla medidas como el aislamiento extremo de determinadas personas–, hecho que fue objeto de debate durante buena parte del año y que provocó las críticas de numerosas organizaciones de derechos humanos y de personas expertas por considerar que es una vulneración de derechos fundamentales y que aleja la posibilidad de reanudar el diálogo con las maras para reducir los niveles de violencia en el país. Respecto de la situación de derechos humanos, cabe destacar **el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias hecho público en febrero en el que denunciaba este tipo de ejecuciones, el uso excesivo de la fuerza contra miembros de las maras, el estado deplorable de determinadas cárceles o bien la vigencia de las mencionadas medidas excepcionales en ciertos presidios**. Posteriormente, en abril, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció la existencia de escuadrones de la muerte en el seno de las Fuerzas Armadas y el alto número de abusos por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que permanecen impunes.

Honduras	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, movimientos sociales, estructuras de crimen organizado (narcotráfico, pandillas)

Síntesis:

La situación política y social del país se caracteriza principalmente por las altas tasas de homicidios de Honduras, que en los últimos años suele considerarse entre los países más violentos del mundo, así como por la polarización social y política que se produjo tras la llegada al poder de Manuel Zelaya en 2006. Las críticas de amplios sectores de la población por su intención de convocar un referéndum para reformar la Constitución y poder presentarse a un nuevo mandato o bien por su relación con a los Gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), en especial a Venezuela, desembocaron en un golpe de Estado en 2009 que provocó la condena de la comunidad internacional, la suspensión de su membresía en la OEA y el exilio de Zelaya, que le impidió participar en las elecciones presidenciales de 2009. A pesar de que Zelaya pudo regresar al país en 2011, desde entonces se ha producido una cierta polarización social del país que se reflejó en la crisis política derivada de los comicios presidenciales del 2017 entre el presidente saliente y un candidato muy cercano políticamente a Zelaya.

En 2018 se redujo el número y la tasa de homicidios, en línea con la tendencia observada desde el año 2015, pero en paralelo **siguieron registrándose altos niveles de conflictividad vinculados a la crisis política y social que generó la falta de acuerdo respecto del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre de 2017, en las que el presidente, Juan Orlando Hernández, y el candidato opositor, Salvador Nasralla, reivindicaron el triunfo electoral.** Dicho desacuerdo desencadenó varias semanas de protestas y movilizaciones –la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que, al finalizar el año 2017, 31 personas habían muerto y más de 1.600 habían sido detenidas– y la imposición temporal del estado de emergencia y el toque de queda en enero de 2018. A pesar de que a mediados de diciembre de 2017 el Tribunal Supremo Electoral decretó a Hernández como vencedor de los comicios por un estrecho margen, la Alianza de Oposición contra la Dictadura –liderada por Nasralla y el ex presidente Manuel Zelaya, depuesto en golpe de Estado en 2009– no reconoció dicho resultado e instó a la población a movilizarse de manera permanente. Así, en 2018 las protestas continuaron y fueron especialmente intensas en enero, con numerosos incidentes de violencia tanto en los días anteriores a la toma de posesión del cargo de Hernández para un segundo mandato como el día de la ceremonia de investidura, con un saldo final de más de 200 personas heridas. En febrero, Zelaya hizo un llamamiento a la conformación de 10.000 comandos que lideraran la movilización continuada contra el Gobierno. Más adelante, en el marco de las protestas en noviembre con motivo del primer aniversario de las elecciones genera-

les, volvieron a registrarse episodios de violencia entre manifestantes y policías. A principios de enero de 2019, una nueva plataforma cercana al opositor Partido Liberal –Acción Ciudadana contra la Dictadura– llevó a cabo importantes movilizaciones en la mayor parte de departamentos del país para pedir la renuncia de Hernández.

Ante la magnitud de la crisis, Naciones Unidas impulsó un proceso de diálogo entre las principales fuerzas políticas del país. A pesar de las reticencias y dificultades que se registraron durante la fase exploratoria de dicho diálogo, este dio comienzo oficialmente a finales de agosto, con cuatro temas y mesas de trabajo, facilitadas cada una de ellas por personas expertas extranjeras contratadas por Naciones Unidas: crisis electoral de 2017; derechos humanos; reformas constitucionales; y reformas electorales. Previamente, las partes habían acordado conferir validez legal a los acuerdos que eventualmente se alcanzasen en la mesa de negociación, además de pactar un protocolo para prevenir la violencia durante las movilizaciones políticas, así como el establecimiento de una comisión para investigar las violaciones de derechos humanos tras las elecciones de 2017. El proceso de diálogo finalizó en diciembre, con 169 “consensos” entre las partes pero sin ningún acuerdo sustantivo en los temas nucleares o más controvertidos de la agenda negociadora.

Por otra parte, **el número de homicidios en 2018 (3.310) se redujo un 6% por ciento respecto del año anterior, aunque la tasa de homicidios (40 cada 100.000 habitantes) siguió siendo de las más altas de América Latina y del mundo.** Desde el año 2014, en el que Honduras fue el país con una tasa de homicidios más alta del mundo (87), los homicidios se han reducido paulatinamente en el país. En 2017, por ejemplo, éstos se redujeron en un 26% respecto del año 2016. A pesar de que los datos de 2018 parecen confirmar y consolidar una tendencia a la baja en la tasas de homicidios (que el Gobierno atribuye a sus políticas de prevención del delito y, en especial, a sus programas de lucha contra las maras), el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras denunció que en 2018 se incrementó el número de masacres. Según este centro, entre enero y septiembre de 2018 un total de 108 personas murieron en 33 masacres. En la misma línea, en la primera quincena de enero de 2019, 30 personas murieron en ocho masacres distintas.

México	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social (organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos, estudiantes), grupos armados de oposición (EZLN, EPR, ERPI, FAR-LP), cárteles.

Síntesis:

Desde el año 2006, en el que el presidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra al narcotráfico”, tanto los niveles de violencia como las violaciones de derechos humanos en todo el país se incrementaron sustancialmente hasta convertir al país en uno de los que concentra más homicidios en todo el mundo. Desde entonces, se han multiplicado el número de estructuras de crimen organizado vinculadas principalmente al narcotráfico, que en algunas partes del país disputan al Estado el monopolio de la violencia. Según algunas estimaciones, a finales de 2017 la “guerra contra el narcotráfico” había provocado la muerte de más de 150.000 personas y la desaparición de más de 30.000. Además, en México existen algunos movimientos insurgentes en estados como Guerrero y Oaxaca –entre ellos el EPR, el ERPI o las FAR-LP. En el estado de Chiapas, tras el breve alzamiento armado del EZLN en 1994, se han mantenido ciertos niveles de conflictividad en las comunidades zapatistas.

En 2018 se incrementaron significativamente tanto el número de homicidios, que alcanzó la cifra más alta de los últimos 20 años, como los casos de violencia política, vinculados entre otros factores a la celebración de las elecciones presidenciales del 1 de julio, en las que venció Andrés Manuel López Obrador. Respecto de este último aspecto, en julio trascendió que **153 personas políticamente activas –48 de ellas candidatas– fueron asesinadas desde el inicio de la campaña electoral en septiembre de 2017**. Aproximadamente el 80% de estos actos ocurrieron a nivel municipal y la mitad de ellos ocurrió en los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla. En este sentido, en el mes de abril la Asociación Nacional de Alcaldes denunció que 121 alcaldes han sido asesinados desde el año 2000. Desde esa misma fecha, según denunció en mayo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 133 periodistas también fueron asesinados. En marzo, la ONG Artículo 19 había denunciado que solamente durante el mandato de Enrique Peña Nieto 1.986 periodistas habían sido agredidos. En junio, tras el asesinato en Guerrero de tres activistas LGTBI, trascendió que durante el mandato de Peña Nieto 381 personas habían sido asesinadas por su orientación sexual e identidad de género. También cabe destacar que 2018 fue el año en el que se registró el mayor número de feminicidios (861) de los últimos años (en 2015 fueron 422). Los estados con mayor incidencia de dicho fenómeno fueron Colima (3,37 por cada 100.000 habitantes), Sinaloa (3,09) y Nuevo León (2,96).

Según datos oficiales, en 2018 se produjeron en México 33.341 homicidios, una cifra un 15% superior a los 28.866 homicidios registrados en 2017 y la más alta desde que se iniciaron los registros de homicidios en 1997. Éstos se incrementaron de manera drástica desde finales de 2006 –fecha en la que el ex presidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”– y aumentaron en un 74% desde el año 2014. Según datos oficiales, desde diciembre de 2006 hasta abril de 2018 se habían registrado 250.547 homicidios en México. En 2018, los estados con mayores índices relativos de violencia fueron Colima (81,09 homicidios por cada 100.00 homicidios), Baja

California (77,19) y Guerrero (61,35), mientras los que experimentaron un mayor incremento en la violencia en 2018 respecto del año anterior fueron Guanajuato (138%), Quintana Roo (106%) y Jalisco (45%). En abril, el Igarape Institute publicó un informe en el que señalaba, entre otras cosas, que en 2017 México fue el segundo país del mundo con mayor número de homicidios, que los asesinatos que se produjeron en Brasil, México y Venezuela supusieron una cuarta parte de los 437.000 que se produjeron a escala global y que había cinco ciudades mexicanas entre las 50 con mayores tasas de homicidios del mundo. Finalmente, cabe destacar la publicación del informe *The War Report* por parte de la organización Geneva Academy for International Humanitarian Law and Human Rights en el que señalaba que México ameritaba ser considerado un “conflicto armado no internacional” (clasificación según el derecho internacional) y en el que sostenía que el número de víctimas mortales en México sobrepasa al de varias guerras pasadas y al de muchos de los conflictos armados actuales. El informe también sostiene que de los cuatro cárteles de la droga que operaban en el país en el año 2000 se pasó a entre 60 y 80 grupos criminales, destacando especialmente el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Beltrán Leyva, la Familia Michoacana o el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización esta última que ha ganado prominencia en los últimos años.

Nicaragua	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

En abril de 2018, a raíz del intento por parte del Gobierno de reformar el sistema de la seguridad social, se iniciaron una serie de protestas en todo el país que sumieron al país en la peor crisis socio-política de las últimas décadas, en la que cientos de personas murieron, miles resultaron heridas y decenas de miles de personas abandonaron el país. Ante la preocupación nacional e internacional que generaron las protestas, la represión de las fuerzas de seguridad del Estado y los enfrentamientos entre partidarios y opositores del Gobierno, en mayo se inició el llamado Diálogo Nacional –con la participación del Gobierno y varios sectores de la oposición y con la facilitación de la Iglesia Católica–, pero éste se vio interrumpido por las dinámicas políticas y de violencia de la crisis y no logró una salida negociada al conflicto.

Nicaragua vivió la crisis política y social más grave de las últimas décadas tras la oleada de protestas que se inició en abril en todo el país ante el intento de reforma del sistema de la seguridad social por parte del Gobierno. A pesar de que el Gobierno retiró dicha reforma inmediatamente y de que ya en abril la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN) mostró su disposición a facilitar el diálogo entre el Gobierno y la oposición, en los primeros días de movilizaciones murieron entre 25

y 60 personas –según las fuentes– y durante el resto del año siguieron registrándose protestas para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega, así como denuncias continuas sobre violaciones de derechos humanos, especialmente respecto de las actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de grupos armados simpatizantes del Gobierno. A pesar de que en varias ocasiones Daniel Ortega acusó a la oposición de provocar y protagonizar los principales episodios de violencia y de que defendió las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, numerosas organizaciones y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales denunciaron la ola represiva y la vulneración masiva de derechos humanos en Nicaragua. En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el Gobierno había instaurado un Estado policial y un régimen de terror que suprimía todas las libertades. En fechas parecidas, el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes –que forma parte de la CIDH– fue expulsado del país un día antes de presentar un informe en el que acusaba a Managua de delitos de lesa humanidad. **Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al finalizar el año 325 personas habían fallecido en el marco de la mencionada crisis, otras 2.000 habían resultado heridas y unas 550 habían sido detenidas.** Sin embargo, el Gobierno sostenía que el número de víctimas mortales era de 199 y el de personas detenidas de 340. Por su parte, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos declaró que entre abril y finales de diciembre habían muerto 561 personas y que otras 4.578 habían resultado heridas. Según el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, 767 personas habían sido detenidas en Nicaragua por participar en protestas. A mediados de diciembre, el Servicio Jesuita a Migrantes declaró que unas 80.000 personas habían abandonado el país desde el mes de abril, 23.000 de las cuales buscando protección en Costa Rica. También cabe destacar que en 2018, según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, 55 periodistas se exiliaron. Además de las protestas y movilizaciones relativamente frecuentes durante todo el año, la plataforma opositora Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia convocó tres paros nacionales durante el año con un importante seguimiento y alcance. En octubre, una nueva plataforma opositora – Unidad Nacional Azul y Blanco, conformada por más de 40 organizaciones estudiantiles, políticas, académicas, profesionales, de mujeres, campesinas y empresariales– convocó una nueva huelga general. Según datos del propio Gobierno hechos públicos a principios de octubre, la crisis había provocado la pérdida de 350.000 puestos de trabajo y un impacto económico de más de 1.100 millones de dólares.

La crisis en Nicaragua también tuvo repercusiones en el plano internacional. Ante la falta de avances del llamado Diálogo Nacional y la interrupción del mismo en julio tras un ataque a una iglesia de la localidad de Diriamba por parte de decenas de simpatizantes del Gobierno en

el que fueron agredidos varios religiosos, incluyendo dos de los que habían tenido un papel más importante en la mediación entre las partes –el cardenal Leopoldo Brenes y monseñor Silvio Báez–, **varios Gobiernos y algunas organizaciones internacionales incrementaron la presión contra el Gobierno nicaragüense.** Tanto Naciones Unidas –cuyo secretario general se reunió con el canciller nicaragüense– como el Sistema Centroamericano de Integración (SICA) se ofrecieron a facilitar el diálogo, mientras que organizaciones como la UE o MERCOSUR se posicionaron más explícitamente en favor de la liberación de las personas detenidas o en sus críticas hacia la situación de derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo, fue la OEA quien tuvo un papel más destacado en la gestión de la crisis y más crítico con Managua. A mediados de julio aprobó una resolución en la que instaba a adelantar las elecciones a marzo de 2019 –propuesta rechazada tajantemente por Ortega– y poco más tarde creó el llamado Grupo de Trabajo para Nicaragua, conformado por 12 países (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Guyana, México, Panamá y Perú) para dar seguimiento a la situación política del país, pero tal iniciativa fue considerada una injerencia por parte del Gobierno nicaragüense, que en los siguientes meses se negó a cooperar con dicho organismo y a recibir ninguna visita del mismo e incluso pidió la dimisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro. La tensión se incrementó todavía más desde que el Consejo Permanente de la organización empezara a plantear la necesidad de activar la Carta Democrática Interamericana para restaurar la democracia en Nicaragua, y que podría comportar la expulsión de Nicaragua de la OEA.

Durante el año, algunos organismos internacionales expresaron su preocupación por las repercusiones que la crisis en Nicaragua estaba teniendo en las mujeres. En octubre, por ejemplo, ONU Mujeres lamentó la situación en la que se hallaban algunas mujeres defensoras de derechos humanos y llamó al Gobierno nicaragüense a respetar la libertad de expresión y la participación de las mujeres. Días antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, expresó su preocupación por los casos de violencia sexual contra mujeres e incluso por violaciones en el marco de la represión por parte de agentes gubernamentales y simpatizantes del Gobierno. La CIDH también denunció el hostigamiento por parte de autoridades estatales contra madres de personas detenidas, en base a estereotipos discriminatorios de género. En la misma línea, en el mes de diciembre, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos –un programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos– declaró estar recibiendo información de fuentes fidedignas sobre una campaña de ataques contra mujeres defensoras de derechos humanos y organizaciones feministas. Además, otras organizaciones nicaragüenses, como Católicas por el Derecho a Decidir, denunciaron el

asesinato de 15 mujeres y cinco niñas a manos de fuerzas paramilitares oficialistas y la connivencia del Gobierno con el asesinato de otras decenas de mujeres en el país. En este sentido, cabe destacar que durante el año numerosas organizaciones y redes de mujeres tuvieron un papel activo en las protestas contra el Gobierno nicaragüense, y algunas de ellas –como en el caso de la Red de Mujeres contra la Violencia, el Movimiento Autónomo de Mujeres o la Articulación Feminista de Nicaragua– hicieron públicos manifiestos con denuncias, críticas o demandas al Gobierno, como la conformación de una Comisión de la Verdad avalada por la CIDH.

América del Sur

Venezuela	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La actual crisis política y social que atraviesa el país se remonta a la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 y a su impulso de la llamada Revolución Bolivariana, pero se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 y su sustitución por el entonces vicepresidente del país, Nicolás Maduro, que fue considerada inconstitucional por parte de la oposición. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de abril de 2013, en las que Maduro se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios Gobiernos y de la OEA, el recuento y la verificación de los sufragios. En un contexto de creciente crisis económica y de movilizaciones recurrentes y en ocasiones masivas, la crisis política en Venezuela se agudizó después de que la oposición ganara cómodamente las elecciones legislativas de diciembre de 2015, obteniendo su primera victoria en unos comicios en dos décadas. Tal victoria provocó una situación de una cierta parálisis institucional entre la Asamblea Nacional, por un lado, y el Gobierno y buena parte del poder judicial por otra.

Durante el 2018 se incrementaron notablemente el número de movilizaciones y protestas sociales respecto del año anterior –aunque fueron menos virulentas que en 2017, en las que más de 120 personas murieron y otras 2.000 resultaron heridas, según la entonces Fiscal General del Estado–, y también se agudizó la crisis institucional y la preocupación internacional por la situación en Venezuela después de que el presidente, Nicolás Maduro, ganara ampliamente las elecciones presidenciales en mayo, boicoteadas por la mayor parte de la oposición y consideradas fraudulentas por parte de determinados países y organismos internacionales. Respecto de la primera cuestión, el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social registró **12.715 protestas entre enero y diciembre, lo cual supone un incremento del 30% respecto del año anterior y la cifra más alta de protestas**

desde que Maduro es presidente. El número de protestas en 2018 supera claramente a los dos años en los que se habían registrado mayores índices de conflictividad social (2014 y 2017). Cabe destacar, también, que la gran mayoría de estas movilizaciones, que provocaron la muerte de 14 personas, estuvieron vinculadas a cuestiones económicas, laborales, sanitarias y de calidad de los servicios básicos en general. También cabe destacar que, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (la única fuente disponible ante la inexistencia de datos oficiales al respecto), **en 2018 se registraron 23.047 homicidios, lo cual sitúa a Venezuela como el país con una mayor tasa de homicidios de América Latina** (81,4 cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 51 registrados en El Salvador). La cifra y la tasa de homicidios en 2018 fueron inferiores a las de 2017 (26.616 y 89 cada 100.000 habitantes respectivamente), pero cabe señalar que estas estimaciones son sobre la población de 2011, de modo que no contemplan el enorme flujo de personas (unos tres millones desde 2015, según datos de Naciones Unidas) que han huido de la crisis que afecta al país. Además, es especialmente remarcable que el número de asesinatos por parte de fuerzas de seguridad del Estado se ha incrementado notablemente (de 5.535 en 2017 a 7.523 en 2018) y suponen casi una tercera parte de las muertes violentas en el país. Según algunas organizaciones de derechos humanos, algunas de las muertes que se registran bajo la categoría de “resistencia a la autoridad” son en realidad ejecuciones extrajudiciales. En esta línea, cabe señalar que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos acusó a las fuerzas de seguridad del Estado de haber cometido 500 ejecuciones extrajudiciales entre julio de 2015 y marzo de 2017 en el marco de operaciones de reducción del crimen. Casi el 90% de los municipios en Venezuela sufren una epidemia de violencia (categoría que atribuye la Organización Mundial de la Salud cuando la tasa de homicidios es superior a 10), siendo especialmente grave la situación en municipios como El Callao (620 homicidios cada 100.000 habitantes) o en estados como Aragua, con una tasa de homicidios que dobla la media nacional. Durante el año, algunas organizaciones de mujeres y grupos de derechos humanos advirtieron sobre las repercusiones que la crisis venezolana estaba teniendo sobre las mujeres, como el incremento de la explotación sexual. Según Global Voices, por ejemplo, el número de venezolanas víctimas del tráfico de personas se había multiplicado por cuatro entre 2014 y 2018; mientras que la tasa de feminicidios en Venezuela se contaba entre las 15 más altas del mundo.

Respecto de la situación política e institucional del país, la tensión entre el Gobierno y la oposición –y numerosos países y organismos internacionales–, se incrementó notablemente tras el bloqueo a principios de año de las negociaciones que las partes habían iniciado en el último trimestre de 2017 en República Dominicana y después de que Caracas anunciara unilateralmente la celebración de elecciones presidenciales para el 22 de abril (finalmente se pospusieron al 20 de mayo). Este anuncio provocó las críticas –y en algunos casos incluso las sanciones– de numerosos Gobiernos, como el de

EEUU o los 14 países latinoamericanos que conforman el llamado Grupo de Lima, que consideran que dichas elecciones carecerían de legitimidad y credibilidad. Finalmente, según la Comisión Electoral, Nicolás Maduro se impuso con el 67% de los votos en unas elecciones que tuvieron una participación del 46% y en las que el candidato opositor Henri Falcón (que previamente había roto el consenso entre la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática de boicotear los comicios) obtuvo el 21% de los votos. **Tanto Falcón como la oposición en su conjunto y varios países no reconocieron los resultados por considerar que los comicios habían sido fraudulentos y no habían cumplido con los estándares electorales internacionales.** Los países del Grupo de Lima llamaron a consultas a sus embajadores en Caracas, EEUU impuso nuevas sanciones económicas a Venezuela, la UE también anunció nuevas sanciones y la OEA avanzó su intención de elevar pruebas al Tribunal Penal Internacional de que el Gobierno de Maduro había cometido crímenes contra la humanidad. Además, después de que la Corte Suprema rechazara la petición de Falcón de anular los comicios por la comisión de numerosas irregularidades (como la compra de votos), la OEA aprobó una resolución en la que no reconocía los resultados y en la que instaba a Gobierno y oposición a iniciar un diálogo que condujera a la celebración de nuevas elecciones. Durante la segunda mitad del año, se incrementó la presión diplomática sobre Venezuela. Algunos países en el seno de la OEA instaron a la aplicación de la Carta Democrática (que podría implicar la suspensión de su membresía en la organización), otros amenazaron con romper relaciones diplomáticas con Venezuela, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, no descartó medidas coercitivas para solventar la crisis en Venezuela. La tensión en el país también se agudizó por un presunto intento de asesinato contra el presidente Maduro en agosto, por la creciente militarización de la sociedad (Maduro afirmó en diciembre que las milicias populares con el objetivo de defender al país ante agresiones externas habían crecido hasta los 1,6 millones de personas) o por los llamamientos por parte de la oposición a la comunidad internacional a llevar algún tipo de intervención para poner fin a la crisis humanitaria del país.

2.3.3. Asia y Pacífico

Asia Central

Tayikistán	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán

Síntesis:

La tensión que afecta a Tayikistán está vinculada en gran parte al conflicto armado de 1992-1997, que enfrentó a dos bloques marcados por fuertes divisiones regionales: la alianza opositora de fuerzas islamistas y sectores liberales anticomunistas (centro y este del país) contra las fuerzas gubernamentales heredadas del régimen soviético (norte y sur). El acuerdo de paz de 1997 resultó en un compromiso de reparto de poder, con la incorporación de la oposición al Gobierno. En su etapa de rehabilitación posbélica, los problemas a los que hace frente el país incluyen tensiones regionales (con descontento de la población leninabadi en el norte del país hacia sus antiguos aliados del sur, los kulyabis, grupo de población predominante en el poder tras el fin de la guerra), la presencia de algunos señores de la guerra y ex combatientes opositores no desmovilizados en algunas zonas del país, el autoritarismo del régimen, la corrupción, los altos niveles de pobreza y desempleo, las tensiones con sus vecinas Uzbekistán y Kirguistán, la inestabilidad asociada a su frontera con Afganistán y la amenaza potencial de grupos armados yihadistas.

Se mantuvo la tensión en el país en torno a diversos ejes, incluyendo la represión contra el islam político, así como incidentes violentos fronterizos, mientras se incrementaron los incidentes reivindicados por ISIS en el país.

Las autoridades continuaron con medidas de restricción a libertades civiles y políticas, bajo el paraguas de políticas de seguridad, siguiendo con la tendencia de los últimos años de persecución contra la oposición política, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y sectores de población practicantes del islam. En 2018 el Gobierno introdujo cambios legislativos con nuevas restricciones a la libertad religiosa, incluyendo la potestad del Ejecutivo de restringir las expresiones religiosas en numerosos ámbitos. En febrero, las autoridades clausuraron 45 mezquitas en la ciudad de Isfara, bajo alegaciones de que eran ilegales. En 2017, el Estado cerró 1.938 mezquitas. Esta persecución ha estado acompañada de la presión contra el Partido del Renacimiento Islámico (PRI), actor partícipe del conflicto armado de los años noventa y del acuerdo de paz de 1997, y objeto de represión institucional desde 2015, a través de su ilegalización en 2015 y su designación como organización terrorista en 2016. Por otra parte, ISIS se hizo presente durante 2018. El grupo reivindicó un ataque en julio contra un grupo de ciclistas extranjeros en la región de Khatlón (sur) y el asesinato de cuatro de ellos. Por su parte, las autoridades acusaron al PRI de estar detrás del ataque, mientras el partido negó cualquier vinculación. En noviembre un tribunal sentenció a 15 acusados del ataque a diversas penas de cárcel. ISIS se atribuyó también la responsabilidad de unos disturbios en noviembre en una cárcel de alta seguridad en la localidad de Khujand (norte) que alberga presos con sentencias por delitos de terrorismo y extremismo, y que resultaron en ataques a guardias de prisiones, con un balance de dos agentes de prisión y 25 presos muertos –cifra que algunas fuentes elevaron a 50– y varios heridos. Según fuentes gubernamentales, 12 de los asaltantes habían combatido en Siria e Iraq. Por otra parte, las autoridades tayikas admitieron haber

detenido a 12 personas sospechosas de planificar un ataque contra la base militar de Rusia en la capital tayika, tras negar inicialmente la información. Por otra parte, en 2018 hubo nuevos focos de tensión fronteriza, con choques intercomunitarios entre población del distrito tayiko de Isfara y de la provincia de Batken, en Kirguistán, en abril, con varios heridos y que acabaron involucrando a fuerzas de seguridad de ambos países, con altercados y la detención temporal de varios guardias fronterizos tayikos por parte de Kirguistán en junio, posteriormente liberados. También se produjeron incidentes violentos en la frontera con Afganistán en agosto, con la muerte de dos guardias fronterizos tayikos en choques contra actores armados que algunas fuentes definieron como combatientes talibanes y otras como contrabandistas, a los que siguió un ataque aéreo del que las autoridades afganas acusaron a Tayikistán o a Rusia, mientras ambos países negaron la autoría. Por otra parte, mejoraron las relaciones entre Tayikistán y Uzbekistán y en octubre comenzaron el desminado de su frontera. Las minas han causado 374 muertes y 485 heridos en los últimos 20 años, según balances de Tayikistán.

Asia Meridional

Bangladesh	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno (AL), oposición política (partidos BNP y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islam, JMB)

Síntesis:

Desde la creación de Bangladesh como Estado independiente en 1971 tras su secesión de Pakistán en un conflicto armado que ocasionó tres millones de muertes, el país ha vivido una complicada situación política. Las elecciones de 1991 dieron paso a la democracia tras una sucesión de gobiernos militares autoritarios que dominaron el país desde la independencia. Los dos principales partidos, BNP y AL, se han sucedido desde entonces en el poder después de diferentes elecciones, siempre contestadas por la formación perdedora, dando lugar a gobiernos que no han dado respuesta a los principales retos del país como la pobreza, la corrupción o la baja calidad de la democracia, y que han respondido a intereses partidistas. En 2008, la AL accedió al poder después de un periodo de dos años dominado por un Gobierno interino militar que trató de poner fin sin éxito a la crisis política que había sumido al país en una situación de violencia en los meses previos y que llevó incluso al encarcelamiento de las líderes de los dos partidos. La convocatoria de elecciones para 2014 en un contexto político muy frágil y con una fuerte oposición del BNP a las reformas emprendidas por la AL, como la eliminación del Gobierno interino para supervisar los procesos electorales, derivaron en una grave y violenta crisis política durante el año 2013. En paralelo, el establecimiento en 2010 de un Tribunal para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra de 1971, instrumentalizado por el Ejecutivo para acabar con la oposición islamista, en particular el partido Jamaat-e-Islami, agravó la situación en el país.

Persistió la tensión política durante todo el año en Bangladesh con una importante escalada de violencia al finalizar el año, previamente a la celebración de elecciones parlamentarias el 30 de diciembre. Al menos 30 personas murieron y centenares resultaron heridas como consecuencia de los enfrentamientos entre partidarios de las dos principales fuerzas políticas del país, AL, en el Gobierno y BNP, en la oposición y con su líder encarcelada con cargos por corrupción. El BNP denunció que miles de sus militantes habían sido detenidos previamente a la celebración de las elecciones y a pesar de que inicialmente señaló que no concurrirían a los comicios si estos no se celebraban bajo el auspicio de un Gobierno interino, finalmente se presentaron integrados en la plataforma Jatiya Oikya Front (Frente Nacional Unido). La comisión electoral rechazó que Khaleda Zia, líder del BNP y antigua primera ministra, pudiera concurrir a las elecciones. Zia había sido condenada en febrero a cinco años de cárcel por corrupción, y su encarcelamiento fue fuente de tensiones y movilizaciones sociales durante todo el año, algunas de ellas derivando en disturbios y choques entre Policía y manifestantes. Durante todo el año se produjeron múltiples detenciones de activistas políticos y defensores de derechos humanos. Además, se produjeron masivas protestas de estudiantes que también derivaron en disturbios con heridos y numerosas detenciones. En el ámbito judicial, se produjeron también condenas a integrantes del BNP, algunas de ellas con sentencias de pena capital, como la del antiguo ministro del BNP, Lutfuzzman Babar. Por otra parte, más de 200 personas murieron como consecuencia de una operación antinarcóticos a gran escala, en la que las organizaciones de derechos humanos denunciaron ejecuciones extrajudiciales, corrupción e impunidad de los principales narcotraficantes del país, incluyendo líderes políticos.

India (Assam)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB-IKS, KPLT, NSLA, UPLA y KPLT

Síntesis:

El grupo armado de oposición ULFA surge en 1979 con el objetivo de liberar el estado de Assam de la colonización india y establecer un Estado soberano. Las transformaciones demográficas en el estado tras la partición del subcontinente indio, con la llegada de dos millones de personas procedentes de Bangladesh, están en el origen de la reclamación de la población de origen étnico asamés de un reconocimiento de sus derechos culturales, civiles y de creación de un Estado independiente. Durante las décadas de los ochenta y noventa se producen varias escaladas de violencia, así como intentos de negociación que fracasan. En el año 2005 se inicia un proceso de paz que tiene como consecuencia una reducción de la violencia y que se interrumpirá en el año 2006 dando lugar a una nueva escalada del conflicto. Por otra parte, en los ochenta surgen grupos armados de origen

bodo, como el NDFB, que reivindican el reconocimiento de su identidad frente a la población mayoritaria asamesa. Desde 2011 se ha producido una reducción significativa de la violencia y numerosos grupos armados han entregado las armas o iniciado conversaciones con el Gobierno.

Continuó la tensión activa en Assam con niveles de intensidad similares al año anterior. De acuerdo con las cifras de mortalidad vinculadas a la violencia armada registradas por el South Asia Terrorism Portal murieron 20 personas durante 2018, como consecuencia de la actividad insurgente de los grupos armados que operan en el estado y de las operaciones de las fuerzas de seguridad en respuesta a esta insurgencia. Durante el año se registraron enfrentamientos armados de carácter esporádico y los grupos armados llevaron a cabo también ataques contra infraestructuras del estado y extorsión para financiar su actividad armada. En paralelo, cabe destacar que uno de los focos de tensión más destacados del año fue la publicación del Registro Nacional de Ciudadanos, que en su listado inicial excluía a cuatro millones de personas a las que no se les reconocía la nacionalidad india. La cuestión de la nacionalidad ha sido una fuente de conflicto en el estado debido a las fuertes tensiones entre la población autóctona y la población de origen bangladeshí llegada al estado en diferentes oleadas de emigración en las últimas décadas. En los últimos años se han producido enfrentamientos intercomunitarios en varias ocasiones.

India (Manipur)	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)

Síntesis:

La tensión que enfrenta al Gobierno con los diferentes grupos armados que operan en el estado de Manipur y varios de éstos entre sí tiene su origen en las demandas de independencia de varios de estos grupos, así como en las tensiones existentes entre los diferentes grupos étnicos que conviven en el estado. En las décadas de los sesenta y setenta surgen varios grupos armados, algunos de inspiración comunista y otros de adscripción étnica, que permanecerán activos a lo largo de las décadas posteriores. Por otro lado, el contexto regional, en un estado fronterizo con Nagalandia, Assam y Myanmar, también marcará el desarrollo de la conflictividad en Manipur, y serán constantes las tensiones entre grupos étnicos manipuris con población naga. El empobrecimiento económico del estado y el aislamiento con respecto al resto del país han contribuido decisivamente a consolidar un sentimiento de agravio en la población de Manipur. En los últimos años se ha producido una progresiva reducción de la violencia armada.

Manipur continuó siendo escenario de una situación de tensión y de enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas de seguridad y los grupos insurgentes que

operan en el estado. En torno a 30 grupos armados estarían activos en el estado, aunque su capacidad operativa y de reclutamiento sería muy desigual. De acuerdo con las cifras recopiladas por el South Asia Terrorism Portal, 23 personas murieron durante el año como consecuencia de la violencia armada en el estado, siete de ellas civiles, siete miembros de las fuerzas de seguridad y nueve insurgentes. Esta cifra representó un descenso con respecto a las víctimas de mortalidad del año anterior, cuando se registraron 55 muertes como consecuencia de la violencia armada. Las operaciones de las fuerzas de seguridad derivaron en numerosas detenciones de supuestos integrantes de grupos insurgentes. Entre la actividad de estos grupos cabe destacar los ataques contra infraestructuras y las extorsiones y también se produjeron intentos de atentado contra diferentes representantes públicos. El conflicto en Nagalandia y la posibilidad de acuerdo entre la insurgencia naga y el Gobierno indio también fue fuente de tensión, por las posibles implicaciones que podría tener para la configuración territorial de Manipur y la población naga que reside en este estado.

India – Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Territorio Internacional
Actores:	India, Pakistán

Síntesis:

La tensión entre los Estados de India y Pakistán se originó con la independencia y partición de ambos y la disputa por la región de Cachemira. En cuatro ocasiones (1947-1948; 1965; 1971, 1999) se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos países la soberanía sobre esta región, dividida territorialmente entre India, Pakistán y China. El conflicto armado en 1947 dio lugar a la actual división y frontera *de facto* entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado indio de Jammu y Cachemira. En 1999, un año después de que ambos países llevaran a cabo pruebas nucleares, la tensión derivó en el hasta ahora último conflicto armado, paralizado por la mediación estadounidense. En 2004 se inició un proceso de paz, sin avances sustantivos en la resolución de la disputa por Cachemira, aunque sí acercamientos significativos sobre todo en las relaciones económicas. No obstante, las acusaciones indias a Pakistán sobre su apoyo a la insurgencia que opera en Jammu y Cachemira han persistido, así como episodios esporádicos de violencia en la frontera *de facto* que divide ambos Estados. En el año 2008 se produjeron graves atentados en la ciudad india de Mumbai que llevaron a la ruptura formal del proceso de paz ante las acusaciones indias de que éstos habían sido organizados en suelo pakistaní. Desde entonces las relaciones entre los dos países han permanecido estancadas aunque se han producido algunos contactos diplomáticos.

La tensión se mantuvo en niveles de intensidad muy elevados, con ataques armados mutuos en diferentes puntos de la Línea de Control (frontera de facto entre ambos países) repetidos a lo largo del año, especialmente entre enero y mayo. Ambas partes se acusaron de haber iniciado los diferentes episodios de violencia,

que ocasionaron la muerte de personal de las fuerzas de seguridad y de civiles residentes en poblaciones a ambos lados de la frontera. En enero cuatro soldados pakistaníes murieron tras un ataque con mortero de las Fuerzas Armadas indias. La respuesta pakistaní causó la muerte a tres soldados indios. Días después, seis civiles y dos soldados indios murieron por los intercambios de fuego durante varios días seguidos. En febrero, la escalada de la violencia por la respuesta india a un ataque contra una de sus bases militares en Cachemira en el que murieron seis soldados llevó a centenares de personas a desplazarse de manera forzada. Finalmente en mayo, después de varios días de intercambio de fuego en la frontera que causaron la muerte de al menos seis civiles y un miembro de las fuerzas de seguridad y dejaron 30 personas heridas, los dos países se comprometieron a implementar plenamente el acuerdo de alto el fuego de 2003. La cifra de personas muertas desde el deterioro de la situación en 2016 había superado las 150 en mayo. Respecto a las relaciones diplomáticas, en marzo se deterioraron notablemente cuando el Ministerio de Exteriores de Pakistán denunció que su personal diplomático en la India y sus familias estaban sufriendo un intenso acoso y seguimiento, lo que llevó a llamar a consultas a su embajador en el país. India respondió señalando que su personal diplomático también era objeto del mismo trato de forma rutinaria. No obstante, también trascendió que altos mandos militares pakistaníes se habían aproximado a la India ofreciendo la posibilidad de abrir negociaciones de paz sin recibir respuesta positiva por parte de la India. Por último, tras haber acordado la celebración de una reunión en paralelo a la sesión de la Asamblea General de la ONU –la primera de alto nivel desde 2015–, India decidió cancelarla aludiendo a un ataque contra sus fuerzas de seguridad en Cachemira, perpetrado supuestamente por grupos armados con base en Pakistán y también a la emisión en Pakistán de sellos postales de Burhan Wani, insurgente cuya muerte en 2016 llevó a una escalada del conflicto en Cachemira.

La tensión entre India y Pakistán se agravó a lo largo del año con enfrentamientos armados en la frontera

Asia Oriental

China (Xinjiang)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Sistema, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social
Síntesis:	Xinjiang, también conocida como Turquestán Oriental o Uiguristán, es la región más occidental de China, alberga importantes yacimientos de hidrocarburos y ha estado habitada históricamente por la población uigur, mayoritariamente musulmana y con importantes vínculos culturales con países de Asia Central. Tras varias décadas de políticas de aculturación,

explotación de los recursos naturales e intensa colonización demográfica, que ha alterado sustancialmente la estructura de la población y ha provocado tensiones comunitarias desde los años cincuenta, varios grupos armados secesionistas iniciaron acciones armadas contra el Gobierno chino, especialmente en los años noventa. Beijing considera terroristas a tales grupos, como ETIM o ETLO, y ha tratado de vincular su estrategia contrainsurgente a la llamada lucha global contra el terrorismo. En 2008, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos en Beijing, se registró un incremento de las acciones armadas de los grupos insurgentes, mientras que en 2009 se produjeron los enfrentamientos comunitarios más intensos de las últimas décadas. En los años siguientes la violencia se hizo más intensa, frecuente y compleja, hasta alcanzar su apogeo en 2014. Posteriormente, la creciente militarización de la región y la aplicación de medidas de contrainsurgencia provocaron una drástica reducción de los episodios de violencia, aunque también se incrementaron las denuncias por violaciones de los derechos humanos.

Como en los años anteriores, no se tiene constancia de que se registraran episodios de violencia significativos por parte de grupos insurgentes –organizaciones uigures denuncian que tanto el Gobierno como la prensa controlada por éste silencian sistemáticamente cualquier episodio de violencia–, pero en cambio se incrementaron drásticamente las denuncias sobre la situación de derechos humanos en Xinjiang. En agosto, **el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial denunció haber recibido informes creíbles según los cuales un millón de uigures estarían recluidos en campamentos de reeducación y adoctrinamiento político.**

Una de las personas expertas de dicho comité declaró disponer de informaciones según las que dos millones de uigures y otras minorías nacionales (especialmente kazajos) habrían sido trasladados forzosamente a campamentos de internamiento, aunque dicha cifra seguramente incluye a aquellas personas que son obligadas a asistir a sesiones de formación política y social (pero que no son internas). Según algunas informaciones, hasta un 10% de la población adulta uigur y kazaja podría hallarse en dicha situación. Posteriormente, numerosas organizaciones de derechos humanos o medios de comunicación ampliaron o profundizaron estas denuncias. En octubre, la agencia AFP publicó que existían como mínimo 182 instalaciones en Xinjiang destinadas a la reeducación y el confinamiento de personas, mientras que la BBC advirtió que el número de nuevos centros de internamiento se había multiplicado por 10 respecto de los años 2016 y 2017. A su vez, Radio Free Asia denunció que, ante el exceso de reos, Beijing había iniciado un traslado masivo de internos de Xinjiang a otros centros de fuera de la región. Según la organización Chinese Human Rights Defenders, el 21% de los arrestos que se produjeron en toda China en 2017 fueron en Xinjiang. Por su parte, **Amnistía Internacional y Human Rights Watch, denunciaron la existencia de campañas sistemáticas contra la población uigur que incluían tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias, restricciones de movimiento y control de prácticas religiosas, entre otras**

medidas. En julio, la prensa afín al Gobierno publicó que solamente en el primer trimestre de 2018, más de 460.000 personas habían sido relocalizadas para trabajar en otras regiones de la provincia y que tenía previsto relocalizar a otras 100.000 personas más en 2019. Según algunos analistas, esta política tendría la intención no solamente de aliviar los niveles de pobreza en la región, sino también de contener los niveles de conflictividad. Ante esta situación, durante el Examen Periódico Universal a China en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, varios países expresaron su preocupación por el trato que dispensa Beijing a varias minorías nacionales y exigieron al Gobierno el cierre de los mencionados campamentos y la liberación de las personas detenidas arbitrariamente. Además, varias voces expresaron su preocupación por la posibilidad de que el acuerdo de cooperación antiterrorista suscrito entre las autoridades de Xinjiang y las de la provincia de Ningxia a finales de año comporte la traslación de la estrategia contrainsurgente de Xinjiang a otras partes del país y conlleve la vulneración de derechos de la minoría musulmana hui.

Sudeste Asiático y Oceanía

Indonesia (Papúa Occidental)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social (organizaciones autonomistas o secesionistas, indigenistas y de derechos humanos), grupos indígenas papús, empresa minera Freeport

Síntesis:

Aunque Indonesia se independizó de Holanda en 1949, Papúa Occidental (anteriormente Irian Jaya) fue administrada durante varios años por Naciones Unidas y no se integró formalmente en Indonesia hasta 1969, previa celebración de un referéndum que numerosas voces consideran fraudulento. Desde entonces, existe en la región un arraigado movimiento secesionista y un grupo armado de oposición (OPM) que lleva a cabo una actividad armada de baja intensidad. Además de las constantes reivindicaciones de autodeterminación, existen en la región otros focos de conflicto, como los enfrentamientos comunitarios entre varios grupos indígenas, la tensión entre la población local (papú y mayoritariamente animista o cristiana) y los llamados transmigrantes (mayoritariamente musulmanes javaneses), las protestas contra la transnacional extractiva Freeport, la mayor del mundo, o las denuncias contra las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

La región de Papúa (administrativamente dividida en las provincias de Papúa y Papúa Occidental) vivió el peor episodio de violencia de los últimos años después de que como mínimo 17 personas (algunas fuentes sostienen que 31) fueran secuestradas y asesinadas por el grupo armado de oposición OPM a principios de

diciembre en el distrito de Nduga. Dicha acción provocó el inicio de una de las campañas de contrainsurgencia más intensa de los últimos tiempos por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía, que fueron acusadas de utilizar armas químicas –concretamente fósforo blanco– y de atacar a varias comunidades con bombardeos aéreos, tropas y artillería pesada. Según la Coalición Internacional para Papúa (que agrupa a 15 ONG), a las dos semanas de haberse iniciado dicha operación de contrainsurgencia, unos veinte civiles y un número indeterminado de combatientes y soldados habrían muerto. Además, miles de personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares se hallaban en una precaria situación humanitaria, viviendo en la selva sin acceso a agua, alimentos ni medicamentos. El OPM admitió haber llevado a cabo el mencionado ataque, pero sostuvo que las personas asesinadas no eran civiles que se hallaban construyendo una carretera, sino militares pertenecientes al cuerpo de ingenieros de las Fuerzas Armadas que habían estado fotografiando a manifestantes en los días anteriores a la masacre. En este sentido, el 1 de diciembre casi 600 personas habían sido detenidas en Indonesia con motivo de las manifestaciones que suelen producirse en varias partes del país para conmemorar el día en el que se izó por primera vez la bandera que simboliza la independencia de Papúa, en 1961. El OPM también justificó su acción armada alegando que la construcción de la mencionada carretera (denominada Trans-Papúa, de unos 4.600 kilómetros) sería utilizada por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para profundizar sus operaciones de contrainsurgencia y para controlar aquellas zonas más remotas y de difícil acceso. El OPM aprovechó la visibilidad mediática que le confirió su acción para hacer pública su negativa a rendirse y su determinación a seguir luchando hasta que la región alcance la independencia. Por su parte, las Fuerzas Armadas, ante la condena unánime que provocaron las acusaciones vertidas por periodistas australianos sobre la utilización de armas químicas contra la población, negó no solamente haber utilizado dicho tipo de armamento, sino también disponer de él. Además, el Gobierno anunció su intención de redoblar la presencia militar en la región e hizo público que las Fuerzas Armadas se harían cargo de la finalización de la mencionada carretera Trans-Papúa. También cabe destacar que, ante la presión internacional que se produjo por las acusaciones de utilización de armas químicas, a finales de enero de 2019 la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció que Yakarta había autorizado a personal de su oficina a visitar Papúa Occidental para conocer la situación de primera mano. Los episodios de violencia que se vivieron a finales de 2018 y principios de 2019 se enmarcan en una tendencia al alza en la dinámica de confrontación entre las Fuerzas Armadas y el OPM, cuyo brazo armado declaró la guerra al Estado indonesio en enero de 2018. Dicha declaración –que fue reconocida por parte del OPM en enero del 2019 en la misma rueda de prensa en Port Moresby (capital del vecino país de Papúa Nueva Guinea) en la que invitaba

al Estado indonesio a entablar negociaciones de paz–, se produjo después de varios años en los que, según algunos analistas, el OPM habría reducido la intensidad de sus acciones armadas para dar una oportunidad a la nueva estrategia de gestión del conflicto que anunció al inicio de su mandato en 2014 el actual presidente, Joko Widodo.

Tailandia	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Aunque ya desde la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 numerosos sectores denunciaron su estilo autoritario, su campaña contra el narcotráfico (en la que murieron más de 2.000 personas) o su aproximación militarista al conflicto en el sur, la crisis sociopolítica que ha padecido Tailandia en los últimos años escaló en 2006. Ese año, tras hacerse público un caso de corrupción, se registraron masivas movilizaciones para exigir la renuncia de Thaksin Shinawatra hasta que, en el mes de septiembre, una junta militar llevó a cabo un golpe de Estado que le obligó a exiliarse. A pesar de que en agosto de 2007 fue aprobada en referéndum una nueva Constitución, el nuevo Gobierno no logró disminuir la polarización política y social y siguieron produciéndose de forma periódica manifestaciones multitudinarias impulsadas tanto por el Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura (movimiento conocido como “camisas rojas”, que apoya el retorno del ex primer ministro Thaksin Shinawatra) como por la Alianza Popular para la Democracia (movimiento conocido como “camisas amarillas”). Dicha inestabilidad desembocó en numerosos actos de violencia, en la renuncia de varios Gobiernos y en el derrocamiento del Gobierno de Yingluck Shinawatra –hermana de Thaksin Shinawatra– a través de un golpe de estado en mayo de 2014. Desde entonces, el país está gobernado por una junta militar denominada Consejo Nacional para la Paz y el Orden, que ha sido acusada en numerosas ocasiones de prohibir la acción de los partidos, restringir libertades fundamentales y derechos y de querer institucionalizar y perpetuar una situación de excepcionalidad constitucional y democrática.

Como en los años anteriores, no se produjeron movilizaciones sociales masivas ni episodios de violencia destacables, pero sí hubo un **incremento de las manifestaciones y de la presión nacional e internacional para que el Gobierno (oficialmente el Consejo Nacional para la Paz y el Orden) retirara la prohibición de la actividad política a los partidos y para que anunciara la fecha definitiva de las elecciones que deberían permitir al país recuperar la democracia y poner fin a la junta militar que gobierna el país desde mayo de 2014**. A pesar de las drásticas restricciones sobre el derecho de asociación y manifestación, en el primer trimestre del año se registraron varias movilizaciones en Bangkok y otras ciudades del país después de que el Gobierno pospusiera nuevamente (por quinta vez) y no concretara la fecha para la celebración de las mencionadas elecciones. Cabe destacar, por el interés

social y mediático que generó, la marcha de más de 450 kilómetros (de Bangkok a la localidad nororiental de Khon Kaen) que llevaron a cabo unas 200 de personas durante casi un mes en exigencia de varias demandas sociales, medioambientales y políticas, como la democratización del país o el respeto de los derechos humanos. Esta marcha estuvo organizada por People Go Network, una plataforma creada por organizaciones de la sociedad civil en 2016. Las manifestaciones volvieron a incrementarse nuevamente en mayo, coincidiendo con el cuarto aniversario del golpe de Estado contra la entonces primera ministra Yingluck Shinawatra. Durante el año el CNPO precisamente llevó a cabo varias acciones judiciales contra el partido Pheu Thai por considerar que esta formación política vinculada al ex primer ministro Thaksin Shinawatra (ex primer ministro también depuesto en golpe de Estado en 2006) contravenía la ley electoral y la prohibición del régimen sobre la actividad política de los partidos. Finalmente, el primer ministro, Prayuth Chan-ocha, anunció que las elecciones generales se llevarían a cabo en febrero de 2019, aunque añadió dos condiciones que crearon incertidumbre y malestar: que para entonces ya se hubiera llevado a cabo la coronación del nuevo rey Rama X y que se garanticen las condiciones para el mantenimiento de la paz y el orden. Además, varios analistas consideran que varias declaraciones del general Prayuth durante el año y el apoyo que éste ha recibido de varias formaciones políticas permiten intuir que éste va a concurrir a las mencionadas elecciones. Además de las protestas vinculadas a la fecha de las elecciones, durante el año volvieron a registrarse numerosas denuncias de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos. Cabe destacar especialmente el informe del secretario general de la ONU hecho público en septiembre en el que se incluye a Tailandia en la lista de 38 países en los que se llevan a cabo actos de represalia e intimidación contra aquellas personas que cooperan con Naciones Unidas para promover o proteger los derechos humanos.

2.3.4. Europa

Rusia y Cáucaso

Armenia	
Intensidad:	1
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La ex república soviética de Armenia se independizó en 1991, en el marco de descomposición de la URSS, e inició un proceso de transición convulso, marcado por la inestabilidad política y por la guerra con Azerbaiyán en torno al enclave de Nagorno-Karabaj (1992-1994). Su participación en dicha guerra le supuso sanciones internacionales, con grave repercusión en su economía, si bien experimentó

cierto repunte en años posteriores. Internamente, el país ha afrontado diversas crisis políticas desde su independencia, incluyendo la renuncia en 1998 del entonces presidente Levon Ter-Petrosian, acusado de concesiones a Azerbaiyán en el proceso de paz; o los episodios violentos de 1999 en el Parlamento, en que varios hombres armados mataron al primer ministro, al presidente de la cámara y a seis parlamentarios. Temas recurrentes de tensión en la etapa postsoviética han sido las fricciones entre Gobierno de turno y la oposición sobre irregularidades electorales, las denuncias sobre vulneración de los derechos humanos, especialmente de libertad de expresión y prensa, las críticas al uso de la fuerza en la represión de manifestaciones o a la corrupción. El clima de descontento y polarización se agravó a partir de la crisis electoral de 2008, con protestas contra el resultado, diversas víctimas mortales y la declaración de estado de emergencia. En 2018 protestas masivas pacíficas contra la prolongación en el poder del ex presidente y primer ministro Serzh Sargsyan llevaron a su salida del Gobierno, a nuevas elecciones y a un nuevo Ejecutivo.

Se incrementó la tensión entre abril y mayo, de la mano de protestas antigubernamentales que derivaron en la salida del hasta entonces presidente y nuevo primer ministro, Serzh Sargsyan, y elecciones anticipadas, que pusieron fin a la hegemonía longeva del Partido Republicano de Armenia (HHK). Tras 14 días de una marcha por el país del opositor Nikol Pashinyan –del minoritario partido opositor Contrato Civil–, el 13 de abril se extendieron y amplificaron las protestas en la capital, Yerevan, contra la prolongación en el poder de Serzh Sargsyan. Las protestas rechazaban los planes del Gobierno de designar a Sargsyan –quien agotaba en 2018 sus dos mandatos presidenciales–, como nuevo primer ministro –apoyándose en los cambios constitucionales aprobados en referéndum en 2015, que convertían a Armenia en república parlamentaria y que entraban en vigor con los comicios parlamentarios de 2017, en que ganó el HHK. Decenas de miles de personas se concentraron en la capital el 17 de abril, el mismo día que el Parlamento votó la designación de Sargsyan como primer ministro (76 votos a favor y 17 abstenciones). El día de antes 46 personas resultaron heridas, incluyendo 6 policías, en choques entre Policía y manifestantes, y en los que la Policía hizo uso de granadas de concusión. Las protestas se prolongaron, con carácter mayoritariamente pacífico y con estrategias de desobediencia civil no violenta. Pashinyan llamó a una “revolución pacífica”. Se iniciaron negociaciones entre Pashinyan y Sargsyan, que fracasaron, y Pashinyan fue detenido el 22 de abril. Miles de mujeres instaron a Sargsyan a dimitir mediante una protesta con cacerolas. En medio del contexto de movilizaciones masivas, Sargsyan dimitió el 23 de abril. Pashinyan fue liberado ese mismo día. El primer ministro en funciones, Karen Karapetian, descartó negociaciones con Pashinyan. Según trascendió en prensa, un día antes el presidente Putin había instado a Karapetian a una solución rápida que reflejara los resultados de los comicios de 2017, en que ganó el HHK. Posteriormente, el Gobierno ruso afirmó que consideraba los sucesos en Armenia como un asunto interno del país. Pashinyan fue

Protestas antigubernamentales pacíficas en Armenia resultaron en un cambio de gobierno, ratificado en elecciones anticipadas en diciembre

finalmente elegido como primer ministro en funciones por el Parlamento armenio el 8 de mayo, con 59 votos a favor, incluyendo varios del HHK, y 42 en contra. Cientos de manifestantes fueron detenidos durante las semanas de protestas, con acusaciones de participación en disturbios masivos, si bien fueron liberados horas o días después, según señaló Human Rights Watch. En todo caso, analistas destacaron la contención en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante las semanas de movilizaciones, en contraste con escaladas de tensión en años anteriores, incluyendo la crisis postelectoral de 2008, con una decena de víctimas mortales y varios centenares de heridos. Asimismo, miembros de las fuerzas de seguridad se unieron a las protestas de 2019. El nuevo programa de Gobierno puso el foco en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la educación y la economía. En lo que respecta al conflicto en torno a Nagorno-Karabaj, mantuvo una posición pública

en línea con Gobiernos anteriores, incluyendo en la defensa del control por las fuerzas armenias de los distritos alrededor de Nagorno-Karabaj. Por otra parte, se celebraron elecciones parlamentarias anticipadas en diciembre, en el marco de las aspiraciones de Pashinyan de ratificar electoralmente sus apoyos. Obtuvo un 70% de los votos (88 de los 132 escaños), mientras el HHK no obtuvo representación parlamentaria. La participación (48,6%) fue más baja que en comicios anteriores.

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Azerbaiyán, Armenia, autoproclamada República de Nagorno-Karabaj

Síntesis:

La tensión entre ambos países en relación a la región de Nagorno-Karabaj –enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán aunque independiente *de facto*– está asociada a la no resolución de las cuestiones de fondo del conflicto armado transcurrido entre diciembre de 1991 y 1994. Éste comenzó como un conflicto interno entre las milicias de autodefensa de la región y las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán por la soberanía y control de Nagorno-Karabaj y progresivamente degeneró en una guerra interestatal entre ésta y su vecina Armenia. El conflicto armado, que causó 20.000 muertos y 200.000 desplazados y que homogeneizó de forma forzosa la composición étnica de la población en ambos lados de la línea de alto el fuego, dio paso a una situación de conflicto no resuelto, con la cuestión del estatus de Nagorno-Karabaj y el retorno de la población como principales ejes de tensión, y con violaciones periódicas del alto el fuego.

La situación de seguridad mejoró en los últimos meses del año, tras un acuerdo para un mecanismo de comunicación directa entre las partes en conflicto, que conllevó una reducción significativa de la violencia.

Durante al año se abrieron interrogantes sobre el impacto que podría tener en el conflicto de Nagorno-Karabaj el cambio de Gobierno armenio, resultado de protestas masivas antigubernamentales. Protestas masivas pacíficas entre abril y principios de mayo, calificadas como la Revolución de Terciopelo, contra la prolongación en el poder del presidente saliente Serzh Sargsyan como nuevo primer ministro –tras los cambios constitucionales de 2015 y tras agotar los dos mandatos presidenciales– derivaron en la salida de Sargsyan y la designación de Nikol Pashinyan –del partido opositor Contrato Civil y uno de los principales líderes de las protestas– como primer ministro en funciones en mayo. Las elecciones anticipadas de diciembre resultaron en la victoria con más del 70% de los votos de la alianza Mi Paso, liderada por Pashinyan, mientras el Partido Republicano de Sargsyan no obtuvo votos suficientes para entrar en la Cámara. No obstante, los comicios tuvieron poca participación, el 48,6%, en contraste con los elevados niveles de movilización durante las protestas. El cambio de liderazgo generó interrogantes sobre su impacto en la disputa. Tras ser designado primer ministro en funciones, Pashinyan mantuvo una posición pública sobre la cuestión de Nagorno-Karabaj similar a la de líderes armenios anteriores, afirmando la pertenencia a Nagorno-Karabaj de los diversos distritos alrededor de Nagorno-Karabaj tomados militarmente por las fuerzas armenias durante la guerra de los años noventa. Pashinyan también reclamó la participación directa de los representantes de Nagorno-Karabaj en el proceso de paz. No obstante, bajo su liderazgo se produjeron avances en los últimos meses del año. Así, Armenia y Azerbaiyán alcanzaron un acuerdo en septiembre, en el marco de una cumbre de la Comunidad de Estados Independientes, para la **creación de un mecanismo de comunicación directa entre los Ministerios de Defensa con el objetivo de prevenir incidentes. Su entrada en vigor, en octubre, fue acompañada de una reducción del número de incidentes violentos**, según anunciaron ambos Gobiernos. Los co-mediadores del Grupo de Minsk de la OSCE valoraron positivamente la medida. A finales de año, en una nueva reunión con el Grupo de Minsk, los ministros de Exteriores se mostraron de acuerdo en la necesidad de adoptar medidas concretas que preparen a las respectivas poblaciones a la paz. En meses anteriores se habían producido **nuevos incumplimientos del alto el fuego, con varias decenas de víctimas mortales**. Además, ambos países realizaron ejercicios militares de gran escala. Por otra parte, hubo protestas en Nagorno-Karabaj en diversos momentos. Se produjeron protestas en junio, consideradas sin precedentes, tras unos incidentes de violencia entre agentes de seguridad y dos civiles. Las movilizaciones provocaron la dimisión del jefe de la Policía y el jefe del servicio de seguridad nacional y de otro alto cargo. Además, el máximo líder de Nagorno-Karabaj anunció que no se presentaría a los comicios de 2020. Algunos análisis establecieron vínculos entre las protestas sociales en Armenia y en Nagorno-Karabaj. A finales de año se produjeron tensiones entre representantes de Nagorno-Karabaj y el nuevo Ejecutivo armenio.

Rusia (Daguestán)

Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Daguestán, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)

Síntesis:

Daguestán, la república más extensa, poblada y con mayor diversidad étnica del norte del Cáucaso, afronta desde finales de los años noventa niveles diversos de conflictividad armada. La insurgencia armada de corte islamista salafista, que defiende la creación de un Estado islámico en el norte del Cáucaso, se enfrenta a las autoridades locales y federales, en un contexto de atentados periódicos y operaciones de contrainsurgencia. La oposición armada se ha articulado en torno a diversas estructuras, como la red de unidades armadas y de carácter islamista conocida como Sharia Jammát, y posteriormente a través de Vilayat Daguestán, ambas integradas en la insurgencia del norte del Cáucaso (Emirato Caucásico). A partir de finales de 2014 diversos comandantes de Daguestán y el norte del Cáucaso proclamaron su lealtad a ISIS, escindiéndose de Emirato Caucásico y estableciendo una rama caucásica vinculada a ISIS (Vilayat Kavkaz). Además, una parte de la insurgencia se ha desplazado a Siria e Iraq, uniéndose a diversos grupos armados. La violencia armada en Daguestán es resultado de un cúmulo de factores, incluyendo la regionalización de la insurgencia islamista procedente de Chechenia así como el clima local en Daguestán de violaciones de derechos humanos, a menudo enmarcadas en la “lucha contra el terrorismo”. Todo ello en un contexto social y político frágil, de malestar social por los abusos de poder y la corrupción y los elevados índices de desempleo y pobreza, pese a la riqueza de recursos naturales. A ello se añaden tensiones interétnicas, rivalidades por el poder político y violencia de corte criminal. En los últimos años la violencia armada se ha reducido.

La situación de violencia en Daguestán continuó reduciéndose, siguiendo la tendencia de los últimos años, por lo que dejó de ser considerada como un conflicto armado. Aun así siguieron produciéndose incidentes, **que causaron varias decenas de víctimas mortales, así como un clima de violaciones de derechos humanos**. Entre los episodios de violencia, ISIS se atribuyó un ataque en febrero contra una iglesia ortodoxa en la localidad de Kizlar, ataque en que murieron seis personas –incluyendo el atacante– y otras cinco resultaron heridas, tres de ellas policías. Un ataque con armas de fuego contra un coche policial en julio, con dos policías muertos y otro herido, fue también reivindicado por ISIS. Las autoridades llevaron a cabo operaciones antiterroristas durante el año, con diversas víctimas mortales. Se produjeron también detenciones y condenas de cárcel contra personas acusadas de terrorismo. Por otra parte, la situación de derechos humanos continuó siendo grave. La rama daguestaní de la organización de derechos humanos rusa Memorial sufrió ataques, incluyendo contra su director, Sirazhutdin Datsiev, en mayo, así como daños materiales contra uno de los vehículos de la organización en enero, y que se

suman a los ataques y persecución contra Memorial en los primeros meses del año en Chechenia e Ingushetia. Asimismo, como en años anteriores, las autoridades llevaron a cabo redadas contra mezquitas consideradas próximas al salafismo, con detenciones de creyentes, en un contexto de persecución del régimen contra el salafismo, con acusaciones en los últimos años de prácticas de “falsos positivos” (ejecuciones de hombres jóvenes civiles que son presentados como insurgentes o terroristas).

Rusia (Chechenia)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Sistema, Identidad, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno federal ruso, Gobierno de la República de Chechenia, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico, ISIS)

Síntesis:

Tras la llamada primera guerra de Chechenia (1994-1996), que enfrentó a la Federación de Rusia con la república chechena principalmente por la independencia de esta última (autoproclamada en 1991 en el contexto de descomposición de la URSS) y que terminó en un tratado de paz que no resolvió el estatus de Chechenia, el conflicto se reabrió en 1999, en la llamada segunda guerra chechena, con el detonante de unas incursiones en Daguestán por rebeldes chechenos y atentados en ciudades rusas. En un contexto preelectoral y con un discurso antiterrorista, el Ejército ruso entró de nuevo en Chechenia para combatir al régimen independentista moderado surgido tras la primera guerra y asolado a su vez por disputas internas y creciente criminalidad. Rusia dio por acabada la guerra en 2001, sin acuerdo ni victoria definitiva, y propició un estatuto de autonomía y una administración chechena pro-rusa, pero los enfrentamientos persisten, en paralelo a la islamización de las filas rebeldes chechenas y una regionalización de la lucha armada. Asimismo, la población civil hace frente a graves violaciones de derechos humanos, en gran parte cometidas por las fuerzas de seguridad locales.

Se mantuvo la tensión en torno a varios ejes, incluyendo incidentes de violencia, con varias decenas de víctimas mortales, así como fuerte represión interna por parte de las autoridades chechenas. En relación a la violencia, **ISIS reivindicó diversos ataques**. Entre ellos, un ataque contra una iglesia ortodoxa en la capital, Grozny, en mayo, con diversas víctimas mortales (dos policías, un creyente y los cuatro atacantes) y heridos (otros dos policías y un creyente). Además, ISIS también reivindicó varios ataques en agosto, entre ellos un atentado suicida contra un puesto de policía en la localidad de Merker-Yurt; un ataque con un vehículo contra agentes de la policía en Grozny; y un asalto con arma blanca contra una comisaría en la localidad de Shali. Según las autoridades chechenas,

Por primera vez desde 2011, un grupo de Estados de la OSCE invocaron un mecanismo de la organización para establecer una misión de investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Chechenia

los autores fueron menores de edad. Los hechos fueron seguidos de detenciones e interrogatorios masivos contra jóvenes en Shali. Las autoridades chechenas rechazaron la supuesta autoría de ISIS, alegando que el grupo no existía en Chechenia, pese a que gran parte de los combatientes islamistas del norte del Cáucaso han expresado en los últimos años su adhesión a ISIS –que en 2015 declaró el Vilayat Kavkaz (Provincia Caucásica) en diversas zonas de la región, incluyendo Chechenia. Asimismo, se calcula que varios miles de personas de nacionalidad rusa se unieron a las filas de ISIS en Siria e Iraq, de los que un número indeterminado procedían de Chechenia. Como en años anteriores, el presidente checheno, Ramzan Kadyrov, amenazó con prácticas de castigo colectivo contra los familiares de los acusados. En noviembre se produjo otro ataque suicida contra un puesto policial en Grozny, que no causó heridos.

Continuó el clima de represión y violencia contra defensores de derechos humanos y activistas.

El director de la rama chechena del grupo de derechos humanos Memorial, Oyub Titiyev, fue detenido en enero y mantenido en prisión preventiva el resto del año, acusado de posesión de drogas. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Organización Mundial contra la Tortura, FIDH y otras emitieron un comunicado conjunto ese mismo mes, defendiendo el trabajo de Titiyev y Memorial y exigiendo su liberación. Actores internacionales como el Parlamento Europeo también reclamaron su puesta en libertad. 15 Estados miembro de la OSCE expresaron preocupación por la situación de las personas defensoras de derechos humanos, así como periodistas y personas sometidas a arrestos, detenciones, torturas y asesinatos por su orientación sexual e identidad de género, e invocaron en agosto el llamado mecanismo de Viena de la OSCE. A través de esta herramienta, exigieron a Rusia claridad sobre las medidas adoptadas por las autoridades federales para garantizar que el régimen checheno cumple con los compromisos de Rusia en la OSCE. También le requirieron información sobre los pasos adoptados para la investigación federal de violaciones de derechos

humanos en Chechenia, incluyendo de personas LGTBI y la ejecución extrajudicial de 27 personas en enero de 2017. Asimismo, entre otras cuestiones, exigieron a Rusia medidas para garantizar el trabajo de medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, incluyendo Memorial. En noviembre, 16 Estados invocaron otra herramienta de la OSCE, el Mecanismo de Moscú –usado por última vez en 2011– para establecer una misión de personas expertas que investiguen las violaciones de derechos humanos denunciadas. Por otra parte, un acuerdo de demarcación fronteriza

alcanzado entre las autoridades de Chechenia y de Ingushetia y que implicaba intercambio de territorio generó protestas en Ingushetia.

Sudeste de Europa

Serbia – Kosovo	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Gobierno Internacional ³⁵
Actores:	Serbia, Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, UNMIK, KFOR, EULEX

Síntesis:

La tensión entre Serbia y Kosovo está asociada al proceso de determinación del estatus político de la región tras el conflicto armado de 1998-1999, que enfrentó al grupo armado albanés ELK contra el Gobierno serbio y a la OTAN contra este último, tras años de represión del régimen de Slobodan Milosevic contra la población albanesa de la entonces provincia de Serbia en el marco de la federación yugoslava. La ofensiva de la OTAN, no autorizada por la ONU, dio paso a un protectorado internacional. En la práctica, Kosovo quedó dividido sobre líneas étnicas, con un incremento de las hostilidades contra la comunidad serbia, cuyo aislacionismo fue a su vez potenciado desde Serbia. El estatus final del territorio y los derechos de las minorías han sido eje de tensión continua, a lo que se añaden los problemas internos de Kosovo (ej. paro, corrupción, criminalidad). El proceso de determinación del estatus final, iniciado en 2006, no logró un acuerdo entre las partes ni el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU a la propuesta del enviado especial de la ONU. En 2008, el Parlamento de Kosovo proclamó la independencia del territorio, rechazada por la población serbia de Kosovo y por Serbia.

Se incrementó la tensión entre Serbia y Kosovo. Por una parte, durante el año **el Gobierno de Serbia acusó a Kosovo de no cumplir con su compromiso de establecimiento de la asociación de municipios serbios de Kosovo**, derivado de los acuerdos de 2013. Por otra parte, diversos incidentes de seguridad pusieron de manifiesto las difíciles relaciones entre Serbia y Kosovo. La Policía kosovar detuvo y deportó al jefe de la Oficina de Kosovo de Serbia, Marko Duric, en un visita a Mitrovica, lo que generó protestas serbokosovares y varios heridos en choques con la Policía. A su vez, Serbia puso a su Ejército en posición de preparación para el combate durante una visita sorpresa en septiembre del presidente de Kosovo Hashim Thaci, acompañado de fuerzas especiales de la Policía, al norte de Kosovo, incluyendo la localidad de Zubin Potok, de mayoría serbia, y el lago de Gazivode, en disputa y cuya central hidroeléctrica es controlada por Serbia. Simultáneamente, el movimiento opositor albanokosovar Vetevendosje (Autodeterminación) organizó protestas en la capital kosovar contra la posibilidad de que un acuerdo final entre Serbia y Kosovo incluya un intercambio de territorio. En ese sentido, Thaci había anunciado en agosto que llevaría a la mesa negociadora la idea de una “corrección de la frontera” para la integración de áreas albanesas del valle de Presevo de Serbia en Kosovo,

mientras rechazó la posibilidad de que se llevase a cabo una partición territorial de Kosovo –que afectaría a las áreas de mayoría serbia del norte de Kosovo. La opción de una modificación territorial generó numerosas reacciones. El presidente de Serbia se mostró favorable a una demarcación fronteriza y defendió la integración de las áreas serbias del norte de Kosovo en Serbia. El asesor de seguridad nacional de EEUU John Bolton afirmó que EEUU no obstaculizaría un intercambio fronterizo si éste era resultado de un acuerdo entre ambas partes. La tensión en torno a este tema estuvo presente en el proceso negociador facilitado por la UE. Otro factor que generó un deterioro de las relaciones entre ambos Gobiernos fue **la aprobación en diciembre por el Parlamento kosovar de la legislación para la transformación de la Fuerza de Seguridad de Kosovo en un Ejército**. La OTAN lamentó la decisión. Los planes y avances durante el año en esa dirección generaron críticas y llamadas de alerta de Serbia. A su vez, el Gobierno kosovar introdujo en noviembre aranceles del 10% a las importaciones de Serbia y de Bosnia, como medida de protesta por su falta de reconocimiento a la independencia de Kosovo, entre otros factores, y a finales de ese mes los aumentó al 100%. Serbia lo calificó como el desafío más difícil desde la declaración de independencia de Kosovo en 2008. Alcaldes de cuatro localidades del norte de Kosovo, de mayoría serbia, dimitieron y cortaron la comunicación con Kosovo en protesta, mientras el presidente serbio canceló el proceso negociador en diciembre.

2.3.5. Oriente Medio

Golfo

Arabia Saudita	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)

Síntesis:

Gobernada desde el siglo XVIII por la familia al-Saud y establecida como Estado en 1932, Arabia Saudita se caracteriza por su conservadurismo religioso y su riqueza, sustentada en las reservas de petróleo. Potencia regional, a nivel interno la monarquía sunní concentra el poder político y lidera las instituciones de gobierno, dejando escaso margen para la disidencia. Los partidos políticos no están permitidos, la libertad de expresión constreñida y muchos derechos básicos limitados. La minoría chií, concentrada en la zona este del país, ha denunciado marginación y exclusión de las estructuras del Estado. Las autoridades han sido acusadas de emprender acciones represivas en nombre de la seguridad del país y en el marco de campañas antiterroristas, que tienen entre sus

35. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

objetivos militantes de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). En el contexto de la denominada Primavera Árabe de 2011, las protestas pro-reformas y democracia suscitaron una respuesta represiva del Gobierno –en especial en las zonas de mayoría chií del país–, y las autoridades han denunciado la existencia de intentos de desestabilización desde el exterior, señalando a Irán. El país es escenario de acciones armadas esporádicas de AQPA y, más recientemente, de células vinculadas presuntamente a ISIS.

Como en años previos, la tensión en Arabia Saudita estuvo condicionada por cuestiones de política interna y por las consecuencias de su política exterior, dada su creciente implicación en asuntos regionales, como la guerra en Yemen, y la disputa de poder con Irán. En 2018 se registraron menos episodios de violencia asociados a la actividad de grupos armados y a la contestación en la zona shíi del país respecto a la situación en 2017. Sin embargo, durante el año **las políticas represivas del régimen quedaron ampliamente expuestas a nivel internacional como consecuencia del asesinato del periodista disidente Jamal Kashoggi en el consulado saudí en Estambul, en octubre.** El brutal crimen motivó críticas al reino y, en especial, al príncipe heredero Mohamed bin Salman, considerado instigador del asesinato. Una investigación de la CIA estadounidense concluyó que el príncipe había ordenado asesinar al periodista. El Gobierno saudí destituyó a altos cargos, anunció la reestructuración de los servicios de inteligencia y arrestó a casi una veintena de personas por su presunta responsabilidad en el crimen. No obstante, al finalizar el año no se había puesto en marcha una investigación independiente como demandaba la ONU. El asesinato fue solo uno de los múltiples abusos y vulneraciones a los derechos humanos de los que fue acusado el régimen durante el año. Organizaciones internacionales destacaron que Riad continuó con sus severas restricciones a la libertad de expresión y asociación y con la persecución a voces disidentes, incluyendo personas defensoras de los derechos humanos y mujeres activistas. En este sentido, cabe destacar que en junio un decreto real puso fin a la prohibición de conducir a las mujeres. Sin embargo, un mes antes, las autoridades detuvieron a destacadas activistas que habían defendido el derecho a las mujeres a conducir. En los meses siguientes se detuvo a otras dos activistas defensoras de esta causa y del fin del sistema de guardianes masculinos. A esto se suma que el Relator Especial de la ONU sobre Contraterrorismo alertó en junio sobre el uso abusivo de la ley antiterrorista en Arabia Saudita para criminalizar las críticas a las autoridades. Amnistía internacional también llamó la atención sobre las condenas a muerte en el país y, en particular, por su aplicación tras confesiones bajo tortura o contra disidentes. Entre ellos, algunos activistas shíies que enfrentan cargos relacionados con su participación en manifestaciones para demandar reformas y mayores derechos para su comunidad, afectada por una serie de políticas discriminatorias. Finalmente, cabe destacar que durante todo el año Arabia Saudita enfrentó las consecuencias de su participación en la guerra en Yemen. A lo largo de 2018 las fuerzas al-houthistas

lanzaron numerosos proyectiles, principalmente hacia las zonas de Najran, Jizan, Khamis Mushait y también contra la capital, Riad. Las fuerzas saudíes interceptaron muchos de estos proyectiles, pero uno de ellos causó la muerte de un ciudadano egipcio en Riad en marzo, la primera víctima del conflicto yemení en la capital saudí. Arabia Saudita mantuvo su pulso regional con Irán y la persecución a personas con presuntos vínculos con la república islámica y con Hezbollah. Durante el año tampoco hubo avances para resolver la crisis regional que desembocó en la ruptura de relaciones con Qatar en 2017 por parte de Riad y de otros países de la zona, como Bahrein, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita acusa a Qatar de financiar el terrorismo y de pretender socavar la posición de Riad, cargos que Qatar niega y atribuye a la intención de sancionar su política exterior independiente.

Irán (noroeste)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG)

Síntesis:

A pesar de la naturaleza heterogénea y multiétnica de Irán, las minorías que habitan el país, entre ellas los kurdos, han sido sometidas a décadas de políticas centralistas y de homogeneización y han denunciado discriminación por parte de las autoridades de la República Islámica. En este contexto, desde 1946 distintos grupos políticos y armados de origen kurdo se han enfrentado a Teherán en un intento por obtener una mayor autonomía para la población kurda, que se concentra en las provincias del noroeste del país. Grupos como el Partido Democrático Kurdo (PDKI) y Komala encabezaron esta lucha durante décadas. Desde 2004 es el Partido por la Vida Libre en Kurdistán (PJAK), vinculado al PKK de Turquía, el que protagoniza el conflicto con Teherán, y su brazo armado, las Fuerzas de Defensa del Pueblo, se enfrenta periódicamente con las fuerzas iraníes, en particular miembros de la Guardia Revolucionaria.

Las hostilidades entre el Gobierno iraní y grupos armados kurdos se intensificaron y provocaron la muerte de al menos 60 personas durante 2018. Los incidentes se concentraron en la segunda mitad del año, en la zona noroeste del país y en territorios fronterizos controlados por el Gobierno Regional del Kurdistán en Iraq (KRG). Entre los hechos de violencia cabe destacar el ataque de fuerzas iraníes contra presuntos militantes que dejó nueve muertos en la frontera con Iraq, en junio; la ofensiva de combatientes kurdos contra un puesto de control en Marivan que provocó la muerte a una decena de miembros de la Guardia Revolucionaria y un número indeterminado de milicianos, en julio; los enfrentamientos en agosto entre integrantes del KDPI y fuerzas de seguridad iraníes en Oshnavieh que dejaron una veintena de fallecidos –12 guardianes

y 11 combatientes kurdos, según diversas fuentes–; y el ataque con misiles contra la base del KDPI en el Kurdistán iraquí que dejó 12 víctimas mortales en septiembre. Tras algunos de los incidentes Irán protestó ante el KRG denunciando que combatientes kurdos habían ingresado a su territorio desde Iraq, mientras que el KRG se quejó ante Teherán por vulneraciones a su integridad territorial. Organizaciones kurdas alertaron sobre ejecuciones de personas kurdas, incluyendo al menos una mujer y un menor de edad. ONG internacionales de derechos humanos continuaron denunciando vulneraciones contra las minorías en Irán, incluyendo la kurda, con prácticas como arrestos arbitrarios, torturas, malos tratos y juicios sin garantías contra activistas. Cabe destacar que la inestabilidad en el noroeste del país se sumó a la situación de inseguridad en otras áreas fronterizas de Irán con importante presencia de minorías, ya que durante 2018 se contabilizaron más de una decena de víctimas mortales en varios incidentes en la zona de Baluchistán (límite con Pakistán) vinculados a acciones del grupo Jaish al-Adl, y otras 25 en Ahvaz, en la sureña provincia de Khuzestán (frontera con Iraq) tras acciones reivindicadas por el grupo armado opositor Ahvaz National Resistance y por ISIS.

Egipto continuó padeciendo un clima de persecución a la disidencia y múltiples vulneraciones a los derechos humanos

julio de 2013, cuando cumplía su primer año de mandato, abrió nuevas interrogantes sobre el futuro del país en un contexto de persistente violencia, polarización, persecución política y de creciente control por parte de sectores militares.

Egipto continuó siendo escenario de un clima de tensión interna caracterizado por la represión a la disidencia, vulneraciones a los derechos humanos, abusos de las fuerzas de seguridad y la aplicación de medidas de excepción. Durante todo el año se mantuvo vigente el estado de emergencia –renovado cada tres meses por las autoridades–, impuesto por las actividades armadas en la península del Sinaí.³⁶ **A nivel político, el tema clave fue la celebración de elecciones presidenciales que consolidaron la posición de Abdel Fatah al-Sisi en el poder.** El mandatario anunció su intención de repostularse a principios de año y, en línea con los resultados que obtenía Hosni

Mubarak y sus predecesores en la etapa anterior a las revueltas en la región, consiguió un 97% de los votos válidos. Ello, después de que varios de sus adversarios desistieran de sus candidaturas, fueran arrestados o se les prohibiera presentarse. Los comicios tuvieron lugar en marzo, en medio de denuncias de compra de votos y de falta de garantías para unas elecciones libres y justas. Las autoridades intensificaron la persecución de opositores en la fase preelectoral y la judicatura anunció investigaciones contra dirigentes opositores que llamaron a boicotear la votación. Tras los comicios, continuaron los arrestos de diversas voces críticas, incluyendo blogueros, activistas políticos, periodistas, representantes de organizaciones de derechos humanos locales, diplomáticos, académicos y abogados de personas presas políticas. Después de que al-Sisi asumiera su nuevo mandato, en junio, el mandatario impulsó una reforma en el alto mando militar y se aprobaron nuevas medidas polémicas y restrictivas, entre ellas una norma que permite al Gobierno un mayor control de internet. El Parlamento también dio luz verde a una ley que permite al presidente otorgar inmunidad a altos cargos militares por crímenes cometidos entre julio de 2013 y enero de 2016, cubriendo el período del golpe militar contra el Gobierno de Mohamed Mursi y la represión a las movilizaciones de apoyo a los islamistas que causaron la muerte a un millar de personas. Durante todo el año continuaron también los procesos contra miembros de los Hermanos Musulmanes y las detenciones de personas supuestamente vinculadas al grupo, ilegalizado y declarado como organización terrorista. Numerosas personas fueron sentenciadas a muerte en 2018 por delitos vinculados con violencia política y terrorismo.

En este contexto, organizaciones de derechos humanos internacionales denunciaron múltiples abusos, alertando que muchas de las detenciones de disidentes se produjeron sin mediar órdenes de arrestos y que algunos casos podrían derivar en desapariciones

Mashreq

Egipto	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

En el marco de las llamadas “revueltas árabes”, las movilizaciones populares en Egipto llevaron al derrocamiento de Hosni Mubarak a principios de 2011. Durante tres décadas, Mubarak había liderado un gobierno autoritario caracterizado por la acumulación de poder en torno al oficialista Partido Nacional Democrático, las Fuerzas Armadas y élites empresariales; así como por un pluralismo político artificial, con constantes denuncias de fraude en las elecciones, políticas de acoso a la oposición y la ilegalización del principal movimiento disidente, los Hermanos Musulmanes (HM). La caída del régimen de Mubarak dio paso a un escenario político inestable, en el que se hizo evidente el pulso entre sectores que exigían profundizar en los objetivos de la revuelta, los grupos islamistas que aspiraban a una nueva posición de poder y el estamento militar que deseaba garantías de preservación de su influencia y privilegios en el nuevo esquema institucional. En este contexto, y tras un gobierno de transición liderado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), el triunfo electoral de los HM en los comicios parlamentarios y presidenciales pareció abrir una nueva etapa en el país en 2012. Sin embargo, el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en

36. Véase el resumen sobre Egipto (Sinaí) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

forzadas, ya que se desconocía su paradero. **La campaña independiente Stop Forced Disappearance había documentado 230 casos de desapariciones entre agosto de 2017 y agosto de 2018. Human Rights Watch alertó sobre el uso de las acusaciones de terrorismo para silenciar a personas y entidades de la oposición.** Amnistía Internacional también llamó la atención sobre el uso de los malos tratos, torturas y prolongados períodos de prisión preventiva para opositores y sobre la falta de investigación sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales, entre otros temas.

Iraq (Kurdistán)	
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Territorio, Recursos, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG), Turquía, Irán, PKK

Síntesis:

Concentrada en la zona norte de Iraq, la población kurda representa entre un 15 y un 20% del total de habitantes del país. Desde la creación del Estado iraquí, y tras el incumplimiento de las promesas sobre un Estado kurdo independiente en la región, la población kurda ha vivido un difícil encaje con el Estado iraquí y ha padecido severos casos de represión. En 1992, tras el fin de la Guerra del Golfo, el establecimiento de la zona de exclusión aérea en el norte de Iraq sentó las bases para la creación del Gobierno Regional del Kurdistan (KRG). Esta experiencia de autogobierno kurdo se vio reforzada después del derrocamiento del régimen de Saddam Hussein en 2003 y ganó reconocimiento en el esquema federal consagrado en la Constitución iraquí de 2005. Desde entonces, las divergentes interpretaciones sobre los derechos y competencias de cada una de las partes han alimentado las tensiones entre Erbil y Bagdad. La disputa se ha focalizado principalmente en el estatus de los llamados “territorios en disputa” y el control de los recursos energéticos. En el período más reciente, la guerra siria y la evolución del conflicto armado en Iraq han repercutido en las dinámicas de esta disputa, reavivando los debates sobre las perspectivas de un eventual Estado kurdo independiente.

Tras la intensificación del conflicto en 2017 con motivo de la celebración del referéndum de independencia impulsado por el Gobierno Regional del Kurdistan (KRG) –que no obtuvo respaldo internacional y derivó en medidas de represalia por parte de Bagdad, entre ellas la expulsión de fuerzas kurdas de territorios en disputa–, **durante 2018 se observó un descenso en la intensidad de la tensión. Desde principios de año se registraron contactos periódicos entre Erbil y Bagdad para abordar varios temas**, entre ellos la gestión de aeropuertos y fronteras terrestres, de los recursos petroleros y el presupuesto para la región kurda. El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, y el primer ministro del KRG, Nechirvan Barzani, se reunieron por primera vez tras la crisis a finales de enero y el dirigente federal

insistió en las condiciones de Bagdad para levantar las restricciones impuestas sobre la región kurda. Después del referéndum, el Gobierno federal cerró los aeropuertos de Erbil y Suleimaniya, y éstos no fueron reabiertos hasta que las partes alcanzaron un acuerdo en marzo. El pacto también supuso el envío de fondos por parte de Bagdad para el pago de salarios de empleados públicos de la región kurda (por primera vez desde 2014). La aprobación en marzo de los presupuestos por parte del Parlamento federal, sin embargo, fue motivo de disputa y alentó protestas de la dirigencia kurda –que boicoteó la votación– por la reducción de los recursos asignados al KRG. **A lo largo de 2018 la situación en la zona kurda también se vio determinada por la celebración de dos procesos electorales.** En mayo, tuvieron lugar los comicios federales –en los que resultó vencedora la coalición liderada por el clérigo shií Muqtada al-Sadr³⁷ que alentaron protestas y algunos episodios de violencia en el Kurdistan iraquí, en medio de denuncias de fraude. Tras esta votación, el primer ministro del KRG, Nechirvan Barzani –sobrino del histórico líder del KDP, Massoud Barzani, que renunció a la presidencia del KRG tras la crisis de 2017–, se reunió en Bagdad con el primer ministro iraquí saliente, y con su sucesor, Adel Abdul Mahdi, para abordar los temas pendientes entre el Gobierno federal iraquí y el KRG. En este contexto, durante el último trimestre, Erbil y Bagdad alcanzaron un acuerdo para reanudar las exportaciones desde Kirkuk, suspendidas desde la celebración del referéndum en 2017.

En septiembre se celebraron las elecciones a la asamblea kurda, que habían sido suspendidas en 2017 en medio de la crisis entre Bagdad y Erbil. Los comicios –los primeros desde 2013– arrojaron como vencedor al KDP (45 escaños), seguido del PUK (21). La comisión electoral también tuvo que tramitar denuncias de fraude en este caso, que llevaron a la anulación de resultados en 96 centros de votación (120.000 votos). Tras las elecciones, se confirmó la ascendencia de la familia Barzani en el KRG, con el nombramiento de dos primos en los más altos cargos. **El KDP designó al hasta entonces primer ministro Nechirvan Barzani como nuevo presidente del KRG y a Masrour Barzani, hijo de Massoud Barzani y hasta entonces principal responsable de seguridad de la región, como nuevo primer ministro.** Massoud Barzani, único presidente del KRG hasta 2017, ha continuado siendo el líder del KDP. Diversos análisis destacaron que como consecuencia del fracaso del referéndum y también debido al contexto electoral se intensificaron las tensiones entre los grupos políticos kurdos. Estas tensiones también se proyectaron a la política de Bagdad, donde por convención la presidencia corresponde a una persona kurda. Este puesto tradicionalmente ha sido ocupado por un representante del PUK, pero el KDP también promovió su candidato. La votación en el Parlamento federal dio la victoria al candidato del PUK, Barham Salih, que se convirtió en octubre en el nuevo presidente de Iraq.

37. Véase el resumen sobre Iraq en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Finalmente, cabe mencionar que a lo largo de todo el año Turquía lanzó numerosos ataques contra posiciones del PKK en territorios controlados por el grupo, que resultaron en decenas de personas fallecidas.³⁸ Por su parte, Irán también efectuó al menos una ofensiva contra una base del PDKI, grupo kurdo iraní, con un saldo de 12 víctimas mortales.³⁹ Los ataques de Turquía habrían causado víctimas civiles en el Kurdistán iraquí y la muerte de al menos dos peshmergas del KRG, según informaciones de prensa.

Israel – Siria – Líbano	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Recursos, Territorio Internacional
Actores:	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia), Irán

Síntesis:

La tensión tiene como telón de fondo el conflicto israelí-palestino y sus consecuencias en la región. Por una parte, la presencia de miles de personas refugiadas palestinas que se establecieron en el Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país hasta ocuparlo en 1982. El nacimiento del grupo armado chií Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano, con una agenda de resistencia contra Israel y de liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala de julio de 2006. Por otra parte, la guerra de 1967 significó la ocupación israelí de los Altos del Golán sirios que, junto al apoyo de Siria a Hezbollah, explica la tensión entre Israel y Siria. Desde 2011, el estallido del conflicto armado en Siria ha tenido un impacto directo en las dinámicas de esta tensión y en el posicionamiento de los distintos actores involucrados en la disputa.

La tensión histórica que enfrenta a Israel, Siria y Líbano se intensificó durante 2018, en parte como consecuencia de dinámicas vinculadas al conflicto armado sirio. **Durante el año se registraron numerosos incidentes armados que habrían causado más de un centenar de víctimas mortales, aunque el balance final es difícil de precisar. Los hechos de violencia se produjeron en un entorno volátil y en un clima enrarecido por una retórica agresiva y amenazas mutuas.** Parte importante de los incidentes estuvieron relacionados con el creciente recelo de Israel respecto a la presencia y ascendencia de Irán en Siria. A principios de año, en medio de acusaciones cruzadas, se produjo una escalada que supuso el derribo por Israel de un dron iraní que habría entrado en el espacio aéreo israelí –Teherán lo negó–, ataques israelíes contra objetivos iraníes en Siria y disparos de misiles sirios que habrían alcanzado territorio israelí.

La tensión entre Israel, Siria y Líbano se intensificó durante 2018, en parte como consecuencia de las dinámicas del conflicto sirio y de los recelos ante la influencia de Irán en ese país

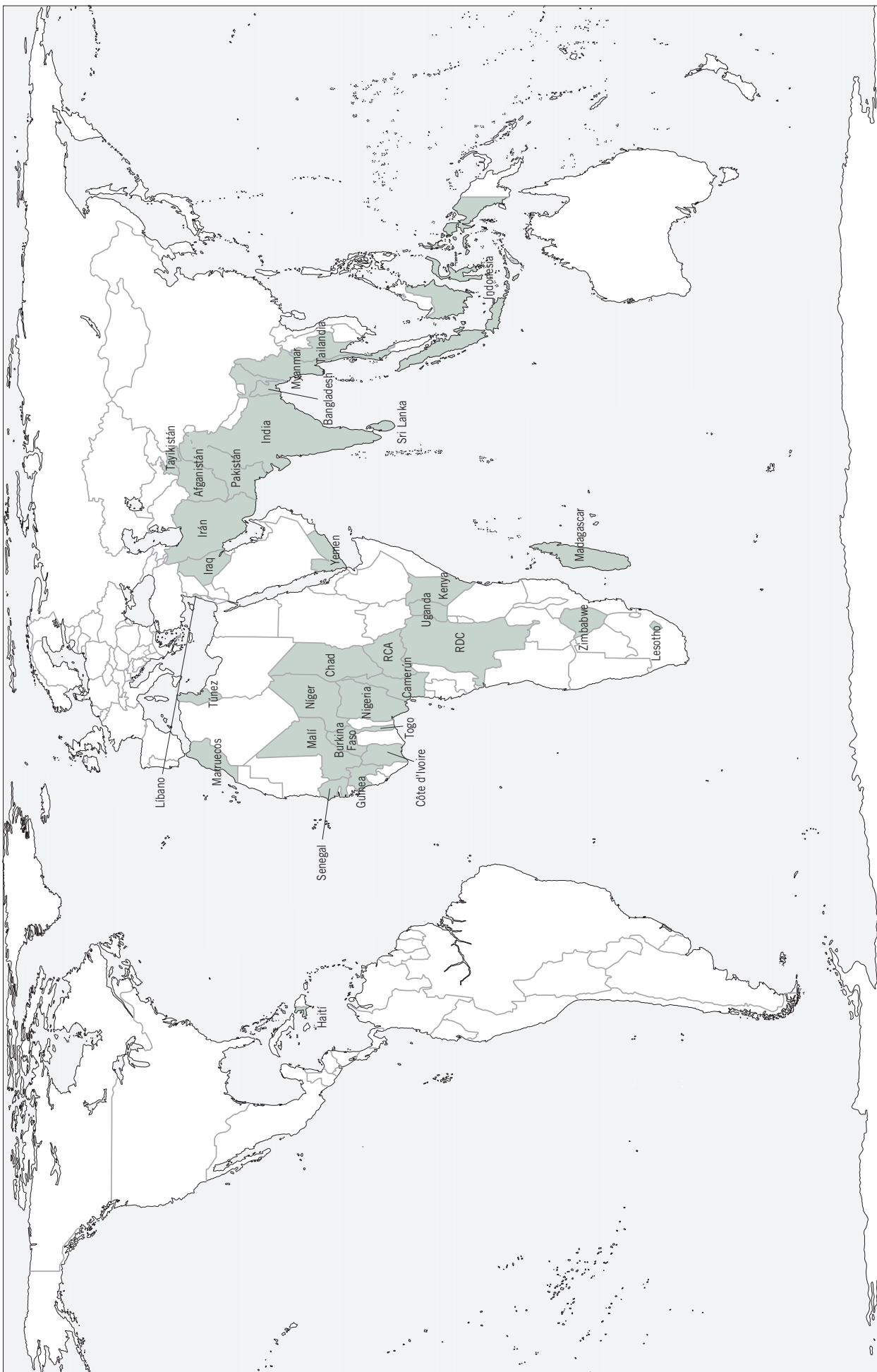
En abril, un nuevo ataque israelí contra una base aérea en la zona central de Siria causó la muerte de siete efectivos iraníes. Semanas más tarde, otra serie de ofensivas contra bases militares en el norte de Siria –de autoría difusa, aunque atribuidos a Israel por algunas fuentes–, provocó la muerte de 38 soldados sirios y 18 efectivos iraníes. La escalada se agudizó en mayo, después de que Israel decidiera lanzar ataques, algunos en Damasco, tras acusar a Irán de lanzar cohetes en la zona de los Altos del Golán. Estos ataques israelíes habrían causado la muerte de 23 personas y fueron considerados entonces como los más intensos desde el inicio del conflicto en Siria en 2011. Damasco aseguró que las ofensivas habían afectado objetivos sirios, no iraníes. Israel también atacó objetivos cerca de la zona fronteriza con Iraq, presuntamente contra fuerzas de origen iraquí alineadas con Teherán. En este contexto, el sistema antiaéreo sirio derribó por error una aeronave de Rusia (aliada de Damasco) con un resultado de 15 personas muertas cuando intentaba alcanzar a cuatro aviones israelíes que habían lanzado un ataque en la zona de Latakia supuestamente contra intereses iraníes. **Un alto cargo israelí reconoció que se habían lanzado al menos 200 ataques contra presuntos objetivos iraníes en Siria desde principios de 2017.** El Gobierno israelí insistió en que Irán debe retirarse completamente de Siria, rechazó las ofertas de Rusia para que las fuerzas iraníes se mantuvieran a más de 100 o de 85 kilómetros de los Altos del Golán ocupados por Israel y destacó que no detendría sus operaciones en Siria mientras continuaran las transferencias de armas iraníes a Hezbollah, a través de Siria. El partido-milicia shií libanés, por su parte, confirmó que continuaría apoyando al régimen de Damasco mientras fuera necesario.

Durante 2018 también se produjeron otra serie de incidentes en la zona fronteriza entre Israel y Líbano. Uno de los más destacados tuvo lugar a finales de año, cuando Israel lanzó una operación –que denominó “Escudo Norte”– para destruir túneles presuntamente construidos por Hezbollah que se adentraban en territorio israelí. La misión de la ONU en Líbano (UNIFIL) confirmó que al menos dos de los túneles cruzaban la denominada “Línea Azul”, contraviniendo la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. A lo largo del año también se atribuyeron a Israel otros ataques contra objetivos de Hezbollah y Hamas en territorio libanés. Asimismo, se mantuvo en la agenda la disputa por la demarcación terrestre y, sobre todo marítima, entre Líbano e Israel, influida por el descubrimiento de reservas de gas en el Mediterráneo, y no hubo avances en el establecimiento de un alto el fuego permanente entre Líbano e Israel. Los informes periódicos de UNIFIL también constataron que Israel continuó violando el espacio aéreo libanés de manera recurrente, en más de un millar de ocasiones en 2018.

38. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

39. Véase el resumen sobre Irán (noroeste) en este capítulo.

Mapa 3.1. Género, paz y seguridad



Países en conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos 2018

3. Género, paz y seguridad

- El 79% de los conflictos armados para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos.
- De los 19 contextos que fueron objeto de análisis en el informe del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en conflictos armados, nueve de ellos fueron conflictos armados de alta intensidad durante 2018.
- La mayoría de los procesos de paz a nivel internacional continuó excluyendo a las mujeres y no incluyó cuestiones relativas a la igualdad de género en las agendas de negociación, aunque se produjeron algunos avances en países como Afganistán, Georgia o Filipinas.
- Por primera vez se alcanzó la paridad en el Senior Management Group de Naciones Unidas (Grupo Superior de Gestión, órgano de alto nivel presidido por el secretario general, que reúne a dirigentes de los departamentos, oficinas, fondos y programas de las Naciones Unidas) y entre los coordinadores residentes.
- Un total de 79 países contaban con un plan de acción al finalizar 2018 de los que solo el 43% cuenta con un presupuesto específico asociado a la implementación del plan según WILPF.

El capítulo Género, paz y seguridad analiza los impactos de género de los conflictos armados y las tensiones sociopolíticas, así como la integración de la perspectiva de género en diversas iniciativas de construcción de paz en el ámbito internacional y local por parte de las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas, de los Gobiernos, así como de diferentes organizaciones y movimientos de la sociedad civil locales e internacionales.¹ Además se hace un seguimiento de la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad. La perspectiva de género permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre las mujeres y sobre los hombres, pero también en qué medida y de qué manera participan unas y otros en la construcción de paz y cuáles son las aportaciones que las mujeres están haciendo a esta construcción. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Instituciones Sociales y Género; en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Instituciones Sociales y Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

3.1. Desigualdades de género

El Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI)² es una medición de la discriminación contra las mujeres en las instituciones sociales, que refleja las leyes, normas y prácticas discriminatorias en 180 países teniendo en cuenta cinco dimensiones: la discriminación en el seno de la familia, la violencia contra las mujeres, la preferencia por hijos varones, el acceso de las mujeres a los recursos y su acceso al espacio público. Las instituciones sociales discriminatorias (normas formales e informales, actitudes y prácticas) restringen el acceso de las mujeres a los derechos, la justicia y el empoderamiento, y perpetúan las desigualdades de género en áreas como la educación, la salud, el empleo o la participación política.

1. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales.

2. El SIGI es un índice elaborado por la OCDE que mide cinco subíndices integrados por 16 indicadores que incluyen: matrimonio infantil, responsabilidades en el hogar, divorcio, herencias, violencia contra las mujeres, mutilación genital femenina, autonomía reproductiva, abortos selectivos por sexo, acceso seguro a la tierra, acceso seguro a la propiedad de otros recursos, acceso seguro a servicios financieros formales, derechos laborales, derechos de ciudadanía, participación política, libertad de movimiento y acceso a la justicia. OCDE, *Social Institutions & Gender Index*, OCDE, 2019.

Tabla 3.1. Países en conflicto armado y/o tensión con niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos³

	Niveles medios de discriminación	Niveles altos de discriminación	Niveles muy altos de discriminación	Sin datos
Conflictos armados⁴	Burkina Faso ⁵ India (2) Tailandia RDC (3)	Chad ⁶ Malí Myanmar Nigeria ⁷ RCA	Afganistán Camerún ⁸ Iraq Níger ⁹ Pakistán (2) Yemen (2)	Argelia Burundi Egipto Israel ¹⁰ Libia Níger Palestina ¹¹ Siria Somalia Sudán (2) Sudán del Sur
Tensiones	Haití India (4) ¹² Kenya Lesotho RDC (4) ¹³ Senegal Tailandia Tayikistán Zimbabwe	Chad Côte d'Ivoire Indonesia Iraq Madagascar Marruecos Nigeria (2) Sri Lanka Togo Túnez Uganda	Bangladesh Guinea Irán (4) Líbano (2) ¹⁴ Pakistán (2)	Angola Arabia Saudita Bahrein China Congo, Rep. del Djibouti Egipto Eritrea Gambia Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Israel (2) Palestina ¹⁵ Siria Somalia Sudán (2) Sudán del Sur (2) Uzbekistán Venezuela

De acuerdo con el SIGI, los niveles de discriminación contra las mujeres fueron altos o muy altos en 29 países, concentrados principalmente en África, Asia y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos de este índice con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que **13 de los 34 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2018 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles altos o muy altos de discriminación, siete en países con niveles medios de discriminación y que 11 conflictos armados tenían lugar en países sobre los que no hay datos disponibles al respecto –Argelia, Burundi, Egipto, Israel, Libia, Níger, Palestina,¹⁶ Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur–**. Así, más del 54% de los conflictos armados

20 de los 34 conflictos armados que tuvieron lugar en 2018 se dieron en países donde existían niveles de discriminación de género medios, altos o muy altos

para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con niveles de discriminación de género altos o muy altos. Esta cifra asciende al 79% si se incluyen los contextos con niveles medios de discriminación. Asimismo, en otros cuatro países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles bajos (Etiopía, Ucrania y Turquía) o muy bajos (Colombia) de acuerdo con el SIGI. En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, al menos 26 de las 83 tensiones activas durante el año 2018 transcurrieron en países en los que existían graves desigualdades de género (niveles altos o muy altos según el SIGI), lo que supone un 41% de las tensiones para las que existían datos. Esta cifra asciende al 56% si se incluyen

- Tabla elaborada a partir de los niveles de la discriminación de género del SIGI (OCDE) señaladas en el último informe disponible (2019) y de las clasificaciones de conflicto armado y tensión de la Escola de Cultura de Pau (véase capítulo 1, Conflictos armados y capítulo 2, Tensiones). El SIGI establece cinco niveles de clasificación en función del grado de discriminación: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo.
- Entre paréntesis el número de conflictos armados o tensiones en dicho país.
- Burkina Faso, Níger y Malí protagonizan un único conflicto armado, denominado Región Sahel Occidental.
- Nigeria, Camerún, Chad y Níger protagonizan un único conflicto armado, denominado Región Lago Chad (Boko Haram).
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- Israel y Palestina protagonizan un único conflicto armado.
- En el SIGI Palestina recibe la denominación Gaza y Cisjordania.
- Una de las tensiones protagonizadas por la India hace referencia a la que mantiene con Pakistán.
- En el caso de RDC una de las tensiones es la tensión internacional denominada África Central (LRA), en la que intervienen tanto las Fuerzas Armadas congoleesas como milicias de autodefensa de la RDC. Véase el capítulo 2 (Tensiones).
- Una de las tensiones en Líbano hace referencia a la que mantiene con Israel y Siria.
- Véase nota 11.
- Ibid.

los países con niveles medios de discriminación. 18 tensiones transcurrían en países sobre los que no hay datos disponibles (Angola, Arabia Saudita, Bahrein, China, Rep. del Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, Gambia, Gaza y Cisjordania, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Israel, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Uzbekistán y Venezuela).

3.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género

En este apartado se aborda la dimensión de género en el ciclo del conflicto, en especial en referencia a la violencia contra las mujeres. La perspectiva de género es una herramienta de utilidad para el análisis de los conflictos armados y las tensiones de carácter sociopolítico y que permite dar visibilidad a aspectos generalmente obviados en este análisis tanto en términos de causas como de consecuencias.

3.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones

Al igual que en años anteriores, durante 2018 la violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos.¹⁷ Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados, fue documentada en diferentes informes, así como por medios de comunicación locales e internacionales.

En abril tuvo lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU el debate abierto sobre violencia sexual en conflictos armados. El secretario general presentó su informe anual de seguimiento y evaluación sobre esta materia. El informe del secretario general abarcó el año 2017 y analizó la situación de 19 países, 13 de ellos en situación de conflicto armado: Afganistán, RCA, Colombia, RDC, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), Siria y Yemen, a lo que se añade el conflicto en la región del Lago Chad, que incluye a Nigeria. Además, el informe identificó actores en conflicto responsables de la utilización

de violencia sexual, tanto gubernamentales como no gubernamentales. El informe destacó también que durante el año 2017 se desplegaron 21 personas asesoras de protección de las mujeres en siete misiones y que el Equipo de Expertos sobre el Estado de Derecho y la Violencia Sexual en los Conflictos llevó a cabo actividades en Colombia, Côte d'Ivoire, Guinea, Iraq, Liberia, Malí, Myanmar, Nigeria, RCA, RDC, Somalia, Sudán del Sur y Sudán. El informe señalaba el deterioro de las condiciones para las organizaciones de la sociedad civil a nivel global y cómo la violencia ha sido utilizada para agredir a defensoras de derechos humanos, así como intimidaciones contra testigos en casos penales por delitos de violencia sexual y crímenes de guerra relacionados. El secretario general apuntó en su informe que la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas marginadas económica y políticamente, en muchas ocasiones en zonas rurales remotas o en situaciones de desplazamiento forzado. Además, la violencia sexual fue tanto un factor de desplazamiento como de obstaculización de retorno de personas refugiadas o desplazadas internamente.

El debate estuvo centrado en la prevención de la violencia sexual, y contó con la participación de la abogada rohingya Razia Sultana, como representante de la sociedad civil. Sultana puso de manifiesto la situación de violencia en la que se encuentra la población civil rohingya, desplazada masivamente como consecuencia de las operaciones militares de las fuerzas de seguridad de Myanmar, denunciando los niveles alarmantes de violencia sexual que se produjeron durante estas operaciones. Sultana también se refirió al impacto de las transferencias de armas y de la industria minera en la utilización de la violencia sexual contra la población civil en el marco del conflicto armado. Cabe destacar que por primera vez el informe del secretario general se hizo eco de la situación de violencia sexual en Myanmar. En paralelo, la Representante Especial del secretario general para la Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten, destacó la nueva agenda del secretario general en este ámbito basada en tres pilares: 1) transformación de la cultura de la impunidad en disuasión a través de acciones judiciales; 2) abordar las desigualdades estructurales de género como la causa profunda de la violencia sexual y 3) fortalecer la apropiación y el liderazgo nacional para dar respuestas sostenibles centradas en las supervivientes a través

El informe anual del secretario general de la ONU identificó actores armados responsables de violencia sexual en conflictos armados en 10 países escenario de 14 conflictos armados

17. La ONU considera violencia sexual relacionada con los conflictos los “incidentes o pautas de violencia sexual [...], es decir, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable que se cometa contra las mujeres, los hombres, los niños o las niñas. Estos incidentes o pautas de comportamiento se producen en situaciones de conflicto o posteriores a los conflictos o en otras situaciones motivo de preocupación (por ejemplo, durante un enfrentamiento político). Además, guardan una relación directa o indirecta con el propio conflicto o enfrentamiento político, es decir, una relación temporal, geográfica o causal. Aparte del carácter internacional de los supuestos crímenes, que, dependiendo de las circunstancias, constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio u otras violaciones manifiestas de los derechos humanos, la relación con el conflicto puede ser evidente teniendo en cuenta el perfil y las motivaciones del autor, el perfil de la víctima, el clima de impunidad o la situación de colapso en que se encuentre el Estado en cuestión, las dimensiones transfronterizas o el hecho de que violen lo dispuesto en un acuerdo de cesación del fuego”. UN Action Against Sexual Violence In Conflict, *Marco analítico y conceptual de la violencia sexual en los conflictos*, noviembre de 2012.

Cuadro 3.1. Actores armados y violencia sexual en conflictos¹⁸

El informe del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos publicado en marzo de 2018 incluyó una lista de actores armados sobre los que pesan sospechas fundadas de haber cometido actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia sexual o de ser responsables de ellos en situaciones de conflicto armado, que son objeto de examen por el Consejo de Seguridad.¹⁹

	AGENTES ESTATALES	AGENTES NO ESTATALES
Iraq		ISIS
Malí		MNLA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, Grupos de Autodefensa de los Tuareg Imgad y sus Aliados
Myanmar	Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw)	
RCA		LRA; Facciones de ex-Seleka: Unión por la paz en la República Centroafricana, Movimiento Patriótico Centroafricano, Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana/facción de Gula, Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana/facción de Abdoulaye Hussein, Agrupación Patriótica para la Renovación de la República Centroafricana; Frente Democrático del Pueblo Centroafricano/Abdoulaye Miskine; Revolución y Justicia; Retorno, Reclamación y Rehabilitación/General Sidiki; Grupos antibalaka
RDC	Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo; Policía Nacional Congoleña	Alianza de Patriotas por un Congo Libre y Soberano; Fuerzas Democráticas Aliadas; Fuerzas para la Defensa del Congo; Milicias Bana Mura; Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda; Fuerzas de Resistencia Patrióticas de Ituri; Kamuina Nsapu; LRA; Nduma Defensa del Congo; Mai-Mai Kifua; Todas las facciones Mai-Mai Simba; Nyatura; Nduma Defensa del Congo-Renovado; Mai-Mai Raia Mutomboki; Todas las milicias twa
Siria	Fuerzas Armadas sirias y los servicios de inteligencia sirios	ISIS; Hay'at Tahrir Al-Sham (antes Frente Al-Nusra); Ejército del Islam, Ahrar Al-Sham; fuerzas pro gubernamentales que incluyen las milicias de las Fuerzas de Defensa Nacional
Somalia	Ejército Nacional Somalí; Policía Nacional de Somalia y sus milicias aliadas; fuerzas militares de Puntlandia	Al-Shabaab
Sudán	Fuerzas Armadas Sudanesas; Fuerzas de Apoyo Rápido	Movimiento por la Justicia y la Igualdad
Sudán del Sur	Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán; Policía Nacional de Sudán del Sur	LRA; Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Facción pro-Machar del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición; Facción pro-Taban Deng del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición
Otros casos		Boko Haram

del empoderamiento de las mujeres y la sociedad civil. Además, Patten invitó a que el Consejo de Seguridad examinara la posibilidad de establecer un fondo de reparaciones para las víctimas.

Cabe destacar que de los 19 contextos²⁰ que fueron objeto de análisis en el informe del secretario general de la ONU, nueve de ellos registraron niveles elevados de intensidad durante 2018 –Libia, Malí, Región Lago Chad (Boko Haram), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)– superando en general el millar de víctimas mortales anuales y generando graves impactos en las personas y el territorio, entre los que se incluía la violencia sexual relacionada con el conflicto armado. Además, en cinco de ellos también se

produjo una escalada de la violencia durante el 2018 con respecto al año anterior –Malí, RCA, Colombia, Afganistán y Yemen (al-houthistas)–.

Con respecto a la situación de **Myanmar**, cabe destacar que la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Myanmar –establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas–, presentó su informe sobre la vulneración de derechos humanos en los estados Kachin, Rakhine y Shan.²¹ El informe identifica múltiples vulneraciones de derechos y libertades además de violaciones graves del DIH. En lo que respecta a la violencia sexual y de género, cabe destacar que la misión incluía una asesora experta en esta cuestión y que tenía el

18. En esta tabla se utiliza la denominación de los actores armados tal y como aparece recogida en el informe del secretario general y que no necesariamente coincide con la utilizada en los capítulos 1 y 2 de este anuario.

19. Consejo de Seguridad de la ONU, *Violencia sexual relacionada con los conflictos. Informe del Secretario General*, S/2018/250, 23 de marzo de 2018.

20. En algunos países recogidos en el informe del secretario general de la ONU se produjo más de un conflicto armado de acuerdo con la definición de la Escuela de Cultura de Pau. El listado completo de conflictos armados en los países recogidos en el informe del secretario general es: Libia, Malí (norte), Región Lago Chad (Boko Haram) –incluye Nigeria–, RCA, RDC (este), RDC (este-ADF), RDC (Kasai), Somalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), Colombia, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria, Yemen (al-houthistas) y Yemen (AQPA).

21. *Report of the independent international fact-finding mission on Myanmar*, A/HRC/39/64, 12 de septiembre de 2018.

mandato de investigar violaciones y otras formas de violencia sexual. El informe revela que la violencia sexual fue utilizada como un método de tortura contra mujeres acusadas de formar parte o dar apoyo a los grupos armados de oposición de adscripción étnica en los estados Shan y Kachin durante las operaciones de seguridad llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas de Mynamar, conocidas como Tatmadaw. Esta violencia sexual también fue perpetrada por los servicios de inteligencia en contextos de detención. Muchas víctimas sufrieron violencia sexual al mismo tiempo que eran sometidas a trabajos forzados para las Tatmadaw, siendo algunas de ellas niñas menores de edad, que fueron amenazadas repetidamente. El informe denuncia la persecución específica de la población civil y la utilización de la violencia sexual contra mujeres y niñas principalmente, pero también contra hombres, incluyendo prácticas como la esclavitud sexual y el matrimonio forzado, y la persecución de aquellas víctimas que lograban escapar. El informe de Naciones Unidas recoge relatos de múltiples víctimas de secuestros por parte de soldados de forma individual y grupal para ser sometidas a violencia sexual en las zonas afectadas por el conflicto armado. El informe relata que la violencia sexual ha venido acompañada de extrema crueldad y comportamientos muy vejatorios para las víctimas. Además, se señala que la violencia sexual, entre otras graves violaciones de los derechos humanos, ha provocado el desplazamiento forzado de grandes cantidades de población. En lo que respecta a las acciones de los grupos armados de oposición kachin y shan, también se recoge la utilización de la violencia sexual, si bien en mucha menor escala que en el caso de las Fuerzas Armadas, aunque el informe apunta a las graves dificultades para documentar esta situación como consecuencia de los impedimentos a su labor por parte de las autoridades birmanas.

En lo que respecta a la situación del estado Rakhine, el informe también constata la utilización de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado en este estado, contra población civil rakhine y rohingya. Las mujeres y niñas rohingya sufrieron múltiples formas de violencia sexual durante los hechos de violencia de 2012 y existen también múltiples evidencias de la utilización de violencia sexual durante la escalada del conflicto en 2017. El informe de Naciones Unidas recoge que mujeres y niñas fueron separadas de la población masculina por parte de las Fuerzas Armadas, sometidas a violaciones grupales y a diversas formas de tortura sexual incluyendo mutilaciones y violadas durante las operaciones de seguridad que derivaron en el desplazamiento forzado de centenares de miles de personas que se refugiaron mayoritariamente en Bangladesh. El patrón de estas operaciones fue la entrada por parte de las fuerzas de seguridad en una población, la quema de casas y propiedades de población rohingya,

el asesinato indiscriminado o selectivo de población civil y violencia sexual contra mujeres y niñas, provocando desplazamientos de población masivos.

En la **RCA** persistieron las denuncias sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado. La ONG Médicos Sin Fronteras se hizo eco de un ataque armado en la localidad de Kiriwiri en febrero en el que más de una decena mujeres resultaron víctimas de violencia sexual.²² Además, la ONG señaló que durante los primeros seis meses del año atendió a 1.914 víctimas de violencia sexual en sus clínicas especializadas en el país.²³ En noviembre UNICEF denunció que miles de niños y niñas habían sido víctimas de violencia sexual, niñas en su mayoría, como consecuencia del conflicto armado que afecta al país, en un contexto en el que dos de cada tres niños dependen de la ayuda humanitaria.²⁴ Las niñas no solo sufren violencia sexual por parte de los actores armados activos en el grupo, sino también por personas de su entorno de confianza. Las niñas que han participado como combatientes en grupos armados, una vez desmovilizadas sufren un fuerte estigma debido a los prejuicios con respecto a su actividad sexual en el seno de los grupos armados. Además, UNICEF señala que las niñas que no asisten al colegio están en una situación de grave riesgo de sufrir violencia sexual y matrimonios y embarazos precoces, poniendo en grave riesgo su salud.

Sudán del Sur fue otro de los escenarios de conflicto armado en los que la violencia sexual tuvo un grave impacto. En diciembre Naciones Unidas denunció que más de un centenar de mujeres habían sido atendidas como consecuencia de los ataques sufridos en la zona de Bentiu, cercana a la frontera con Sudán. Durante el año, varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron esta violencia. Amnistía Internacional denunció prácticas de secuestro y de violación sistemática y violación en grupo por parte de fuerzas gubernamentales y milicias afines en los condados de Leer y Mayendit (región del Gran Alto Nilo) en el marco de la ofensiva militar entre abril y julio. Human Rights Watch se hizo eco de denuncias de agresiones sexuales y violaciones contra mujeres y niñas, que buscaron refugio en instalaciones de la ONU en la localidad de Wau (región de Bahr el Ghazal, noroeste).

En **Nigeria** continuó denunciándose violencia sexual en el marco del conflicto armado que enfrenta al Gobierno nigeriano y otros Estados vecinos con la insurgencia regional de Boko Haram. Integrantes de las Fuerzas Armadas de Nigeria han perpetrado violencia sexual y explotación sexual contra mujeres y niñas en los llamados campos satélites –campamentos establecidos en áreas cuyo control recupera el Ejército tras estar en manos de Boko Haram–, según denunció Amnistía

22. Medecins Sans Frontiers, *Survivors describe a mass rape ordeal outside Bossangoa*, MSF, 8 de marzo de 2018.

23. Medecins Sans Frontiers, *"The tip of the iceberg": Stream of patients offer glimpse into scale of sexual violence*, MSF, 7 de septiembre de 2018.

24. UNICEF, *Crisis in the República Centroafricana: En una situación de emergencia olvidada, los niños necesitan ayuda, protección y un futuro*, UNICEF, noviembre de 2018.

Internacional en un nuevo informe de 2018.²⁵ Según el informe, la violencia sexual estuvo especialmente extendida entre finales de 2015 y mediados de 2016, y se dio por parte de soldados del Ejército y de las milicias aliadas de la Fuerza Especial Conjunta Civil. Según la investigación de AI, soldados y miembros de las milicias han continuado llevando a cabo violencia sexual y explotación sexual con posterioridad. Asimismo, el informe denuncia prácticas de detención colectiva de hombres y adolescentes y su traslado a centros de detención militares durante periodos de tiempo prolongados, sin evaluaciones individualizadas, simplemente sobre la base de haber huido de zonas anteriormente bajo control de Boko Haram, y sin que se haya vuelto a tener información de muchos de ellos. Según AI, en la fuga de las zonas antes controladas por la insurgencia concurrían diversos factores, incluyendo los intentos de escapar del control de Boko Haram, la inseguridad alimentaria, la violencia indiscriminada del Ejército en esas localidades, entre otros.

En el estado indio de **Jammu y Cachemira**, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe sobre la situación de derechos humanos en el estado. En el informe se hizo eco de la violencia sexual que tanto las fuerzas de seguridad indias como los grupos armados de oposición han cometido en el marco del conflicto armado en las últimas décadas y las enormes dificultades en el acceso a la justicia por parte de las víctimas, así como la impunidad e inacción por parte del Gobierno indio y del estado de Jammu y Cachemira.²⁶ El informe se hacía eco de la petición por parte de la organización Kunan Poshpora Survivors ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado para que se investiguen 143 casos de violencia sexual entre 1989 y 2017. Además, el informe también recoge la preocupación por el hecho de que la legislación antiterrorista actualmente en vigor (AFSPA) dificulta enormemente la persecución de los responsables de violencia sexual integrantes de las fuerzas de seguridad. Naciones Unidas señaló que no se ha investigado de forma creíble e independiente las alegaciones de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad y también se tiene constancia de violencia sexual perpetrada por la insurgencia.

En Libia continuaron registrándose violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario durante 2018 en un clima de impunidad. Informes de la ONU y ONG internacionales denunciaron muertes de civiles, torturas, ejecuciones y detenciones

arbitrarias –tanto en centros oficiales como en instalaciones administradas por milicias–, incluyendo mujeres y niñas que fueron objeto de arrestos arbitrarios por sus relaciones familiares o acusadas de “crímenes morales”. La población migrante y refugiada continuó siendo especialmente vulnerable, víctima de prácticas como violencia y explotación sexual, secuestros, extorsiones, trabajos forzados y esclavitud. Un informe de la UNSMIL y la OHCHR publicado en diciembre de 2018, basado en más de 1.300 entrevistas entre enero de 2017 y agosto de 2018, subrayó las condiciones inhumanas de los centros de detención para personas migrantes y refugiadas y denunció que la abrumadora mayoría de mujeres y adolescentes entrevistadas confirmaron haber sido víctimas directas de violencia sexual o testigos de este tipo de abusos a otras mujeres.²⁷ El informe subraya que la prevalencia de la violación a mujeres que han transitado por Libia ha sido documentada por numerosas fuentes y que se repiten las denuncias de violaciones grupales, uso de violencia

física y amenazas de muerte. El informe precisa que mujeres y niñas nigerianas parecen especialmente vulnerables a la explotación por redes criminales y de tráfico de personas, ya que abandonan su país con la creencia de que les espera un trabajo en Europa y acaban en burdeles destinados al comercio sexual en Libia. Si bien las mujeres y niñas refugiadas y migrantes son víctimas desproporcionadas de la violencia sexual en Libia, el informe de la ONU y OHCHR constata que se ha detectado un incremento en el número de hombres y jóvenes que han recibido apoyo

físico y psicológico tras padecer abusos sexuales durante su paso por el país norteafricano. Paralelamente, se denunció la insuficiente o nula asistencia a las víctimas en Libia, lo que aumenta el riesgo de re-victimización.

3.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados

A lo largo del año se produjeron diferentes iniciativas de respuesta frente a la violencia sexual en el marco de los conflictos armados, así como de lucha contra la impunidad en diferentes estamentos judiciales. A continuación se recogen algunas de ellas.

La Corte Penal Internacional abrió una investigación preliminar sobre los crímenes cometidos contra la población rohingya en Myanmar, que podría dar lugar a una investigación formal. La fiscal de la CPI, Fatou

La Corte Penal Internacional abrió una investigación preliminar sobre los crímenes cometidos contra la población rohingya en Myanmar, incluyendo actos de violencia sexual

25. Amnistía Internacional, *Se llevaron a nuestros esposos y nos obligaron a ser sus parejas. Hambre y violación contra mujeres en el nordeste de Nigeria a manos de sus presuntos rescatadores*, AI, noviembre de 2018.

26. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Report on the Situation of Human Rights in Kashmir: Developments in the Indian State of Jammu and Kashmir from June 2016 to April 2018, and General Human Rights Concerns in Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan*, OACNUDH, 14 de junio de 2018.

27. UNSMIL-OHCHR, *Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya*, Informe conjunto de UNSMIL y OHCHR, 18 de diciembre de 2018.

Bensouda, anunció el inicio de esta investigación que incluirá entre otras violaciones a los derechos humanos los actos de violencia sexual. A pesar de que Myanmar no forma parte de la CPI, el hecho de que Bangladesh –país donde se refugiaron centenares de miles de personas que huyeron de la violencia de las fuerzas de seguridad birmanas– sí lo sea, ha permitido a la CPI iniciar esta investigación de carácter preliminar. Este anuncio se produjo después de que Naciones Unidas presentase su extenso informe sobre las violaciones de derechos humanos en el estado Rakhine de Myanmar. La relatora especial de Naciones Unidas para Myanmar, Yanghee Lee, había recomendado que se iniciara esta investigación. También en relación con la actividad de este tribunal internacional, Amnistía Internacional recomendó que se iniciara otra investigación plena con respecto a las acciones del grupo armado Boko Haram, incluyendo violencia sexual.

Con respecto a la actividad del Consejo de Seguridad de la ONU, cabe destacar que durante 2018 se aprobaron dos resoluciones con sanciones a Libia y a Somalia en las que se incluyeron aspectos relativos a violencia sexual y violencia de género. En el caso de Libia la resolución 2241 (2018) señalaba que “la planificación, la dirección o la comisión de actos de violencia sexual y por motivos de género” pueden constituir actos que “amenazan la paz, la estabilidad o la seguridad de Libia, u obstruyen o menoscaban la feliz conclusión de su transición política”, en una vinculación explícita y con pocos precedentes de la violencia sexual y de género con la inseguridad e inestabilidad de un país. De forma muy similar, en el caso de la resolución 2444 (2018) relativa a Somalia, se recuerda también que “la planificación, la dirección o la comisión de actos de violencia sexual y de género” también pueden ser “actos que constituyan una amenaza para la paz, la seguridad o la estabilidad de Somalia, o el suministro de apoyo a tales actos”. Cabe señalar que las resoluciones se aprobaron con la abstención de China y Rusia.

Naciones Unidas continuó desplegando la estrategia para abordar la explotación y abusos sexuales por parte de personal de la organización, anunciada en 2017 por el secretario general de la ONU, António Guterres, centrada en cuatro áreas de acción: derechos y dignidad de las víctimas, el fin de la impunidad, la participación de la sociedad civil y asociados externos, y la mejora de la comunicación estratégica. Como parte del despliegue, 34 entidades de Naciones Unidas facilitaron estrategias y planes de acción por países.²⁸ Según el informe, muchos incluían disposiciones para llevar a cabo visitas al terreno sin previo aviso y capacitación obligatoria anterior al despliegue para todas las categorías de personal. Asimismo, en 2017 se dio instrucciones a los representantes especiales en las cuatro operaciones de mantenimiento de la paz que

afroitan mayor número de denuncias de explotación y abusos sexuales (MINUSCA, MONUSCO, MINUJUSTH y UNMISS) para establecer un puesto de categoría intermedia o superior con funciones de Defensor de los Derechos de las Víctimas sobre el Terreno. Entre sus funciones está asegurar la incorporación del enfoque centrado en la víctima y con perspectiva de género. Además, responderán ante el representante especial de turno y ante la Defensora de los Derechos de las Víctimas. Según el informe, el trabajo de estos nuevos puestos tuvo ya efectos positivos. Por otra parte, desde 2017 todas las entidades del sistema de Naciones Unidas están obligadas a presentar denuncias cuando disponen de información suficiente para detectar un posible caso de explotación o abuso sexual, que implique a una víctima identificable.

En relación a las denuncias de explotación y abusos sexuales perpetrados por el personal militar y civil desplegado en misiones de Naciones Unidas, el informe del secretario general de la ONU constató una disminución en el número de denuncias registradas en 2017 con respecto a 2016. **En 2017 se presentaron 62 denuncias, de las cuales 20 hacían referencia a abusos sexuales y 42 a explotación sexual (frente a 145 denuncias en 2016, 99 en 2015 y 80 en 2014).** Además, 41 denuncias involucraban a 101 efectivos militares, otras 10 a 23 policías y otras 11 a 11 funcionarios civiles. Las 62 denuncias afectaban a 130 víctimas –21 niñas y 109 mujeres. De las 62 denuncias, 61 fueron remitidas para ser investigadas, mientras una seguía siendo objeto de examen al acabar el año. Se completaron 20 de esas 61 –14 consideradas fundadas y seis infundadas–, mientras otras 41 seguían pendientes al finalizar el año. Respecto a denuncias de 2016 con investigaciones completadas en 2017, 14 se consideraron fundadas y 19 infundadas. Por otra parte, en 2017 se registraron **75 denuncias contra personal de entidades distintas de las operaciones de mantenimiento de la paz y misiones políticas especiales** –y que abarca a ACNUR (39 denuncias), OIM (nueve), UNICEF (ocho), OOPS (ocho), UNFPA (tres), PMA (tres), UNOPS (dos), Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales de Penales (una), Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (una) y ONU Mujeres (una)–, lo que supuso un incremento del 42% con respecto a 2016. De estas denuncias, 25 involucraban a asociados ejecutores.²⁹ En 2017 también hubo una denuncia por violencia sexual perpetrada por fuerzas externas a Naciones Unidas que operan bajo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que supuso una reducción frente a las 20 denuncias de 2016.

Por otra parte, la **Oficina de la representante especial del secretario general de la ONU** sobre violencia sexual en los conflictos y el **Comité de la CEDAW** firmaron

28. Secretario General de la ONU, *Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales*, A/72/751, 15 de febrero de 2018.

29. Los asociados ejecutores son los actores que implementan actividades de los programas de entidades de Naciones Unidas, a través de acuerdos y recursos, e incluyen a instituciones gubernamentales, organizaciones intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

en 2018 un acuerdo marco de cooperación, para promover y proteger los derechos de las mujeres y niñas afectadas por la violencia sexual relacionada con los conflictos. El marco de cooperación les compromete a 1) establecer un programa de trabajo conjunto para la implementación de las recomendaciones de ambas instituciones; 2) promover la implementación en el ámbito estatal de los estándares de derechos humanos sobre protección de las mujeres y niñas afectadas por violencia sexual; y 3) cooperar para investigar y recopilar datos que permitan avanzar en la rendición de cuentas de los Estados con respecto a sus obligaciones en esta materia. El acuerdo pretende promover el fin de la impunidad con respecto a la violencia sexual. Se trata del primer marco de cooperación entre un órgano con mandato establecido por el Consejo de Seguridad y un mecanismo de derechos humanos.

En **Ucrania**, la misión de supervisión de la OSCE (SMM, por sus siglas en inglés) estableció una estructura de género, con el fin de fortalecer la integración de la perspectiva de género en su trabajo de observación sobre la situación de seguridad, incluyendo violencia sexual y de género. La nueva arquitectura incluye un cargo de persona asesora sénior de género, que responde ante el jefe de misión, y desde agosto de 2018 dos oficiales de género, con sede en Kiev y en Kramatorsk. También cuenta con una red de 13 puntos focales de género.

3.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado

Además de la violencia sexual, los conflictos armados y las tensiones tuvieron otros graves impactos de género. Las **mujeres defensoras de derechos humanos** continuaron afrontando numerosos obstáculos en situaciones de conflicto armado, crisis socio-política o en contextos de persecución de los derechos humanos. En el informe *Situación de las defensoras de los derechos humanos*, de principios de 2019,³⁰ el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos alertó de los graves riesgos que estas experimentan, incluyendo no reconocimiento a su condición de defensoras de derechos humanos y a su labor, marginación y exclusión sistemática; descrédito social, estigmatización y ataques al honor y la reputación; riesgos, amenazas y ataques en el ámbito privado y contra familiares y personas cercanas; agresiones físicas, violencia sexual, tortura, asesinatos y desapariciones forzadas; acoso, violencia y ataques en internet; acoso judicial y criminalización; denegación de participación, restricciones y represalias por colaboración con sistemas internacionales y regionales de derechos humanos; amenazas a la

condición jurídica; encarcelamiento físico; ataques contra colectivos y movimientos de defensoras de los derechos humanos. El informe también señala los riesgos específicos que afrontan grupos o colectivos de defensoras de los derechos humanos, como las niñas, las defensoras que no se ajustan a normas de género hegemónicas, defensoras indígenas y defensoras de grupos minoritarios, defensoras de derechos humanos con discapacidad, mujeres periodistas y abogadas, defensoras en puestos de liderazgo, activistas en contextos de conflicto armado y postconflicto, defensoras refugiadas, migradas y víctimas de tráfico ilícito y trata, mujeres defensoras privadas de libertad, defensoras medioambientalistas, defensoras de los derechos humanos de las mujeres y activistas que se ocupan de los derechos de las trabajadoras sexuales.

En **Ucrania**, un nuevo informe de género de la misión de supervisión de la OSCE (SMM, por sus siglas en inglés) señaló que el conflicto armado había incrementado los riesgos y la prevalencia de la violencia de género en el país.³¹ El informe, publicado en diciembre de 2018 y que analiza los años 2017 y 2018, señala impactos específicos de la violencia de género sobre las personas desplazadas internas. Por otra parte, apunta que en el periodo analizado se incrementó significativamente el número de personas a las que se otorgaba el estatus de víctima de trata. La mayor parte de mujeres registradas habían sido víctimas de trata con finalidades de explotación sexual. Según el informe, algunas fuentes gubernamentales y de sociedad civil identificaron un incremento en la trata con fines de explotación laboral, que afectaba a menudo a hombres. Según las fuentes consultadas por la SMM, el incremento en el número de víctimas de trata se debía tanto a factores vinculados al conflicto –como la difícil situación económica resultado del conflicto en el este de Ucrania, especialmente para la población desplazada– como factores no relacionados con el conflicto, como un mayor conocimiento entre la población sobre los servicios de asistencia. Por otra parte, también en relación a Ucrania durante el año se produjeron diversos ataques contra personas LGTBI, como señalaron la OSCE y la OHCHR. Según la OHCHR, la Policía ucraniana rara vez califica este tipo de ataques como crímenes de odio, lo que invisibiliza las motivaciones de los perpetradores.

Con respecto a la situación de **Nicaragua**, múltiples organizaciones de mujeres denunciaron la violencia y criminalización de las organizaciones feministas nicaragüenses en el marco de la grave crisis política y de violencia que atravesó el país durante 2018. ONU Mujeres expresó su preocupación por los ataques contra las mujeres defensoras de derechos humanos y las organizaciones de mujeres y exigió el fin a estos ataques. Entre otras acciones represivas, se produjeron detenciones de decenas de mujeres activistas y defensoras de los derechos humanos y se prohibió la

30. Consejo de los Derechos Humanos, *Situación de las defensoras de los derechos humanos. Informe del Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos*, 10 de enero de 2019, A/HRC/40/60.

31. OSCE, *Thematic report. Gender Dimensions of SMM Monitoring, 1 January 2017- 1 November 2018*. OSCE, diciembre de 2018.

marcha convocada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) denunció la violencia cometida por las fuerzas de seguridad y actores armados afines, incluyendo asesinatos y heridos, así como abusos sexuales, acoso y violaciones, y señalaron que esta violencia se suma a otras violencias contra las mujeres, como 402 feminicidios registrados en los últimos seis años. La plataforma Articulación Feminista también denunció secuestros de diversas mujeres, violaciones y torturas contra mujeres desde abril de 2018 –fecha de inicio de la crisis–, así como intimidación, amenazas, detenciones y hostigamiento, contra activistas feministas. Redes y organizaciones feministas de América Latina y el Caribe, así como de otras zonas del mundo, reclamaron el fin de los ataques del Gobierno contra el movimiento feminista y defensoras de derechos humanos nicaragüenses, que han incluido intimidación, asedio, detenciones arbitrarias, atentados en contra de su integridad física y sexual, expulsión del país, retiro de residencias y ciudadanías legalmente obtenidas; así como, el retiro de la personalidad jurídica y el congelamiento de las cuentas bancarias de las organizaciones.

En relación a **Turquía**, un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, publicado en marzo de 2018 y que analiza el año 2017, puso de manifiesto graves violaciones de los derechos humanos en el país, en el marco del estado de emergencia en el país y la erosión del estado de derecho.³² Entre múltiples abusos, el informe alerta sobre la detención de un centenar de mujeres embarazadas o que habían dado a luz recientemente, acusadas de ser colaboradoras de sus maridos, a quienes se acusa de conexión con organizaciones terroristas. Además, en relación al conflicto en torno a la cuestión kurda, el informe señala denuncias de violaciones de derechos humanos específicas al conflicto, incluyendo violencia sexual contra las mujeres, destrucción de viviendas, obstáculos al acceso de ayuda médica de emergencia, a agua potable y a medios de vida, entre otras, perpetradas por fuerzas de seguridad. Se trata de consecuencias con impactos específicos de género. Además, el informe mostró preocupación por la designación por parte del Gobierno central de administradores para sustituir a alcaldes y alcaldesas electos y otros miembros de los consejos municipales. 87 alcaldes y alcaldesas electos de origen kurdo (35 mujeres y 52 hombres) de un total de 105 municipalidades del sudeste, habían sido encarcelados desde septiembre de 2016 hasta finales de 2017, sustituidos por 94 administradores, todos hombres.

Por lo que respecta a **Arabia Saudita**, durante 2018 el reino continuó con sus políticas represivas y vulneraciones a los derechos humanos y emprendió una campaña de detenciones arbitrarias sin precedentes contra destacadas activistas por los derechos de las

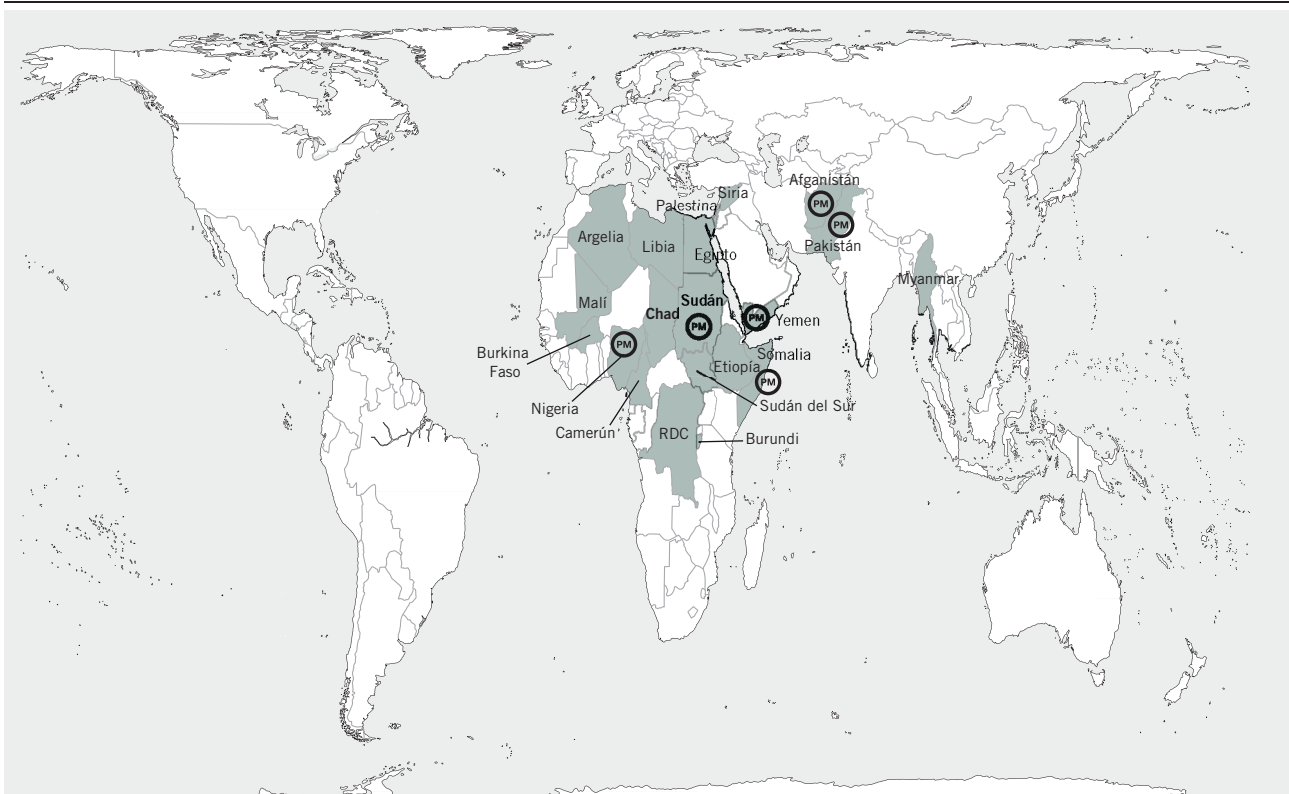
mujeres. La primera oleada de arrestos se produjo en mayo, semanas antes de que el régimen levantara la prohibición de conducir a las mujeres saudíes (junio), y afectó paradójicamente a varias activistas que habían exigido el fin de esta prohibición. Entre ellas Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan y Aziza al-Yousef, también activistas contra el sistema de guardianes masculinos vigente en el país, que obliga a las mujeres a solicitar permiso a un hombre de su familia para diversas actividades, como viajar, obtener pasaporte, ingresar a la universidad o casarse. En agosto fueron detenidas otras dos líderes de renombre: Nassima al-Sadah, activista política y por los derechos de las mujeres de la Provincial Oriental –donde se concentra la minoría shíí del país y que ha sido escenario de recurrentes protestas de sectores disidentes– y Samar Badawi, reconocida también por su denuncia del sistema de guardias masculinos y por ser una de las principales impulsoras de la participación política de las mujeres saudíes. Cabe recordar que en 2015 las mujeres saudíes fueron autorizadas por primera vez a presentarse como candidatas en las elecciones municipales. Badawi fue una de las mujeres que quiso postular, pero su candidatura fue vetada entonces por las autoridades saudíes.

Amnistía Internacional denunció que, al finalizar el año, todas estas activistas permanecían en prisión, aún pendientes de la presentación formal de cargos o de juicio. Algunas ONG de derechos humanos advirtieron que varias de las detenidas están acusadas de crímenes graves –incluyendo “contactos sospechosos con agentes externos”– y que medios de comunicación progubernamentales lanzaron una campaña contra ellas, calificándolas de traidoras. Según la prensa local, al menos nueve de ellas podrían ser enjuiciadas por una corte criminal especial –establecida originalmente para enjuiciar a personas acusadas de delitos de terrorismo– y enfrentar penas de hasta 20 años de prisión. Varios informes aseguraron que otras activistas están padeciendo prohibiciones de viajar al extranjero. A finales de noviembre, Amnistía Internacional y Human Rights Watch también alertaron de que activistas por los derechos humanos, incluyendo varias mujeres, estaban siendo víctimas de torturas y acoso sexual durante interrogatorios en Arabia Saudita.

Finalmente, en **Yemen**, más de un centenar de mujeres yemeníes y destacadas premios Nobel de la Paz dirigieron una carta al nuevo enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, en la que denunciaron el significativo incremento de la violencia de género tras la escalada del conflicto en marzo de 2015. En la misiva alertaron que hasta julio de 2017 se habían documentado 2.447 casos de mujeres muertas o heridas y que de los más de dos millones de personas desplazadas internamente un 76% eran mujeres o menores de edad. Adicionalmente, advirtieron que el

32. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey, including an update on the South-East, January – December 2017*, OHCHR, marzo de 2018.

Mapa 3.2. Países en conflicto armado y con legislación discriminatoria contra la población LGBTBI



■ Países en conflicto armado en 2018 y con legislación discriminatoria contra la población LGBTBI (incluye ilegalidad de actos sexuales consensuales, barreras legales a la libertad de expresión sobre cuestiones de orientación sexual y barreras para la formación de ONG)

PM Países en conflicto armado donde está codificada la pena de muerte para la población LGBTBI. (ILGA, *Homofobia de Estado*, 2019)

Fuente: Elaboración propia con datos de Escola de Cultura de Pau y Lucas Ramon Mendos, *State-Sponsored Homophobia 2019*, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), Ginebra: ILGA, 2019

Tabla 3.2. Conflictos armados en 2018 en países con legislación discriminatoria contra la población LGBTBI

ÁFRICA	ASIA	ORIENTE MEDIO
Argelia Burundi Camerún (Ambazonia/North West y South West), Etiopía (Ogadén) Libia Malí RDC (este) RDC (este – ADF) RDC (Kasai) Región Lago Chad (Boko Haram) Región Sahel Occidental Somalia Sudán (Darfur) Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) Sudán del Sur	Afganistán Myanmar Pakistán Pakistán (Baluchistan)	Egipto (Sinaí) Israel - Palestina Siria Yemen Yemen (AQPA)

Fuente: Elaboración propia con datos de Escola de Cultura de Pau y Lucas Ramon Mendos, *State-Sponsored Homophobia 2019*, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), Ginebra: ILGA, 2019

matrimonio infantil se había incrementado en un 66% como recurso de muchas familias para enfrentar la pobreza ante el acusado deterioro económico en el país.

Decenas de personas **LGBTBI** se organizaron como grupo propio en el marco de una caravana de migrantes centroamericanos en 2018 en camino a EEUU para

solicitar asilo. Se articularon como grupo específico ya iniciada la marcha. Algunas de sus integrantes denunciaron abusos verbales y dificultades específicas a lo largo del trayecto, así como la violencia en sus países de origen. En torno a 80 personas LGBTBI procedentes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador llegaron a Tijuana (México) en noviembre, con

apoyo para el transporte en un tramo hasta Tijuana de la organización RAICES, con base en Texas. Algunas informaciones en prensa cifraron en unas 120 las personas LGTBI en esta caravana de unas 3.600 personas centroamericanas.

3.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género

En este apartado se analizan algunas de las iniciativas más destacadas para incorporar la perspectiva de género en los diferentes ámbitos de la construcción de la paz.

3.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad

La implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad estuvo marcada por los dos debates monográficos en el Consejo de Seguridad. El primero de ellos, en abril, trató sobre la violencia sexual y los conflictos armados. El secretario general presentó su informe anual sobre esta materia.³³ La sociedad civil resaltó nuevamente la importancia de entender la violencia sexual en los conflictos armados en un marco más amplio de violencias de género perpetradas tanto por actores militares como por civiles en un contexto de profundas desigualdades internacionales entre hombres y mujeres, agravadas por el armamentismo y el militarismo.

En el mes de octubre tuvo lugar el **debate anual sobre mujeres, paz y seguridad en el Consejo de Seguridad de la ONU** coincidiendo con la presentación del informe anual de evaluación de la implementación de la agenda sobre esta temática por parte del secretario general de la ONU. En el debate cabe destacar la participación en representación de la sociedad civil de la activista palestina Randa Siniora, que destacó la dimensión de género de la ocupación palestina de Israel y los efectos de esta ocupación y del conflicto armado en las mujeres palestinas y el incremento de las desigualdades de género como consecuencia. Además, Siniora destacó la exclusión de las mujeres de los esfuerzos oficiales de construcción de paz.

En el informe, el secretario general mostró su preocupación por la falta de avances con respecto a los compromisos básicos en materia de paz y seguridad, derechos humanos e igualdad de género. Entre los aspectos analizados por el informe cabe señalar que en el ámbito de la igualdad de género en el seno de

la organización, por primera vez se alcanzó la paridad en el Senior Management Group (Grupo Superior de Gestión, órgano de alto nivel presidido por el secretario general, que reúne a dirigentes de los departamentos, oficinas, fondos y programas de las Naciones Unidas) y entre los coordinadores residentes. Por primera vez en la historia de la ONU se nombró a una mujer al frente del Departamento de Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz. Con respecto a la participación de las mujeres en los procesos de paz, el informe señala que en tres de los cuatro procesos de paz en los que Naciones Unidas estuvo involucrada liderando o coliderando la mediación, se requirió conocimiento especializado técnico de género (75%) y se incluyeron mujeres en todos los equipos de Naciones Unidas de apoyo a la mediación. En 2016 la demanda de conocimiento experto técnico se había reducido con respecto a años anteriores, produciéndose en el 57% de procesos de mediación dirigidos o co-dirigidos por la ONU, frente al 89% de los procesos en 2015, el 67% en 2014 y el 88% en 2013. Así pues, se trata de un aspecto que merece un seguimiento detallado, ya que no está plenamente consolidado. Además, se garantizaron consultas con las organizaciones de

mujeres de la sociedad civil en todos los procesos a los que se dio apoyo en 2017, como Siria, Chipre, África Occidental y el Sahel. Con respecto a la inclusión de la igualdad de género en los acuerdos de paz, solo tres de 11 acuerdos (27%) firmados en 2017 incluyeron disposiciones en este sentido. Este dato resulta especialmente preocupante, ya que consolida y agrava la tendencia iniciada en 2016, cuando se incluyeron cuestiones de género en el 50% de los acuerdos, frente al 70% de 2015.

Con respecto a los planes de acción nacional sobre la 1325, durante 2018 seis países presentaron planes de acción por primera vez: Luxemburgo, Albania, Polonia, Túnez, Moldova y Mozambique. Así, según los datos recopilados por WILPF, un total

de 79 países contaban con un plan de acción al finalizar 2018. Sin embargo, WILPF destaca que solo el 43% de estos planes cuenta con un presupuesto específico asociado a la implementación del plan lo que representa un severo obstáculo para la consecución de los objetivos de la agenda género, paz y seguridad y revela una notable falta de compromiso por parte de los gobiernos con esta agenda. Georgia aprobó en 2018 el tercer plan de acción de la Resolución 1325. Este plan continúa sin contar con presupuesto específico, ni incluye referencias a los planes de financiación, como señaló WILPF. No obstante, el nuevo plan de acción consolida la promoción de la participación de las mujeres en la construcción de paz como una de las prioridades del Gobierno. Así, mantiene los mecanismos de consultas

En los últimos años se ha constatado un retroceso en la inclusión de aspectos relativos a la igualdad de género en los acuerdos de paz: en 2015 se incluyeron en el 70% de los acuerdos, pero en 2016 fue en el 50% y en 2017 en el 27%

33. Véase el apartado 4.2.1. de este capítulo.

entre representantes gubernamentales partícipes en las negociaciones de paz y representantes de la sociedad civil, incluyendo mujeres, elemento relevante en el contexto del proceso de paz entre Georgia y las regiones de Abjasia y Osetia del Sur. Por su parte, Moldova adoptó en marzo su primer Plan de Acción Nacional sobre mujeres, paz y seguridad, que cubre el periodo de 2018 a 2021. Es resultado del trabajo de diálogo en años previos entre representantes institucionales y de la sociedad civil. El plan de acción, sin presupuesto específico asociado, está centrado casi en su totalidad en el ámbito de la seguridad y la defensa, y solo uno de los ocho objetivos hace referencia a la participación de las mujeres en la construcción de la paz y en misiones de mantenimiento de la paz. Por otra parte, el Gobierno de Afganistán presentó su informe de evaluación anual de la aplicación del Plan de Acción Nacional. Aunque se constataron algunos avances, organizaciones de la sociedad civil destacaron lo ambicioso del plan y la debilidad de la implementación.

Por otra parte, cabe señalar que el Grupo Informal de Expertos sobre Mujeres, Paz y Seguridad, conformado en 2016 para coordinar el trabajo del Consejo de Seguridad y otras entidades de Naciones Unidas con respecto a la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, se reunió durante el año para evaluar la situación de la región del Lago Chad, Libia, Yemen, Iraq, RDC y RCA.

El Consejo de la UE aprobó en diciembre de 2018 nuevas Conclusiones sobre mujeres, paz y seguridad y adoptó el **Enfoque Estratégico sobre Mujeres, Paz y Seguridad**, añadido como un documento de trabajo no oficial a las Conclusiones y, por tanto, no vinculante. El Enfoque Estratégico recoge los compromisos y prioridades de la UE en este ámbito y sustituye al anterior Enfoque Integrado para la Implementación de la UE de las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de la ONU, de 2008.³⁴ El Enfoque Estratégico señala el carácter vinculante de la agenda de mujeres, paz y seguridad y su necesaria implementación por todos los actores de la UE y los Estados miembro, y plantea prioridades en los ámbitos de participación, prevención, protección y asistencia y recuperación. El documento incorpora aportaciones de la sociedad civil de la UE, incluyendo las canalizadas a través del Grupo de Trabajo sobre Género, Paz y Seguridad del European Peacebuilding Liaison Office (EPLO), incluyendo algunas referencias a la interseccionalidad, un mayor énfasis en cuestiones relativas a la agencia y la participación efectiva de las organizaciones de mujeres, así como un fortalecimiento del enfoque de derechos humanos y del énfasis en las dimensiones internas y externas de la agenda de mujeres, paz y seguridad de la UE, pese a otras limitaciones del documento. Las Conclusiones del Consejo de la UE instan a la elaboración de un Plan de Acción conciso, específico, medible y factible en el primer trimestre de 2019.

3.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz³⁵

Varios procesos de paz fueron relevantes desde un punto de vista de género durante el año 2018. Organizaciones de mujeres reclamaron una mayor participación en diferentes negociaciones en todo el mundo así como la inclusión de agendas de género. Sin embargo, en la mayoría de los procesos negociadores no se pusieron en marcha transformaciones de calado para incluir la participación de las mujeres de forma significativa.

Afganistán

El proceso de paz exploratorio en Afganistán experimentó notables avances y acercamientos entre las partes, especialmente entre la insurgencia talibán y el Gobierno de EEUU. Con respecto a la inclusión de las mujeres y de la agenda mujeres, paz y seguridad, cabe destacar que el presidente de Afganistán se mostró públicamente favorable a que las mujeres tuvieran un papel activo en estas negociaciones en consonancia con su creciente papel dentro del Gobierno y señalando que el equipo de 12 personas conformado para llevar a cabo negociaciones con los talibanes estaría integrado por hombres y mujeres. En paralelo, los talibanes podrían estar suavizando su posición sobre las mujeres, según se desprende de diferentes hechos que sucedieron a lo largo del año. Durante la tregua de junio trascendieron diferentes fotografías de combatientes talibanes con población civil, incluyendo mujeres, entre ellas, profesionales de medios de comunicación. En julio la prensa informó de una reunión en Qatar entre líderes talibanes y una delegación de EEUU encabezada por la diplomática Alice G. Wells. Además, durante la reunión de Moscú en noviembre los representantes talibanes aceptaron conceder entrevistas a mujeres periodistas. En esta misma reunión, Habiba Sarabi, integrante del Alto Consejo para la Paz y única mujer asistente preguntó a los talibanes sobre cuándo pensaban incorporar a alguna mujer a las conversaciones. La delegación talibán respondió señalando que estaban dispuestos a reconocer los derechos de las mujeres que existen en el Islam, educación, trabajo y propiedad, y que la única exigencia era que llevaran velo.

Colombia

Con respecto al proceso de paz en Colombia, en lo que respecta a la implementación del acuerdo de paz con las FARC, la Instancia Especial para Contribuir a Garantizar el Enfoque de Género en la Implementación del Acuerdo Final continuó con su actividad de asesoramiento y seguimiento del cumplimiento del acuerdo de paz. La Instancia Especial presentó su Primer Informe de Gestión, dando cuenta de su actividad desde su creación hasta

34. Consejo de la UE, *Women, Peace and Security*, Conclusiones del Consejo, 10 de diciembre de 2018, 15086/18, CFSP/PESC 1150.

35. Para una información más exhaustiva sobre la integración de la perspectiva de género en los procesos de paz actualmente activos, puede consultarse en el anuario de la Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2017. Análisis de tendencias y escenarios*.

finales del año 2017.³⁶ El informe recoge algunas de las principales preocupaciones con respecto a la aplicación del enfoque de género, especialmente las relativas a la falta de transversalización de la perspectiva de género en el Plan Marco de Implementación o a la confusión entre los enfoques de género y étnico, así como a la falta de indicadores de impacto y resultado, que permitan medir de forma más adecuada los avances en la implementación.

Se presentaron varios informes de seguimiento a la implementación del enfoque de género en el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC. El primero de ellos fue el elaborado por la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional.³⁷ El informe, entre otras cuestiones, destaca los retrasos que se constatan en el cumplimiento de los compromisos de género en el proceso de reincorporación político y socioeconómico. También señala que en términos generales pueden identificarse avances en la implementación de medidas a nivel nacional y territorial que buscan asegurar la participación efectiva de las mujeres y población LGBTI aunque con vacíos en los mecanismos para materializar esta participación. En segundo lugar se presentó el elaborado conjuntamente por el Instituto Kroc y varios de los integrantes del componente internacional de verificación del acuerdo –ONU Mujeres, la Embajada de Suecia en Colombia y la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM)–, en el que se destacó la distancia entre la implementación del conjunto de las disposiciones contenidas en el acuerdo y las disposiciones con enfoque de género.³⁸ Así, de las 130 disposiciones del acuerdo que Kroc ha identificado como disposiciones con enfoque de género, solo el 4% había sido plenamente implementado, mientras que no se había iniciado la implementación del 51%. El 38% contaba con niveles mínimos de implementación, y el 7% había logrado un nivel de implementación intermedio. Estas cifras contrastan con los niveles globales de implementación del acuerdo, con un 37% de disposiciones cuya implementación no ha sido iniciada, frente al 51% de las disposiciones específicamente de género. Además, un 22% de las disposiciones del acuerdo ha sido plenamente implementado, frente al 4% de las disposiciones de género. En lo que respecta al contenido del acuerdo, el informe señala que los puntos que cuentan con un menor nivel de implementación son los relativos a la Reforma Rural Integral, la Participación Política y la Solución al problema de las drogas ilícitas. En paralelo, el informe recoge una serie de recomendaciones para mejorar la implementación del enfoque de género: 1) mantener los avances normativos e institucionales en la inclusión del enfoque de género y desarrollar las medidas afirmativas para garantizar los derechos de las

mujeres y la población LGBTI; 2) asegurar la asignación presupuestal en el Plan Marco de Implementación y el Plan Nacional de Desarrollo; 3) fortalecer la arquitectura institucional para la incorporación del enfoque de género en las instituciones con responsabilidades de implementación; 4) garantizar la realización de las medidas específicas para la materialización de los derechos de las mujeres indígenas y afro y la población LGBTI, asegurando la transversalidad del enfoque de género en los indicadores étnicos de Plan Marco de Implementación; y 5) prever mecanismos que permitan la generación de información desagregada por etnia, sexo y orientación sexual.

Por otra parte, la plataforma de la sociedad civil Gpaz también presentó un informe de seguimiento a la implementación analizando 109 de las 122 medidas con enfoque de género establecidas en el texto del acuerdo, de acuerdo con su metodología de seguimiento.³⁹ El informe de Gpaz señala que es destacable el desarrollo normativo fruto del acuerdo de paz, y que el 72% de las medidas en este ámbito se han empezado a implementar de forma satisfactoria. Sin embargo, en lo que respecta al desarrollo operativo del acuerdo, únicamente el 17% de las medidas han iniciado su implementación de forma satisfactoria. Entre las recomendaciones efectuadas por Gpaz cabe destacar: 1) acelerar el proceso de implementación del acuerdo por parte del gobierno y el Estado en general; 2) profundizar el apoyo al proceso de paz por parte de la comunidad internacional; 3) priorizar el enfoque de género en la implementación tanto por parte del Estado como de la comunidad internacional.

Georgia

Por vez primera, el proceso de paz en Georgia contó con una mujer en la posición de jefa co-mediadora. El secretario general de la ONU, António Guterres, designó en julio a Ayse Cihan Sultanoglu (Turquía) como representante de la ONU en las Conversaciones Internacionales de Ginebra (GID), el formato negociador del proceso de paz entre Georgia, Abjasia y Osetia del Sur, en que participa también Rusia, y con co-mediación de la ONU, OSCE y UE. Asimismo, también por vez primera, la ronda de diciembre de las GID incluyó una sesión sobre mujeres, paz y seguridad.

Filipinas

La Ley Orgánica para la Región Autónoma Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (LORABMM), –ratificada en

36. Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional, *Primer informe de la implementación del enfoque de género en los Acuerdos de Paz*, Junio de 2018.

37. Instancia especial para contribuir a garantizar el enfoque de género en la implementación del acuerdo final, *Primer informe de gestión*, 31 de mayo de 2018.

38. Instituto Kroc, ONU Mujeres, FDIM y Embajada de Suecia en Colombia, *Informe Especial del Instituto Kroc y el acompañamiento internacional, ONU Mujeres, FDIM y Suecia, al seguimiento del enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final*, 2018.

39. Gpaz. *La paz avanza con las mujeres: Observaciones sobre la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz*, Octubre de 2018.

julio de 2018 por el Gobierno de Filipinas y el MILF y pendiente de votación en referéndum en 2019–, considerada un hito para el proceso de paz, incluyó varias disposiciones de género. La ley recoge algunas medidas de afirmación positiva, como la reserva de un escaño para cada uno de los siguientes grupos de población: mujeres, jóvenes, líderes tradicionales y los ulama, así como dos escaños para población indígena no mora y otros dos para comunidades de colonos. También establece la designación de al menos una mujer en el Ejecutivo de la región Bangsamoro, y contempla que en el marco de la organización administrativa del Gobierno pueda crearse una oficina sobre las mujeres. Según la LORABMM, las mujeres estarán representadas en el Consejo de Líderes – en números y mecanismos a determinar por el Parlamento–, que asesorará al Ministro Jefe sobre la gobernanza en la Región Autónoma de Bangsamoro. Asimismo, el Parlamento deberá aprobar una ley que reconozca el papel de las mujeres en el desarrollo regional y la construcción de la nación y que garantice su participación en otros órganos de toma de decisión y de diseño de políticas del Gobierno de Bangsamoro. La ley establece que el Parlamento cree a través de una ley una comisión sobre las mujeres y que establezca sus poderes, funciones y composición. La LORABMM obliga al Gobierno a defender los derechos fundamentales de las mujeres, expresados en la CEDAW, y al Parlamento a aprobar la legislación pertinente para implementar lo relativo a la sección de la ley referente a la protección e las mujeres. También fija en un 5% el umbral de presupuesto que debe ir dirigido a programas de género y desarrollo. Durante el año, varias organizaciones de mujeres, como la Bangsamoro Women Organisation, se movilizaron para instar a las dos cámaras del Congreso a aprobar la LORABMM, presentando propuestas y participando en las audiencias y los debates públicos organizados por los comités del Senado y la Cámara de Representantes responsables de la tramitación de la ley.

Libia

A lo largo de 2018 destacaron las voces de mujeres libias que denunciaron su exclusión de espacios cívicos y públicos que ha impedido que la narrativa de mujeres de la sociedad civil se integre en el análisis sobre las causas profundas de los conflictos que afectan al país. En el marco de la 39ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la organización *Together We Build It* alertó sobre las frustraciones respecto a la inclusión efectiva de mujeres en el proceso de consultas promovido por el Plan de Acción de la ONU para Libia e hizo recomendaciones concretas para una inclusión sustantiva. Paralelamente, una investigación conjunta desarrollada por Cordaid, Human Security Collective y ocho organizaciones de la sociedad civil libia reveló la desconexión entre la agenda formal de discusiones sobre el futuro de Libia y las preocupaciones de seguridad y necesidades de justicia de la población

libia, en especial de las mujeres. En este sentido, mujeres libias plantearon diversos temas que, desde su punto de vista, deberían tener un lugar más central en la agenda de negociaciones, entre ellos un refuerzo al embargo de armas, el retiro de armas de circulación, la desmovilización de combatientes, una reforma del sector de seguridad que sitúe a los múltiples actores de Libia bajo control civil, la prevención de violencia sexual y de género, y lucha contra la impunidad en los crímenes contra las mujeres.

Sáhara Occidental

Durante 2018 el Gobierno de Marruecos y el Frente POLISARIO mantuvieron sus primeros contactos directos desde 2012. En las conversaciones celebradas en diciembre, bajo los auspicios de la ONU, participó una mujer en cada una de las delegaciones. Rabat envió a Fatima Adli, presentada por la prensa oficial marroquí como representante comunitaria e integrante del concejo municipal de Smara. En tanto, Fatma Mehdi, secretaria general de la Unión de Mujeres Saharaui (UNMS) se integró al equipo negociador del Frente POLISARIO. Desde la sociedad civil, mujeres saharauis solicitaron una participación más activa en las conversaciones. En un mensaje dirigido al enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental y con el apoyo de ONG internacionales de mujeres por la paz, como WILPF, estas mujeres saharauis pidieron tanto a la ONU como a los países participantes en el diálogo que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar la presencia de mujeres en los encuentros, para articular encuentros paralelos entre mujeres saharauis y marroquíes y para avanzar en múltiples medidas que permitan consolidar una paz duradera, incluyendo acciones para erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

Yemen

Durante 2018 la oficina del enviado especial de la ONU para **Yemen** promovió la formación del Yemeni Women's Technical Advisory Group. Según se informó, el grupo –integrado por ocho mujeres– pretende representar una variedad de voces bajo principios de neutralidad, independencia y profesionalismo y apoyar la labor de la unidad de Género, Paz y Seguridad de la oficina del enviado especial. Este grupo técnico apoyó el trabajo de la oficina de Griffiths durante los contactos entre las principales partes contendientes del conflicto yemení en Suecia, que derivaron en el Acuerdo de Estocolmo en diciembre.

3.3.3. Iniciativas de la sociedad civil

Durante 2018 tuvieron lugar diferentes iniciativas de construcción de paz lideradas y protagonizadas por organizaciones de mujeres de la sociedad civil. En este apartado se recogen algunas de las más relevantes.

La **Red de Mujeres Mediadoras del Sur del Cáucaso** (NWMSC) quedó establecida formalmente en 2018, con la firma de un Memorándum de Entendimiento. Esta red, integrada por una decena de mujeres activistas de paz de Georgia, Armenia y Azerbaiyán así como de las regiones en disputa de Abjasia y Osetia del Sur e impulsada por el Centro Internacional sobre Conflictos y Negociación (ICCN), tiene el objetivo de promover la participación de mujeres en los diversos procesos de paz en la región.

En **Camerún**, cientos de mujeres llevaron a cabo movilizaciones entre agosto y septiembre en las regiones anglófonas de Camerún para reclamar una salida pacífica al conflicto entre el Gobierno central y los actores armados de las regiones anglófonas y para denunciar la violencia.⁴⁰ Las fuerzas de seguridad han sido acusadas de cometer graves violaciones de derechos humanos, como uso desproporcionado de la fuerza, asesinatos extrajudiciales e incendios de pueblos. Actores rebeldes también han sido acusados de ataques contra las fuerzas de seguridad, así como población e infraestructura civil, como colegios. También ha habido denuncias de violencia sexual vinculada al conflicto.

En relación a la tensión entre **Corea del Norte y EEUU** y entre **Corea del Norte y Corea del Sur**, mujeres de la sociedad civil se movilizaron en demanda de la desnuclearización de la península. Cabe señalar que, pocas semanas antes de la celebración de la histórica cumbre entre Corea del Norte y EEUU en junio, en un momento de tensiones diplomáticas que estuvieron a punto de provocar la cancelación de la cumbre las organizaciones de mujeres Women Cross DMZ, Women's Peace Walk –que agrupa a más de 30 organizaciones de mujeres– y Nobel Women's Initiative –con el liderazgo de Mairead Maguire– organizaron un viaje a la península coreana de una delegación internacional de más de 30 mujeres académicas y activistas de varios países. Dicha delegación organizó el International Women Peace Symposium, mantuvo reuniones con representantes del Gobierno surcoreano y de la sociedad civil y, a finales de mayo, junto con más de 1.000 mujeres, cruzaron el Puente de la Unificación –en la Zona Desmilitarizada–, el mismo día que los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur se estaban reuniendo a escasos kilómetros, en Panmunjom. Con motivo de dicha visita, las mencionadas organizaciones de mujeres hicieron público un comunicado en el que pedían que durante la cumbre entre Corea del Norte y EEUU se tuvieran en cuenta algunas demandas, tales como reemplazar el armisticio de 1953 por un tratado de paz; la desnuclearización completa de la península

coreana, apelando no solamente a Corea del Norte sino también a otros estados nucleares; la conversión de la Zona Desmilitarizada en un Parque de la Paz, lo que implicaría la retirada de más de un millón de minas de la región; la reunificación de familias separadas por la guerra o bien la reducción de los presupuestos militares de los dos países y el fin de la carrera armamentística entre ambos. Asimismo, Women Cross DMZ y Nobel Women's Initiative organizaron en diciembre en Beijing (China) un encuentro sobre mujeres, paz y seguridad, con mujeres constructoras de paz de Corea del Norte, Corea del Sur, China, Japón, Rusia y Canadá, en el que abordaron la cuestión de la participación de las mujeres en el proceso negociador. Además, Women Cross DMZ se reunió ese mismo mes con parlamentarias de Corea del Sur previo a las reuniones previstas entre parlamentarias norcoreanas y congresistas estadounidenses de marzo de 2019.

Durante 2018 mujeres de **Yemen** impulsaron una serie de iniciativas para articular sus propuestas para la transformación del conflicto y hacer oír su voz en los espacios formales. El Yemeni Women's Pact for Peace and Security mantuvo reuniones en Amán para planear estrategias de respuesta ante los distintos escenarios previstos para Yemen. Otro grupo de mujeres yemeníes participó en un grupo de trabajo impulsado por ONU Mujeres, junto a mujeres de Siria e Iraq, para discutir cómo promover la paz en sus respectivos países. En marzo, un total de 145 mujeres, entre ellas más de un centenar de mujeres líderes yemeníes, premios Nobel de la paz y representantes de organizaciones internacionales enviaron una carta nuevo enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, pidiendo apoyo para la participación efectiva de las mujeres yemeníes en la construcción de la paz. La misiva destacó que las mujeres yemeníes no han cesado en sus esfuerzos por la paz, sobre todo a nivel comunitario (treguas locales, reintegración de menores combatientes, gestión de ayuda humanitaria) y se quejó de la exclusión de las mujeres de las iniciativas impulsadas para buscar una salida negociada al conflicto en los últimos años. Asimismo, este grupo de mujeres recomendó priorizar una decena de temas, incluyendo un cese inmediato de las hostilidades, el fin del asedio a Taiz, reactivar las negociaciones de paz, mecanismos para poner fin al reclutamiento de menores e impulsar una justicia transicional con enfoque de género, entre otras. También demandaron solicitó la presencia de expertas de género en las delegaciones, consultas regulares con líderes de organizaciones de mujeres de todo el país y una representación de al menos el 30% de mujeres en todos los niveles del proceso de paz.

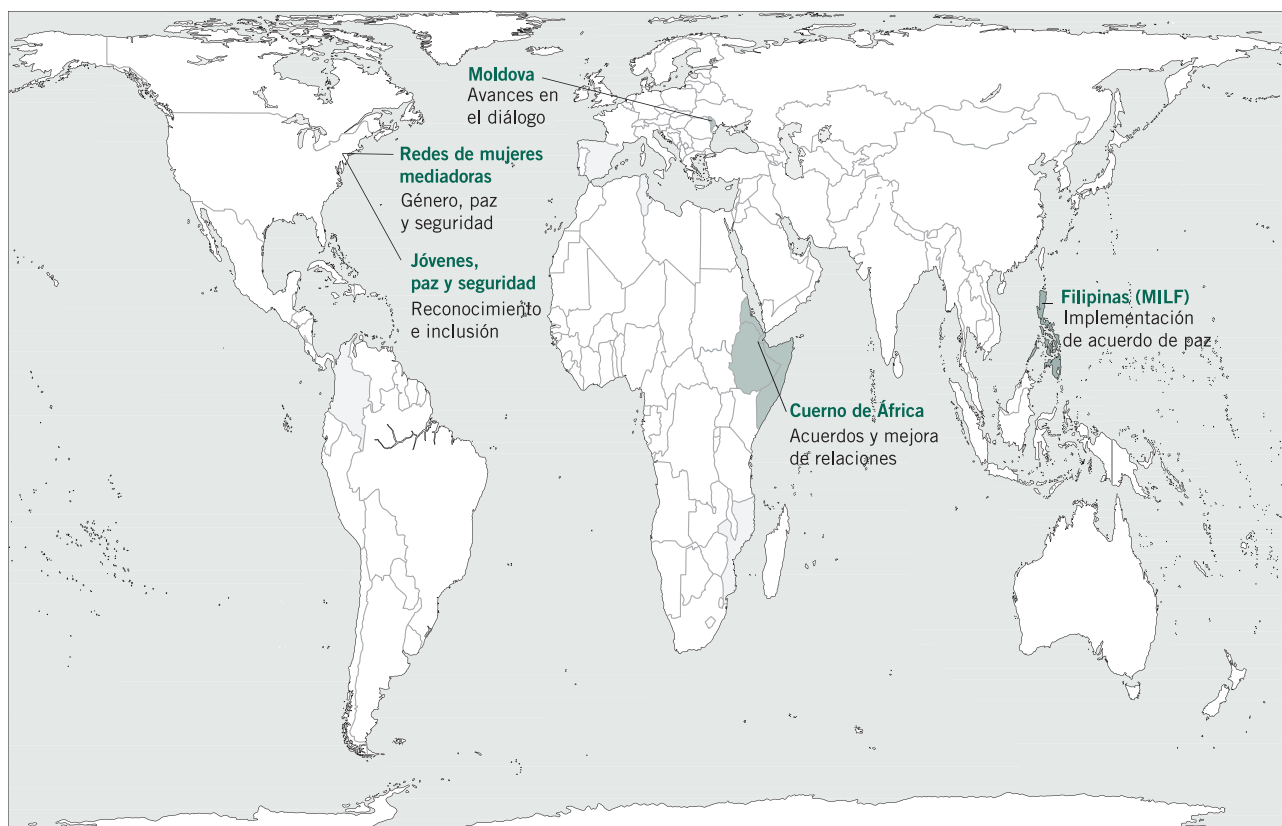
40. Véase el resumen sobre Camerún en el capítulo 1 (Conflictos armados).

4. Oportunidades de paz para 2019

Tras analizar el año 2018 en materia de conflictividad y construcción de paz, la Escola de Cultura de Pau de la UAB destaca en este capítulo cinco ámbitos que constituyen oportunidades de paz para el futuro. Se trata de contextos donde existe o ha habido en el pasado una situación de conflicto armado o de tensión en los que confluyen una serie de factores que pueden conducir a su transformación positiva. Las oportunidades identificadas de cara a 2019 hacen referencia a la ventana de oportunidad para la paz abierta en el Cuerno de África tras el histórico acuerdo de paz entre Eritrea y Etiopía; al proceso de implementación del acuerdo entre el Gobierno y el MILF en el sur de Filipinas; a los avances en el proceso de diálogo sobre Transdníestria; a las redes de mujeres mediadoras desarrolladas en el marco de la implementación de la agenda de género, paz y seguridad; y a las posibilidades de reconocimiento e inclusión de la población joven como agente de paz tras la aprobación de la resolución 2250 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la puesta en marcha de la agenda de jóvenes, paz y seguridad.

Todas estas oportunidades de paz requerirán del esfuerzo y compromiso real de las partes implicadas y, en su caso, del apoyo de actores internacionales para que las sinergias y factores positivos ya presentes favorezcan la construcción de la paz. En este sentido, el análisis de la Escola de Cultura de Pau pretende ofrecer una visión realista de estos escenarios y temáticas, identificando los elementos positivos que alimentan las expectativas de cambio, pero también poniendo de manifiesto las dificultades y problemáticas que existen y que podrían suponer obstáculos para su materialización como oportunidades de paz.

Mapa 4.1. Oportunidades de paz para 2019



4.1. Ventana de oportunidad para la paz en el Cuerno de África

El histórico acuerdo de paz entre Eritrea y Etiopía de septiembre de 2018 resultado de numerosas complicidades a ambos lados del Mar Rojo e importantes cambios en Etiopía que han generado un extraordinario escenario en el que se han desencadenado diversas iniciativas de paz y acuerdos entre sus vecinos. Estas iniciativas derivadas de la mejora de las relaciones entre Eritrea y Etiopía permanecían congeladas hasta el momento debido a que ambos países llevaban a cabo una guerra fría a través de su geopolítica de alianzas en el Cuerno de África y la política de guerra por delegación, mediante el apoyo a las insurgencias respectivas. El nuevo escenario ha creado un momentum para la paz en el Cuerno de África, no exento de riesgos, ya que se asienta sobre elementos de fragilidad endógenas y un complejo entramado de relaciones entre los países de la región y sus vecinos de la Península Arábiga, que compiten por ampliar sus áreas de influencia.

El acuerdo de paz alcanzado entre Eritrea y Etiopía ha puesto fin a 20 años de confrontación, proceso que ha mantenido en vilo a diversos países de la región por el entramado de alianzas existentes entre los vecinos del Cuerno de África. En 1993 Eritrea se independizó de Etiopía, aunque la frontera de 1.000 km no quedó claramente delimitada, lo que les enfrentó entre 1998 y 2000, causando más de 100.000 víctimas mortales. Etiopía no aceptó el dictamen de la Comisión Fronteriza entre Eritrea y Etiopía (EEBC) que asignaba la disputada localidad fronteriza de Badme a Eritrea. Eritrea, impotente ante el incumplimiento de la decisión, presionó a la misión de la ONU (UNMEE) establecida para supervisar la separación de las tropas y forzó la retirada de esta misión en 2008. Desde entonces ambos países mantuvieron una situación caracterizada por un clima de preguerra permanente, con la presencia de centenares de miles de soldados en la frontera común, enfrentamientos esporádicos y una retórica beligerante. Ambos se han dedicado a armar y acoger a las insurgencias respectivas, en un clima de guerra por delegación. Además, Etiopía ha sido un importante aliado de EEUU en el Cuerno de África por lo que el Consejo de Seguridad de la ONU decidió en 2009 imponer una batería de sanciones y un embargo de armas a Eritrea por su supuesto apoyo a la insurgencia somalí de al-Shabaab y otros movimientos insurgentes que atentaban contra Etiopía. La ocupación de Ras Doumeira por Eritrea en 2008, hasta el momento bajo soberanía de Djibouti, pero sin un acuerdo definitivo en torno a la cuestión fronteriza, y la negativa a aceptar una resolución de la situación en 2011 provocaron el endurecimiento de las sanciones y el aislamiento de Eritrea.

Desde inicios de 2018, en menos de seis meses, esta situación ha dado un vuelco de 180 grados. En junio Etiopía anunció la aceptación de la delimitación fronteriza, y entre julio y septiembre se formalizó la paz

entre ambos. La rapidez con que se han producido estos cambios no hubiera sido posible sin la visión y la voluntad política del nuevo primer ministro etíope, Abiy Ahmed. Su nombramiento fue determinante para la evolución de esta situación, aunque según algunas fuentes, el proceso ya se había empezado a gestar durante el último año de gobierno de Hailemariam Desalegn. En febrero de 2018 se produjo la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn ante la presión social interna y en marzo fue nombrado Abiy Ahmed por la coalición gobernante EPRDF. Abiy Ahmed, miembro de la comunidad oromo, antiguo oficial de inteligencia militar y diputado, fue propuesto por el Oromo Democratic Party (ODP), uno de los cuatro partidos que conforman la coalición gobernante EPRDF, que es la comunidad mayoritaria y también la principal marginada del desarrollo económico que ha experimentado el país en los últimos años, una de las principales reivindicaciones de la movilización masiva que ha azotado al país desde 2015. Ya en su discurso inaugural, en abril, Abiy Ahmed prometió la paz con Eritrea. El 5 de junio la coalición gobernante EPRDF anunció que aceptaría el dictamen de EEBC. En unos pocos meses, Abiy levantó el estado de emergencia en el país, ordenó la liberación de miles de prisioneros, permitió que los disidentes regresaran a sus hogares y desbloqueó cientos de sitios web y canales de televisión. Además, alcanzó acuerdos de paz con las históricas insurgencias de Oromiya, el OLF y de Ogadén el ONLF.

El acercamiento responde, además, a la culminación de contactos no públicos durante el último año promovidos por EEUU, y sobre todo, por Emiratos Árabes Unidos (EAU) y su aliada Arabia Saudita, que han incrementado su protagonismo en el Cuerno de África. Este protagonismo político árabe responde a motivaciones económicas y sobre todo, a una estrategia geopolítica: expandir su ascendencia en la zona y, consecuentemente, limitar la influencia de otros actores. Según diversos analistas, la guerra en Yemen y las rivalidades entre los países del Golfo Pérsico se encuentran entre las principales razones que ponen de manifiesto esta creciente influencia y tensión de dimensiones regionales, entre tres grupos de países que pugnan por esta hegemonía regional: el eje árabe (liderado por Arabia Saudita y EAU, que incluye países como Egipto y Bahrein), el eje iraní y el eje Turquía-Qatar. Este interés se ha manifestado a través de alianzas políticas, ayuda humanitaria, inversiones, acuerdos para el establecimiento de bases militares y contratos para la construcción o ampliación de puertos comerciales. El aislamiento de Eritrea por parte de la comunidad internacional ha permitido una creciente influencia de EAU en este país durante la última década. Arabia Saudita está construyendo una base militar en Djibouti y EAU ya dispone de una base militar en Assab

1. Véase Allo, *Awol, Ethiopia: Exploiting the Gulf's Scramble for the Horn of Africa*, African Arguments, 13 Agosto de 2018; African Arguments, *Ethiopia-Eritrea peace: Some unanswered questions*, African Arguments, 11 de julio de 2018; Fick, Maggie, Cornwell, Alexander, In *Peace between Ethiopia and Eritrea, UAE lends a helping hand*, Reuters, 8 de agosto de 2018; International Crisis Group, *The United Arab Emirates and the Horn of Africa*, Crisis Group Middle East Briefing Num.65, 6 de noviembre de 2018.

(Eritrea) desde donde ambos lanzan sus operaciones militares contra Yemen. La compañía de Abu Dhabi DP World dispone de millonarios contratos para desarrollar los puertos somalíes de Berbera (Somalilandia) y Bosaso (Puntlandia). Qatar y Turquía también están fuertemente implicados en Somalia: además de múltiples inversiones, Turquía dispone del control del puerto y aeropuerto de la capital y de una base militar. Somalia sufre a fuertes presiones por estos dos ejes, lo que está provocando una crisis interna entre los estados federales de Somalia (apoyados por EAU) y el Gobierno Federal de Somalia (aliado de Qatar y Turquía). Etiopía se ha mantenido al margen de estas rivalidades regionales y en paralelo ha conseguido atraer inversiones a través de los incentivos propuestos por EAU y Arabia Saudita derivados de la paz con Eritrea, y sobre todo la diversificación de la salida al Mar Rojo de su creciente economía, lo que también repercute en incentivos económicos para Eritrea. Eritrea y Etiopía deseaban este acuerdo de paz, pero necesitaban una serie de incentivos económicos y diplomáticos para convencer a los sectores más recalcitrantes.

El proceso de paz entre Eritrea y Etiopía también ha derivado en la normalización de las relaciones entre Eritrea y Djibouti. El puerto de Djibouti supone el 95% de las exportaciones e importaciones de Etiopía. Qatar había intentado desde 2008 mediar entre Eritrea y Djibouti en la disputa por Ras Doumeira, con un acuerdo en 2010 por el que se acordó una misión de observación del alto el fuego organizada por Qatar. Sin embargo, en junio de 2017 Qatar retiró su misión por el apoyo de ambos países a Arabia Saudita en su acusación contra Qatar de apoyo al islamismo radical y a Irán, acusación que Doha negó pero que generó una importante crisis diplomática entre los países del Golfo Pérsico y un forzado alineamiento de los diferentes actores en torno a los diferentes liderazgos regionales. Aunque el contencioso sigue pendiente de resolución, el 7 de septiembre de 2018 ambos países anunciaron la normalización de sus relaciones tras una visita del ministro de Exteriores eritreo a Djibouti. Este hecho vino precedido por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Eritrea y Somalia –Etiopía ha sido una importante aliado de Somalia en su lucha contra al-Shabaab, por lo que la paz entre Etiopía y Eritrea abre las puertas a la mejora de las relaciones con su vecino mutuo– tras años de acusaciones del Gobierno somalí sobre el supuesto apoyo eritreo a la insurgencia somalí que se había plasmado en las sanciones de la ONU a Eritrea. Esta normalización de relaciones entre Djibouti y Eritrea vino precedida de una reunión en Asmara de los presidentes somalí, eritreo y el ministro de Exteriores etíope. Para Eritrea, la resolución de este contencioso era la última traba para facilitar el levantamiento de las sanciones de la ONU y el fin de su aislamiento internacional. Para Djibouti, la paz con Eritrea reduce los riesgos de verse aislada en el contexto regional por su alta dependencia de Etiopía y sus incómodas alianzas internacionales (las bases militares de Francia, EEUU, China y Japón

El acercamiento entre Eritrea y Etiopía responde a cambios internos en Etiopía y a la culminación de contactos promovidos por EEUU y, sobre todo, por EAU y Arabia Saudita, países que han incrementado su protagonismo en el Cuerno de África

en Djibouti suponen estratégicos ingresos para el país, pero también una fuente de rechazo a nivel doméstico).

No obstante, estos importantes avances pueden verse ensombrecidos por diferentes cuestiones. A nivel doméstico, las decisiones tomadas en Etiopía no han contado con el apoyo de la vieja guardia dominada por el Tigrayan People's Liberation Front (TPLF), uno de los cuatro partidos de la coalición gobernante, y han generado recelos entre sectores militares, pero sí han contado con un importante apoyo popular. El 24 de junio, días después del anuncio del primer ministro de aceptación del dictamen sobre la decisión fronteriza, se produjo un atentado en un mítin del primer ministro en el que murieron dos personas y decenas resultaron heridas. En este sentido, los importantes pasos dados deben asentarse con la puesta en marcha de reformas estructurales legislativa e institucionales para fortalecer la democracia y la gobernabilidad como destacaba uno de los principales líderes políticos retornados a Etiopía, Berhanu Nega. En Eritrea, la apertura de la frontera ha provocado que miles de personas eritreas hayan buscado refugio en Etiopía en los últimos meses como consecuencia de la pobreza y de la ausencia de libertades, lo que pone al descubierto la situación de Eritrea.

Con relación al proceso de paz entre Eritrea y Etiopía, aunque ambos han llevado a cabo numerosas medidas para favorecer un clima de confianza en los últimos meses, como la reanudación de vuelos, la apertura de comunicaciones telefónicas y las reunificaciones familiares, la frontera continúa siendo una de las zonas más militarizadas del planeta con la presencia de centenares de miles de soldados y la diseminación de un número indeterminado de minas antipersona. Es imprescindible una rápida supervisión regional e internacional de la desmilitarización de la frontera para evitar que pueda producirse una involución en el proceso. Cabe destacar la política de alianzas que ha contribuido a tejer las diferentes iniciativas de paz y que también ha generado tensiones crecientes, como pone de manifiesto la situación en Somalia, al borde del conflicto entre las regiones y el Gobierno Federal como consecuencia de esta pugna en la geopolítica regional, en la que EAU puede contribuir positivamente.

A pesar de los numerosos retos y dificultades presentes, el histórico escenario regional de paz debe ser aprovechado por los países de la región y por la comunidad internacional por lo que es imprescindible fortalecer estas iniciativas de paz y promover que estos acuerdos tengan suficiente apoyo doméstico para que no dependan de la coyuntura política favorable y, a la vez, puedan contribuir a la democratización y a la mejora de la gobernabilidad de Eritrea y Etiopía y puedan suponer un impulso para promover la paz en el resto de situaciones de violencia política y conflicto abiertas en la región y evitar que las viejas guardias perciban estos procesos como una pérdida de privilegios que puedan generar una involución de la situación.

4.2. La implementación del acuerdo de paz en el sur de Filipinas

El MILF y el Gobierno, así como buena parte de la comunidad internacional (Naciones Unidas, la UE, la Organización de la Conferencia Islámica, y numerosos países), calificaron de oportunidad histórica para la paz en Mindanao la firma en el mes de julio por parte del presidente Rodrigo Duterte de la Ley Orgánica para la Región Autónoma Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (LORABMM). Esta ley es considerada por ambas partes como la parte nuclear y políticamente más sensible del Acuerdo de Paz que firmaron el Gobierno y el MILF en 2014 tras 17 años de negociaciones. Según ambas partes, la aprobación de dicha ley abre la puerta a la plena implementación del acuerdo de paz y establece las condiciones estructurales para superar un conflicto cuya dimensión armada se remonta a finales de los años sesenta y ha comportado la muerte de entre 120.000 y 150.000 personas, según las fuentes.

En efecto, tras seis meses de sesiones intensivas y numerosas audiencias, un comité conjunto del Senado y la Cámara de Representantes aprobó la versión definitiva de LORABMM –inicialmente conocida como Ley Fundamental de Bangsamoro y comúnmente conocida como Ley Orgánica de Bangsamoro– que fue ratificada días más tarde por el propio presidente. Dicho comité tuvo que unificar las versiones de ley presentadas por la Comisión de Transición de Bangsamoro (un organismo conformado por 21 miembros, liderado por el MILF y encargado de redactar el primer borrador de la ley), por el Senado y por la Cámara de Representantes. Aunque el MILF declaró públicamente que la ley aprobada finalmente incluía más de un 80% de las provisiones del Acuerdo de Paz de 2014, en los años anteriores había sido sumamente crítico con los borradores de ley elaborados por el Senado y la Cámara de Representantes por considerar que no respetaban ni la letra ni el espíritu del mencionado acuerdo de paz. De hecho, en alguna ocasión el MILF había declarado que la aprobación de alguna de estas dos versiones de ley hubiera comportado la reanudación del conflicto armado en Mindanao. Así las cosas, algunos analistas han puesto de relieve la visión pragmática del MILF –cediendo en varios aspectos para garantizar que las provisiones nucleares del acuerdo de paz fueran respetadas– y la voluntad política del presidente Duterte, que según algunas voces tuvo que lidiar con las enormes resistencias que había entre sectores importantes de ambas cámaras. Cabe recordar que la ley se aprobó con tres años de retraso respecto del calendario originalmente previsto, durante los que se produjeron episodios que generaron una gran oposición a la implementación del acuerdo de paz, como el denominado incidente de Mamasapano en enero de 2015 –en el que algunos efectivos del MILF tuvieron alguna participación en el asesinato de más de 40 policías– o el asedio a la ciudad de Marawi entre mayo y octubre de 2017 por parte del Grupo Maute y otras organizaciones armadas que han manifestado su lealtad a ISIS, y que provocó la muerte de más de 1.100 personas y el desplazamiento forzoso de otras 600.000.

A pesar de los importantes retrasos y obstáculos en la aprobación de la ley y las reticencias que sigue

generando tanto en el Parlamento y la judicatura como entre determinados sectores del MILF, lo cierto es que la versión definitiva aprobada cuenta con el respaldo de ambas partes, de la comunidad internacional, de buena parte de la sociedad civil organizada en Mindanao –League of Bangsamoro Organizations; National Ulama Council of the Philippines– e incluso del Gobernador de la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM). Este último punto es especialmente relevante por cuanto el aspecto más importante del acuerdo de paz del 2014 es la sustitución de la actual RAMM –establecida en 1989 y considerada un experimento fallido tanto por parte del Gobierno como por parte del MILF– por la Región Autónoma Bangsamoro en el Mindanao Musulmán (RABMM), una nueva entidad política que debería ampliar y reforzar competencias, garantizar su financiación adecuada y expandir la base territorial de la región. En el caso de que la ley sea ratificada en el plebiscito que se llevará a cabo en enero y febrero de 2019, el siguiente paso será el establecimiento de la Autoridad de Transición de Bangsamoro, organismo encargado de gobernar la nueva región hasta las elecciones que se llevarán a cabo en mayo de 2022 en la RABMM, que se sincronizarán con las siguientes elecciones nacionales. La Autoridad de Transición de Bangsamoro estará conformada por 80 miembros –el Presidente tiene hasta finales de marzo para su nombramiento–, aunque el Gobernador y Vicegobernador de la RAMM y otros 23 miembros de su Asamblea Regional Legislativa se integrarán también a dicho organismo de transición hasta finales de junio de 2019, para posibilitar que finalicen el mandato por el que fueron elegidos. La ley establece que el MILF liderará dicho organismo y abre la posibilidad a que el MNLF también participe de él. Cabe recordar que el MNLF está escindido en varias facciones. Aunque la facción liderada por el fundador del grupo, Nur Misuari, se opone al acuerdo de paz entre el Gobierno y el MILF –por temor a que éste menoscabe el acuerdo de paz suscrito por el Gobierno y el MNLF en 1996–, la mayor parte del MNLF sí apoya el proceso de paz entre el Gobierno y el MILF y accedió a formar parte de la Comisión de Transición de Bangsamoro que elaboró el primer borrador de Ley Orgánica de Bangsamoro. De hecho, poco después de lograr la presidencia del país en 2016, Duterte amplió la membresía de la Comisión de Transición de Bangsamoro precisamente para dar cabida a la incorporación del MNLF y para facilitar la armonización y convergencia de las negociaciones con ambos grupos.

A pesar de la esperanza y optimismo que han generado la aprobación de la LORABMM, los retos que se presentan a corto y medio plazo son enormes. A corto plazo, destacan posibilidad de que se presenten recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema al texto aprobado por el Parlamento; así como las dificultades vinculadas a la ratificación de la ley a través de un plebiscito en enero y febrero de 2019. Respecto del primer punto, cabe señalar que algunas voces críticas con la ley orgánica ya han interpuesto –o han anunciado su intención de hacerlo– recursos de inconstitucionalidad. El propio gobernador

de Sulu –una de las provincias que integra la RAMM, Abdusakur Tan III, presentó un recurso por considerar que el Congreso no tiene la competencia para abolir la RAMM, y que para ello haría falta una reforma de la actual Constitución. En el mismo sentido, otras organizaciones han expresado dudas sobre la constitucionalidad de varios preceptos de la LORABMM si previamente no hay una reforma constitucional que les dé sustento. A pesar de que las dos cámaras del Congreso expresaron su convencimiento sobre la más absoluta constitucionalidad de cada uno de los artículos de la LORABMM y de que la Corte Suprema ya rechazó en 2016 dos recursos de inconstitucionalidad contra los dos acuerdos de paz en los que se basa la LORABMM –el Acuerdo Marco de Bangsamoro (aprobado en 2012) y el Acuerdo Global sobre Bangsamoro (aprobado en 2014)–, algunas voces expresan su temor por los efectos que pudiera tener en el proceso de paz la modificación o eliminación de algunos contenidos de la LORABMM, recordando cómo la declaración de inconstitucionalidad del Memorando de Entendimiento sobre los Territorios Ancestrales del pueblo moro poco antes de que fuera firmado en agosto de 2008 provocó la peor espiral de violencia en Mindanao en los últimos años y la parálisis de las negociaciones de paz durante años.

Por otra parte, a principios de 2019 se llevará a cabo un plebiscito para ratificar la LORABMM tanto en aquellos territorios que ya forman parte de la RAMM (y que automáticamente pasan a formar parte de la RABMM) como aquellos que eventualmente se incorporarían a la nueva región, concretamente, las ciudades de Isabela (en la provincia de Basilan, que ya forma parte de la RAMM) y Cotobato (en la provincia de Maguindanao, que también forma parte de la RAMM), seis ciudades de la provincia de Lanao del Norte y 39 municipalidades (barangays) pertenecientes a seis ciudades de la provincia de Cotobato Norte. En este sentido, ha habido críticas por la escasa difusión y socialización de los contenidos de la ley y por la deficiente campaña de información pública por parte del Gobierno y existe inquietud respecto del impacto que pueda tener en el resultado del plebiscito el clientelismo que ha operado históricamente en algunas regiones de Mindanao. Además, existe incertidumbre respecto de las posibilidades de votación de las miles de personas que todavía permanecen en campamentos de desplazamiento o evacuación a raíz de los combates que tuvieron lugar durante meses en la ciudad de Marawi en 2017 o, especialmente, respecto de los patrones de votación en áreas de influencia del MNLF o de otros grupos armados (como el BIFF, el Grupo Maute o Abu Sayyaf) que han expresado su oposición al proceso de paz con el MILF e incluso han anunciado su disposición a incrementar sus ataques.

En el caso de que finalmente la LORABMM sea ratificada, los retos que se plantean a medio plazo durante el período

de transición hasta el 2022 son principalmente la plena implementación del acuerdo de paz, la desmovilización del MILF y su conversión en un partido político, la reducción de los todavía altos niveles de violencia en la región y la capacidad de la Autoridad de Transición Bangsamoro para impulsar políticas públicas que reviertan en una mejora de la gobernanza y el desarrollo entre las provincias que integrarán la RABMM, que se cuentan entre las más empobrecidas del país. Respecto de la conversión del MILF en un actor estrictamente político, cabe destacar que ya en 2014 el MILF creó y registró el United Bangsamoro and Justice Party (UBJP) con la intención de erigirse en la principal fuerza política de la RABMM. Por otra parte, días después de la aprobación de la LORABMM, el propio líder del MILF, Ebrahim Murad, garantizó la completa desmovilización del grupo. Según el acuerdo de paz, un 30% de los combatientes del MILF iniciarán su desarme

La aprobación de la denominada ley orgánica de Bangsamoro abre la puerta a la sustitución de la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán por otra entidad con mayores competencias y territorio y a la plena implementación del acuerdo de paz, incluyendo la desmovilización de decenas de miles de combatientes del MILF

y desmovilización después de la aprobación de la ley orgánica de Bangsamoro; otro 35% tras la celebración del plebiscito y el nombramiento de la Autoridad de Transición Bangsamoro y el 35% restante tras la elección de un nuevo Gobierno en la región autónoma. Murad también afirmó que seis de los mayores campamentos del MILF en Mindanao ya estaban en proceso de conversión en lo que él denomina “comunidades civiles productivas” para ayudar a la reintegración a la vida civil de ex combatientes del MILF. Según la mayor parte de medios de comunicación, el MILF tendría unos 12.000 combatientes, pero los principales líderes del grupo aseguran que tiene alrededor de 40.000.

Más allá de los retos que se vislumbran a corto y medio plazo y de los obstáculos y enormes retrasos que ha tenido el proceso de paz, especialmente el establecimiento de un nuevo Gobierno electo en la RABMM –seis años más tarde de los previsto en el acuerdo de 2014–, la aprobación de la LORABMM supone una oportunidad única para resolver o superar uno de los conflictos armados más complejos del siglo XX. El acuerdo de paz de 2014 y su concreción y traslación legislativa en la LORABMM se insertan en una larga cadena histórica de esfuerzos para intentar diseñar una arquitectura institucional capaz de resolver los agravios históricos del pueblo moro y acomodar las demandas planteadas por algunas de sus organizaciones armadas en el marco del Estado filipino. La última fase de esta secuencia histórica –que se remonta al Acuerdo de Trípoli de 1976, firmado por el Gobierno del Ferdinand Marcos y el MNLF– se inició en 1997 con el establecimiento de las conversaciones de paz entre el Gobierno y el MILF y debería culminar, 22 años más tarde, con el plebiscito que sancione la creación de la RABMM, exactamente 30 años después del plebiscito que dio lugar a la creación de la RAMM.

4.3. El proceso de diálogo sobre Transdniestria: el acercamiento posible

Transdniestria, una franja de territorio a la izquierda del río Dniester con medio millón de habitantes, formalmente perteneciente al Estado de Moldova, es escenario desde los años noventa de un proceso de paz cronificado entre las autoridades de Moldova y Transdniestria en torno a su estatus legal. En el contexto del final de la URSS y de los temores en Transdniestria sobre una posible unificación de Moldova y Rumanía y las consecuencias que eso podía tener sobre el territorio de Transdniestria –de población diversa y mayoría rusohablante–, fuerzas de Transdniestria y de Moldova se enfrentaron en un breve conflicto armado en 1992, con varios centenares de víctimas mortales, finalizado con un acuerdo de alto el fuego y el inicio de negociaciones. Entre las principales cuestiones en disputa se incluye el estatus del territorio: defensa de la integridad territorial con aceptación de un estatus especial para la entidad, por parte de Moldova; y demanda de modelos de amplias competencias, como confederalismo e independencia plena, por parte de Transdniestria. Otros ejes de disputa en la negociación incluyen la dimensión cultural y socioeconómica y la presencia militar rusa en Transdniestria. A lo largo de décadas el proceso de ha visto afectado por obstáculos y posiciones antagónicas y periodos de paralización. Desde 2016 las negociaciones han asistido a un reimpulso, con avances significativos entre 2017 y 2018, que abren una oportunidad de avanzar en los próximos años hacia la consecución de un acuerdo. Entre los factores, el enfoque pragmático y práctico de la fase actual de las negociaciones, el impulso de la mediación y el apoyo al proceso por parte de Rusia –actor con ascendencia sobre el liderazgo de Transdniestria. No obstante, existen obstáculos, como las divergencias sobre la fase actual de medidas de confianza, incertidumbres en torno a las futuras dinámicas electorales y geoestratégicas, y riesgos de desencuentros en torno al estatus.

Entre los factores que favorecen los avances, la aproximación pragmática, gradual y práctica de las negociaciones en su fase actual desde el reinicio en 2016 del proceso, paralizado desde 2014. Ese año 2016 y bajo la presidencia alemana de la OSCE –órgano mediador en el diálogo–, Moldova y Transdniestria firmaron el llamado Protocolo de Berlín, que incluía pasos detallados para avanzar en la resolución de cuestiones concretas. Se adoptaba así lo que pasó a llamarse el enfoque de Berlín, basado en objetivos específicos y realizables y un calendario definido. Las negociaciones se centraron en medidas de confianza, dejando para más adelante cuestiones de fondo como el estatus legal. Este enfoque tuvo continuidad en 2017 y en 2018, centrado en ocho ámbitos preferentes, conocido como el “paquete de los ocho”. Se trata de una aproximación que estuvo dando sus frutos.

En estos años desde el reinicio del proceso, se han logrado acuerdos en varios ámbitos, incluyendo medioambiente, reapertura del puente Gura Bicului-Bychok, reconocimiento de diplomas expedidos por la Universidad Estatal Shevchenko de Transdniestria, garantías de funcionamiento para colegios gestionados por la Administración moldova y que usen el alfabeto latino, autorización a agricultores moldavos de acceso a tierras en la región de Dubasari, y registro de matrículas de vehículos de Transdniestria para que puedan circular por territorio internacional. Se trata de medidas con repercusiones prácticas para la población de Moldova y Transdniestria. Estos ámbitos, acordados entre 2016 y 2018, han comenzado a implementarse en 2018, lo que supone un salto cuantitativo y cualitativo en el proceso de diálogo y pone de manifiesto la existencia de voluntad política de avanzar de manera tangible en las negociaciones. La orientación pragmática del liderazgo de Transdniestria habría facilitado el reimpulso al proceso, según algunos análisis.²

El proceso negociador entre Moldova y Transdniestria ha asistido a avances significativos, con acuerdos en medidas de confianza, que abren una oportunidad significativa de resolución del conflicto

Otro de los factores relevantes en el avance del diálogo es el apoyo de Rusia al proceso de resolución. Como en otros conflictos no resueltos del espacio ex soviético, el papel de Rusia es ambiguo, moviéndose entre parte en conflicto y parte mediadora. Así, da apoyo a Transdniestria y mantiene tropas en territorio transdnistrio y, al mismo tiempo, actúa como tercera parte en calidad de país garante en el formato de 5+2 del proceso de paz (formato en el que la OSCE actúa de mediadora, Ucrania y Rusia de países garantes y la UE y EEUU como países observadores). No obstante, en contraste con su posición en Osetia del Sur y Abjasia –donde Rusia ha reconocido formalmente la independencia de dichos territorios–, o en Ucrania –proceso en el que se atribuye a Rusia un interés en la cronificación de la fragilidad del país, incluyendo a través de la perpetuación del conflicto en el Donbás–, en el caso de Moldova, Rusia se ha mostrado favorable a una solución de estatus especial para Transdniestria dentro de Moldova y no ha frenado la consecución de acuerdos tangibles. Ello, unido al nuevo impulso mediador dado por la OSCE al proceso en los últimos años, ha contribuido a nuevos avances.

No obstante, existen diversos obstáculos. Entre ellos, las divergencias entre las partes sobre el grado y manera en que se están implementando los acuerdos alcanzados del paquete de medidas de confianza. Algunos análisis también cuestionan el rumbo de la implementación y señalan que las autoridades de Transdniestria podrían estar instrumentalizando los acuerdos alcanzados para avanzar hacia su secesión *de facto*. Así, por ejemplo, analistas advierten del despliegue de puestos fronterizos y aduaneros por parte de Transdniestria en el puente Gura Bicului-Bychok, infraestructura que había de ser custodiada por

2. De Waal, Thomas, *Moldova's Conflict: Unfreezing, In a Good Way?*, Carnegie Europe, 6 de marzo de 2018.

las fuerzas tripartitas de la Comisión de Control Conjunto (Moldova, Transdniestria, Rusia).³ Asimismo queda pendiente la consecución de un acuerdo de otras medidas de confianza y su implementación. Ello pone de manifiesto dificultades en la plena consecución del enfoque de Berlín y apunta a dificultades futuras. Por otra parte, está por ver cómo influirán las elecciones parlamentarias de Moldova y las dinámicas geoestratégicas en el proceso de paz, en un contexto en que el pro-ruso Partido Socialista del presidente moldavo trata de ampliar su peso en el país, frente a un debilitado gobierno de coalición pro-UE afectado por casos de corrupción. Asimismo, se mantienen los riesgos de que futuras fases de negociación en torno a la cuestión

de fondo del estatus generen nuevos desacuerdos, dado el histórico del conflicto.

El reinicio del proceso negociador entre Moldova y Transdniestria y los avances en acuerdos en medidas de confianza entre 2017 y 2018 muestran la existencia de una oportunidad para avanzar en la resolución del conflicto en los próximos años, de la mano de factores como la voluntad política y un enfoque práctico y pragmático. Por todo ello, y para hacer frente a los obstáculos, los actores locales e internacionales involucrados en la mediación y en el apoyo a la construcción de paz deberán redoblar sus esfuerzos para consolidar los avances realizados.

3. Socor, Vladimir, "De-Sovereignization: Testing a Conflict-Resolution Model at Moldova's Expense in Transnistria", en *Eurasia Daily Monitor*, Vol. 15, núm.135.

4.4. Las redes de mujeres mediadoras

Desde que en el año 2000 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad (WPS, por sus siglas en inglés) dando lugar al inicio de la agenda homónima, la participación de las mujeres en los procesos de paz ha logrado adquirir una cierta visibilidad internacional. En las últimas décadas, organizaciones de mujeres han exigido participación en todos los esfuerzos de construcción de paz, tal y como establece la resolución 1325. No obstante, estas exigencias no han tenido una traducción efectiva en las políticas de paz y seguridad internacionales, como muestran las cifras ofrecidas por el Council on Foreign Relation. Según este centro, en los procesos de paz que tuvieron lugar entre 1990 y 2017, las mujeres representaron el 2% de quienes ejercieron labores de mediación, el 5% de testigos y firmantes de acuerdos de paz y el 8% de quienes negociaron en estos procesos.⁴ Sin embargo, a pesar de estas alarmantes cifras y de que Naciones Unidas reconoce que la escasa participación de las mujeres en los procesos de paz es uno de los principales obstáculos para la implementación de los compromisos establecidos por la agenda WPS, en los últimos años se ha producido un cierto desarrollo de estándares internacionales sobre cómo deberían ser los procesos de paz con perspectiva de género. De acuerdo a estos estándares, quienes ejercen tareas de mediación deberían incluir siempre a personas con conocimientos técnicos especializados en cuestiones de género, para asesorar a negociadores y a equipos de mediación; deben consultar periódicamente a las organizaciones de mujeres, desde el inicio y a lo largo de todo el proceso; la agenda y los acuerdos deben abordar de forma explícita las necesidades y prioridades de las mujeres; y debe hacer una representación significativa de mujeres en las negociaciones y en las instituciones responsables de la implementación de los acuerdos eventualmente alcanzados.⁵

En este contexto de desarrollo de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad y en paralelo de falta de avances en su implementación, desde el año 2015 han surgido múltiples redes de mujeres mediadoras, reuniendo a mujeres implicadas en el ámbito de la mediación y la facilitación de procesos de paz desde diferentes ámbitos. La primera de estas redes fue la red nórdica de mujeres mediadoras, Nordic Women Mediators Network. Esta red, que se define a sí misma como un foro colaborativo, está integrada por mujeres de los cinco países nórdicos –Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia–, con experiencia y conocimientos en ámbitos como las negociaciones de paz, los acuerdos de alto el fuego, las reformas constitucionales o los derechos humanos, entre otros. En 2017 se creó la

segunda red, FemWise-Africa, Network of African Women in Conflict Prevention and Mediation, que auspiciada por la Unión Africana agrupa a mujeres mediadoras de este continente. Esta red se une a otras iniciativas promovidas por la organización regional africana, como el nombramiento de la Enviada Especial sobre mujeres, paz y seguridad. También en 2017 se creó la Red de Mujeres Mediadoras del Mediterráneo, promovida por el Gobierno de Italia, agrupando a mujeres de países de toda la cuenca Mediterránea. La red más reciente, establecida oficialmente en 2018 agrupa a mujeres mediadoras de la Commonwealth, Women Mediators across the Commonwealth, con el impulso del Gobierno de Reino Unido. En paralelo, cabe destacar que las cuatro redes regionales –que se han desarrollado en paralelo a otras iniciativas, algunas de carácter local, como por ejemplo la Women Network for Peace and Dialogue en Burundi o la Network of Women Mediators of South Caucasus– también han llevado a cabo iniciativas de colaboración más allá del trabajo interno de cada red, dirigiéndose por ejemplo de manera conjunta al Secretario General de la ONU para reclamar un mayor compromiso de la ONU con la representación y participación de las mujeres en las negociaciones de paz.

Se trata de experiencias innovadoras con el objetivo de promover la participación significativa de las mujeres en los procesos de paz, superando los obstáculos que tradicionalmente han enfrentado las mujeres para acceder a los puestos de relevancia política como pueda ser la mediación en los procesos de paz. En paralelo a las investigaciones que apuntan a que la inclusividad es uno de los factores de éxito en los procesos de paz, las redes de mujeres mediadoras promueven fórmulas colaborativas de aprendizaje y apoyo mutuo, frente a los modelos excluyentes y elitistas que han primado en la diplomacia de paz tradicional. Además, se trata de un punto de encuentro entre mujeres procedentes de diferentes ámbitos, combinando la participación de diplomáticas, funcionarias gubernamentales, académicas y sociedad civil, reforzando la colaboración entre actores relevantes para cualquier proceso de paz. Las redes de mujeres impulsan una concepción de la mediación y la facilitación en procesos de paz amplia, y que va más allá de las tareas desempeñadas por la diplomacia tradicional de Track I. Las redes de mujeres mediadoras representan una oportunidad para hacer efectiva la agenda WPS, impulsando la participación efectiva de las mujeres en los procesos de paz y al mismo tiempo, promover la inclusividad y la innovación como fórmula de fortalecimiento de las negociaciones de paz.

4. Council on Foreign Relations, *Women's Roles in Major Peace Processes, 1990–2017*, <https://www.cfr.org/interactive/womens-participation-in-peace-processes>

5. Rhadika Coomaraswamy, *Prevenir los conflictos. Transformar la justicia. Garantizar la paz. Estudio mundial sobre la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas*, ONU Mujeres, 2015.

4.5. El reconocimiento y la inclusión de la población joven como agente de paz

Con frecuencia los discursos y narrativas sobre jóvenes y conflictos suelen estar cargados de mitos y estereotipos que asocian a los jóvenes con violencia o que, en el caso de las jóvenes, las retratan eminentemente como víctimas. En numerosos contextos, muchas personas jóvenes se sienten excluidas y frustradas por la sensación de ser percibidas como un problema a resolver, más que como posibles aliadas para impulsar cambios. No obstante, en los últimos años la comunidad internacional y los estudios sobre paz y conflictos han dedicado una mayor atención al papel de la población joven como actor de paz y como agente para la transformación sostenible de conflictos violentos. Para dar impulso a esta aproximación ha sido clave la aprobación en diciembre de 2015 de la resolución 2250 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que busca promover un mayor reconocimiento e implicación de la juventud en la prevención y resolución de conflictos. En el marco de esta resolución, durante 2018 se hizo público el primer estudio global sobre la implementación de la agenda de jóvenes, paz y seguridad, que ofrece una visión panorámica de la aportación de la juventud en este ámbito y esboza una serie de recomendaciones para su mayor inclusión en iniciativas de paz.⁶ Los avances en esta área pueden significar que la juventud cuente con mayores espacios para contribuir a la paz en el futuro.

La resolución 2250 se construyó sobre la base de otras iniciativas previas –como los Principios Guía para la Participación de la Juventud en la Construcción de Paz o la Declaración de Amán sobre Jóvenes, Paz y Seguridad–, y es considerada como un punto de inflexión por introducir una nueva narrativa sobre juventud y conflictos, asegurar visibilidad a las iniciativas de paz impulsadas por jóvenes, promover la representación y participación de jóvenes en todos los niveles de los procesos de paz, garantizar una rendición de cuentas al establecer un debate anual sobre su implementación y, sobre todo, por ofrecer –por primera vez– un marco integral para las necesidades y oportunidades para un grupo demográfico específico: las personas jóvenes. El estudio independiente sobre los progresos en materia de juventud, paz y seguridad dado a conocer en 2018 se hace cargo de algunas de las complejidades de trabajar con esta categoría, teniendo en cuenta que no existe una definición universal y consensuada sobre “juventud” –a pesar de que la resolución 2250 la define como la fase de edad entre los 18 y 29 años– y que tampoco se puede caer en simplificaciones o visiones románticas. A diferencia de otras categorías identitarias, la juventud constituye un período transicional en la vida de todas las personas y, como grupo, no constituyen un ente homogéneo. Los y las jóvenes se caracterizan por su pluralidad, con posiciones diversas en interacción con dimensiones como el género, religión, etnicidad, clase social, filiaciones políticas, etc.

Una de las principales aportaciones del estudio global – resultado de diversos informes especializados y de un proceso participativo y de consulta con más de 4.200 jóvenes– ha sido analizar y cuestionar varios estereotipos que vinculan juventud y violencia. Por un lado, se constata el inmenso impacto de los conflictos en los jóvenes. En 2016, un total de 408 millones de personas entre 15 y 29 años vivía en contextos afectados por conflictos armados o violencia organizada y estimaciones de 2015 apuntaban a que más de 90% de las víctimas mortales directas de conflictos armados correspondían a hombres jóvenes. Pero también pone en entredicho algunas teorías recientes que han intentado establecer una relación causal entre el porcentaje de población joven de una sociedad con la probabilidad de agitación social y conflictos violentos –la edad no parece ser el único criterio para explicar la participación en hechos de violencia–. Asimismo, se cuestionan las narrativas que señalan a la población joven desplazada y migrante como potencial amenaza –no tienen en cuenta que muchas de estas personas han preferido huir que luchar o ser reclutados por actores armados– o las representaciones que asocian juventud con extremismo violento. Respecto a esto último, si bien se identifica una preponderancia de jóvenes en grupos extremistas, también se destaca que quienes deciden afiliarse a estas organizaciones suponen una ínfima proporción de la población joven en general.

El estudio global y otras investigaciones recientes también ilustran el abanico de iniciativas de jóvenes en distintas etapas del ciclo de paz y conflictos y ante violencias diversas. Los ejemplos incluyen intervenciones lideradas por población joven para prevenir la escalada de violencia en diferentes contextos –a través del diálogo intercomunitario en Kenya o de la educación para la paz en Colombia o Myanmar, entre otras– y acciones ya en el marco de conflictos violentos abiertos –facilitando la comunicación entre las partes afectadas en conflicto en Kirguistán, apoyando la desvinculación y reintegración de integrantes del grupo armado al-Shabaab en Somalia, asumiendo actividades de ayuda humanitaria ante el repliegue de organizaciones internacionales en escenarios como el de Yemen o documentando las vulneraciones a los derechos humanos, como en Burundi. En contextos posbélicos la población joven también se ha implicado en procesos de verdad y reconciliación –por ejemplo, en Liberia o Sierra Leona– o se mantienen activos en campañas a favor del desarme nuclear, como en Japón. También se señalan iniciativas impulsadas por jóvenes y para jóvenes destinadas a fortalecer su resiliencia ante la violencia extremista y evitar su captación por grupos armados en países como Pakistán o Yemen o acciones contra la violencia sexual y de género, incluyendo los abusos contra población LGTBI, en India o Jamaica.

El reconocimiento a la necesaria inclusión de jóvenes en los procesos de paz se plantea no solo por los dividendos para la paz y porque su exclusión sea contraproducente, sino sobre todo como una cuestión de derechos

6. United Nations, *The missing peace: independent progress study on youth, peace and security*, A/72/761-S/2018/86, 2 de marzo de 2018.

Uno de los ámbitos en que se identifican retos pendientes es el de la participación de los jóvenes en procesos de paz formales, donde su implicación sigue siendo muy limitada. Jóvenes de diversos contextos se sienten excluidos de procesos políticos y se quejan tanto de la corrupción como de la cooptación de las élites políticas. El estudio global también constata la paradoja –aplicable a otros espectros de edad– de que los jóvenes que han tenido una participación activa como actores armados suelen tener más posibilidades de acceder a una mesa de negociación que quienes se han mantenido al margen de la violencia o han trabajado por la paz. En este sentido, se reivindican las ventajas de la participación significativa de jóvenes en procesos de paz, en tanto que la frustración por la exclusión puede favorecer la recurrencia de violencia y –desde una perspectiva positiva– porque la vigencia e implementación de un acuerdo y el mantenimiento de los logros de un proceso de paz dependen en parte de su aceptación por parte de generaciones jóvenes. Cabe destacar, no obstante, que el reconocimiento a la necesaria inclusión de jóvenes en los procesos de paz se plantea no tan solo por los posibles dividendos para la paz y porque su exclusión sea contraproducente para una transformación sostenible de conflictos, sino sobre todo como una cuestión de derechos. El derecho de la población joven a tener voz y una participación plena en estos espacios.

El análisis de algunas experiencias de participación de jóvenes en negociaciones oficiales arroja algunas luces sobre fórmulas de inclusión. En algunos casos, como en las negociaciones entre el Gobierno filipino y el MILF entre 1997 y 2016, su implicación se produjo sobre todo a partir de relaciones informales, entre ellas de carácter familiar, que favorecieron su aportación en términos técnicos y logísticos. En Sudán del Sur, la facilitación de ACNUR permitió la presencia como observadores de un grupo de jóvenes refugiados en el Foro de Revitalización de Alto Nivel del país. En el caso de Siria, jóvenes han intentado promover la creación de un Consejo Consultivo de interlocución directa con el enviado especial de la ONU como el creado para las mujeres sirias. Yemen, en tanto, se presenta como un caso paradigmático del impacto de las cuotas para población joven, tras la experiencia de la Conferencia de Diálogo Nacional (2011) que contó con un 20% de participación de jóvenes. Pese a las valoraciones críticas al proceso, jóvenes yemeníes valoran su relevancia para cambiar la mentalidad sobre la participación de jóvenes y mujeres, la posibilidad de pronunciarse sobre temas complejos y de cuestionar las estructuras jerárquicas del país. Cabe destacar, sin embargo, que algunos estudios en este ámbito han planteado la conveniencia de no focalizar todas las expectativas en la participación de jóvenes en espacios formales –a menudo elitistas y gerontocráticos– y reconocer la relevancia de las aportaciones de la juventud en los espacios informales que son esenciales para llegar a

las negociaciones y cruciales para el éxito de los procesos formales y para la transformación sostenible de conflictos.⁷ Se requiere, por tanto, de una noción amplia de inclusión que no supone necesariamente invitar a jóvenes a espacios ya creados sino dar relevancia a los que ellos y ellas mismos han creado para manifestarse públicamente a favor de la paz.

Cabe destacar que la agenda de jóvenes, paz y seguridad toma como referencia la agenda internacional de mujeres, paz y seguridad –desarrollada a partir de la aprobación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU (2000)– y las lecciones de su implementación que, en lo que respecta a los procesos de paz, han reconocido la necesidad de poner atención no sólo a la cantidad sino a la calidad de la participación y la capacidad de influencia real de las mujeres. La perspectiva de género en la agenda de jóvenes, paz y seguridad también ha enfatizado la necesidad de profundizar en cómo las identidades de género alimentan los conflictos violentos y de trabajar particularmente con las identidades masculinas, teniendo en cuenta que la juventud es una etapa clave en la construcción de la identidad. La experiencia de la agenda 1325 también puede ser útil para identificar retos en la implementación, teniendo en cuenta la falta de voluntad política para concretar muchos de los compromisos adquiridos y, en algunos aspectos, las aproximaciones tokenísticas que apuntan a una inclusividad superficial o meramente simbólica.

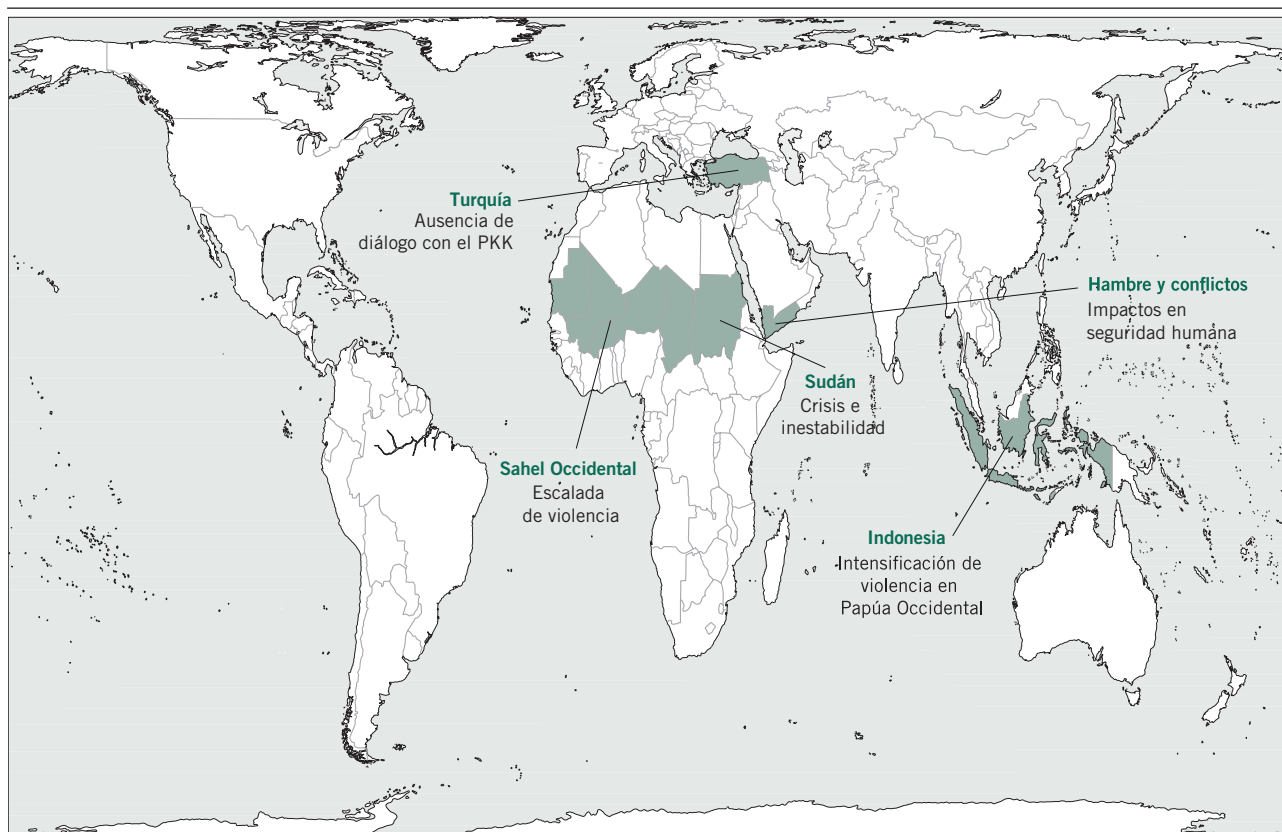
De cara al futuro, la agenda de jóvenes, paz y seguridad ha recomendado tres estrategias de acción complementarias. En primer lugar, invertir en las capacidades, agencia y liderazgo de jóvenes, reconociendo su diversidad y sus propias formas de organización. En segundo lugar, abordar las barreras estructurales que dificultan la participación de jóvenes en el ámbito de paz y seguridad. Y, por último, apostar por asociaciones y acciones colaborativas que reconozcan a la población joven como igual y como aliada para la construcción de la paz. Estas recomendaciones se desgranar en una serie de propuestas concretas que deben ser asimiladas por gobiernos, donantes y organizaciones internacionales –entre ellas la ambición de invertir 1.800 millones de dólares (1 dólar por persona joven) antes de 2025, coincidiendo con el décimo aniversario de la resolución 2250; utilizar cuotas para jóvenes, con perspectiva de género, para su participación directa en todas las fases de procesos de paz y transiciones políticas; o apostar por una mayor investigación e identificación de buenas prácticas en el ámbito de jóvenes, paz y seguridad. En los años venideros la revisión periódica de la implementación de la agenda de jóvenes, paz y seguridad ofrecerá una oportunidad para valorar los progresos en este ámbito, directamente relacionados con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que subraya la interdependencia entre paz, justicia e instituciones inclusivas.

7. Mir Mubashir e Irena Grizelj, *The Youth Space of Dialogue and Mediation: An Exploration*. Berlín: Berghof Foundation, 2018.

5. Escenarios de riesgo para 2019

A partir del análisis del año 2018 de los escenarios de conflicto armado y tensión a nivel mundial, la Escuela de Cultura de Pau de la UAB identifica en este capítulo cinco contextos que por sus condiciones y dinámicas pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante 2019. Los escenarios de alerta de cara al año 2019 hacen referencia a la escalada de violencia en la región de Sahel Occidental, a los efectos de la crisis política y económica en los escenarios de inestabilidad en Sudán, al incremento de la violencia en la región indonesia de Papúa Occidental 50 años después del fallido referéndum de autodeterminación, a los riesgos derivados de la ausencia de diálogo en el marco del conflicto entre Turquía y el PKK, y a los graves impactos en la seguridad humana del binomio hambre-conflictos.

Mapa 5.1. Escenarios de riesgo para 2019



5.1. La escalada de la violencia en la región del Sahel Occidental

A pesar de diversos cambios positivos que se han desarrollado en los diferentes escenarios políticos de la región del Sahel Occidental –el proceso de paz que intenta resolver el conflicto armado de Malí; la mejora de la situación política en Burkina Faso con la llegada a la presidencia en 2015 de Roch Marc Christian Kaboré, que puso fin a la transición con la caída del autoritario Blaise Compaoré; o el retorno al poder civil en Níger en 2011 tras el golpe de Estado en 2009–, la región afronta en los últimos años y en especial en 2018 un incremento de la violencia política con múltiples ramificaciones y expresiones de violencia intercomunitaria y criminalidad que está poniendo en jaque a los diferentes países y poblaciones de la zona. La militarización de la región, considerada la “nueva frontera de la lucha antiterrorista global”, con el despliegue de iniciativas regionales e internacionales, puede tener graves consecuencias para la población civil y no resolver las cuestiones de fondo que se encuentran entre las raíces de la conflictividad en el área.

Diversos análisis han señalado un incremento de la violencia regional, que en un primer momento se vinculaba a la expansión de las actividades de los grupos armados procedentes de Malí hacia la frontera con Níger y Burkina Faso, y del grupo armado nigeriano Boko Haram hacia Níger (región de Diffa) en el marco de la ampliación de sus actividades en la región del Lago Chad. Posteriormente se han identificado otros focos de inestabilidad alejados de estas zonas y que tendrían agencia propia. En este sentido, el Africa Center for Strategic Studies¹ realizó un estudio en el que puso de manifiesto el incremento de la violencia en el tiempo, en el marco geográfico y en el número de actores. El número de acciones violentas vinculadas a grupos armados yihadistas se había doblado cada año desde 2016 (90 en 2016, 194 en 2017 y 465 en 2018), así como las víctimas mortales vinculadas a estas acciones (218 en 2016, 529 en 2017 y 1.100 en 2018). Asimismo, los ataques contra la población civil también se multiplicaron, pasando de 18 en 2016, a 39 en 2017 y a 160 en 2018. Aunque Malí continuaba suponiendo el principal foco de la violencia, concentrando el 64% de las acciones perpetradas en el Sahel, el restante 36% respondía a acciones perpetradas en Níger y Burkina Faso. Este último país ha pasado de sufrir en su territorio tres acciones vinculadas a actividades insurgentes en 2015, a 12 en 2016, 29 en 2017 y a las 137 en 2018. La mitad de las acciones insurgentes en la región se vinculan a la coalición de grupos conocida como el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM,

La aproximación securitaria puede contribuir a alimentar los agravios de la región del Sahel Occidental, históricamente afectada por altos índices de subdesarrollo, y empeorar la situación humanitaria

Jama'at Nusrat al Islam wal Muslimin), creada en marzo de 2017; al Macina Liberation Front (FLM), que actuó junto al GSIM en más del 40% de las acciones insurgentes; y a dos nuevos grupos, Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) y Ansaroul Islam, que estuvieron implicados en el 26% y el 15%, respectivamente, de las acciones insurgentes cometidas en la zona. Los grupos se distribuyeron geográficamente en cuatro grandes escenarios: el JNIM en el centro y norte de Malí; Ansaroul Islam en el área de Djibo, en Burkina Faso; el ISGS se situó en la frontera entre Níger y Malí y en el este de Burkina Faso también se constató la presencia del JNIM y del ISGS. Mientras que en 2012 había cuatro grupos –MNLA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI– operando en Malí, en la actualidad hay más de 10 grupos armados activos en Malí, Burkina Faso y Níger, y la violencia en 2018 excede en su conjunto a todo el periodo 2009-2015. La creciente violencia también podría responder a una competencia por el liderazgo en la zona entre ISIS y al-Qaeda, según diversos análisis.²

Este incremento de la actividad insurgente ha venido acompañado de la creación de misiones regionales y la presencia de fuerzas extranjeras para hacerles frente. En 2017 se puso en marcha la Fuerza Conjunta Sahel G5 (compuesta por unos 5.000 efectivos de Malí, Chad, Níger, Mauritania y Burkina Faso). La misma se pretendía que estuviera operativa durante el primer semestre de 2018. Sin embargo, sufrió diversos reveses militares así como la falta de financiación previsible y deficiencias en materia de capacidades y equipos, que frenaron su operatividad. En septiembre, Malí y Burkina Faso solicitaron al Consejo de Seguridad de la ONU que confiara un mandato a la Fuerza Conjunta con arreglo al Capítulo VII a fin de garantizar una financiación y apoyo continuo. También en 2017 se puso en marcha la Joint Task Force (JTF) para la región Liptako-Gourma, compuesta por efectivos de Malí, Burkina Faso y Níger, región que comprende una zona de 370.000 km² entre los tres países. A estas operaciones cabe añadirle la operación militar francesa Barkhane, compuesta por 4.500 soldados, activa desde 2014 (la operación previa, Serval, iniciada en 2013, centraba sus actividades en Malí).³ Además de la MINUSMA (ONU), la presencia extranjera se ha ampliado a EEUU, Alemania, Canadá e Italia. En abril, Níger hospedó ejercicios militares de la operación Flintlock, en los que participaron 1.900 soldados de una veintena de países, patrocinado por EEUU. Este país ya dispone de una presencia militar permanente en todo el Sahel a excepción

1. Africa Center for Strategic Studies, *The Complex and Growing Threat of Militant Islamist Groups in the Sahel*, 15 de febrero de 2019.

2. Véase, entre otros, Abu al-Maali, Mohammed Mahmoud, *The Competition between al-Qaeda and the Islamic State in the Sahel and Sahara*, Al Jazeera Centre for Studies and al-Dar al-Arabi lil-Ulum, 2017; Cherbib, Hamsa, *Jihadism in the Sahel: Exploiting Local Disorders*; IEMED Mediterranean Yearbook, 2018.

3. Francia dispone de operaciones militares en el Sahel desde 1983, con la operación Manta (en Chad), antecedente de la operación Épervier (1986), que precede a la operación Serval (ya ubicada en Malí). La operación Manta está considerada como la principal operación militar francesa desde la guerra de Argelia.

de Eritrea y Sudán, en el marco de iniciativas de lucha contra el terrorismo desarrolladas por EEUU tras el 11-S en África, bajo mandato del AFRICOM.

Esta importante presencia militar responde, según diversos analistas, a tres razones: la lucha contra el terrorismo, la prevención de migraciones hacia Europa y la protección de los intereses nacionales de las potencias extranjeras. Sus actividades incluyen formación, acciones de contrainsurgencia, también a través del uso de drones, la construcción de bases militares y tareas de inteligencia. Aunque los Gobiernos de la región han favorecido la presencia de las tropas extranjeras en el marco de la lucha contra grupos armados que reivindican agendas yihadistas, es discutible que estas operaciones hayan conseguido su objetivo, vista la expansión de las actividades insurgentes. Por el contrario, podrían tener un impacto negativo. En Níger, la población local ha empezado a rechazar la presencia de las tropas extranjeras, debido a la militarización de la vida pública y la restricción de libertades, derivando en movilizaciones que han sido sofocadas por los cuerpos de seguridad, incrementando el rechazo hacia el Gobierno, que según diversos analistas también pretendería fortalecer su poder utilizando mecanismos no democráticos. Sectores de la población civil burkinabesa se movilaron para denunciar el fracaso de la gestión de la situación. Además, tal y como ha señalado el *think tank* surafricano ISS, la restricción de movimientos (que incluye de camiones y

motocicletas) con el fin de interrumpir el tráfico ilícito transfronterizo, o de suministros para los grupos armados, en el marco del estado de emergencia presente en regiones de estos tres países, ha contribuido a la interrupción de actividades comerciales agravando la situación de la economía de la región e incrementando la vulnerabilidad de la población. Ello ha comportado el incremento del precio de los productos, afectando negativamente a los productores que no pueden desplazar sus bienes a los mercados, lo que también ha incrementado el riesgo de inseguridad alimentaria y dificultado el acceso de las organizaciones humanitarias a las zonas afectadas.

A la postre, esta aproximación securitaria podría contribuir a alimentar los agravios en una zona afectada por altos índices de subdesarrollo y cuya marginación política, económica y social se encuentra en las raíces de los conflictos que históricamente han afectado la región. Estas acciones, que no se están mostrando efectivas en la reducción de la violencia, se han desarrollado además sin consultar a las poblaciones locales, según destaca ISS, lo que ha aumentado el rechazo hacia la intervención extranjera, ya que se ven atrapadas entre la acción militar y la insurgencia. En conclusión, la estrategia actual puede ser contraproducente al corto y largo plazo, no contribuye eficazmente a reducir la violencia, no plantea soluciones de fondo a los problemas estructurales que generan la violencia, y puede agravar las consecuencias para la población civil.

5.2. Los efectos de la crisis política y económica sobre los escenarios de inestabilidad en Sudán

El junio de 2019 se cumplen 30 años de la llegada al poder de Omar al-Bashir en Sudán mediante un golpe de Estado que derrocó al Gobierno electo encabezado por el primer ministro Sadeq al-Mahdi. Desde ese momento, el país ha estado bajo el Gobierno del National Congress Party, caracterizado por representar un régimen autocrático erigido a partir de la militarización del Estado. Durante el 2018, el país enfrentó un escenario bifurcado entre la reducción de la intensidad de la violencia en las regiones de Darfur (oeste) y Kordofán Sur y Nilo Azul (sur), y el aumento de la crisis económica y política a nivel nacional que desataron masivas manifestaciones populares a lo largo del año, teniendo su epicentro en diciembre, y manteniéndose a principios de 2019. Todo lo anterior augura un año que estará marcado por la incertidumbre sobre la continuidad del régimen de Omar a-Bashir al frente del país, en donde será fundamental el devenir de diferentes escenarios.

En primer lugar, la crisis en Darfur, cuyos orígenes se remontan al año 2003, se ha caracterizado en los últimos años por una reducción de la violencia en gran parte de la zona, debido a diferentes factores: los avances en el procesos de negociación, el papel de la comunidad internacional y nacional en la mediación, el cansancio de las partes, o los ceses unilaterales de hostilidades decretados tanto por el Gobierno como los principales grupos rebeldes darfuríes (el Movimiento de Justicia e Igualdad [JEM] y el Movimiento de Liberación de Sudán/facción Minni Minnawi [SLM-MM]). Este escenario ha posibilitado avances en los diálogos de paz, lográndose la firma a finales del 2018, de un acuerdo de pre-negociación para retomar los acuerdos de Doha de 2006 entre el Gobierno y los grupos rebeldes SLA-MM y JEM.⁴ A su vez, el descenso de la violencia también posibilitó la reducción y reconfiguración de la misión conjunta de paz de la UA y la ONU en el país, la UNAMID, que a partir de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (2363 y 2429), cerró diez bases en el país, y redujo en casi la mitad su personal militar y policial desplegado. Sin embargo, existen algunos escenarios de riesgo que pueden significar la vuelta a la violencia. Por un lado, si bien la intensidad de los enfrentamientos se ha visto disminuida, ésta no ha finalizado, concentrándose principalmente en la zona de Jebel Marra⁵, donde las fuerzas rebeldes del SLA lideradas por Abdel Wahid (SLA-AW) han mantenido los enfrentamientos debido a su exclusión de las negociaciones de paz. Ello incidió en 2018 en importantes enfrentamientos armados entre la rebelión y las fuerzas gubernamentales y sus milicias afines, principalmente a través de las Rapid Support Forces (RSF) –integradas dentro de la estructura militar– que deterioraron la situación de seguridad, incidiendo en el desplazamiento forzado de personas. Sin duda, el riesgo

más acuciante para 2019 lo representa el anuncio realizado por las fuerzas paramilitares de las RSF de perpetrar una ofensiva final contra los rebeldes a principios de año, hecho que anticipa un recrudecimiento de los combates. Si bien la UNAMID ha fortalecido su presencia en Jebel Marra, su menor capacidad operativa es un factor a tener presente en futuros escenarios de rebrote de la violencia. Por otro lado, la no incorporación de todos los actores armados a la mesa de negociación, tal y como ha sucedido en otros momentos, significa un riesgo, no solo para finalizar la situación de inseguridad, sino también para la implementación efectiva de cualquier medida adoptada.

En segundo lugar, el conflicto armado que mantiene el Gobierno en las regiones sureñas de Kordofán Sur y Nilo Azul con las fuerzas rebeldes del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán - Norte (SPLM-N) también ha mantenido durante los últimos años una lógica descendente de la violencia, con ceses al fuego unilaterales de ambas partes. Ello ha posibilitado la reapertura de los diálogos de paz congelados desde octubre de 2016.⁶ Sin embargo, también existen algunos factores de riesgo a tener en cuenta. Por un lado, la creciente fragmentación del SPLM-N, cuyas luchas internas generaron la división de la organización en dos facciones en 2017, una liderada por Abdelaziz al-Hilu y otra bajo mando de Malik Agar, dificulta la resolución del conflicto, en parte debido a la exclusión inicial de los diálogos de paz de la facción encabezada por Agar. Por otro lado, la presencia y ataques de las fuerzas de las RSF en la zona siguen representando un elemento de inseguridad e inestabilidad. Finalmente, la falta de acuerdos sobre el acceso humanitario a las Dos Áreas perpetúa la situación de inseguridad, manteniendo la crisis humanitaria para las poblaciones civiles de la zona.

En tercer lugar, el recrudecimiento de la crisis económica y política en 2018 ha puesto de manifiesto la inestabilidad del régimen de Omar al-Bashir, y el creciente descontento y malestar de la ciudadanía. La tensión política se concentró en dos momentos, a principios y a finales de año, y estuvo originada en el plan de ajuste estructural puesto en marcha por el Gobierno sudanés con el objeto de disipar las dudas del FMI sobre la estabilidad económica del país. Como parte de las medidas de ajuste económico, el Gobierno eliminó el subsidio a la harina, triplicándose el precio del pan, medida que incidió en la vulnerabilidad de las personas más empobrecidas del país. Ello generó importantes manifestaciones ciudadanas en enero que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, reportándose centenares de detenidos. La situación económica empeoró a lo largo del año, incrementándose con la crisis de combustible. El Gobierno introdujo

4. Estas futuras negociaciones retomarán la base del Documento de Doha para la Paz en Darfur (DDPD) firmado en el año 2006. Véase el resumen sobre Sudán (Darfur) en Escola de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2019. Análisis de tendencias y escenarios*. Icaria, 2019.

5. Véase el resumen sobre Sudán (Darfur) en el capítulo 1 (Conflictos Armados).

6. Véase el resumen sobre Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) en el capítulo 1 (Conflictos Armados).

diferentes medidas políticas de contención, entre ellas, la reorganización, primero, del gabinete de Gobierno, y su disolución posterior; la reducción del número de parlamentarios así como de ministerios; el aumento de la representación subnacional en la cámara parlamentaria, etc. Si bien las movilizaciones remitieron a lo largo del año, la aprobación en el Parlamento de la enmienda constitucional presentada por el partido de Gobierno para extender los límites del mandato presidencial a principios de diciembre de 2018, acabó en una nueva oleada de protestas populares. Éstas dieron inicio el 19 de diciembre en la ciudad de Atbara (noreste del país), extendiéndose rápidamente por todo el país. Si bien al principio estuvieron centradas en demandas alusivas a la eliminación del subsidio de la harina y las consecuencias de la crisis económica, a finales de año se ampliaron en un marcado tono anti-Bashir, demandando la dimisión del presidente. Nuevamente la respuesta gubernamental se tradujo en la represión por la fuerza de las protestas, empleando munición real que dejó al menos 37 personas asesinadas al finalizar el año. Paralelamente, el Gobierno incluyó otras diferentes medidas, como el cierre de internet y de varios periódicos y centros educativos, incluidas las universidades, decretando a principios de año el estado de emergencia durante todo el 2019.⁷

Todo ello ha llevado al país a un punto de inflexión, cuyas consecuencias dependerán de las estrategias de represión o diálogo que ofrezca el Ejecutivo, que sin duda marcarán el devenir futuro del régimen. En este contexto existen diferentes escenarios a tener en cuenta. El primero hace

En Sudán se augura un año que estará marcado por la incertidumbre sobre la continuidad del régimen de Omar al-Bashir al frente del país, en donde será fundamental el devenir de diferentes escenarios

referencia al proceso de negociación abierto entre el Gobierno de Sudán y el Gobierno de EEUU para la normalización de las relaciones diplomáticas y la eliminación de Sudán de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El Departamento de Estado de EEUU ha exigido al Gobierno de al-Bashir progresos en seis diferentes áreas, las cuales incluyen la resolución pacífica de los conflictos armados en el país, así como la mejora de la situación de los derechos humanos, medidas que pueden condicionar la respuesta del régimen frente al creciente descontento social. En segundo lugar, la orden de captura que pesa sobre al-Bashir por parte de la CPI, que lo acusa de cometer crímenes de guerra y lesa humanidad, lo cual puede representar un importante obstáculo, tanto orientado a medir su respuesta, como en lo relativo a incentivar su permanencia en el poder como mecanismo para tratar de garantizar su impunidad, como ha sucedido hasta ahora. Tercero, la evolución de las negociaciones de paz en las regiones en guerra, que puede significar un elemento sustancial, no sólo para la prolongación o el fin de la violencia en las tres áreas, sino también en relación a su efecto en las dinámicas nacionales. Cuarto, el efecto contagio que puede ocasionar en Sudán las diversas crisis regionales que se mantienen activas, sobre todo en Sudán del Sur, República Centroafricana o Etiopía, así como también la evolución de las relaciones bilaterales del Ejecutivo sudanés con los países vecinos, en las cuales, durante el 2018, se presentaron importantes tensiones con los Gobiernos de Egipto y Etiopía. Finalmente, la evolución de las movilizaciones populares en el país y la capacidad de articulación de los diferentes sectores y movimientos políticos y sociales de la oposición nacional.

7. Véase el resumen sobre Sudán en el capítulo 2 (Tensiones)

5.3. El incremento de la violencia en Papúa Occidental, 50 años después del referéndum de autodeterminación fallido

La tensión se incrementó sensiblemente a finales de 2018 en la región indonesia de Papúa tras el asesinato de entre 17 y 31 personas (la mayoría trabajadores que construían una carretera) y el posterior inicio de una campaña de contrainsurgencia en la que las Fuerzas Armadas habrían sido acusadas de utilizar bombardeos aéreos y armas químicas. Aunque ambas partes han negado o minimizado su responsabilidad en los mencionados episodios de violencia –el Ejército negando la utilización de armas químicas y el OPM asegurando que las personas asesinadas eran militares y no civiles–, lo cierto es que a principios de 2019 se incrementó la preocupación de la comunidad internacional acerca de la situación de derechos humanos en Papúa Occidental, como así lo atestigua la petición de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de visitar Papúa Occidental para conocer la situación de primera mano.

Además de la gravedad de los episodios de violencia descritos, existen varias causas por las que cabe prestar atención a la evolución de los acontecimientos en Papúa Occidental. En primer lugar, porque en 2019 se conmemora el 50º aniversario del referéndum (denominado *Act of Free Choice*) que sancionó la anexión de la región de Papúa a Indonesia. Algunas ONG y grupos eclesiásticos sostienen que desde entonces han muerto entre 300.000 y 500.000 personas. Tanto el independentismo papú como numerosas organizaciones de derechos humanos han declarado que dicho referéndum, a pesar de estar supervisado por Naciones Unidas, careció de toda legitimidad porque solamente participaron en él poco más de un millar de personas elegidas por la dictadura del general Suharto, de modo que consideran que Papúa Occidental no ha ejercido su derecho de autodeterminación y que es una región pendiente de descolonización. Es muy probable que la mencionada efeméride brinde al movimiento nacionalista papú –y a aquellos países u organismos que defienden la autodeterminación de Papúa Occidental– una muy buena oportunidad para visibilizar sus demandas a escala internacional. En este sentido, cabe destacar que el Gobierno de Vanuatu (sin duda el país más proactivo en la defensa de la autodeterminación del pueblo papú) ha iniciado a cabo una ambiciosa campaña diplomática para granjearse el máximo apoyo posible a la presentación de una propuesta de resolución a la Asamblea General de Naciones Unidas de 2019 que abogue por la celebración de un nuevo referéndum en Papúa Occidental y por la inclusión de este territorio en el listado de Naciones Unidas de territorios pendientes de descolonización. Por otra parte, también cabe destacar la entrega a Bachelet de una petición firmada por 1,8 millones de personas –un

El 50º aniversario del referéndum que sancionó la anexión de Papúa a Indonesia puede propiciar una buena oportunidad al independentismo papú para visibilizar sus demandas

porcentaje muy significativo de la población papú– en la que se solicitaba la celebración de una votación sobre la independencia de Papúa supervisada internacionalmente.

En segundo lugar, la celebración de elecciones presidenciales en el mes de abril también genera incertidumbre por un doble motivo. Primeramente, porque en ocasiones previas los niveles de violencia electoral, especialmente en Papúa Occidental, han sido elevados. En segundo lugar, por la posibilidad de que uno de los dos candidatos con mayores opciones ganar, el general retirado Prabowo Subianto, se imponga en los comicios. Organizaciones de derechos humanos han solicitado en repetidas ocasiones que se investiguen las numerosas acusaciones por violaciones de los derechos contra Prabowo, que fue yerno del ex dictador Suharto. Entre dichas acusaciones, cabe destacar su presunta participación en una masacre de casi 300 civiles en Timor Oriental en los años 80, en el secuestro y tortura de 23 activistas pro-democracia en plena crisis y transición del régimen de Suharto o en la orquestación de unas protestas en 1998 que provocaron la muerte de más 1.000 personas y la violación de 168 mujeres. Posteriormente Prabowo, que fue responsable de las fuerzas especiales del Ejército, dirigió una operación de rescate de 11 científicos secuestrados por el OPM en Papúa que finalizó con la muerte de varias personas y con acusaciones de violaciones de derechos humanos. A pesar de que ninguna de estas acusaciones han sido probadas y de que todas ellas han sido negadas tajantemente por Prabowo, cabe recordar que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó formalmente que se le procesara y que el Gobierno de EEUU le denegó un visado de entrada al país en el año 2000. El otro principal contendiente en los comicios presidenciales, el actual presidente Joko Widodo, inició su mandato en 2014 prometiendo un nuevo enfoque hacia Papúa más conciliador y respetuoso con los derechos humanos, pero a finales de 2018 una de la principales organizaciones de derechos humanos del país, Kontras, señaló que la situación de derechos humanos no había mejorado sustancialmente desde el año 2014, criticó las restricciones de acceso a la región a medios de comunicación extranjeros y señaló que uno de los principales problemas de la región son los conflictos de tierra entre poblaciones indígenas y empresas. Algunas voces han advertido que precisamente una de las estrategias de Widodo para mejorar el desarrollo de la región era la autorización de grandes proyectos (como la construcción de una carretera de unos 4.600 kilómetros) o la promoción y protección de grandes concesiones a empresas foráneas, como la compañía extractiva Freeport McMoran o British Petroleum.

En el caso de que venciera Prabowo, algunos analistas han vaticinado un incremento de la tensión en la relación entre los Gobiernos de China e Indonesia, que en los últimos tiempos ya ha sufrido algunos desencuentros a raíz de sus reivindicaciones territoriales en el Mar de la China Meridional, de las protestas en Indonesia por el trato que dispensa Beijing a la minoría musulmana uigur o por el impacto que pueda tener en la comunidad de ascendencia china en Indonesia la creciente presencia e influencia (especialmente en la candidatura de Prabowo) del conservadurismo islámico. Según algunos medios, líderes del OPM han puesto de relieve un posible apoyo

de Beijing a su causa. Desde una perspectiva geopolítica, una aproximación de China a la estrategia que ya están siguiendo algunas islas del Pacífico de exigir un referéndum de autodeterminación y de involucrar a Naciones Unidas en la resolución del conflicto podría incrementar notablemente la influencia de China en una región que no solamente es abundante en recursos naturales, sino que también es geoestratégicamente importante para China por cuanto ofrecería un paso y una vía de navegación entre los océanos Índico y Pacífico, y se erigiría en una base de apoyo a la política de Beijing en el Mar de la China Meridional, uno de los ejes más importantes de la actual política exterior china.

5.4. Turquía-PKK: los riesgos de un conflicto sin escenarios de diálogo

Desde el fin del fallido proceso de paz entre Turquía y el PKK en 2015, parecen alejarse más y más las perspectivas de solución de este conflicto armado activo desde 1984, en torno al estatus y derechos políticos, culturales y lingüísticos de la minoría kurda de Turquía, y que acumula más de 40.000 víctimas mortales, mayoritariamente kurdas, y elevados niveles de trauma. El deterioro del contexto interno en estos últimos años, el fortalecimiento militar de los actores enfrentados y las dinámicas regionales son algunos de los elementos que añaden riesgo de desestabilización.

La situación general en Turquía ha experimentado en los últimos años una grave deriva. El deterioro de la situación de derechos humanos y la erosión del Estado de derecho, al amparo del estado de emergencia, según ha denunciado la ONU,⁸ con violaciones de derechos humanos contra cientos de miles de personas, incluyendo privación arbitraria del derecho a trabajar y a la libertad de movimiento, tortura, maltrato, detención arbitraria. En el caso de las áreas kurdas de Turquía, este deterioro ha incluido asesinatos, tortura, violencia contra las mujeres, uso excesivo de la fuerza, destrucción de viviendas y de patrimonio cultural, impedimentos al acceso a atención médica de emergencia, agua potable y medios de sustento, restricciones graves de la libertad de expresión, entre otros.⁹ El Estado de emergencia –decretado tras el fallido golpe de Estado de 2016– fue levantado en 2018, pero reemplazado por una reforma de la ley antiterrorista que impone nuevas restricciones. Aumenta el periodo de detención policial sin cargos, extiende los motivos que amparan la restricción de manifestaciones así como los poderes de los gobernadores provinciales, entre otros aspectos, con repercusiones para el conflicto en torno a la cuestión kurda.

En conjunto, el espacio político y social para la población kurda movilizada activamente en torno a su identidad y a la demanda de derechos culturales, lingüísticos, descentralización y garantías de participación política, se ha reducido significativamente. A principios de 2019 más de 5.000 miembros del partido pro-kurdo HDP permanecían en prisión, incluyendo sus líderes, y más de 2.000 ONG y 200 medios de comunicación, muchos de ellos kurdos, habían sido prohibidos. En contraste, el Estado y la Presidencia del Estado han reforzado su poder, de la mano de medidas como la mencionada reforma antiterrorista y del cambio a régimen presidencialista tras el referéndum constitucional de 2017, reduciendo los poderes de control parlamentario. El presidente Recep Tayyip Erdogan, reelegido presidente en 2018, consolida su poder, sin indicios por ahora de que esa hegemonía y liderazgo político vaya a ser utilizada para reimpulsar un nuevo proceso de diálogo de paz, tras los fallidos procesos anteriores bajo su liderazgo. En esa posición pesan factores diversos, incluyendo la influencia que ejerce el socio político del AKP, el ultranacionalista turco MHP, defensor de una política de mano dura contra todos los actores del movimiento kurdo, incluyendo políticos y sociales, y de rechazo

total al diálogo. Las elecciones locales en Turquía de marzo de 2019 son la última cita electoral del reciente ciclo de comicios y un nuevo escenario de la pugna por el control político.

Otro elemento de riesgo lo constituye el fortalecimiento militar de Turquía y el PKK. Turquía pasó de 15.412 millones de dólares de gasto militar en 2015 (1,8% del PIB), año de finalización del proceso de paz, a 19.580 en 2017 (2,2% del PIB). En estos últimos años, el Gobierno ha justificado el incremento en defensa en la necesidad de hacer frente a las amenazas de seguridad e incrementar la capacidad disuasoria. Además, el incremento del gasto militar ha ido acompañado de un impulso a la industria de defensa turca, con el objetivo de reducir la dependencia externa. Por su parte, el PKK ha incrementado su potencial acceso a armamento más sofisticado, a causa de las dinámicas regionales y la guerra en Siria. En ambos casos, el rearme y el mayor acceso a armamento incrementa los riesgos de inestabilidad y de graves impactos sobre la población civil. Así, el contexto regional constituye otro elemento de riesgo. El conflicto en Siria, guerra con múltiples dimensiones y actores, es también el escenario en que se proyecta actualmente la guerra entre Turquía y el PKK. La expansión en Siria de las fuerzas kurdas YPG –actor predominante de la coalición SDF, y apoyadas por EEUU en su campaña contra ISIS–, con amplio control territorial e implementación de un autogobierno de facto en zonas fronterizas con Turquía, es vista por Ankara como una amenaza a su seguridad nacional. El PKK y las YPG tienen vínculos históricos desde la creación de estas últimas en 2004, son considerados por Turquía como un único actor y analistas han señalado el peso del PKK en el liderazgo de las YPG.¹⁰ EEUU ha entregado armamento y equipamiento militar a las YPG en el marco de la guerra en Siria, convirtiéndose en un aliado clave. Turquía crítica fuertemente el apoyo de EEUU a las YPG, advirtiendo sobre los riesgos de que el armamento estadounidense acabe siendo usado por el PKK contra Turquía. En este contexto, las operaciones militares de Turquía en suelo sirio, sus amenazas de ampliarlas a nuevas zonas tanto en Siria como en Iraq, y la intensificación de su cerco militar en 2018 a la comandancia del PKK,¹¹ añaden incertidumbre sobre los riesgos de una mayor deriva militar en la región y en Turquía.

El cúmulo de factores, internos y regionales, que pesan actualmente sobre Turquía, incluyendo los relativos al deterioro del contexto interno, a un rearme más sofisticado de sus actores en conflicto, y a la influencia de las dinámicas de la guerra en Siria, apuntan a riesgos futuros de más violencia en torno al conflicto. Al mismo tiempo, la imposibilidad de una victoria militar, los riesgos de impactos más indiscriminados y el desgaste que ello tendría entre la población, el contrapeso que pueden ejercer las potencias involucradas en Siria, las oportunidades del dividendo de paz para una Turquía en receso económico y los esfuerzos de los actores locales e internacionales movilizados por una salida negociada en Turquía, pueden ser factores que reduzcan los riesgos.

8. OHCHR, *Report on the impact of the state of emergency on human rights in Turkey, including an update on the South-East. January – December 2017*, OHCHR, marzo de 2018.

9. Ibid.

10. International Crisis Group, *The PKK's Fateful Choice in Northern Syria*, Middle East Report N° 176, 4 de mayo de 2017.

11. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

5.5. Hambre y conflictos: retos de un binomio con graves impactos en la seguridad humana

Recientemente se ha identificado una tendencia preocupante por lo que respecta a la situación del hambre en el mundo. Las cifras de población afectada por inseguridad alimentaria se habían ido reduciendo pese al aumento de población, pero en los últimos años esta tendencia se ha revertido. Así, en pleno siglo XXI se observa un incremento en el total de población global que padece hambre. En 2016, la cifra superaba los 815 millones de personas, 37 millones más que el año anterior. La mayor parte de ellas vivía en zonas afectadas por conflictos y violencia. Según datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, de las más de 800 millones de personas que padecían hambre crónica en el mundo, el 60% habitaba en países en conflicto. Diversas fuentes apuntan a que el aumento del hambre en los últimos años tiene relación con el impacto de conflictos armados y alertan sobre los retos que ofrece el binomio “hambre-conflicto”, ya que se trata de dos fenómenos que se retroalimentan: la inseguridad alimentaria puede agravar situaciones de conflicto y violencia y, a su vez, los conflictos armados propician las condiciones para un aumento en la inseguridad alimentaria. Adicionalmente, en diversos conflictos armados actuales se ha constatado la sistemática utilización del hambre como arma de guerra.

Los datos recabados por diversas agencias y programas de Naciones Unidas dibujan un escenario de alerta. En la última década, más del 80% de los recursos solicitados por la ONU en el marco de llamamientos humanitarios estaban destinados a subsanar la situación en zonas de conflictos. De acuerdo al Informe Global sobre Crisis Alimentarias (2017) de la FAO, diez de las 13 crisis humanitarias más graves estaban relacionadas con conflictos –Afganistán, Burundi, RCA, RDC, Iraq, Nigeria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen. El PMA destaca que la inseguridad alimentaria aguda ha aumentado en un 11% en los últimos años y que este hecho puede atribuirse en buena parte a las dinámicas de conflicto, violencia e inseguridad en contextos como Myanmar, Nigeria, RDC, Sudán del Sur o Yemen. Esta organización también subraya que el 75% de los niños y niñas con problemas de retraso en el crecimiento –122 de un total de 155 millones– vive en países afectados por conflictos. Datos de la OMS, en tanto, indican que las personas que habitan en zonas con crisis prolongadas tienen 2,5 veces más posibilidades de padecer desnutrición severa.

Uno de los casos actuales más emblemáticos es el de Yemen. Durante 2018, las imágenes de menores yemeníes afectados por desnutrición grave que circularon en medios internacionales pusieron de manifiesto el impacto del conflicto armado en el país, que se ha convertido en la peor crisis humanitaria a nivel mundial. En el país, que ya era el más pobre del mundo árabe antes de la intensificación de la violencia en 2015, la población se ha empobrecido y se ha visto afectada por impagos de sueldos, mientras que los precios de los alimentos se han disparado. Yemen es un importador neto de bienes y alimentos –más del 80%– y, en consecuencia, la población se ha visto directamente afectada por el bloqueo a los puertos impuesto por la coalición militar liderada por Arabia Saudita, además de por otras prácticas como la destrucción de mercados, en el marco de los

numerosos ataques contra objetivos civiles. Al finalizar 2018, según los datos de OCHA, un total de 20 millones de yemeníes padecían inseguridad alimentaria, de los cuales 10 millones de carácter severo, es decir, riesgo de hambruna. 3,2 millones de personas requerían tratamiento para desnutrición severa, incluyendo dos millones de niños y niñas menores de cinco años y un millón de mujeres embarazadas y en período de lactancia.

Siria es otro de los casos a destacar, teniendo en cuenta el grave impacto del conflicto en términos humanitarios y también la sistemática utilización de los asedios a civiles y del hambre como arma de guerra, entre otras múltiples prácticas que vulneran el derecho internacional humanitario. El conflicto ha motivado el desplazamiento forzado de millones de personas y ha provocado que más del 80% de la población viva bajo la línea de pobreza. A finales de 2018 se estimaba que unos 6,5 millones de personas, o el 33% de la población, no eran capaces de obtener los alimentos básicos para satisfacer sus necesidades. El conflicto ha tenido graves impactos en el sector agrícola y ha convertido a Siria en importador neto de alimentos, cuando antes era uno de los mayores productores agrícolas de Oriente Medio. A esto se suman las consecuencias directas de los asedios utilizados para forzar la rendición de adversarios, una práctica utilizada por diversos actores armados, pero sobre todo por el régimen de Bashar al-Assad, que ha sido denunciada por ONG y por la ONU durante el transcurso del conflicto y constituye un crimen de guerra. Otro caso especialmente grave era el de Sudán del Sur, donde la violencia y la falta de alimentos tenían a 6,1 millones de personas –cerca del 60% de la población– en una situación de hambre extrema. Tanto en Siria, como en Yemen y en Sudán del Sur se ha alertado sobre la obstrucción a la entrega de ayuda humanitaria.

En este contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó de forma unánime en mayo de 2018 la resolución 2417 que reconoce por primera vez de manera explícita que los conflictos pueden causar inseguridad alimentaria y que ésta, a su vez, puede agravar situaciones de conflicto. La resolución –promovida por Holanda, Côte d'Ivoire, Kuwait y Suecia– también condena el uso del hambre como arma de guerra y amenaza con sanciones a quienes bloqueen la entrega de ayuda humanitaria destinada a paliar situaciones de escasez de alimentos y hambrunas. Diversos actores valoraron positivamente la iniciativa por poner atención a esta problemática y subrayar las interconexiones entre conflicto, desplazamiento forzado e inseguridad alimentaria. No obstante, otras voces advirtieron que la resolución corría el riesgo de convertirse en “papel mojado” si no se establecían mecanismos efectivos para su seguimiento e implementación. Asimismo, se insistió en que la resolución ofrece herramientas para abordar una situación que se concibe como transitoria –el acceso de ayuda humanitaria a personas afectadas por conflictos–, pero que paralelamente es indispensable intensificar los esfuerzos para revertir las dinámicas de violencia. En esta línea, el PMA advertía en 2018 que los conflictos armados eran el principal obstáculo para alcanzar el objetivo de “hambre cero” de cara a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030.

Glosario

- AA:** Arakan Army (Ejército de Arakan)
- ABSDF:** All Burma Students' Democratic Front (Frente Democrático Estudiantil de Toda Birmania)
- ABM:** Ansar Beit al-Maqdis
- ACNUDH:** Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ACNUR:** Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
- ADF:** Allied Democratic Forces
- ADF-NALU:** Allied Defence Forces - National Army for the Liberation of Uganda (Fuerzas de Defensa Aliadas - Ejército Nacional para la Liberación de Uganda)
- ADSC:** All Darfur Stakeholders Conference (Conferencia de Actores de Darfur)
- AFISMA:** Misión Internacional de Apoyo a Malí bajo Liderazgo Africano
- AIEA:** Agencia Internacional de la Energía Atómica
- AKP:** Adalet ve Kalkinma Partisi (Partido de la Justicia y el Desarrollo)
- AKR:** Nueva Alianza de Kosovo
- ALBA:** Alianza Bolivariana para las Américas
- ALP:** Arakan Liberation Party (Partido de Liberación Arakan)
- AMISOM:** Misión de la Unión Africana en Somalia
- ANSIPRJ:** Alliance Nationale pour la Souveraineté et la Restauration de la Justice (Alianza Nacional para la Protección de la Identidad Peul y la Restauración de la Justicia)
- AP:** Autoridad Palestina
- APCLS:** Alliance de Patriots pour un Congo Libre et Souverain
- APHC:** All Parties Hurriyat Conference
- APRD:** Armée Populaire pour la Réstauration de la République et de la Démocratie (Ejército Popular para el Restablecimiento de la República y la Democracia)
- AQMI:** Al-Qaeda en el Magreb Islámico
- AQPA:** Al-Qaeda en la Península Arábiga
- ARS:** Alianza para la Reliberación de Somalia
- ASEAN:** Association of Southeast Asian Nations (Asociación de Naciones del Sureste Asiático)
- ASWJ:** Ahlu Sunna Wal Jama'a
- ATLF:** All Terai Liberation Front (Frente de Liberación de Todo Terai)
- ATMM:** Akhil Tarai Mukti Morcha
- ATTF:** All Tripura Tiger Force (Fuerza de los Tigres de Todo Tripura)
- AUBP:** Programa de fronteras de la Unión Africana
- BDP:** Partido de la Paz y la Democracia
- BH:** Boko Haram
- BIFF:** Bangsamoro Islamic Freedom Fighters
- BIFM:** Bangsamoro Islamic Freedom Movement
- BINUCA:** Oficina Integrada de Construcción de Paz de Naciones Unidas en R. Centrafricana
- BLA:** Baluch Liberation Army (Ejército de Liberación Baluchi)
- BLF:** Baluch Liberation Front (Frente de Liberación Baluchi)
- BNUB:** Oficina de las Naciones Unidas en Burundi
- BLT:** Baloch Liberation Tigers
- BM:** Banco Mundial
- BRA:** Balochistan Republican Army (Ejército Republicano de Baluchistán)
- BRP:** Baloch Republican Party (Partido Republicano Baluchi)
- CAP:** Consolidated Appeal Process (Proceso de Llamamientos Consolidados)
- CARICOM:** Comunidad del Caribe
- CDH:** Consejo de Derechos Humanos
- CEEAC:** Comunidad Económica de los Estados de África Central
- CEMAC:** Comunidad Económica y Monetaria de África Central
- CENCO:** Conferencia Episcopal Congoleña
- CIA:** Central Intelligence Agency
- CHD:** Centre for Humanitarian Dialogue
- CICR:** Comité Internacional de la Cruz Roja
- CMA:** Coordinadora de Movimientos de Azawad
- CMPPFR:** Coordinadora de Movimientos Patrióticos de Resistencia
- CNDD-FDD:** Congrès National pour la Défense de la Démocratie - Forces pour la Défense de la Démocratie (Congreso Nacional para la Defensa de la Democracia - Fuerzas para la Defensa de la Democracia)
- CNDP:** Congrès National pour la Défense du Peuple (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo)
- CNF:** Chin National Front (Frente Nacional Chin)
- CNT:** Consejo Nacional de Transición de Libia
- CPA:** Comprehensive Peace Agreement (Acuerdo de Paz Global)
- CPI:** Corte Penal Internacional
- CPI-M:** Communist Party of India-Maoist (Partido Comunista de la India-Maoísta)
- CPJP:** Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix (Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz)
- CPN-UML:** Communist Party of Nepal (Unified Marxist Leninist) (Partido Comunista de Nepal [Marxista Leninista])
- DDR:** Desarme, Desmovilización y Reintegración
- DHD:** Dima Halim Daogah
- DHD (J):** Dima Halim Daogah, Black Widow faction (Dima Halim Daogah, facción Viuda Negra)
- DHD (Nunisa):** Dima Halim Daogah, Nunisa faction (Dima Halim Daogah, facción Nunisa)
- DIH:** Derecho Internacional Humanitario
- DKBA:** Democratic Karen Buddhist Army (Ejército Democrático Budista Karen)
- DMLEK:** Democratic Movement for the Liberation of the Eritrean Kunama (Movimiento Democrático para la Liberación del Pueblo Kunama de Eritrea)
- DPA:** Darfur Peace Agreement (Acuerdo de Paz de Darfur)
- EA:** Eusko Alkartasuna (Solidaridad Vasca)
- EAC:** East African Community (Comunidad de Estados de África del Este)
- EAU:** Emiratos Árabes Unidos
- ECOMIB:** Misión de ECOWAS en Guinea Bissau
- ECOWAS:** Economic Community Of West African States (Comunidad Económica de Estados de África Occidental)
- EDA:** Eritrean Democratic Alliance (Alianza Democrática Eritrea)
- EEBC:** Comisión Fronteriza entre Eritrea y Etiopía
- EEUU:** Estados Unidos de América
- EFDM:** Eritrean Federal Democratic Movement (Movimiento Democrático Federal Eritreo)

EIC: Eritrean Islamic Congress (Congreso Islámico Eritreo)

EIPJD: Eritrean Islamic Party for Justice and Development (Partido Islámico Eritreo para la Justicia y el Desarrollo)

ELF: Eritrean Liberation Front (Frente de Liberación Eritreo)

ELK: Ejército de Liberación de Kosovo

ELN: Ejército de Liberación Nacional

ENSF: Eritrean National Salvation Front (Frente de Salvación Nacional Eritreo)

EPC: Eritrean People's Congress (Congreso del Pueblo Eritreo)

EPL: Ejército Popular de Liberación

EPDF: Eritrean People's Democratic Front (Frente Democrático del Pueblo Eritreo)

EPP: Ejército del Pueblo Paraguayo

EPPF: Ethiopian People's Patriotic Front (Frente Patriótico Popular Etíope)

EPR: Ejército Popular Revolucionario

EPRDF: Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Eritreo)

ESL: Ejército Sirio Libre

ETA: Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad)

ETIM: East Turkestan Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turquestán Oriental)

ETLO: East Turkestan Liberation Organization (Organización para la Liberación del Turquestán Oriental)

EUAM Ukraine: Misión de Apoyo de la UE a la Reforma del Sector de Seguridad Civil en Ucrania

EUAVSEC South Sudan: Misión de la Unión Europea en materia de seguridad de la aviación en Sudán del Sur

EUBAM: Misión de Asistencia Fronteriza de la UE a Moldova y Ucrania

EUBAM Libia: Misión de la Unión Europea de Asistencia y Gestión Integrada de Fronteras en Libia

EUBAM Rafah: Misión de Asistencia Fronteriza en el Paso Fronterizo de Rafah

EUCAP NESTOR: Misión de la Unión Europea de Desarrollo de las Capacidades Marítimas Regionales en el Cuerno de África

EUCAP SAHEL Mali: Misión de Naciones Unidas en el Sahel – Malí

EUCAP SAHEL Niger: Misión de Naciones Unidas en el Sahel - Níger

EUFOR ALTHEA: Operación Militar de la UE en Bosnia y Herzegovina

EUFOR RCA: Misión de mantenimiento de la paz de la UE en RCA

EUJUST LEX: Misión Integrada de la UE por el Estado de Derecho en Iraq

EULEX Kosovo: Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo

EUMM: Misión de Observación de la UE en Georgia

EUNAVOR Somalia: Fuerza Naval de la Unión Europea – Somalia, Operación Atalanta

EUPOL Afghanistan: Misión de Policía de la UE en Afganistán

EUPOL COPPS: Misión de Policía de la UE para los Territorios Palestinos

EUPOL RDC: Misión de Policía de la UE en RD Congo

EUSEC RDC: Misión de Asistencia de la UE a la Reforma del Sector de Seguridad en RD Congo

EUTM Mali: Misión de la UE para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Malí.

EUTM Somalia: Misión Militar de la UE para contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad de Somalia

EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FAR-LP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación del Pueblo

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo

FATA: Áreas Tribales bajo Administración Federal

FDLP: Frente Democrático de Liberación de Palestina

FDLR: Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda)

FDPC: Front Démocratique du Peuple Centrafricain (Frente Democrático del Pueblo Centrafricano)

FEWS NET: Red de Sistemas de Alerta Temprana Contra la Hambruna de USAID

FFR: Front des Forces de Redressement (Frente de Fuerzas de Reorganización)

FIS: Frente Islámico de Salvación

FLEC-FAC: Frente de Liberação do Enclave de Cabinda (Frente de Liberación del Enclave de Cabinda)

FNL: Forces Nationales de Libération (Fuerzas Nacionales de Liberación)

FOMUC: Force Multinationale en Centrafrique (Fuerza Multinacional de la CEMAC en RCA)

FPLP: Frente Popular de Liberación de Palestina

FPI: Front Populaire Ivoirien (Frente Popular Marfileño)

FPR : Front Populaire pour le Redressement (Frente Popular por la Liberación)

FPRC: Front Patriotique pour la Renaissance de la Centrafrique

Frente POLISARIO: Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro

FRF: Forces Republicaines et Federalistes (Fuerzas Republicanas y Federalistas)

FRODEBU: Front pour la Démocratie au Burundi (Frente para la Democracia en Burundi)

FRUD: Front pour la Restauration de l'Unité et la Démocratie (Frente para la Restauración de la Unidad y la Democracia)

FSN: Frente de Salvación Nacional

FUC: Front Uni pour le Changement Démocratique (Frente Unido para el Cambio Democrático)

FUDD: Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura

FURCA: Force de l'Union en République Centrafricaine (Fuerza de la Unión en la R. Centrafricana)

GAI: Global Acceleration Instrument (Instrumento de Aceleración Global)

GAM: Gerakin Aceh Merdeka (Movimiento de Aceh Libre)

GATIA: Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados

GFT: Gobierno Federal de Transición

GIA: Grupo Islámico Armado

GSPC: Grupo Salafista para la Predicación y el Combate

HAK: Congreso Nacional Armenio

HaY: Harakah al-Yaqin (Movimiento de la Fe)

HCUA: Alto Consejo para la Unidad de Azawad

HDZ: Unión Democrática Croata

HDZ 1990: Unión Democrática Croata 1990

HM: Hermanos Musulmanes
HPG: Humanitarian Policy Group
HRW: Human Rights Watch
HUM: India Assam
IBC: Iraq Body Count
ICG: International Crisis Group
ICR/LA: Iniciativa de Cooperación Regional contra el LRA
IDG: Índice de Desigualdad de Género
IDMC: Internal Displacement Monitoring Centre
IDP: Internally Displaced Person (Persona Desplazada Interna)
IEG: Índice de Equidad de Género
IFLO: Islamic Front for the Liberation of Oromia (Frente Islámico para la Liberación de Oromiya)
IGAD: Intergovernmental Authority on Development (Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo)
IISS: International Institute for Strategic Studies
IMU: Islamic Movement of Uzbekistan (Movimiento Islámico de Uzbekistán)
INLA: Irish National Liberation Army (Ejército Irlandés de Liberación Nacional)
IRA: Irish Republican Army (Ejército Republicano Irlandés)
ISAF: International Security Assistance Force (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad)
ISF: Misión de Estabilización Internacional en Timor-Leste
ISIS: Estado Islámico
IWF: Iduwini Volunteers Force
JEM: Justice and Equality Movement (Movimiento para la Justicia y la Igualdad)
JKLF: Jammu and Kashmir Liberation Front (Frente de Liberación de Jammu y Cachemira)
JMB: Jamaat-ul-Mujahideen (Asamblea de Muyahidines)
JTMM: Janatantrik Terai Mukti Morcha (Frente de Liberación del Pueblo de Terai)
KANU: Kenya African National Union (Unión Nacional Africana de Kenya)
KCK: Koma Civakên Kurdistan (Unión de las Comunidades en Kurdistán)
KCP: Kangleipak Communist Party (Partido Comunista Kangleipak)
KDP: Partido Democrático de Kurdistán
KFOR: Misión de la OTAN en Kosovo
KIA: Kachin Independence Army (Ejército para la Independencia de Kachin)
KIO: Kachin Independence Organization (Organización para la Independencia Kachin)
KLNLF: Karbi Longri National Liberation Front (Frente de Liberación Nacional Karbi Longri)
KNA: Kuki Liberation Army (Ejército de Liberación Kuki)
KNF: Kuki National Front (Frente Nacional Kuki)
KNPP: Karenni National Progressive Party (Partido Progresista Nacional Karen)
KNU: Kayin National Union (Unión Nacional Kayin)
KNU/KNLA: Karen National Union/Karen National Liberation Army (Unión Nacional Karen/Ejército de Liberación Nacional Karen)
KPF: Karen Peace Force (Fuerza de Paz Karen)
KPLT: Karbi People's Liberation Tigers (Tigres de Liberación del Pueblo Karbi)
KRG: Gobierno Regional del Kurdistán
KYKL: Kanglei Yawol Kanna Lup (Organización para la Salvación del Movimiento Revolucionario en Manipur)
LeJ: Lashkar-e-Jhangvi (Ejército de Jhangvi)
LeT: Lashkar-e-Toiba
LJM: Liberation and Justice Movement (Movimiento para la Liberación y la Justicia)
LRA: Lord's Resistance Army (Ejército de Resistencia del Señor)
LTTE: Liberation Tigers of Tamil Eelam (Tigres de Liberación de la Tierra Tamil)
M23: Movimiento 23 de Marzo
MAA: Movimiento Árabe de Azawad
MAPP-OEA: Misión de la OEA de apoyo al proceso de paz en Colombia
MASSOB: Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra)
MDC: Movement for Democratic Change (Movimiento para el Cambio Democrático)
MEND: Movement for the Emancipation of the Niger Delta (Movimiento para la Emancipación para el Delta del Níger)
MFDC: Mouvement de las Forces Démocratiques de Casamance (Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance)
MFO: Fuerza Multinacional de Observadores para la supervisión del tratado de paz entre Egipto e Israel
MIB OEA: Misión de la OEA de Buenos Oficios en Ecuador y Colombia
MICOPAX: Mission de Consolidation de la Paix en République Centrafricaine (Misión de Consolidación de la Paz en R. Centroafricana de la CEEAC)
MILF: Moro Islamic Liberation Front (Frente Moro de Liberación Islámico)
MINURCA: Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana
MINURCAT: Misión de Naciones Unidas para la República Centroafricana y Chad
MINURSO: Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental
MINUSCA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en RCA
MINUSMA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí
MINUSTAH: Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
MISCA: Misión de Apoyo a Rep. Centroafricana bajo Liderazgo Africano
MISMA: Misión Internacional de Asistencia a Malí
MIT: Organización Nacional de Inteligencia de Turquía
MJLC: Mouvement des Jeunes Libérateurs Centrafricains (Movimiento de los Jóvenes Libertadores Centroafricanos)
MLC: Mouvement pour la Libération du Congo (Movimiento para la Liberación del Congo)
MLF: Macina Liberation Front (Frente de Liberación de Macina)
MMT: Madhesi Mukti Tigers (Tigres Mukti Madhesi)
MNJTF: Multinational Joint Task Force (Fuerza Regional de Tarea Conjunta)
MNLA: Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad
MNLF: Moro National Liberation Front (Frente Moro de Liberación Nacional)

MONUC: Misión de las Naciones Unidas en la RD Congo

MONUSCO: Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de RD Congo

MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People (Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni)

MOVADEF: Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales

MPC: Mouvement Patriotique por la Centrafrique

MPRF: Madhesi People's Right Forum (Foro de los Derechos del Pueblo Madhesi)

MRC: Mombasa Republican Council (Consejo Republicano de Mombasa)

MQM: Muttahida Qaumi Movement (Movimiento Nacional Unido)

MSF: Médicos Sin Fronteras

MUYAO: Movimiento Unido por la Yihad en África Occidental

MVK: Madhesi Virus Killers (Asesinos de Virus Madhesi)

NC: Nepali Congress Party (Partido del Congreso Nepali)

NCP: National Congress Party (Partido del Congreso Nacional)

NDA: Niger Delta Avengers (Vengadores del Delta del Níger)

NDF: National Democratic Front (Frente Democrático Nacional)

NDFB: National Democratic Front of Bodoland (Frente Democrático Nacional de Bodoland)

NDGJM: Niger Delta Greenland Justice Mandate

NDPVF: Niger Delta People's Volunteer Force (Fuerza Voluntaria del Pueblo del Delta del Níger)

NDV: Niger Delta Vigilante (Patrulla del Delta del Níger)

NLD: National League for Democracy (Liga Nacional por la Democracia)

NLFT: National Liberation Front of Tripura (Frente de Liberación Nacional de Tripura)

NMSP: New Mon State Party (Partido del Nuevo Estado Mon)

NNC: Naga National Council (Consejo Nacional Naga)

NNSC: Neutral Nations Supervisory Commission (Comisión de Supervisión de Naciones Neutrales)

NPA: New People's Army (Nuevo Ejército Popular)

NSCN-IM: National Socialist Council of Nagaland-Isaac Muivah (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Isaac Muivah)

NSCN-K: National Socialist Council of Nagaland-Khaplang (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia- Khaplang)

NSCN (K-K): National Socialist Council of Nagaland (Kole-Kitovi) (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia (Kole-Kitovi))

NSCN-R: National Socialist Council of Nagaland-Reformation (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Reforma)

NSLA: National Santhal Liberation Army) Ejército Nacional Santhal

OAS/AZ: Oficina de la OEA en Belice - Guatemala

OCHA: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas

OCI: Organización para la Cooperación Islámica

OEA: Organización de los Estados Americanos

OFDM: Oromo Federalist Democratic Movement (Movimiento Democrático Federalista Oromo)

OIM: Organización Internacional para las Migraciones

OLF: Oromo Liberation Front (Frente de Liberación Oromo)

OMC: Organización Mundial del Comercio

OMIK: Misión de la OSCE en Kosovo

ONG: Organización No Gubernamental

ONLF: Ogaden National Liberation Front (Frente de Liberación Nacional de Ogadén)

ONU: Organización de las Naciones Unidas

ONUCI: Operación de Naciones Unidas en Côte d'Ivoire

OPC: Etiopía Oromiya

OPM: Organisasi Papua Merdeka (Organización de la Papua Libre)

OSCE: Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa

OTAN: Organización para el Tratado del Atlántico Norte

OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief

PALU: Parti Lumumbiste Unifié (Partido Lumumbista Unificado)

PARECO: Patriotes Résistants Congolais (Patriotas Resistentes Congoleses)

PCP: Partido Comunista del Perú

PCP: India Manipur

PKDI: Partido Democrático Kurdo

PJAK: Partido por la Vida Libre en Kurdistán

PLJ: Partido Libertad y Justicia

PKK: Partido de los Trabajadores del Kurdistán

PLA: People's Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional)

PLJ: Partido Libertad y Justicia

PMA: Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PPP: Pakistan People's Party (Partido del Pueblo de Pakistán)

PPRD: Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia)

PREPAK: People's Revolutionary Party of Kangleipak (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak)

PREPAK (Pro): People's Revolutionary Party of Kangleipak / Progressive (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak / Progresista)

PYD : Democratic Union Party (Partido Unión Democrática de kurdos en Siria)

RAMM: Región Autónoma del Mindanao Musulmán.

RAMSI: Regional Assistance Mission to Solomon Islands (Misión Regional de Asistencia a las Islas Salomón)

RASD: República Árabe Saharaui Democrática

RCA: República Centroafricana

RDC: República Democrática del Congo

RENAMO: Resistencia Nacional Mozambiqueña

REWL: Red Egbesu Water Lions

RFC: Rassemblement des Forces pour le Changement (Coalición de las Fuerzas para el Cambio)

RPF: Rwandan Patriotic Front (Frente Patriótico Rwandés)

RPF: Revolutionary People's Front (Frente Popular Revolucionario)

RSADO: Red Sea Afar Democratic Organization (Organización Democrática Afar del Mar Rojo)

RSF: Rapid Support Forces

RTF: Regional Task Force (Grupo de Trabajo Regional)

SADC: Southern Africa Development Community (Comunidad de Desarrollo del África Austral)

SAF: Sudanese Armed Forces (Fuerzas Armadas de Sudán)

SCUD: Socle pour le Changement, l'Unité Nationale et la Démocratie (Plataforma para el Cambio, la Unidad Nacional y la Democracia)

SFOR: Fuerza de Estabilización de la OTAN en Bosnia y Herzegovina

SIGI: Índice de Instituciones Sociales y Género

SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo)

SLA: Sudan Liberation Army (Ejército para la Liberación de Sudán)

SLA-Nur: Sudan Liberation Army-Nur (Ejército para la Liberación de Sudán, facción Nur)

SLDF: Sabaot Land Defence Forces (Fuerzas de Defensa de la Tierra Sabaot)

SNNPR: Southern Nations, Nationalities, and People's Region (Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos Meridionales)

SPLA: Sudan People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés, Fuerzas Armadas de Sudán del Sur)

SPLA-IO: SPLA in Opposition

SPLM: Sudan People's Liberation Movement (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés)

SPLM-N: Sudan People's Liberation Army-North (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte)

SSA-S: Shan State Army-South (Ejército del Estado Shan-Sur)

SSC: Sool, Saanag y Cayn

SSDM/A: South Sudan Democratic Movement/Army (Movimiento/ Ejército Democrático de Sudán del Sur)

SSLA: South Sudan Liberation Army (Ejército para la Liberación de Sudán del Sur)

SSNPLO: Shan State Nationalities People's Liberation Organization (Organización Popular para la Liberación del Estado de las Nacionalidades Shan)

TAK: Los Halcones de la Libertad del Kurdistán

TIPH: Presencia Internacional Temporal en Hebrón

TMLP: Terai Madhesh Loktantrik Party

TNLA: Ta-ang National Liberation Army (Ejército Nacional de Liberación Ta-ang)

TPIR: Tribunal Penal Internacional para Rwanda

TPIY: Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

TPLF: Tigrayan People's Liberation Front (Frente Popular de Liberación de Tigrayan)

TTP: Tehrik-e-Taliban Pakistan

UA: Unión Africana

UAD: Union pour l'Alternance Démocratique (Unión por la Alternancia Democrática)

UCPN-M: Unified Communist Party of Nepal (Maoist) (Partido Comunista Unificado de Nepal) [Maoísta]

UE: Unión Europea

UFDD: Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (Unión de las Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo)

UFDG: Union des Forces Démocratiques de *Guinée* (Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea)

UFDR: Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (Unión de Fuerzas Democráticas para la Coalición)

UFF: Ulster Freedom Fighters (Luchadores por la Libertad del Ulster)

UFR: Union des Forces de la Résistance (Unión de las Fuerzas de la Resistencia)

UFDR: Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (Unión de las Fuerzas Democráticas por la Unidad)

ULFA: United Liberation Front of Assam (Frente Unido de Liberación de Assam)

ULFA-I: United Liberation Front of Assam-Independent (Frente Unido de Liberación de Assam-Independiente)

UNAMA: Misión de asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán

UNAMI: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Iraq

UNAMID: United Nations and African Union Mission in Darfur (Operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur)

UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas

UNDOF: Fuerza de Observación de la Separación de Naciones Unidas

UNEF: Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas

UNFICYP: Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre

UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

UNIFIL: Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (o FPNUL)

UNIOGBIS: Oficina Integrada de Construcción de Paz de Naciones Unidas en Guinea Bissau

UNIPSIL: Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona

UNISFA: Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei

UNITAF: Unified Task Force (Fuerza de Tareas Unificadas)

UNLF: United National Liberation Front (Frente Unido de Liberación Nacional)

UNMIK: Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo

UNMIL: Misión de las Naciones Unidas en Liberia

UNMISS: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur

UNMIT: Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste

UNMOGIP: Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en la India y Pakistán

UNOCA: Oficina Regional de Naciones Unidas en África Central

UNOGBIS: Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau

UNOWA: Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental

UNPOS: Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia

UNRCCA: Centro Regional de Naciones Unidas para la Diplomacia Preventiva en Asia Central

UNRWA: Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo

UNSCO: Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio

UNSCOL: Oficina del Coordinador Especial de Naciones Unidas para Líbano

UNSMIL: Misión de Apoyo a Naciones Unidas en Libia

UNMIT: Misión integrada de Naciones Unidas en Timor Leste

UNSOM: Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Somalia

UNTSO: Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua

UPC: Union pour la Paix en Centrafrique
UPDS: United People's Democratic Solidarity
(Solidaridad Democrática del Pueblo Unido)
UPLA: United People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Unido)
UPPK: United People's Party of Kangleipak (Partido Unido Popular de Kangleipak)
UPRONA: Union pour le Progrès National (Unión para el Progreso Nacional)
URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
USAID: United States Agency for International Development
(Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU)
USN: Union pour la Salut National
UTI: Unión de Tribunales Islámicos
UVF: Ulster Volunteer Force (Fuerza de Voluntarios del Ulster)
UWSA: United Wa State Army (Ejército del Estado Wa Unido)

VIH/SIDA: Virus de Inmunodeficiencia Humana/
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
VRAE: Valle entre los Ríos Apurímac y Ene
WILPF: Women's International League for Peace and Freedom (Liga Internacional de las Mujeres para la Paz y la Libertad)
WPNLG: West Papua National Coalition for Liberation
YPG: People's Protection Unit (Unidad de Protección del Pueblo)
YPJ: Women's Protection Units (Unidades de Protección de Mujeres)
ZANU-PF: Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (Unión Nacional Africana de Zimbabwe – Frente Patriótico)
ZUF: Zeliangrong United Front (Frente Unido Zeliangrong)

Escola de Cultura de Pau

La Escola de Cultura de Pau (ECP) es una institución académica de investigación para la paz ubicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue creada en 1999 con el objetivo de promover la cultura de paz a través de actividades de investigación, diplomacia paralela, formación y sensibilización.

Los principales ámbitos de acción de la Escola de Cultura de Pau son:

- Investigación. Las áreas de investigación de la ECP incluyen los conflictos armados y las crisis sociopolíticas, los procesos de paz, los derechos humanos y la justicia transicional, la dimensión de género y la educación para la paz.
- Educación y formación. El personal investigador de la ECP imparte clases en cursos de grado y postgrado en universidades catalanas, incluyendo la Diplomatura en Cultura de Paz, el título de postgrado que la propia ECP ofrece en la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, se ofrecen clases y talleres en temas específicos, entre ellos la educación en y para el conflicto y la sensibilidad al conflicto.
- Diplomacia paralela. La ECP promueve el diálogo y la transformación de conflictos a través de iniciativas de diplomacia paralela, con diferentes actores y en diversos ámbitos de acción.
- Servicios de consultoría. La ECP lleva a cabo servicios de consultoría para instituciones locales e internacionales.
- Sensibilización. Las iniciativas de la ECP en materia de sensibilización incluyen actividades dirigidas a la sociedad catalana y española, entre ellas colaboraciones con medios de comunicación.

Escola de Cultura de Pau

Parc de Recerca, Edifici MRA, Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra (España)

Tel: +34 93 586 88 42; Fax: +34 93 581 32 94

Email: pr.conflictes.escolapau@uab.cat / Website: <http://escolapau.uab.cat>

Alerta 2019! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de tres ejes: conflictos armados, tensiones y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2018 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.



Con el apoyo de:

Por más de diez años los anuarios de la Escuela de Cultura de Paz han sido una fuente de análisis y de información muy valiosa para distintas organizaciones y entidades que en Colombia están comprometidas en entender las dinámicas de los conflictos armados y cómo éstos, a pesar de sus particularidades, encuentran semejanzas con otros en latitudes muy lejanas. El anuario es una herramienta fundamental en el que de manera rigurosa el universo de los conflictos armados, pero también de las posibilidades de paz, son puestas en una perspectiva académica y práctica que da cuenta de forma maravillosa de las dificultades y avances en la construcción de paz.

Juanita Millán Hernández,
Asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Colombia

Si bien es prácticamente imposible predecir el momento exacto en que un conflicto social puede transformarse en violento, sí es posible analizar las diferentes tendencias, las dinámicas y los escenarios que plantea un determinado conflicto. El informe *Alerta 2019!* realiza un riguroso análisis de estos elementos y nos facilita una serie de herramientas a todos aquellos que trabajamos en el área de prevención y resolución de conflictos armados, para poder gestionar de manera más eficaz los riesgos asociados a las diversas conflictividades. Este anuario se ha convertido en una obra de referencia, imprescindible para entender lo que hay detrás de la escalada de violencia que afecta a diferentes países, así como las diversas opciones políticas y programáticas que podemos utilizar para contribuir a crear las condiciones necesarias para la construcción de una paz duradera y sostenible.

Darynell Rodríguez Torres,
Director Ejecutivo. Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict, GPPAC

La serie de informes *Alerta!* tiene una reputación sólida como un recurso riguroso para profesionales y promotores de políticas que promueven la prevención y resolución de conflictos violentos. *Alerta 2019!*, igual que sus predecesores, sitúa de manera apropiada en el centro de su análisis la agenda de género, paz y seguridad y de esta manera proporciona una mejor comprensión de los conflictos y las oportunidades de paz.

Dra. Laura Davis,
Asociada Senior, European Peacebuilding Liaison Office (EPLO)

